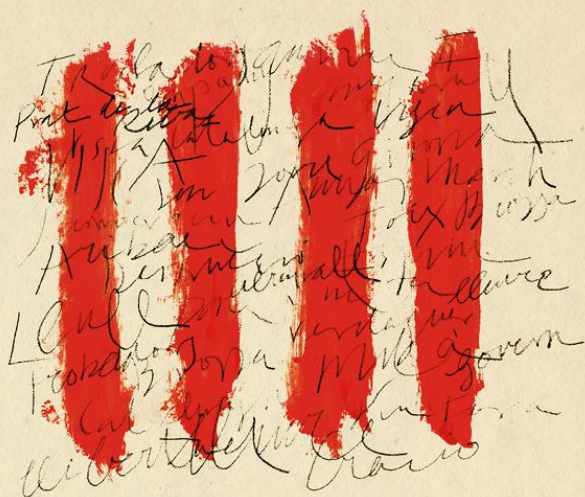


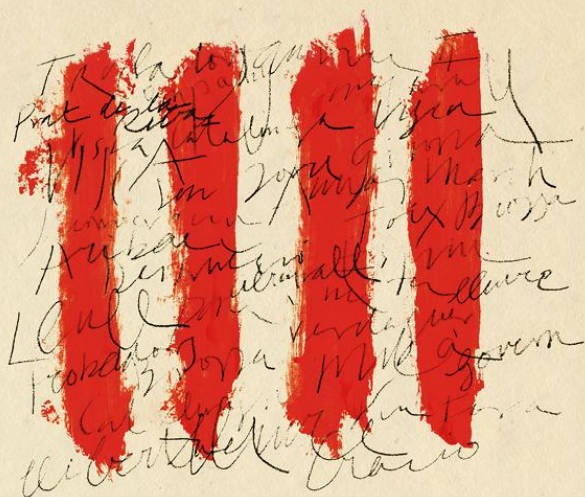


JAUME CLARET Y MANUEL SANTIRSO

LA CONSTRUCCIÓN DEL CATALANISMO

HISTORIA DE UN AFÁN POLÍTICO





JAUME CLARET Y MANUEL SANTIRSO

LA CONSTRUCCIÓN DEL CATALANISMO

HISTORIA DE UN AFÁN POLÍTICO



Índice

Índice

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1. CATALUÑA EN LA REVOLUCIÓN LIBERAL (1808-1835)

Antecedentes

Las Glorias Catalanas en el surgimiento del nacionalismo español

De carlistas, odas a la patria y otros equívocos

CAPÍTULO 2. "INDUSTRIALS I POLÍTICS" (1835-1860)

Un país en transformación

La burguesía catalana y la política española

Los comienzos de la ‘Renaixença’

CAPÍTULO 3. LA INTERVENCIÓN PROGRESISTA Y REPUBLICANA (1860-1875)

Sociolingüística y política

De las vísperas de la Gloriosa a las de la Primera República

La crisis federal

CAPÍTULO 4. CONSERVADURISMO, CACIQUISMO,

REGIONALISMO (1875-1895)

La Restauración en Cataluña

Ascenso y fragmentación del primer catalanismo

De la Exposición Universal de 1888 a las Bases de Manresa

CAPÍTULO 5. LA GÉNESIS DEL CATALANISMO POLÍTICO (1895-1913)

La invención de la tradición

El surgimiento del catalanismo parlamentario

El catalanismo frente a la guerra de clases

CAPÍTULO 6. DE LA MANCOMUNIDAD A LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1914-1931)

Un primer autogobierno

‘Per Catalunya i l’Espanya gran’

La Dictadura de Primo de Rivera

CAPÍTULO 7. SEGUNDA REPÚBLICA Y GUERRA CIVIL (1931-1939)

Del Pacto de San Sebastián al Estatuto

Entre el 6 de octubre y la guerra

Peligro en la retaguardia

CAPÍTULO 8. "LA NEGRA NIT" (1939-1945)

El exilio

Vivir es sobrevivir

Católicos y falangistas, pero menos

CAPÍTULO 9. RESISTENCIALISMO Y NORMALIZACIÓN (1945-1975)

La cultura de la resistencia

Un primer antifranquismo

La Asamblea de Catalunya como paradigma

CAPÍTULO 10. LA TRANSICIÓN (1975-1980)

Cuando ser opositor era ser de izquierdas y catalanista

La operación Tarradellas

Hacia un nuevo Estatuto

CAPÍTULO 11. LA CATALUÑA DEMOCRÁTICA (1980-2014)

Veintitrés años de pujolismo

Nueve años de ‘Dragon Khan’

La implosión del oasis

BIBLIOGRAFÍA

Jaume Claret

Profesor en los Estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya, es licenciado en Ciencias de la Comunicación y Humanidades, y doctor en Historia por la Universitat Pompeu Fabra. Su tesis se publicó en 2006 con el título El atroz desmoche. La destrucción de la universidad española por el franquismo, 1936-1945. También ha publicado diferentes capítulos en obras colectivas centradas en la historia de la Segunda República, el franquismo y la Transición, y en la historia intelectual catalana y española, además de editar el volumen Por Favor. Una historia de la Transición y colaborar en la elaboración de los anexos de la Historia de España, publicada por Crítica y Marcial Pons.

Manuel Santirso

Enseña historia contemporánea en la Universitat Autònoma de Barcelona, donde se doctoró en 1994. Parte de su tesis se publicó en 1999 con el título de Revolució liberal i guerra civil a Catalunya. También ha publicado la edición crítica de los Acords reservats de la Junta de Berga, 1837-1839 (2005), un estudio comparativo de la Europa liberal de 1830 a 1870, España (2008 y 2012), el conjunto de estudios reunidos en El informe Tański y la guerra civil de 1833-1840 (2011), la edición de La guerra de España en la guerra civil europea (2012) y El liberalismo, una herencia disputada (2013). A eso hay que añadir varios capítulos en obras colectivas y otros tantos artículos en revistas científicas, la mayor parte de ellos dedicados al siglo XIX español y europeo.

Jaume Claret y Manuel Santirso

La construcción del catalanismo

Historia de un afán político



SERIE estudios socioculturales

Diseño de cubierta: Estudio Pérez-enciso

© Jaume Claret y Manuel Santirso, 2014

© Los libros de la Catarata, 2014

Fuencarral, 70

28004 Madrid

Tel. 91 532 05 04

Fax 91 532 43 34

www.catarata.org

La construcción del catalanismo.

Historia de un afán político

isbne: 978-84-1352-889-2

ISBN: 978-84-8319-898-8

DEPÓSITO LEGAL: m-8.095-2014

ibic: JPFN/1DSEJ

Este material ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

Introducción

No es necesario aclarar las razones por las que el equipo editorial de Los Libros de la Catarata ha querido publicar un libro como este. Con la cantidad de titulares de prensa que está generando la cuestión catalana, lo extraño hubiese sido no ofrecer elementos de juicio al público lector, sobre todo al de fuera de Cataluña. Ese mismo público decidirá si se acertó al encargar la misión a los autores que firmamos y que quisiéramos hacer algunas precisiones antes de entrar en materia.

Quien se disponga a comprar este libro o —¡ay!— lo haya hecho ya debe saber que no tiene en las manos una historia de Cataluña contemporánea. No puede serlo, por claras razones de espacio, de género y de premura. Tampoco ofrecerá como sucedáneo una definición rápida de un ser de Cataluña o una personalidad catalana en cuya existencia no creemos. En el siglo XVII, los españoles tenían reputación de serios y los suizos, de belicosos. O como dijo Hegel: “Que no vengan a hablarme del cielo de Grecia, puesto que hoy están los turcos donde en otro tiempo habitaban los griegos”. Parábolas como la de la sirena y el pastor de que se valió Jaume Vicens Vives en su Noticia de Cataluña han de tomarse hoy, a lo sumo, como recursos literarios. Se oye a menudo decir “Cataluña piensa...”, “el pueblo catalán cree...”, “los españoles sienten...”, pero eso, o forma parte de la metafísica propia de todo nacionalismo, o bien obedece a una comodidad en el uso del lenguaje que nosotros también emplearemos alguna vez. Ni Cataluña ni España piensan nada, porque no son personas; ni se sabe con exactitud quién queda dentro y fuera de esos pueblos catalán o español, ni, por supuesto, todos los catalanes o los españoles —y a veces ni siquiera la mayoría— sienten o piensan igual.

Este libro habla del catalanismo, que sí existe, y cuenta con una larga trayectoria. Aunque se puedan identificar retazos de él algunos años antes, el término ganó adeptos desde la década de 1880, en parte gracias a la popularidad alcanzada por el libro

homónimo de Valentí Almirall. Mucho del éxito cosechado por esa etiqueta desde entonces radica en su vaguedad deliberada, pues evita decantarse por regionalismo o nacionalismo, y después apostar por una fórmula de Estado concreta: fueros, autonomía, federación, confederación o independencia. Nótese que se dice catalanismo —como vasquismo, galleguismo u occitanismo—, pero no españolismo o francesismo, porque esa ilusión de unanimidad se desvanece en un Estado-nación constituido, donde la borran las querellas sociales o políticas. Catalanismo se utilizará aquí como sinónimo de nacionalismo catalán, con independencia de las soluciones territoriales que haya propugnado en cada momento.

Actualmente, la versión del nacionalismo que domina en la opinión y los medios europeos es la objetivista de filiación germánica, según la cual las naciones existen por sí mismas y desde antiguo. Sin embargo, se habrá intuido que suscribimos la concepción contraria, subjetivista, que hoy cuenta con más partidarios en el mundo académico. Al igual que Ernest Gellner o Eric J. Hobsbawm, creemos que son los nacionalistas quienes crean la nación —no tanto el pueblo o la etnia, sean lo que fueren—, porque esta solo puede existir después de ser pensada, imaginada, para decirlo con la socorrida expresión de Benedict Anderson. Como por nación se entiende la comunidad basada en la soberanía de los ciudadanos con derechos políticos plenos (soberanía nacional), solo ha habido naciones a partir de que la revolución americana y la francesa instaurasen ese principio en la segunda mitad del siglo XVIII.

El historicismo es uno de los elementos más corrientes, casi imprescindible, de cualquier nacionalismo, estatal o no. El historicismo y no la historia, no tanto porque aquel se resume en una manipulación de datos históricos, sino porque quiere demostrar una esencia y marca un destino final: el reino de Dios en la tierra, la sociedad sin clases o la plenitud nacional, tanto da. Como somos historiadores, a menudo nos veremos en la incómoda posición de atacar prejuicios de ese género, sin estar seguros de que hayan arraigado en quien nos lee y hasta qué profundidad. Pedimos disculpas por adelantado. Sobre todo los primeros capítulos contendrán muchos “no es”, o “aún no es” para contrarrestar esa lectura historicista, pero no hemos querido acortar esa primera parte porque muchas claves del catalanismo posterior se encuentran

en la transformación económica y social que Cataluña experimentó a inicios de la época contemporánea. Además, queremos dejar patente que las cosas cambian, que las patrias no son eternas y que los nacionalismos que las construyen evolucionan. Pere Anguera, el gran especialista del XIX catalán, escribió muchas páginas contra las interpretaciones presentistas que convierten las revueltas de entonces en “manifestacions baptistes del nacionalisme català”.

La versión del nacionalismo hoy hegemónica en esta parte del mundo equipara la lengua con la identidad y esta con la pertenencia a la nación. La primera igualdad proviene de la concepción de la lengua como relicario del alma del pueblo (Völkgeist) que desarrolló la Ilustración alemana y que los lingüistas han descartado hace tiempo. Las lenguas tampoco son entes eternos e inmutables, sino que cambian y se relacionan con otras mediante préstamos. Por otro lado, sus variedades dialectales y sus idiolectos pueden hallarse tan separados entre sí como idiomas distintos.

Lo más frecuente, además, es que en un mismo territorio se empleen varias lenguas, lo que no lleva por fuerza al multilingüismo. Como ha demostrado Joan-Lluís Marfany, el bilingüismo se da en Cataluña desde hace pocas décadas, después de que la inmigración haya realizado un aporte sustancial de castellanohablantes nativos. En cambio, desde finales del siglo XV hasta bien entrado el XX imperó la diglosia (triglosia, si contamos al latín), en virtud de la cual el catalán y el castellano ocuparon planos distintos: el primero persistió como lengua hablada mayoritaria, mientras que el segundo, idioma del poder y de prestigio, fue adoptado por las clases superiores y destinado a un número creciente de funciones, legales, académicas y literarias. Esta situación experimentó profundos cambios a lo largo del siglo XX, ya por la sistematización y el aumento de valor social del catalán, más en épocas de autogobierno, ya por las prohibiciones que pesaron sobre su uso durante la dictadura de Primo de Rivera y bajo el franquismo.

En cuanto a la identidad, sabemos desde que nos lo contó Émile Durkheim que todo grupo humano, cualquiera que sea el criterio con que se forma, desarrolla una conciencia colectiva al reconocerse

como tal. Naturalmente, no todo el mundo participa en el acopio y reajuste de ese acervo de valores y reglas compartidos, ni todos obtienen de él iguales beneficios. No ha de pensarse por eso que el nacionalismo catalán, como cualquier otro ideario, presente una correspondencia exacta y constante con una sola clase social. Pese a sus orígenes burgueses, casi inevitables, el catalanismo no ha sido patrimonio único de la burguesía (comercial, industrial o financiera), de la pequeña burguesía o de los restos de la nobleza y el clero, que han apostado por él con entusiasmos variables a lo largo del último siglo y medio. Aunque se les presentara a menudo como reserva de las esencias, los payeses contribuyeron muy poco a un nacionalismo que les llegó hecho de la ciudad. Por fin, los trabajadores urbanos han mostrado siempre poco apego por él, antes incluso de que la inmigración española o exterior engrosara sus filas.

Una vez emitidas, las ideas se convierten en bienes mostrencos que cualquiera puede adoptar y rehacer a voluntad. En consecuencia, el surgimiento y evolución del nacionalismo catalán se ajustan en gran medida a los del nacionalismo en general, no solo a los hechos mayores de la historia catalana y española de los últimos dos siglos. Desde fines del siglo XVIII, los nacionalismos se han enlazado en una cadena histórica que llega hasta el presente. Sus eslabones se unen mediante la imitación o la reacción, de forma que todo nuevo nacionalismo toma como modelo a otros que le precedieron y se alza frente a otro u otros con los que entra en pugna. Siquiera de forma inconsciente, esa reacción también puede dirigirse contra una tendencia general a la internacionalización o la globalización. El auge de los nacionalismos y el culto a lo local aparecen entonces como sus reversos necesarios, de la manera que ha propuesto Manuel Castells para tiempos recientes, aunque el espíritu del “que inventen ellos” unamuniano tampoco estuvo muy lejos.

El nacionalismo catalán ha tenido como antagonista —aunque no siempre enemigo— perenne al nacionalismo español, tanto en la versión liberal y de matriz francesa que se acuñó a principios del XIX como en la reaccionaria y de influencia alemana que se elaboró a finales de ese siglo. Josep Maria Fradera ha demostrado que la identidad catalana moderna cuajó en paralelo a la idea de España como Estado-nación en el arranque mismo de la contemporaneidad.

Desde entonces, ambos nacionalismos han mantenido una relación tan estrecha y se han retroalimentado tanto que a veces resulta casi imposible determinar cuál de los dos llevó la iniciativa. Aunque haya alcanzado cotas inéditas de virulencia, el pulso entre los nacionalismos catalán y español al que estamos asistiendo en estos meses no reviste auténtica novedad.

Tampoco es nuevo que el catalanismo busque en el exterior espejos donde mirarse. Si hoy se trae a colación a Escocia o el Quebec, hace un par de décadas se aludió a los países bálticos y Eslovaquia, en los años 1920 a Irlanda, algo antes a Noruega y a fines del XIX a Hungría, Bohemia y Occitania. Sin embargo, se trata siempre de espejos deformantes como los del callejón del Gato, que se escogen adrede para verse más alto o más gordo, no porque ofrezcan un perfil exacto de la realidad. Devuelven imágenes deseadas, no reflejos fieles. Por lo demás, esas naciones sin Estado o que lo han edificado hace poco tampoco sirven como socios o aliados, sino como meras referencias de argumentación. No se estrechan relaciones efectivas con instituciones o fuerzas políticas suyas más allá de la retórica. Occitania en su momento y otras naciones o regiones españolas constituyen excepciones, pero solo aparentes porque, de hecho, siempre se interpela a España, al Estado. El catalanismo no ha buscado inspiración en las Repúblicas de la antigua América española ni en las surgidas de la descolonización en el siglo XX. Resulta aún más curioso que Andorra, en rigor el único Estado catalán independiente que existe, falte tanto del discurso catalanista, cuando se rige por normas económicas y políticas que hoy suscriben catalanistas de distintos signos. En este sentido, también es revelador que se haya dejado de mentar a Singapur, un Estado pequeño, fundamentalmente urbano y económicamente muy exitoso, aunque regido por una minoría china no nativa.

Proteico, el catalanismo tiende a adueñarse de todos los discursos y a invadir todos los espacios políticos, a izquierda y a derecha. Desde que Valentí Almirall propusiera su Centre Català, allá por 1880, el catalanismo ha servido lo mismo a la reacción que al progreso. En realidad, no sucede tanto que el catalanismo se manifieste bajo muchas formas, sino que la sociedad catalana ha presentado una complejidad mayor que las otras peninsulares durante buena parte

de la época contemporánea, y por eso ha generado una multitud de corrientes políticas.

Lo anterior implica que el catalanismo siempre ha sido moderno, incluso cuando ha sido reaccionario, o sobre todo entonces. Ha estado en constante sintonía con las tendencias ideológicas europeas del momento, también con el racismo, el radicalismo republicano, el populismo, el liberalismo o la socialdemocracia cuando han imperado. Tomó un marchamo genéricamente progresista en la oposición al franquismo, y hoy sigue manteniéndolo a pesar de la evidente diversidad ideológica de los sectores que se reclaman catalanistas y del contenido, ya verificable, de las realizaciones de unos y otros en el poder municipal o autonómico.

Cada versión del catalanismo ha expuesto su o sus fórmulas de encaje de Cataluña en una España donde a menudo se ha despachado el problema catalán con exabruptos, conmisericordia o simple indiferencia. Frente a esas actitudes, los políticos catalanes de los últimos dos siglos han adoptado otras, no necesariamente sucesivas, sino alternas y a menudo simultáneas, incluso tratándose de las mismas personas. Para resumir, se han dado una postura segregacionista, que aboga por la independencia (entre 1926 y 1931, y desde 1939 hasta hoy); una particularista, favorable a la obtención de privilegios o a un Estado confederal (sobre todo, desde 1880 hasta 1923, y desde la transición democrática); una federalista (desde 1860) y una intervencionista, decidida a regir ese Estado español en apariencia hostil (en 1833-1834 y en 1868-1872, pero, ¡ay!, también en 1923).

Sin duda, las reivindicaciones del catalanismo han ido subiendo de tono e intensidad desde 1875, y lo mismo en épocas represivas que aperturistas, pero se incurriría en un paralogismo si se creyera que esa evolución estaba predestinada. Al catalanismo le podía haber sucedido lo que al regionalismo de Navarra, Asturias, Valencia, Baleares, Galicia o, fuera de España, de Occitania, Bretaña o Gales. Todos ellos proporcionan contraejemplos excelentes de territorios de fuerte personalidad cultural o idiomática donde no han cuajado nacionalismos como el catalán o el vasco.

Parece, pues, que tiene que haber causas de larga duración, y no

solo políticas, que hayan hecho posible ese incremento, más allá de fidelidades atávicas o de la voluntat d'ésser que supuso Jaume Vicens. La demografía y la geografía económica tal vez suministren alguna luz, y por eso insertaremos algunas consideraciones de esa índole. La mayoría tendrán que ver con Barcelona y su área de influencia, donde hoy viven cinco de los siete millones y medio de catalanes. Como observó Vicente Cacho con la fina intuición que le caracterizaba, “sin capitalidad cierta ni una ciudad digna de ese nombre, todo nacionalismo tiene siempre algo de incompleto”.

Por supuesto, también nos valdremos de textos, cuyos fragmentos figurarán traducidos al castellano en una nota al final del capítulo cuando juzguemos que ofrecen alguna dificultad de comprensión o contienen algún matiz que pueda escaparse al lector no habituado al catalán. Esas citas se transcribirán en catalán normativo actual si corresponden a un momento posterior a 1913, cuando el Institut d'Estudis Catalans adoptó las normas elaboradas por Pompeu Fabra, y con la ortografía prenortativa original en caso contrario. También en ese periodo inicial, se adjudicarán nombres de pila en catalán a quienes los usaran alguna vez, sobre todo por escrito, aunque se descartarán versiones ultracorregidas posteriores que los interesados no emplearon.

Por una de aquellas casualidades que en realidad no lo son, la ortografía de Fabra señala también la cesura entre la primera parte del libro (capítulos 1 a 5), debida a Manuel Santirso, y la segunda (capítulos 6 a 11), que ha escrito Jaume Claret. Ambos queremos agradecer a Juan Sisinio Pérez Garzón que sugiriese nuestros nombres a los audaces editores de Los Libros de la Catarata, y deseamos pedir disculpas a nuestras mujeres (respectivamente, Carmen y Maria) y a nuestros hijos e hijas (Pablo y Juan; Aina, Roser y Mercè) por el tiempo que les hemos regateado mientras redactábamos el libro. Los errores que contenga se deben por entero a nuestra incuria o nuestra incapacidad.

Los autores

Capítulo 1

CATALUÑA EN LA REVOLUCIÓN LIBERAL (1808-1835)

Antecedentes

Casi todos los nacionalismos europeos actuales, tengan o no Estado, sitúan la eclosión y desarrollo de sus respectivas naciones antes de la época contemporánea. Se sirven para ello de relatos contruidos sobre la analogía con el ciclo natural del año: nacimiento, esplendor, decadencia y resurgimiento. Así ocurre también con el nacionalismo catalán, según el cual la nación catalana apareció en la Alta Edad Media, alcanzó el cenit de su poder en la Baja, decayó a partir del siglo XV y asistió a un renacimiento (*Renaixença*, un término emparentado con el occitano *Renaissença* y el italiano *Risorgimento*) en el XIX. Sin embargo, la nación es un fenómeno contemporáneo, y por tanto la catalana no emergió cuando el conde Borrell II se abstuvo de renovar su vasallaje al rey franco Hugo Capeto en 988, ni desapareció con la entronización de los Trastámara como reyes de Aragón en 1412, la unión dinástica con Castilla a partir de 1479 o la promulgación del llamado Decreto de Nueva Planta en 1716.

Todos esos acontecimientos, presentados como jalones mayores por el historicismo nacionalista, tuvieron que ver con cambios dinásticos, con reyes, los únicos titulares de la soberanía antes de que esta se convirtiese en compartida por todos los ciudadanos. Sin embargo, los monarcas antiguos no se identificaban con nación alguna y tenían un concepto estrictamente patrimonial de sus dominios. Para comprobarlo, bastará citar la ristra de títulos usados por los soberanos hispánicos, que hasta Fernando VII inclusive no firmaron como “Rey de España” (a lo sumo, de las Españas), sino como “Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Brabante y Milán, conde de Apsburg,

de Flandes, de Tirol, Rosellón y Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina”.

Felipe II (I de Aragón) o Carlos IV no se titularon también reyes de Cataluña porque no era un reino; es habitual referirse a ella como un Principado, bajo la soberanía del conde de Barcelona. Este se erigió en poder autónomo a fines del siglo X, pero sobre todo en la revolución feudal del XI. A partir del XII, y ya en la entidad mayor a la que se da en llamar Corona de Aragón, se desarrollarían instituciones propias de un Estado medieval, como las Cortes o la Diputació del General, o locales, como el Consell de Cent barcelonés. Todas ellas permanecerían hasta inicios del siglo XVIII, sin que les afectara mucho la unión dinástica con Castilla bajo los Reyes Católicos ni la reunión de coronas con los Habsburgo. Estos monarcas adoptaron el absolutismo en Castilla a partir de la derrota de las Comunidades en 1522, pero no en la Corona de Aragón ni en el reino de Navarra. Las instituciones catalanas se mantuvieron incluso cuando el Principado se reintegró a la monarquía hispánica en 1652, tras el periodo como República satélite francesa iniciado en 1641, mientras que serían abolidas en el Rosellón y en la parte de la Cerdaña que quedaron en poder de la monarquía francesa, por más que el Tratado de los Pirineos de 1659 hubiese estipulado lo contrario.

Ese panorama cambiaría a raíz de otra querella dinástica, la que dirimieron los Borbones de Francia y los Habsburgo de Austria en la guerra de Sucesión entre 1700 y 1713 (en su vertiente internacional) o 1715 (hispánica). La represión que siguió a la derrota de 1714 dejó sin duda huella en la mentalidad del común, aunque de profundidad muy difícil de establecer. Preceptos como el de atar los cuchillos a las mesas tuvieron que generar rencor, y de ahí que se llegase a llamar a las letrinas can Felip (la casa de Felipe). Eso no quita que la lealtad felipista arraigase en algunos lugares, como Cervera, que vio recompensado su apoyo a la nueva dinastía con una capitalidad de corregimiento y la instalación de la única universidad de Cataluña.

A diferencia de los reinos de Valencia y Aragón, cuyos fueros habían sido derogados mediante un decreto en junio de 1707, las instituciones catalanas fueron abolidas de facto. Figuras del

posterior catalanismo como Josep Coroleu y Josep Pella y Forgas llamaron la atención ya en 1878 sobre el hecho de que el primer Borbón no mandase quemar las constituciones de Cataluña y Mallorca. En su lugar, se procedió a la reforma del esquema judicial del Principado, aunque hay que tener en cuenta que poder judicial y administración se mezclaban en el Antiguo Régimen. Los cambios se detallaban en la Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña, similar a las ya decretadas para Aragón en 1711 y para Mallorca en 1715. De los 59 artículos, los que van del 3 al 30 organizan la Audiencia, del 31 al 44 definen los corregimientos como nuevos distritos administrativos y del 45 al 48 se ocupan de los bayles (delegados reales) y del gobierno local, pero solo en los sitios de jurisdicción realenga.

Así pues, el derecho catalán no quedó derogado en 1716, sino que, a falta de unas Cortes que produjesen nueva norma, se estancó. Valentí Almirall, otro prócer del primer catalanismo, diría que se momificó. Él y los demás autores de la Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña tomaron el asunto por los pelos al sostener que el célebre decreto “nada tocaba a la base de la soberanía, sino que por el contrario, en recta interpretación, no solo dejaba subsistente, sino que confirmaba todo lo relativo a convocación, celebración y atribuciones de las Cortes”. En realidad, si las Cortes de Castilla reunidas en 1724-1725, 1760 y 1789 para jurar a los nuevos reyes incluyeron a dos diputados por cada reino de la antigua Corona de Aragón, es que se daba a esos territorios por absorbidos.

Por otra parte, las Cortes Generales de Aragón casi estaban en desuso en 1714. Se habían convocado siete veces bajo Fernando el Católico (II de Aragón), otras tantas bajo Carlos I, dos bajo Felipe II (I de Aragón), una bajo Felipe III (II de Aragón), tres bajo Felipe IV (III de Aragón, pero las de 1640 no se abrieron), y ninguna bajo Carlos II. El declive respondió a la progresiva implantación del absolutismo en Europa durante la época moderna, de la que solo escapó Gran Bretaña. Si los Habsburgo habían dejado de convocar Cortes en Castilla —salvo para el caso ceremonial indicado— desde inicios del XVI, los Borbones tampoco convocaron Estados Generales en Francia desde 1613. Felipe V reuniría a las Cortes de Aragón en 1702, casi únicamente para recibir el juramento de

fidelidad, en tanto que su rival, el archiduque Carlos de Habsburgo, haría concesiones tácticas en las Cortes de Barcelona de 1705-1706. En lo sucesivo, Felipe V y sus sucesores tolerarían la existencia de las Cortes de Navarra, porque el reino había sido fiel en la guerra de Sucesión y porque su pequeño tamaño convertía el mantenimiento de sus fueros en una concesión muy asumible.

Llegados aquí, importa mucho aclarar que un monarca absoluto era exactamente eso, uno que no convocaba Cortes o Dietas, no uno que gozaba de poderes omínodos sobre las tierras y gentes de su reino. Muy al contrario, los reyes medievales y de Antiguo Régimen solo poseían jurisdicción en una parte del territorio; en otras, correspondía a los señores, laicos y eclesiásticos. De hecho, el rey tenía alguna jurisdicción como otro señor más. Pues bien, Felipe V no atacó al régimen señorial en Cataluña, no convirtió en realengas las jurisdicciones nobles y eclesiásticas ni eliminó el dominio directo, aún más extendido. A lo sumo, abolió la jurisdicción y los privilegios de Barcelona y otras ciudades, lo que no iba a impedir que en ellas se siguieran cobrando derechos señoriales.

Poco le importó al clero católico el paso de Habsburgos a Borbones, pues obedecía al papa de Roma. En cuanto a los nobles, una parte de los de Castilla y de Aragón habían tomado partido por el archiduque Carlos y tras la derrota habían formado en Viena un grupo cortesano con alguna influencia, pero la confiscación que pesaba sobre sus jurisdicciones se levantó en 1725, a raíz del tratado de paz con el Imperio, y el austracismo perdió casi toda su virtualidad.

Ni Pierre Vilar ni Ferran Soldevila, muy poco sospechosos de centralismo españolista, le concedieron valor al memorial de agravios que presentaron ocho diputados de la antigua Corona de Aragón a Carlos III en las Cortes —rituales— de 1760. Felipe V es en el texto “el glorioso padre de vuestra Majestad”, cuya Nueva Planta estuvo repleta de buenas intenciones, pero adoleció de improvisación. Tras las alabanzas de rigor a la variedad legal, los autores pasaban a quejarse de que se dieran demasiados empleos de corregidores, obispos y jueces a los forasteros y se otorgasen pocos, de fuera y dentro de la Coronilla, a sus naturales. En la época de redacción del memorial, estos solo ocupaban 7 de las 19 cátedras

episcopales de los reinos de Aragón, 20 de las 55 magistraturas y pocos corregimientos. A su parecer, Felipe V había abierto “las puertas de unos y otros reynos y en efecto los castellanos las hallaron abiertas y entraron francamente en Aragón a poseher las mejores conveniencias, mas para los aragoneses, cathalanes y valencianos han estado casi cerradas las de Castilla”. Para colmo, el Consejo de Aragón había sido absorbido por el Consejo de Castilla sin que se reservasen plazas para oriundos de aquellos otros reinos.

Carlos III haría oídos sordos a esas y otras reclamaciones. Como se pudo comprobar en 1766, el despotismo ilustrado no tenía previsto cambiar un ápice de la monarquía absoluta ni del régimen señorial. Cataluña permaneció, pues, como un país feudal pese a la prosperidad económica que experimentó durante las décadas centrales del siglo XVIII. En 1787, ya a inicios del reinado de Carlos IV, seguían bajo los diferentes tipos de jurisdicción señorial el 73% de los lugares y el 60% de las almas del Principado, una proporción solo superada por los reinos de Valencia y Galicia.

Las Glorias Catalanas en el surgimiento del nacionalismo español

Muy pocos años después, se produciría el primer choque entre la monarquía hispánica y la Francia revolucionaria: la guerra de la Convención de 1793-1795, que por extrañas razones en Cataluña se conoce como la Guerra Gran. En ella no solo faltaron expresiones de particularismo catalán, sino que, como ha documentado Lluís Roura, se dieron abundantes muestras de xenofobia contra los gavatxos, por tales y por revolucionarios. Ya en época napoleónica, el asentamiento de tropas en el Principado desde 1807 fue objeto de manifiesta hostilidad, pero la insurrección contra los imperiales no se extendió por Cataluña hasta junio de 1808. Se formó una Junta Superior del Principado que, como las demás de la península, envió representantes a la Suprema y Central. El Manifiesto que dio a la imprenta en 1809 para dar cuenta de sus méritos recordaba la españolidad de Cataluña al “hacer presente a las demás Provincias el interés que las [sic] cabe en concurrir con empeño a la defensa de esta, que es el antemural de las otras”.

El bando patriota pronto contó con el apoyo de la mayoría de la población catalana, una elección de bando que no necesita demasiadas explicaciones en clave nacional cuando se conoce la rapacidad del ejército invasor. Gran parte de los privilegiados del país, y desde luego la mayoría de los religiosos, también apostaron por los patriotas y sus aliados exteriores —Portugal y el Reino Unido—, aunque algunos nobles escaparon de la creciente violencia refugiándose en el extranjero o en Mallorca, como hizo el marqués de Sentmenat, y otros se refugiaron en el interior, como el barón de Maldà. El conde de Santa Coloma colaboró al principio con el dominio napoleónico y tomó parte en la Asamblea de Bayona de 1808, pero enseguida cambió de bando y no sería exacto considerarle un afrancesado.

Solo una pequeña fracción de la elite catalana, menor incluso que

en la corte o en Andalucía, cooperó activamente con el Imperio. Tomàs Puig, corregidor napoleónico de Girona en 1810, es el más conocido de estos colaboracionistas. Abogado por Cervera y Huesca y dueño de una considerable fortuna, había combatido contra la República francesa en la Guerra Gran, tras la cual obtuvo patente como ciudadano honrado de Barcelona, el escalón inferior de la nobleza catalana. El nombre de Puig se asocia a los conatos de catalanizar la administración napoleónica del Principado que se dieron después del 8 de febrero de 1810, cuando Napoleón separó del dominio de su hermano el rey José y puso bajo mandato de gobernadores militares los territorios entre el Ebro y los Pirineos (Vascongadas, Navarra, Aragón y Cataluña). Seguramente fue Puig quien redactó la proclama en francés y catalán que el mariscal Augereau, gobernador napoleónico de Cataluña, mandó publicar el 10 de marzo en el Diario de Barcelona, después rebautizado como Diari del Govern de Catalunya y Barcelona. En ella se evocaban selectivamente algunos vínculos históricos con Francia (la Marca Hispánica y el periodo 1641-1659, no así la guerra de Sucesión) y se concluía:

Sí, vencedors de Atenas y Neopatria, se va á restablir el vostre antich comers d'orient [...].

napoleon el gran

vos va á donar un nou ser. Las suas paternals miradas vos han fixat; vostre sort lo ha interessat, y sou baix sa poderosa protecció¹.

Según Joan Mercader i Riba, el autor de referencia sobre la Cataluña napoleónica, el escrito se incluye en una “aparatoso comèdia”, a la que no concedieron valor ni el público barcelonés ni la Junta del Principado, y que causó más impacto en Cádiz que en Cataluña. Más allá de la retórica, las reformas pensadas por Puig y jamás puestas en práctica consistían en la reducción del diezmo, la reordenación de la Iglesia católica, la implantación del código napoleónico y el traslado de aduanas a la línea del Ebro. Con ellas tan solo perseguía avanzar en la asimilación a la Francia imperial,

ya que “Cataluña por sí sola formando un gobierno separado sería cargada de imposiciones para mantener el gobierno y lustre de sus representantes y sería un estado nulo”.

Entretanto, iban llegando a Cádiz los diputados que se sentarían en las nuevas Cortes. En su sesión de apertura de 24 de septiembre de 1810, se escogió —en segunda votación y por escaso margen— al cancelario de la Universidad de Cervera, Ramón Lázaro de Dou, como primero de la que sería una larga lista de presidentes. Era uno de los 22 diputados que representaron al Principado de Cataluña y a su Junta en la primera asamblea que legisló en nombre de la nación española, a quienes ayudó un grupo de escritores, comerciantes y abogados residentes o refugiados en Cádiz.

Cuando se indaga por medios corrientes qué hicieron o dijeron los diputados catalanes en aquellas Cortes, puede llegar a creerse que fueron a ellas para “recobrar los privilegios de que disfrutó Cataluña en el tiempo que ocupó el trono español la augusta Casa de Austria”. Una búsqueda más cuidadosa descubre que la frase procede de una “Exposición de las principales ideas que la Junta Superior del Principado de Cataluña cree conveniente manifestar a los señores Diputados de la Provincia que en representación de la misma pasan al Congreso de las próximas Cortes”, manuscrita y nunca impresa. Al parecer, se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón y todo el mundo la cita por la transcripción de Frederic Rahola i Trèmols... publicada nada menos que en 1912. Las frases que preceden al recorte invierten su sentido:

Que aunque desde luego deben reconocerse las ventajas políticas que resultarían de uniformar la Legislación y los derechos de todas las Provincias de la Monarquía para que no quede esta después de la actual crisis hecha un cuerpo compuesto de partes eterogéneas; con todo quando no pensase así la pluralidad, o quando insuperables obstáculos se opusiesen a la realización de esta medida saludable, en tal caso debe Cataluña no solo conservar sus fueros y privilegios actuales, sino [...] *[cursivas mías]*.

También se ha vuelto un lugar común que los representantes catalanes fueron mudos porque no dominaban la oratoria en lengua castellana, a excepción de Dou, del exsecretario de la Junta catalana Felipe Aner (que era aranés, y en todo caso hablante nativo de gascón), del erudito Antonio de Capmany y del canónigo Jaime Creus. Quizá fuese Àngel Guimerà el que lanzó la especie, en su famoso discurso del Ateneo de Barcelona de 1895. Sin embargo, no podían desconocer el castellano el canónigo José Espiga, que era de Palencia, y el militar Fernando Navarro, natural de Piedrahita, Ávila. Es muy improbable que no dominaran esa lengua Francisco Calvet, magistrado de Mallorca; Juan de Valle, abogado de la Real Audiencia de Cataluña; Ramón Sans, académico de Buenas Letras; José Vega y Sentmenat, ídem; el marqués de Tamarit, que se llamaba Juan Suelves, o el barón de Jafre, Francisco Papiol. Sabemos por los estudios de Joan-Lluís Marfany que las clases superiores catalanas tenían plena familiaridad con el castellano desde el siglo XVII y que en los años previos a la invasión napoleónica el alto clero catalán —incluido Creus— y los catedráticos de Cervera —como los asimismo diputados Dou y Vega— competían a ver quién redactaba mejor en la lengua de Cervantes. Hasta Enric Prat de la Riba, el codificador del nacionalismo catalán, sabía que hacia 1714 la intelectualidad catalana ya había adoptado el castellano.

En realidad, el silencio de los diputados por Cataluña, salvo Aner —que realizó muchísimas intervenciones— y Capmany —que las tuvo sonadas—, se debió a motivos ideológicos. Se dice casi todo si se cuenta que solo votaron a favor de abolir la Inquisición Capmany, Navarro y Espiga. Muchos otros diputados catalanes propugnaron entonces y defenderían después el mantenimiento del orden social y político que los liberales de las Cortes querían reformar. Seis eran nobles con señoríos (Dou, Vega, Papiol, Montoliu y Suelves) o segundones (Amat); uno administraba bienes nobiliarios (Valle, de la casa de Medinaceli), seis eran eclesiásticos (también Dou, Espiga, Creus, Morros, Lladós y Aités), y entre los comerciantes y fabricantes, varios se mostraron favorables al mantenimiento del sistema gremial (Viñals y Serrés). La simple presencia de profesores de Cervera (Dou y Ramón Utgés) indica la filiación ideológica preponderante, porque la universidad fundada por Felipe V se había ganado justa fama de rancia. Su cancelario Dou no era lo que se

dice un liberal, como demuestra su peculiar glosa mercantilista de La riqueza de las naciones, de Adam Smith.

Del mismo modo, habría que calificar de ilustrado o de conservador a la inglesa a Antonio de Capmany Surís y de Montpalau, sin disputa el intelectual más destacado de la representación catalana en las Cortes de Cádiz. Eso se desprende de su gusto por las Cortes estamentales y los gremios, aunque también de las libertades, sobre todo de imprenta. Miembro de una familia noble gerundense, pasó unos años en Andalucía asociado a los proyectos de repoblación de Olavide, pero rompió con él y marchó a Madrid, donde entró como supernumerario en la Real Academia de la Historia. En 1777 publicó una Filosofía de la elocuencia y en 1779, el primer volumen de sus monumentales Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona. Ya miembro de número de la Academia, se trasladó en 1785 a Barcelona, donde comenzó a ordenar el fondo original del Archivo de la Corona de Aragón. Entre 1786 y 1794 publicó los cinco volúmenes del Teatro histórico-crítico de la elocuencia española, una antología de prosa castellana por orden cronológico.

Capmany alcanzó gran notoriedad con su Centinela contra franceses (1808), un opúsculo propagandístico aparecido poco después de la batalla de Bailén y que ataca casi por igual a Napoleón y a Godoy. No contiene alusiones al ausente Fernando, sino solo a sus súbditos, que gracias a la guerra volverían a ser “españoles rancios, a pesar de la insensata currutaquería, esto es, volveremos a ser valientes, formales y graves. Tendremos patria, la amaremos y defenderemos [...]. Volveremos a hablar la lengua castiza de nuestros abuelos”. Ese casticismo no implicaba la uniformidad de que adolecía Francia, donde “no hay provincias ni naciones; no hay Provenza, ni provenzales; Normandía, ni normandos; se borraron del mapa sus territorios y hasta sus nombres [...]. Todos se llaman franceses, al montón, como quien dice carneros, bajo la porra del gran rabadán imperial”. En España, en cambio, se mantenía una diversidad que había ayudado a resistir al invasor:

¿Qué sería ya de los Españoles si no hubiese habido Aragoneses, Valencianos, Murcianos, Andaluces, Asturianos, Gallegos,

Extremeños, Catalanes, Castellanos, etc.? Cada uno de esos nombres inflama y envanece, y de esas pequeñas naciones se compone la masa de la gran Nación, que no conocía nuestro conquistador.

Aunque Capmany siempre escribió en castellano y tildaba el catalán de “idioma antiguo provincial muerto para la república de las letras”, su producción de los años constitucionales y sus intervenciones parlamentarias reivindicaron las Glorias Catalanas como parte esencial de las españolas y las antiguas instituciones hispánicas, en especial las de la Corona de Aragón, como preferibles a las diseñadas en la Constitución francesa de 1791. Eso buscó su Práctica y estilo de celebrar Cortes en el reino de Aragón, principado de Cataluña y reino de Valencia y una noticia de las de Castilla y Navarra, un compendio de casuística parlamentaria de los reinos hispánicos que entregó en diciembre de 1809, pero que se imprimiría póstumamente en 1821. En la Exposición en favor de los Ayuntamientos de 13 de junio de 1813, escrita poco antes de morir de fiebre amarilla, cantaría una vez más a su “patria Barcelona”, que había gozado de un gobierno popular desde Jaime I “hasta el año 1714 en que Felipe V lo abolió”.

Se ha detectado un eco de estas ideas de Capmany en el preámbulo de la Constitución de 1812, debido a Agustín Argüelles. En efecto, el texto presenta la reunión de las Cortes como una recuperación de las libertades de los antiguos reinos de Castilla, Aragón y Navarra, y en él se asegura que la nueva Carta se ha redactado “con enlace, armonía y concordancia [a] quanto tienen dispuesto las leyes fundamentales de Aragón, de Navarra y de Castilla”. Incluso se recuerda que

la reunión de Aragón y de Castilla fue seguida muy en breve de la pérdida de la libertad, y el yugo se fue agravando de tal modo que últimamente habíamos perdido, doloroso es decirlo, hasta la idea de nuestra dignidad; si se exceptúan las felices provincias vascongadas y el reyno de Navarra.

Demuestre o no influencia del historiador catalán, el fragmento revela que mitos castellanos como el de los comuneros y mitos catalanes como el de la monarquía pactista actuaron combinados, y que juntos cimentaron la nueva idea nacional española. España resurgía al recuperar las libertades políticas de los antiguos reinos que se habían ido reuniendo, mientras la Constitución reparaba el agravio de 1714-1716 y reponía, perfeccionadas, las antiguas libertades catalanas. En definitiva, el nacionalismo español y el regionalismo catalán nacieron al mismo tiempo y, como se señaló hace unas páginas, en los albores de la época contemporánea.

Adviértase, con todo, que los discursos historicistas de Argüelles y de Capmany parten de un anacronismo intencionado, ya por conservadurismo, ya por prudencia, para apaciguar a la numerosa representación noble y, sobre todo, eclesiástica de las Cortes. Al presentarlas a ellas y a la Constitución como reediciones mejoradas de los organismos políticos perdidos en algún momento (en Castilla, en 1522; en la Corona de Aragón, en 1707-1713; en Navarra todavía no), silenciaban adrede el dato capital de que esas viejas instituciones gobernaron una sociedad basada en el privilegio, y por lo tanto no articulada como nación. A diferencia de la Asamblea Nacional francesa desde 1789, y sin perjuicio de lo que creyeran o escribiesen algunos de sus miembros, las Cortes de Cádiz evitaron declarar la ruptura con el feudalismo.

Es aún más importante que esta mistificación de los constituyentes de 1810-1812 se convirtiera en una verdad aceptada décadas después, cuando ya no quedaba quien hubiese vivido bajo el orden señorial y conociese la verdadera naturaleza del cambio. Esta falacia de origen, la que equipara los antiguos privilegios de unos pocos a las modernas libertades de todos, ha pervivido hasta hoy en el ideario del catalanismo político, con mejor salud incluso que en el del nacionalismo español. Aún se oye y se lee que Cataluña ya era una democracia en la Edad Media.

Unas semanas antes de que se promulgara la Pepa, Cataluña había sido anexionada al Imperio por decreto de Napoleón en enero-febrero de 1812. El territorio del Principado, sin el valle de Arán, pero con Andorra y algunas localidades fronterizas de Aragón, fue dividido en cuatro departamentos (Ter, Montserrat, Segre y Bocas

del Ebro), con tres distritos y un número variable de municipios cada uno. Se aplicaron los patrones contenidos en la ley de 28 de Pluvioso del año VIII (1800) como al resto de la Francia imperial, sin más concesión a las peculiaridades locales que una nueva campaña filocatalana, esa vez patrocinada por el barón de Gérando.

Como había ocurrido en 1810, se dictó la anexión sobre el papel de un territorio no sometido. La mejor prueba de lo ilusorio de ese dominio es que el Código napoleónico tampoco entró en vigor entonces. Su eventual traducción al catalán provocó un debate entre los funcionarios y letrados afrancesados que puso de manifiesto la diglosia reinante. Una comisión de juristas dictaminó —aunque no por unanimidad— lo fútil del empeño, visto que el castellano era la lengua oficial de la Audiencia desde Felipe V, la que se enseñaba en las escuelas y la de las academias y espectáculos. Tenía gramática, ortografía y diccionario, así como un prestigio entre clérigos, gente de letras y de leyes del que carecía el catalán, que por eso no había sido restaurado ni por los patriotas. Eran argumentos bastante especiosos que ocultaban el mucho más sólido de que la abogacía catalana había adoptado el castellano hacía al menos un siglo. Se consideró también que, como Cataluña iba a incorporarse a Francia en breve, no valía la pena cambiar el idioma de los tribunales y la legislación; a lo sumo, tendría alguna utilidad traducir el Código al castellano para que se aprovechara en las otras provincias transpirenaicas absorbidas.

Bajo esa precaria dominación imperial se había escrito el grueso de la Gramática i apologia de la llengua catalana del sacerdote Joseph Pau Ballot, primera contemporánea y publicada como libro a fines de 1814. Aunque la dedicatoria a la Junta de Comercio es bilingüe, el texto está íntegramente en catalán, llamado ya así y definido como “no sols propria y verdadera llengua, sino sensilla, clara, pura, energica, concisa, numerosa, fluida y natural”. A la pregunta retórica de por qué cultivarla si la de toda la nación es la castellana, “la qual debem parlar tots los que nos preciam de verdaders espanyols”, Ballot responde que el buen conocimiento de la lengua materna facilita el de otras, que en catalán se ofician los rituales cristianos y se enseña la doctrina y, en fin, que las personas de calidad pueden verse en la necesidad de escribir alguna nota en esa lengua a los inferiores (“los senyors a sos majordoms, los amos a sos

masovers [aparceros], las senyoras a sa familia, las monjas a sos parents, los marits a sas mullers”). No por ello deben los catalanes descuidar el castellano, lengua no solo “tan agraciada y magestuosa, que no tèn igual en las demás llenguas”, sino además la general de un reino que “se exten á totas las parts del mon ahon lo sol illumina”. Lo decía quien había escrito una Gramática filosófica y razonada de la lengua castellana que alcanzaría su séptima reimpresión en 1825.

De carlistas, odas a la patria y otros equívocos

La Gramática i apologia de Ballot estuvo en las librerías después de que las fuerzas napoleónicas se hubiesen retirado de toda España y de que Fernando VII, vuelto de su exilio dorado, acabara de un plumazo con el régimen constitucional dispuesto en Cádiz. Como se sabe, la voluntad del Deseado de que las leyes y decretos de las Cortes quedasen derogadas “como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo” solo se cumplió seis años, hasta que la sucesión de pronunciamientos y formación de juntas que comenzó el primer día de 1820 obligó al rey a jurar la Constitución de Cádiz el 7 de marzo siguiente.

De las elecciones para nuevas Cortes celebradas entre abril y mayo salió una Cámara sin diputados abiertamente absolutistas. De los representantes de Cataluña que habían estado en Cádiz o en las Cortes ordinarias de 1813-1814, solo repitieron Joaquín Rey, José Espiga y Francisco Navarro. Entre los nuevos, cabría destacar al hebraísta Antoni Puigblanch, bien conocido de los filólogos porque en 1832, durante su segundo exilio londinense, colaboraría en la traducción del Nuevo Testamento al catalán. Aquí interesa más la composición en verso sobre Les comunitats de Castella que había escrito en 1823, a fines del periodo constitucional, pues ejemplifica a la perfección cómo se mezclaron el historicismo castellano y el catalán en el naciente nacionalismo español: escrita en catalán como homenaje a una lengua literaria en peligro, abunda en el mayor mito liberal de Castilla, la lucha de sus ciudades contra el absolutismo de Carlos I en 1520-1522.

También se ha de mencionar a otro diputado novel de 1820, Guillermo María Oliver, pero porque fue de los pocos liberales que rechazó la ficción de las antiguas libertades restauradas. Se conocía al dedillo los mecanismos del régimen señorial por haber administrado los bienes en Cataluña del gran prior de su Mallorca natal y haber trabajado en el mismo ramo con los Cortadellas de la

Real Compañía de Aragón. No se engañaba sobre “lo que eran las Cortes de aquellos tiempos; baste tener presente que estaban compuestas de aquellos mismos que querían dominar en los pueblos, y que por esos mismos pueblos no concurrían o no influían para nada”. Oliver tampoco se creía la fábula de la Cataluña avanzada y socialmente justa, antes bien, denunciaría durante años la explotación feudal que campaba por el Principado.

La Diputación Provincial de Cataluña, constituida el 6 de junio de 1820, también fue descrita más de una vez como una restauración de la Diputació del General, aunque no tuviera más relación con ella que el espacio que administraba. Eso también se acabó en marzo de 1822, cuando fue teóricamente reemplazada por las cuatro diputaciones previstas en la nueva división provincial, elaborada en cumplimiento del artículo 11 de la Constitución, que previó “se hará una división más conveniente del territorio español por una ley constitucional, luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan”.

Contra lo que sostendría el catalanismo desde finales del siglo XIX, la división provincial de 1822 no vino dictada por el capricho o la inquina de algún oscuro funcionario madrileño empeñado en descuartizar —esta vez literalmente— Cataluña. Los estudios de Jesús Burgueño han demostrado que, por el contrario, salió de un largo debate donde intervinieron buenos conocedores del país. Desde el principio se asumió el acuerdo de 1813 de no sustraer ni un solo kilómetro cuadrado de él (“desmembrar algo de Cataluña”), pero sin dejar por ello de atender mejor a los ciudadanos, frente a las distancias, las dificultades topográficas y, desde 1822, la rebelión realista. Oliver apoyó el proyecto, y con él los liberales exaltados catalanes y los ayuntamientos de las nuevas capitales de provincia, que esperaban beneficios de esa nueva función administrativa; el de Barcelona, en cambio, mostró unas comprensibles reticencias. La división que el ministro de Fomento Javier de Burgos implantaría por medio de una circular en noviembre de 1833 iba a introducir pocos cambios respecto a la de 1822, y como ella no suscitaría rechazo regionalista alguno.

La nueva administración no había acabado de implantarse en Cataluña en 1822-1823 porque el Principado se convirtió en uno de

los frentes principales de la rebelión armada absolutista. Se conoce como Regencia de la Seu d'Urgell a su órgano político central porque residió en esa ciudad pirenaica entre agosto y noviembre de 1822. La formaban Jaime Creus, ya arzobispo preconizado de Tarragona y presidente, el marqués de Mataflorida y el barón de Eroles, dos catalanes sobre tres. Claro que también era catalán Josep Robreño, y por eso escribía e interpretaba sainetes en esa lengua, o apenas bilingües, para burlar la prohibición de teatro en catalán dictada en 1801. Con ellos fustigaba a los realistas (La huida de la regencia de la Seu d'Urgell) o al abundante clero de ese signo (Mossèn Anton a las muntanyas del Montseny) y subía la moral de los liberales catalanes celebrando sus triunfos (Numància de Catalunya y libre poble de Porrera).

Igual que Oliver, Puigblanch y tantos otros, Robreño se tuvo que exiliar en 1823, cuando sobrevino la segunda restauración absolutista y comenzó la década ominosa. Las tropas de Francisco Espoz y Mina, por entonces capitán general del Principado, habían derrotado a las guerrillas absolutistas, pero no pudieron con el ejército invasor francés de los Cien Mil Hijos de San Luis. Mina les abrió las puertas de Barcelona en noviembre de 1823, después de obtener algunas garantías. Comenzó entonces una ocupación militar francesa de la Ciudad Condal que le evitó buena parte del terror blanco desatado extramuros. Corría el verano de 1827 y aún no se habían ido los soldados franceses cuando los realistas catalanes agraviados (malcontents) por las reformas militares del marqués de Zambrano se alzaron de nuevo, esa vez contra la monarquía absoluta que decían defender. Cataluña volvía a convertirse en el foco de la contrarrevolución española.

Fernando en persona tuvo que trasladarse a ella unos meses para desautorizar con su presencia el alzamiento y presidir su represión. A su marcha dejó al frente del Principado al no menos ultra conde de España, que reprimió indistintamente a malcontents y liberales. En 1832 le sucedió en la Capitanía un catalán, Manuel Llauder, quien gracias a su sistema militar y a sus buenas relaciones con la oligarquía evitó que prendiera en el Principado la guerra civil que había estallado oficialmente a la muerte de Fernando VII, en septiembre de 1833.

Solo desde finales del siglo XIX se la llama carlista, por el nombre del pretendiente al trono, el infante don Carlos María Isidro. Es un adjetivo engañoso, porque presenta como un conflicto dinástico lo que fue una guerra total donde se jugó la pervivencia o extinción del Antiguo Régimen y de la monarquía absoluta en España. Desde el inicio de la contienda, se ha debatido si hay que buscar una de sus causas en la suerte que podían correr los fueros de las Provincias Vascongadas, y no han faltado quienes asociaran al carlismo con la defensa foral. En Cataluña, desde luego, no hubo nada de eso. No se ha hallado ni un solo texto del carlismo catalán de esta época donde se pida la restauración de las antiguas instituciones del Principado. No es de extrañar: como argumentó Pere Anguera, mal podían pedir los dirigentes del carlismo catalán que se volviese a los tiempos anteriores a Felipe V si sus reclamaciones sucesorias se basaban en la ley sálica que este había implantado. Menos aún podía hacerlo el sector clerical de la Junta carlista de Berga, cuando a su frente estaba el doctor Bartolomé Torradella, cancelario de la muy borbónica Universidad de Cervera. Apenas oculto tras el seudónimo del amigo de la verdad, Torradella despejó cualquier duda en su posterior vindicación de la Junta. Su meta

fue constantemente

dios y el rey

, su particular divisa la Restauración de la monarquía destrozada por el gobierno revolucionario usurpador hasta sus fundamentos, y su grito de pacificación viva la Religión, viva el Rey, viva la Patria: estos grandes objetos excitaban incesantemente su celo, y no había otras miras.

Las actas del máximo organismo político del carlismo catalán confirman que sus dirigentes reprodujeron el esquema borbónico de corregimientos y alcadías mayores, en cuya cima pusieron una figura análoga a la del capitán general. La única novedad consistió en que hubiese una Junta, heredera de las surgidas en 1808, en

lugar de la Audiencia o el Real Acuerdo.

La documentación manuscrita y la prensa oficial del primer carlismo catalán (El Joven Observador y después El Restaurador Catalán) también refutan que tuviera especial aprecio por la lengua del país. Como cabía esperar, están en castellano, por más que el padre Magín Ferrer, que escribía en el Restaurador, hubiese publicado unos diccionarios catalán-castellano y castellano-catalán.

Fue el bando isabelino-liberal el que se sirvió más de la lengua del país en proclamas y prensa. Ahora bien, esa creciente presencia impresa del catalán no tuvo que ver con un hecho anecdótico que los libros de texto escolares siguen presentando como el punto de partida de una Renaixença a la que, también erróneamente, equiparan con la recuperación de la lengua. Me refiero al poema de Buenaventura Carlos Aribau que se conoce como “Oda a la pàtria” y que el periódico El Vapor publicó el 24 de agosto de 1833, el mes anterior a la muerte del rey felón. La pieza original no tenía título, fue la redacción de El Vapor quien le puso “La patria”. Años después, en 1841, Joaquim Rubió y Ors le añadiría lo de “Oda” en el prólogo a la primera edición de Lo Gayter del Llobregat, y convertiría la pieza en hito fundacional. Ese rango le parecería injustificado al perspicaz Almirall, quien se preguntaba en un artículo de 1884 lo mismo que muchos estudiantes actuales: ¿por qué Aribau no escribió nada más en catalán? La solución al enigma, que Almirall conocía porque años antes la había dado el escritor gaditano Francisco María Tubino, era que la presunta oda a la patria se había compuesto como oda al patrón. Aribau, que había publicado en 1817 y en castellano unos Ensayos poéticos entre el misticismo y la divulgación científica y había sido secretario de la Diputación constitucional de Lleida en 1822, trabajaba desde 1826 en Madrid a sueldo de uno de los hombres más ricos de España, Gaspar de Remisa. Los empleados de este negociante catalán quisieron festejar su onomástica de 1832 y, como el propio Aribau contó por carta de 10 de noviembre de aquel año a su amigo Francisco Renart:

Para el día de S. Gaspar presentamos al Gefe algunas composiciones en varias lenguas. A mí me ha tocado el catalán, y he forjado estos

informes alejandrinos que te incluyo para que lo revises, y taches y enmiendes lo que juzgares, pues yo en mi vida las vi más gordas.

Aribau desempeñaría importantes cometidos en su destino de Madrid durante las décadas siguientes, pero no como regionalista. Le ocurriría algo parecido a otros jóvenes intelectuales que iniciaron su carrera en El Vapor bajo el ala del controvertido Joseph Andrew de Covert-Spring (José Andreu Fontcuberta): Pedro Mata, Pedro Felipe Monlau o Manuel Milà y Fontanals, bibliotecario de Sociedad Filomática que les reunía.

También en 1833, Próspero de Bofarull terminó su historia Los condes de Barcelona vindicados, que dedicó a “D. Fernando IV de Barcelona y Aragón, VII de Castilla”), pero no la imprimiría hasta 1836 y bajo el patrocinio del duque de Osuna, liberal. El escritor e historiador Juan Cortada ya llevaba dos de las cinco novelas históricas de su ciclo medieval: La heredera de Sangumí, de 1835, y El rapto de doña Almodís, hija del conde de Barcelona D. Berenguer III, de 1836. Se verá que todas esas obras están en castellano, y aun así se las asocia más con la Renaixença que otras escritas en catalán, de menor mérito literario pero más cercanas a las preocupaciones del momento, como Lo hermano Buñol, un enredo teatral sobre un fraile carlista del injustamente olvidado Josep Robreño.

A fines de 1833, la guerra civil amenazaba con extenderse desde su foco del norte. El capitán general Llauder hizo público un manifiesto contra el inmovilismo del gabinete de Zea Bermúdez, que no lo atajaba, y con la protesta contribuyó a que la reina regente llamara al liberal Francisco Martínez de la Rosa. Se podría considerar la primera intervención catalana en la política española del siglo XIX, aunque Llauder pasaría del cenit al ocaso entre diciembre de 1834, cuando fue elevado a ministro de la Guerra, y enero de 1835, cuando tuvo que dimitir a raíz del pronunciamiento que orquestaron en secreto contra él algunos de sus colegas de gabinete. Aun así, los paladines del justo medio habían agotado sus recursos políticos hacía mucho, por lo que el descontento creció durante la primavera y estalló como revolución en el verano de 1835. Arrancó en Cataluña, con la exclaustación violenta que desde finales de julio se extendería a todo el este peninsular, y

continuó a inicios de agosto, cuando en Barcelona fue asesinado el gobernador militar Bassa y quemada la fábrica de vapor de Bonaplata. Otrora foco de la contrarrevolución, Cataluña lo era ya de la revolución.

Notas

1. “Sí, vencedores de Atenas y Neopatria, se va a restablecer vuestro antiguo comercio de oriente [...].

napoleón el grande

os va a dar un nuevo ser. Sus paternas miradas se han fijado en vosotros; vuestra suerte le ha interesado, y estáis bajo su poderosa protección.”

Capítulo 2

‘Industrials i politics’ (1835-1860)

Un país en transformación

La versión canónica del XIX catalán liquida su historia con el binomio industria y Renaixença. Es un resumen mínimo y sesgado de la interpretación que enunció Jaume Vicens Vives, a cuya obra rinde tributo el título de esta parte. La simplificación busca perpetuar la imagen, cara al catalanismo desde sus orígenes y en parte al propio Vicens, de una Cataluña laboriosa y próspera, donde la sensata observancia de las tradiciones redujo las desigualdades sociales y evitó enfrentamientos.

De entrada, así se rebaja la trascendencia de uno de los cambios más profundos por los que haya pasado la humanidad: la caída del Antiguo Régimen señorial y su reemplazo por el pleno capitalismo y la sociedad bajo hegemonía burguesa. Ya en España, y tras los intentos fallidos de las Cortes de Cádiz y del Trienio, en 1836-1837 se estipuló la libertad de arrendamientos y cerramientos de tierras, se eliminaron los mayorazgos, se derogaron las ordenanzas de montes y plantíos, se decretó el final de las rentas señoriales y de la jurisdicción y se puso fin al pago del diezmo. Gracias a este cambio de reglas tuvieron efecto las gigantescas redistribuciones de propiedad inmueble a las que conocemos como desamortizaciones, la de Mendizábal-Espartero de 1836-1841 y la general de Madoz desde 1855. Su impacto transformaría para siempre el régimen de propiedad y explotación de la tierra, al paso que se dibujaba el paisaje agrario que hoy se contempla en España. En Cataluña, las desamortizaciones no dieron paso a un régimen de latifundios ni de minifundios, sino que consolidaron algunas grandes propiedades y bastantes medianas o pequeñas.

La revolución liberal no extirpó por completo el complejo feudal catalán. Subsistió la enfiteusis, una forma de cesión indefinida y heredable de la que, debido a la especialización en la viticultura, uno de los tipos más extendidos era la rabassa morta. El discurso paternalista difundido por el Instituto Agrícola Catalán de San

Isidro —la asociación de terratenientes que editó desde 1856 el *Calendari del pagès*— siempre proclamó que la enfiteusis casi convertía a los trabajadores del campo en propietarios, sin proponer la forma de que lo fueran del todo. Las presuntas bondades de los establecimientos enfiteúticos facilitaban el argumento principal para lo que más tarde se iba a llamar *pairalisme*, un término de origen occitano derivado de *pairal*, *paterna* —y de ahí *casa pairal*— con que se alude a un campo catalán idílico. El paraíso se asentaba sobre la familia, el *hereu* (el heredero único) y el *mas* (heredad), trabajado por pequeños propietarios o *masovers* (aparceros), pero, como ha advertido Rosa Congost, la mayoría de la población rural no vivía en masos ni tenía qué heredar.

Sobre todo, la pintura al uso de la Cataluña decimonónica omite la enorme conflictividad social y política que vivió en los años 1830 y 1840. Nada más distinto a un remanso de paz, y se explica: el cambio de condiciones económicas y sociales vino de la mano de una revolución que no se detuvo obediente donde las clases bienestantes querían. Jordi Nadal tuvo gran acierto al titular “Bonaplata, pretexto y símbolo” al primer capítulo de Cataluña, la fábrica de España. La revolución del verano de 1836, que restauró la Constitución de Cádiz, apenas se dejó notar en Barcelona, donde se incubó una reacción de los moderados y de los poderes económicos, y después saltó la contraofensiva, pronto reprimida, de progresistas y radicales. Un fugaz rebrote de la violencia dio la excusa para que el barón de Meer instaurase en octubre de 1837 una dictadura militar de 20 meses, que fue la primera de su especie en España y contó con un amplio apoyo entre los liberales de orden.

Espartero, a la sazón comandante en jefe del ejército isabelino, se encontraba en Cataluña en julio de 1840 porque ahí se libraba la campaña final de la guerra civil. Permaneció en el Principado hasta que le ganó el pulso a la regente María Cristina y esta abandonó el país. En pocos meses, el general se hizo con una regencia durante la que Cataluña nunca dejaría de ser noticia. En octubre de 1841, y a raíz del pronunciamiento moderado del norte, se formó en Barcelona una Junta de Vigilancia que emprendió el derribo de la odiada Ciudadela, pero fue disuelta en pocas semanas. Un año después, en noviembre de 1842, se produjo una nueva insurrección, de motivaciones mal definidas y grandes dimensiones. Se formaron

hasta cinco juntas sucesivas, sin que ninguna lograra el control completo de la ciudad, que al cabo fue sometida mediante un bombardeo mandado por Espartero en persona el 3-4 de diciembre.

En junio de 1843, y ya durante el pronunciamiento general contra el regente, se formó una Junta Suprema Provisional de Gobierno de la Provincia de Barcelona, con la que se asociaron a fines de mes para formar un Gobierno provisional el general Francisco Serrano y Luis González Bravo. Espartero cayó en agosto de 1843, pero Barcelona asistiría a la revuelta entre ultraliberal y democrática que acabaría conociéndose como la *Jamància*, mientras que en los alrededores de la capital y la franja costera se libraba una guerra civil a escala. Los centralistas alzados pedían lo contrario de lo que su nombre indica, pues al exigir la reunión de una Junta Central reclamaban el protagonismo de las provincias. Las fuerzas gubernamentales a las órdenes del general Juan Prim fueron conquistando todo el Principado, pero Barcelona no capituló hasta el 20 de noviembre de 1843, tras un mes de bombardeos ordenados por el capitán general Laureano Sanz. Figueres, último reducto de los centralistas y principal baluarte republicano de Cataluña, sucumbiría en enero de 1844.

Pese a su espectacularidad, estos acontecimientos no deben ser reducidos a la fórmula simplista, y en esto muy errada, de choque entre Cataluña y España. Ninguno de esos levantamientos presentó un carácter regionalista, y mucho menos secesionista, que solo se les achacará si se desconoce el significado de ciertas palabras. En esta época, a más radicalismo, mayor españolismo. Excluidas las veces en que los reaccionarios la usaron como espantajo, “independencia” no quería decir secesión, sino rebeldía contra el Gobierno, y lo mismo podía aplicarse a la Corona de Aragón, Cataluña, la provincia de Barcelona o una ciudad cualquiera. En abril de 1837 se oyó que en Reus se había lanzado “un grito de independencia separándose del Gobierno de Barcelona”; en noviembre de 1841 se repartió un panfleto en que se calificaba a la Ciudadela de “estigma bochornoso con que la tiranía marcó el amor de los catalanes a su libertad e independencia” y en junio de 1843 una Junta emitió una proclama por la cual “la provincia de Barcelona se declara independiente del Gobierno actual de la Corte”.

Sin perjuicio de esta sucesión de revueltas y de que mantuviese una base agraria y campesina, la Cataluña de la primera mitad del XIX experimentó una industrialización más temprana, y sobre todo más extensa, que cualquier otra parte de España. Como en otros procesos coetáneos, ostentó el liderazgo el textil algodónero, que logró abaratar precios con la mecanización. Hacia 1840, ya daba empleo a unas 100.000 personas, se habían invertido en sus fábricas unos 470 millones de reales y se producían 24 millones de libras de hilado y 80 millones de varas de tejido anuales; para 1860, esas cifras habían ascendido a 125.000 personas, unos 1.000 millones de reales, 32 millones de libras y 120 millones de varas al año. Baste decir que en Cataluña se concentraba el 95% de los husos mecánicos, el 92% de los telares manuales y el 90% de los mecánicos de toda España.

La industria catalana, radicada sobre todo en Barcelona y alrededores, contó desde el principio con plataformas como los gremios, convertidos en asociaciones patronales, o con la Comisión de Fábricas, una sección de la Junta de Comercio que ya en 1829 patrocinó su primera campaña de defensa. Estos círculos económicos, enfrentados a intereses más librecambistas como los de los comerciantes gaditanos o alicantinos, tremolarían en las décadas siguientes las banderas de la prohibición de importaciones o, como mínimo, la imposición de fuertes aranceles.

La alarma se disparó por primera vez a consecuencia del tratado de comercio suscrito en noviembre de 1835 entre Mendizábal y el embajador británico Villiers, por el que se impondría un arancel del 20% a los textiles británicos a cambio de un préstamo de dos millones de libras. El acuerdo nunca entraría en vigor, pero provocó el debate sobre política comercial que fijó los argumentos de una y otra parte. En la esquina librecambista del ring, un desconocido Pebrer, autor de unas Cinco proposiciones contra la Ley de Aranceles publicadas en Gran Bretaña en 1837, sostuvo que las principales fuentes de riqueza españolas eran la agricultura y la minería, de suyo exportadoras, que el proteccionismo endosaba una contribución injusta a toda la nación sin la que la Hacienda pública ganase con ello, que se estimulaba el contrabando y que no ganaba la industria, sino los fabricantes catalanes. Del lado proteccionista, Manuel María Gutiérrez, catedrático malagueño vinculado a la

Junta de Comercio del Principado, recordó en su Impugnación a las cinco proposiciones de Pebrer que otros países industriales del entorno habían recurrido a la prohibición/protección, porque era imposible enfrentarse en buena lid a la producción de una Gran Bretaña que aplicaba el proteccionismo para otros ramos. La polémica se reavivó a cada negociación comercial (1841-1842), proyecto de reforma arancelaria (1849) o simple discusión teórica al respecto (1861).

La burguesía catalana y la política española

La historia de Cataluña en las décadas centrales del XIX seguiría presidida por esa mezcla de dinamismo económico y tensiones políticas, aunque estas ya no alcanzarían la virulencia de las grandes bullangas de 1842-1843. Después, la política catalana se escoró visiblemente hacia la derecha. No tuvo nada de raro que los progresistas se quedaran sin escaños —en toda España solo lograron uno— en las elecciones de 1844 y que los moderados obtuviesen 16, pero sí que otros cuatro fueran a parar al sector ultraconservador del marqués de Viluma, cuyo plan de reconciliación con los carlistas mediante el matrimonio de la joven reina y el infante don Carlos Luis sería apoyado por el filósofo Jaime Balmes. Su campaña en *El pensamiento de la Nación* terminó en 1846, año en que se decidió el matrimonio de Isabel con su primo Francisco de Asís y los moderados volvieron a imponerse en los comicios: 22 escaños en Cataluña contra 7 de los progresistas, ninguno de ellos por la provincia de Barcelona. El resultado sería de 25 a 5 en 1850 —aunque 3 progresistas ya procederían de distritos barceloneses— y de 20 a 10 en 1851.

Si en España no se oyeron más ecos de la revolución de 1848 que el par de pequeñas asonadas de Madrid en marzo y mayo, la primavera de los pueblos tampoco sacó más brotes en Cataluña que la incorporación de partidas guerrilleras demorrepublicanas a la rebelión armada carlista que se llamó de los *matiners* (madrugadores) porque había comenzado en 1846. Unos y otros alzados formularon demandas ambiguas y contradictorias, en las que a menudo se adivinó la falta de acomodo a la paz de excombatientes desubicados. De ahí que algunos perdones selectivos con ingreso en el ejército ultimasen la revuelta y que la amnistía de 1849 evitara nuevos levantamientos guerrilleros por unos lustros. Seguramente, el problema se habría solventado antes si el Gobierno no hubiese querido imponer el sistema de quintas en Cataluña, donde hasta entonces se habían redimido con cuotas

municipales. El desorden militar que eso comportó y el descontento que causó entre los soldados en potencia —esto es, quienes no podían pagar la cuantiosa redención— redujo los efectivos gubernamentales e incluso aumentó algo los de las guerrillas, por lo que hubo que retrasar la medida. Mientras tanto, una activa prensa militar lanzaba en Madrid la acusación de que “Cataluña prefiere la guerra a las quintas, a los impuestos, a las tarifas y a las restricciones; Cataluña quiere la paz, pero quiere la paz con privilegios, regalías y concesiones que no son compatibles con los intereses de las demás provincias de la nación”.

Tal vez por ese arrebató, algunos han visto ribetes regionalistas en el conflicto, al que también hay quien llama segunda guerra carlista. Una vez más, es un espejismo. La especulación se basa en las maniobras efectuadas en el sur de Francia por Tomás Bertran y Soler, compañero de conspiraciones de Eugenio de Aviraneta en 1836, y como este personaje de las novelas históricas de Pío Baroja, agente doble o triple. Bertrán era además un fantaseador crónico que en 1840 había abogado por la conquista española de Marruecos. Ni los *matiners* carlistas ni los guerrilleros demócratas hicieron caso de la Diputación General de Cataluña que solo existió en la mente del conspirador, quien además siguió usando en sus escritos el discurso historicista, patentado en Cádiz, de los catalanes que en el siglo XIII “dictaban la ley al universo” y después, “amantes de sus fueros combatían por la patria”.

La generalización de las quintas respondía a la voluntad de implantar un Estado centralista según el patrón francés, predominante en la Europa continental y liberal, aunque su versión española contemplaría cierta autonomía local y preservaría bastantes particularidades regionales. Las diputaciones y ayuntamientos gozaron de importantes prerrogativas y en ambos se mantuvo —con abundantes salvedades excepcionales— el principio electivo de los cargos. El Derecho tampoco quedó unificado del todo: en 1848-1850 se promulgó el Código Penal, pero no un Código Civil como el napoleónico, que no llegaría a ver la luz por la resistencia que encontró la abolición de los derechos forales.

El afán descentralizador de los progresistas se limitó a la esfera local y provincial y vino dictado más bien por cálculos electorales.

En cambio, el liberalismo conservador contribuyó a la pervivencia de las peculiaridades regionales heredadas, sin confundir España con Castilla. Como han demostrado los estudios de María Cruz Mina y otros investigadores, el mantenimiento de los fueros vascos y navarros se debió ante todo a los liberales moderados, no a los carlistas. Así se entiende que la junta conciliadora barcelonesa de 1842 hubiera insinuado una solución foral para Cataluña, o que Bertran y Soler pensara que “quizá no es distante el día en que el Gobierno de Isabel, consultando mejor los intereses del trono, piense, conforme hizo con los vascos, en dar al pueblo catalán su antigua constitución”.

Catalanistas de distintos signos señalarían unas décadas después a Suiza, el Reino Unido, Austria o Alemania como Estados descentralizados o plurilingües y al tiempo boyantes, olvidando que todos atravesaron graves crisis en los años de los que ahora se habla: respectivamente, la decisiva guerra de la Sonderbund en 1847, la Gran Hambruna irlandesa de 1845-1848 y el vendaval revolucionario de 1848 en Centroeuropa. Si se tienen presentes esos hechos y la sucesión de guerras y revoluciones por las que había pasado en las décadas previas, a mediados del XIX España era un caso peculiar, pero bastante exitoso, de construcción nacional.

A este respecto, su situación en Europa Occidental y la de Cataluña en España quedarán aclaradas con algunas sencillas comparaciones numéricas.

Población de algunos Estados y ciudades del área liberal europea hacia 1850

ESTADO	CAPITAL	2ª CIUDAD	
Pob. (mill.)	Pob. (mill.)	Pob. (mill.)	Pob. (mill.)
Reino Unido	Londres	Manchester	
27,4	2.685	203	
	9,8	28,8	
Francia	París	Lyon	
35,8	1.053	177	
	4,1	16,8	
Bélgica	Bruselas	Amberes	
4,4	251	88	
	5,7	35,1	
Portugal	Lisboa	Oporto	
4,1	240	76	
	5,9	31,7	
ESPAÑA	Madrid	Barcelona	
14,9	281	175	
	1,9	62,3	

La vista se irá enseguida a las discrepancias de la última fila que, no obstante, deben ser bien leídas. Aunque la población de la ciudad de Barcelona ascienda a casi dos tercios de la de la capital de su Estado, sus 175.000 habitantes no desentonan de las segundas ciudades de los países vecinos, casi todas ellas industriales, ni se alejan demasiado de la población de otras grandes ciudades españolas (Sevilla tenía por entonces 111.000 habitantes y Valencia 106.000). No sucede, en resumen, que Barcelona fuera demasiado grande, sino que Madrid era demasiado pequeña para ejercer una centralidad política o económica comparable a la de capitales de su entorno, sobre todo París y Londres. A juzgar por indicios como la edición de libros o las representaciones de ópera, donde Barcelona dominaba, Madrid ni siquiera exhibía una capitalidad cultural. El federalismo inconsciente que venía manifestándose en la formación de juntas desde 1808 tenía, pues, alguna razón de ser.

En ese contexto, la nueva clase dominante catalana se encontró por primera vez ante la disyuntiva que se ha referido en la introducción: obtener las mejores condiciones de un Estado que no controlaba o lanzarse a su conquista y moldearlo a su criterio. Hasta finales del reinado de Isabel II, tomó la primera vía, que según Vicens además garantizaba el orden público.

En su forma pasiva, esa opción consistió en defender la permanencia de las instituciones propias, con tanto más ahínco cuanto más beneficiasen a las capas sociales superiores. Estas toleraron sin excesivas protestas las quintas con redención o sustitución y el nuevo cuadro de impuestos, que castigaban duramente a los estratos populares, pero no consintieron la extinción del derecho civil propio. Al contrario que el castellano, más reglamentista y de herencia múltiple, el derecho catalán otorga libertad de testar y prefiere la herencia única, con una legítima que entonces se podía reducir a la cuarta parte y satisfacerse en metálico. La mujer casada gozaba de capacidad legal propia, sin consentimiento del marido, y su dote podía ser aumentada (escreix) por él o por el prometido, pero el régimen matrimonial dominante de separación de bienes permitía dejar a la viuda un legado ínfimo. Ante todo, el derecho civil catalán suministraba la base legal para la

enfiteusis, que salvaguardaba el dominio directo —y el cobro de laudemios— de antiguos señores y dificultaba que los enfiteutas pobres se hiciesen con la plena propiedad de la tierra.

En su forma activa, la influencia sobre el Estado sin tomarlo se concretó en la oficiosidad de los parlamentarios catalanes y de un lobby en Madrid que defendió los intereses de la burguesía del Principado mediante organismos como la Asociación Catalana y el Instituto Industrial de España o periódicos como El Corresponsal. Su misión consistía en preservar el mercado interior español para las manufacturas catalanas y salir al paso de cualquier amago libremercantilista en la corte. Uno de los miembros más destacados de esta red de influencia fue Aribau, quien recibió sucesivos nombramientos como alto funcionario (director general del Tesoro en 1847, de la Junta de Aduanas y Aranceles en 1850, de la Casa de la Moneda en 1852) y aún sacó tiempo para editar los clásicos de la lengua castellana en la Biblioteca de Autores Españoles por encargo del librero Manuel Rivadeneyra, barcelonés como él.

Imperaba lo que Josep Maria Fradera ha llamado un doble patriotismo, español y catalán, asumido de manera no conflictiva. O si se quiere, se atravesaba la fase de “España es la nación, Cataluña es la patria”, aunque se diera cierta ambigüedad en el uso de esas palabras, un equívoco que no cundía entre federalistas. Para decirlo con las palabras de Antoni de Bofarull en 1860:

España, como he defendido en otras ocasiones, no es una nación, y sí un conjunto de nacionalidades, cada una de las cuales tiene su historia y gloria particular, que las demás no conocen, originándose de esta ignorancia que solo prepondere y se tenga por buena y capaz la que ha tenido medios para absorber toda la importancia.

La secesión no se contemplaba ni como posibilidad. En América se habían dado varias después de la emancipación y sin necesidad de mayores fundamentos étnicos o lingüísticos (la Gran Colombia de Bolívar se rompió en tres partes en 1830, Centroamérica en cinco en 1839, Texas se desgajó de México en 1836...), pero en Europa

actuaba la restricción mental que Eric Hobsbawm llamó el principio del umbral, un límite de población y riqueza por debajo del cual se admitía que una nación era económicamente inviable y quedaba a merced de vecinos agresivos. Aunque en 1830-1831 Grecia se había independizado del Imperio otomano y el sur de los Países Bajos se había escindido como Bélgica, se trataba de casos muy especiales. Después de ellos, dominaron los proyectos de integración en unidades mayores que al final cristalizarían, como Italia o Alemania, o no, como Escandinavia e Iberia.

El iberismo tuvo gran predicamento a mediados del XIX entre los liberales de derecha y sobre todo de izquierda de Portugal y de España —Cataluña incluida—, pero la unión ibérica tuvo en su contra desde el principio el veto de las potencias liberales, Francia y Gran Bretaña, y más adelante el creciente desinterés de la opinión. A pesar de su pequeño tamaño, Portugal conservaba parte de su antiguo imperio ultramarino, lo que le permitía rebasar el umbral y mantener a flote el orgullo patrio. España había tenido que remontar la pérdida de un imperio colonial aún más vasto, del que no obstante retuvo algunos restos muy valiosos, tanto por los pingües negocios que se hacían en ellos como por los empleos públicos que suministraban y el prestigio, interior y exterior, que conferían. Mientras los diferentes regímenes que se sucedieron en Francia desde 1830 gastaban grandes recursos para el sometimiento de Argelia y la instalación en Senegal (en el primer caso, para beneficio de los comerciantes de Marsella, y en el segundo, para los de Burdeos), las colonias españolas de Filipinas, Puerto Rico y sobre todo Cuba alcanzaban niveles inéditos de rentabilidad.

Ese factor colonial explica por sí solo que el patriotismo español alcanzase su cima absoluta en la guerra de África de 1859-1860. Cataluña no fue ninguna excepción: el Ayuntamiento de Tarragona proporcionó 50.000 raciones de aguardiente y las mismas de vino, la Diputación de Barcelona armó a sus expensas a los famosos voluntarios catalanes de Prim y sufragó un hospital de campaña en San Roque. También pensionó al pintor reusense Mariano Fortuny, entonces en el apogeo de su fama, para que tomara los apuntes sobre el terreno que luego trasladaría a los impresionantes cuadros murales de La batalla de Tetuán y La batalla de Wad Ras. Incluso ilustres demócratas como Josep Anselm Clavé se sumaron a un

entusiasmo colectivo que solo unos pocos aguafiestas como Frederic Soler quisieron empañar recordando el coste en vidas, sobre todo para los pobres (*La pau d'Espanya*, 1860). Pese a que esas pérdidas humanas fueron cuantiosas y las conquistas casi nulas, los combatientes recibieron triunfos apoteósicos a su regreso.

Los comienzos de la ‘Renaixença’

Desde una perspectiva muy distinta a la que se ha adoptado aquí, podría sostenerse que el nacionalismo catalán atravesó durante las décadas centrales del siglo XIX lo que Miroslav Hroch ha definido como la fase A, cultural, de los nacionalismos, primera de una secuencia de tres que se completa con una B de activismo y una C de acción política de masas. Ha de advertirse, no obstante, que esa taxonomía se basa en los nacionalismos centroeuropeos y no se puede exportar. Desde luego, no sirve para los movimientos que dieron lugar a los nuevos Estados independientes de las Américas. Si la muestra se limita a las naciones de lengua germánica o sus vecinas inmediatas, no cabe extrañarse de que siguiesen los pasos del nacionalismo germánico.

En Europa Occidental también se dieron varias muestras de recuperación de folclores y lenguas regionales, como la celebración del festival lírico galés del Eistedfodd a partir de 1860, la publicación de la revista ultracatólica bretona *Feiz ha Breiz* desde 1865 o, el surgimiento en 1854 del Félibrige occitano, con el que la *Renaixença* catalana mantendría largas relaciones. Ahora bien, ninguno de esos movimientos desembocaría después en uno político de envergadura, lo que revela otro problema de la síntesis de Hroch: al considerar solo los nacionalismos que completaron la secuencia e ignorar a los que se agostaron por el camino, convierte en inevitable lo posible y explica el pasado a partir del futuro.

El nacionalismo catalán sí completó el recorrido de Hroch, aunque aplicarle su tipología obliga a abstraer las peculiares circunstancias en que se desplegó la fase A y a quedarse solo con una parte de las manifestaciones culturales de esa época. Así, se otorga a Joaquim Rubió el título de adelantado de la *Renaixença* por los poemas en catalán que fue publicando en el *Diario de Barcelona* desde 1839, pero no suele contarse que el año anterior, en plena dictadura del barón de Meer, había publicado en castellano la novelita-ensayo

Mano roja. Leyenda catalana del siglo XIV y se representó en catalán la farsa de Abdon Terradas Lo Rey Micomicó. Claro, que este era republicano y aquel, conservador.

Los primeros poemas de Rubió (27 en total: algunos paisajísticos, otros medievales a la moda, alguno que otro moralizante o místico, uno a la reina —“A Donya Isabel II, comtessa de Barcelona”— y otro en provenzal —“Lo Lay del joglar”—) se reunieron en 1841 en un libro titulado Lo Gayter del Llobregat, el seudónimo del autor. En la introducción, Rubió exponía su programa literario, basado en su amor a “las cosas de sa patria” y la reivindicación de su idioma, que “desgraciadament se pert de dia en dia” al punto que los descendientes de quienes lucharon en 1714 se avergüenzan de que se los “sorprengue parlant en catalá”. Tras quejarse de que sus compañeros (cabe suponer que los Milà o Pablo Piferrer y otros) hubieran desertado de esa empresa, Rubió reconocía el principio del umbral al que he aludido más arriba. En un fragmento muchas veces citado y no pocas tergiversado decía:

Catalunya pot aspirar encara a la independència; no a la política, puix pesa molt poch en comparació de las demás nacions, las quals poden posar en lo plat de la balansa, a mes del volúmen de llur historia, exércits de molts mils homes y esquadras de cents navíos; pero sí a la lliteraria, fins a la qual no s'estent ni se pot estendrer la política del equilibri¹.

El cargo de deserción formulado por Rubió no era del todo justo. La Academia de Buenas Letras había decidido en enero de 1841 celebrar un certamen poético a imagen de los de Tolosa del Languedoc durante la Edad Media. El concurso tuvo lugar en julio de 1842 y en él se concedió un premio a Braulio Foz por una memoria histórica sobre el compromiso de Caspe y se otorgaron tres premios más de poesía: el primero para Rubió por una composición sobre los almogávares; el segundo para Calixto Fernández de Camporredondo y el tercero para el mallorquín Tomàs Aguiló.

Esa iniciativa no tendría continuidad hasta bastantes años más

tarde. En 1859, el Ayuntamiento de Barcelona encargó a una comisión de literatos estudiar la restauración de los Juegos Florales. La presidió el eminente filólogo Manuel Milà y Fontanals, tuvo como secretario a Antoni de Bofarull y contó con Cortada, Rubió, Miquel Amer, Josep Lluís Pons y Gallarza y Víctor Balaguer como vocales. Todos se pronunciaron a favor y, pese a que Cortada y Balaguer propusieron admitir composiciones en castellano, prevaleció el criterio de que fuesen solo en catalán.

No puede dejar de notarse que estos primeros Juegos Florales de mayo de 1859 y la fundación del Ateneo Barcelonés en el mismo mes de 1860 coincidieron con el gobierno largo de O'Donnell y su fase de españolismo en ascenso, al que ni mucho menos se oponían. Muy al contrario, Rubió, Bofarull o Balaguer cantarían con sus versos la toma de Tetuán en enero de 1860.

La intelectualidad catalana y la clase dirigente del Principado se apuntaron gustosas al proyecto nacional español y no albergaron dudas de que se expresaba en castellano, convertido en su lengua familiar, comercial y legal. La floralesca fue una literatura efímera, ideada para la celebración pública, no para la lectura. Como ha observado Marfany, no era compatible con la diglosia, sino que la presuponía. Mucho antes que él, Prat de la Riba escribió que los intelectuales catalanes de mediados del XIX “als Jochs Florals hermoses composicions maleint tràgicament els mals de Catalunya, y fora del clos dels Jochs ja de Catalunya no se’n recordaven y feyen lliga ab els seus enemichs”². Había acuerdo porque el folclore y las tradiciones regionales no molestaban aún a los dirigentes de los nuevos Estados-nación europeos, que por el contrario veían en ello una prueba de riqueza nacional.

Como sucedió en otras literaturas románticas, las querencias medievalistas y ruralizantes de la Renaixença acusaban el influjo del tory escocés Walter Scott. Compartían su orientación política y su huida hacia un pasado idealizado, un escapismo con que, según Josep Maria Fradera, se buscó conjurar las enormes tensiones políticas y sociales que soportaba una Cataluña en plena revolución. Rubió, siempre transparente, convino en que parecía una extravagancia y un anacronismo una colección de poesías lanzadas en medio de “l’agitació i febre en que viu la societat”.

En lo político, la primera Renaixença mostró una ostensible tendencia al moderantismo. Esa fue la adscripción del influyente y malogrado Pablo Piferrer, crítico teatral, periodista y autor de los volúmenes de Recuerdos y bellezas de España dedicados a Cataluña y Baleares. De Milà y Fontanals, que juzgó durante décadas la calidad y la moralidad de la producción literaria catalana, baste decir que Marcelino Menéndez y Pelayo reconoció siempre su magisterio en todos los sentidos. Rubió, que enseñó literatura en Valladolid de 1847 a 1858, sería mucho más conocido en España por obras morales como El libro de las niñas (1845) o su Manual de elocuencia sagrada (1852), en perfecta consonancia con su integristismo. En el discurso de apertura del curso 1861-1862 de la Universidad de Barcelona que pronunció ante Isabel II, abogó porque “las universidades, manteniéndose católicas, sean en España las encargadas de impedir que el error se derrame por nuestro suelo”. Moderado y bastante clerical, aunque contrario al carlismo, Antoni de Bofarull i de Brocà, sobrino reusense de Próspero, publicaría en 1862 el primer folletín en catalán, L’orfeneta de Menargues o Catalunya agonisant, situada en los tiempos del papa Luna y san Vicente Ferrer.

El progresista Víctor Balaguer ofrece una excepción parcial a esa regla. Colaborador del Diario de Barcelona (conocido popularmente como el Brusi por su impresor), poeta y autor teatral, Balaguer lanzó en 1854 el diario La Corona de Aragón, de obediencia progresista-esparterista, que motivó las habituales suspicacias en Madrid. Acabado el bienio progresista, escribiría en Lo Conceller, donde apareció su primera poesía en catalán, dedicada nada menos que “A la Verge de Montserrat”. Abundó en el clisé de la continuidad entre las antiguas instituciones catalanas y las presentes en La libertad constitucional, de 1858, y en su celebrada, pero poco original, Historia de Cataluña y la Corona de Aragón (1860-1863).

En 1863, el Ayuntamiento de Barcelona le encargó dar nombres a las nuevas calles del Ensanche diseñado por el también progresista Ildefonso Cerdà. Con algunas alteraciones, la propuesta de Balaguer se plasmó en ese compendio del imaginario catalanista y a la vez español que los barceloneses conocen tan bien, aunque pocos sepan ya de su sentido ni de su origen: antiguas instituciones y dominios

para las principales vías norte-sur (Gran Vía de las Cortes Catalanas, Diputación del General, Consejo de Ciento, Aragón, Valencia, Mallorca, Provenza, Rosellón, Córcega); batallas (Dos de Mayo, Castillejos, Lepanto, Bailén, Bruc), literatos (Balmes, Aribau, Muntaner) y héroes patrios, catalanes o no (Roger Blume o de Flor, Roger de Lauria, Pau Claris, Rafael de Casanova, Berenguer de Entenza, Antonio de Villarroel, los condes Borrell y de Urgell...), para muchas de las este-oeste.

Notas

1. “Cataluña puede aspirar aún a la independencia, no a la política, ya que pesa muy poco en comparación con las otras naciones, las cuales pueden poner en el plato de la balanza, además del volumen de su historia, ejércitos de muchos miles de hombres y escuadras de cientos de navíos; pero sí a la literaria, hasta la que no se extiende la política del equilibrio.”
2. “Lloraban los males de la lengua catalana y en su casa hablaban en castellano; enviaban a los Juegos Florales hermosas composiciones llorando trágicamente los males de Cataluña, y fuera del redil de los Juegos ya no se acordaban de Cataluña y se asociaban con sus enemigos.”

Capítulo 3

La intervención progresista y republicana (1860-1875)

Sociolingüística y política

A falta de programas de escolarización efectiva, habían tenido muy escaso efecto normas como la Real Cédula de 1768, por la cual la enseñanza se había de impartir en castellano. No prohibía que se hiciera en catalán, así que la doctrina cristiana se inculcaba a los niños en esta lengua. Según la encuesta que realizó en 1841 Laureano Figuerola (secretario de la Junta conciliadora de 1842 y ministro de Hacienda décadas después), el catecismo se enseñaba exclusivamente en catalán en 247 de las 302 escuelas de la provincia de Barcelona, y en 18 más, supuestamente, en las dos lenguas. Las provincias restantes debían de exhibir proporciones aún más altas. Por lo demás, el catalán seguía siendo la lengua usual de los documentos religiosos (fes de bautismo, de matrimonio...) y notariales (capitulaciones matrimoniales, inventarios post mórtem...).

Ahora bien, el aprendizaje del catecismo, básicamente oral y memorístico, no conllevaba la alfabetización. La Cataluña de mediados del XIX presentaba en esto un aspecto muy poco halagüeño en comparación con otras partes de España, y ya no digamos de países europeos próximos. Tan tarde como en 1860, el porcentaje de catalanes alfabetizados era del 38 y el de catalanas, del 10, unas cifras mucho más cercanas al 25 y el 10% de Andalucía Oriental o al 19 y 9% de Canarias, las más bajas de España, que al 65 y 35% de Madrid. La confrontación a escala provincial lo empeoraba, porque el 32% general, sin distinción de sexos, de Barcelona y el 26 de Girona palidecían frente al 45% de Burgos y Palencia, el 48 de Santander, el 51 de Madrid y el 53 de Álava. Más aún: el 21% de Tarragona y sobre todo el 19% de Lleida (la provincia con el porcentaje más bajo de toda la mitad norte peninsular) diferían muy poco del 14% de Castellón, Alicante, Canarias y Almería.

La orden de los escolapios llevaba desde el siglo XVIII destacándose

como avanzadilla de la enseñanza en y del castellano, con la que satisfacía la creciente demanda de las clases medias y burguesas de las ciudades y pueblos grandes, interesadas en que sus hijos lo aprendieran. Convertida en lengua nacional y de la administración —pero no oficial hasta la Constitución de 1931—, el castellano fue ganando terreno en Cataluña con la revolución liberal, hasta que la diglosia estudiada por Joan-Lluís Marfany alcanzó un máximo. La imposición por decreto tuvo una incidencia desigual en este proceso, pues se sustanció en medidas tardías y limitadas, como la obligación de redactar los documentos notariales en castellano de 1862, o coyunturales y después abrogadas, como la prohibición del teatro en catalán que emitió en enero de 1867, en plena efervescencia prerrevolucionaria, el ministro de la Gobernación González Bravo (sí, el que había pedido Junta central en 1843). Contribuyó más la progresiva extensión de la red escolar pública a partir de las leyes de 1838 y en especial de 1857, la famosa Ley Moyano.

Pesó aún más la difusión del castellano a un público amplio por medios no escritos, como la predicación, las representaciones teatrales o los recitados de cantares de ciego y aleluyas. También contaron los escritos, como la literatura de folletín consumida por el público pequeñobugués (Barcelona y sus misterios, de Antonio Altadill; María, la hija de un jornalero, de Wenceslao Ayguals de Izco, y su segunda parte La marquesa de Belflor) y los pliegos de cordel, que compartieron el favor de menestrales y payeses con los goigs (gozos de los santos) y las cobles (coplas).

Eso no quita que la inmensa mayoría de la población del Principado hablase entonces en catalán lo que, a diferencia de hoy, incluía también a las capas populares, rurales y urbanas. La burguesía provincialista las sometió a una triple exclusión con medios lingüísticos, de la que ya se han referido dos modalidades: el analfabetismo y el desconocimiento del castellano. La tercera, más sibilina, consistió en despreciar por grosero y pobre el catalán común de la época, e instaurar como modelo de lengua escrita el catalán de los Juegos Florales, arcaizante y falsamente puro —la llengua de les muntanyes que ha desmitificado Jordi Ginebra—. Salvando las distancias, se instituía la misma dualidad que separaba al nynorsk (nuevo noruego) y bokmål (idioma de los libros) en la

Noruega entonces unida a Suecia y al griego popular (dimotikí) del culto (kazarévusa) en la nueva Grecia independiente.

A la izquierda de los progresistas se extendió una corriente democrática-republicana que empleó el catalán de forma amplia y constante. En catalán se escribió la letra el célebre himno republicano La Campana, de Abdon Terradas (1842). Resulta del todo lógico, puesto que la plebe urbana que brindaba apoyo a esta tendencia se expresaba en catalán, como asimismo lo era que esa izquierda repudiase los particularismos, pues atentaban contra la igualdad de los ciudadanos. Los teóricos del nacionalismo democrático de aquel tiempo, como Giuseppe Mazzini, se oponían a la disgregación de los Estados existentes en otros menores, porque eso dificultaba el avance hacia la unión final de toda la humanidad. No estamos, por tanto, ante un catalanismo popular o unos orígenes populares del catalanismo, sino frente a un nuevo mentís a la doble ecuación lengua = identidad = nacionalismo, esta vez por el contraste entre una marcada identidad y un empleo generalizado de la lengua con la falta de un nacionalismo asociado.

Tampoco lo aceptó el movimiento obrero catalán, que se organizó casi de repente en los años de la regencia de Espartero. Estuvo entonces mucho más próximo al progresismo en el poder que al republicanismo que se levantó en su contra, por lo que no es de extrañar que alcanzase un nuevo estadio evolutivo durante el bienio progresista, primero con la huelga de las selfactinas de 1854 y después con la general en demanda del derecho de asociación, en 1855. El asesinato del fabricante Josep Sol i Padrís durante ella renovaría el miedo a la plebe que había infundido la quema de la Bonaplata.

En catalán se cantó la mayoría del repertorio de las sociedades corales obreras que desde fines de la década de 1840 dirigió Josep Anselm Clavé, miembro fundador del grupo republicano de Terradas. Más delante, Clavé mantuvo algún contacto con el círculo de artistas y escritores que pivotaba sobre el editor Inocencio López Bernagossi y al que pertenecían Conrad Roure y Eduard Vidal i Valenciano —autores de la letra de la zarzuela no estrenada L'art de la bruixeria—, los hermanos Antonio y Josep Feliu i Codina, Frederic Soler (Serafí Pitarra), y el desde entonces ubicuo Valentí

Almirall. Se reunían para la tertulia de café y para celebrar veladas teatrales en domicilios particulares, donde representaban las que años después se conocerían como gatadas. Soler descollaría en estas parodias del medievalismo de cartón de la Renaixença. Su primera pieza de ese tipo, representada solo en privado, fue la pieza corta Don Jaume el Conqueridor (1856), en que la franqueza del lenguaje está en consonancia con la trama: el conquistador de Valencia y Mallorca sufre de gonorrea tras un lance con un rey moro. La siguieron obras aptas para públicos mucho más amplios, y por ello ya se escenificaron en teatros: La Esquella de la Torratxa (1860), que daría nombre al semanario satírico posterior, y Lo castell dels Tres Dragons (1864).

La sátira se dirigía también contra el catalán artificial consagrado por los Juegos Florales, al que Soler y sus compañeros oponían el idioma real, el “català que ara es parla” (“el catalán que ahora se habla”). Lo llevaron a la práctica en diversas publicaciones, todas ellas editadas por López: primero las efímeras Un tros de paper (1865-1866), de Albert Llanas, y Lo noy de la mare (1866-1867), de Conrad Roure, y después La Campana de Gràcia (1870) y L'esquella de la Torratxa (1872), que alcanzarían gran longevidad (hasta 1932 y 1939).

De las vísperas de la Gloriosa a las de la Primera República

Hace ya tiempo que las investigaciones de Àngels Solà y Gary Wray MacDonogh aportaron algunas ideas esenciales sobre la elite del Principado a mediados del siglo XIX. La primera demostró que no todo fue industria, comercio y burguesía, puesto que la antigua nobleza y su patrimonio inmueble conservaron mucho de su antiguo peso, en tanto que el segundo resiguió algunas sagas familiares para ilustrar la fusión entre poder económico antiguo y nuevo. Al complementar esas aportaciones esenciales con algunas biografías y genealogías, se compartiría el aserto de Enric Ucelay-Da Cal de que la sociedad catalana posterior a la revolución liberal se configuró como una sociedad de familias y, en consecuencia, que solo se promocionaba situándose bien en las redes clientelares a las que se pertenecía o entrando en ellas por atajos como los matrimonios de conveniencia. Sin embargo, no se puede ir más allá de la simple impresión, porque faltan estudios que hayan sistematizado ese caudal de datos prosopográficos y hayan emitido un dictamen de alguna solidez sobre la movilidad social catalana en la era contemporánea.

En cuanto a la movilidad geográfica, se sabe de catalanes que emigraron a otras partes de España para establecerse como industriales (los conserveros de Galicia y Cádiz son quizá los más célebres), comerciantes (por ejemplo, en Valencia) o financieros (en Madrid), y que existió una significativa —pero mal cuantificada y documentada— corriente emigratoria de catalanes a las Antillas o Filipinas. Al mismo tiempo, Barcelona y su entorno recibieron una afluencia constante de efectivos humanos, que en las primeras décadas de la centuria procedieron del interior catalán y, más adelante, de Aragón y de Valencia, que presentaban la baja alfabetización indicada en el apartado anterior.

Tampoco se ha hecho la paciente cuenta de los empleos públicos (los empleos a secas, en el lenguaje de entonces) con destino en

Cataluña que se adjudicaron a no catalanes frente a los situados en otras partes de España y que se concedieron a catalanes. Sin ese balance, se queda en hipótesis no comprobada la afirmación de Albert Balcells de que el desarrollo económico productivo de Cataluña la salvó de la empleomanía, un mal crónico de Madrid desde los tiempos de los Habsburgo que se agravó con la instauración del Estado liberal.

Contradiendo ese supuesto, hubo bastantes casos de catalanes que completaron sus carreras académicas, políticas o militares en España y su capital. Ahí están las de algunos hombres que se habían significado por primera vez en la Barcelona revolucionaria de 1835-1843, como Antonio Ribot y Fontseré (deportado a la isla de Pinos en 1837 y director de la Biblioteca Nacional en 1854), Pedro Mata (exiliado en 1837 y catedrático de Medicina Legal en la Universidad Central desde 1843) o Pedro Felipe Monlau (autor de la memoria Abajo las murallas en 1841, negociador con la Capitanía en el otoño de 1843, catedrático de Filosofía e Historia en Barcelona desde 1849 y director del Museo Arqueológico Nacional en 1867). A los tres anteriores, todos médicos, habría que sumar a Laureano Figuerola, cuya trayectoria hasta 1842 ya se ha indicado, y que obtuvo la cátedra de Economía de la Universidad de Barcelona en 1846 y la de Madrid en 1853. No es este el sitio para insertar una biografía del más célebre de todos estos catalanes que triunfaron fuera de su tierra, el general Juan Prim y Prats, que había alcanzado la cima de la popularidad durante la guerra de África y en ella siguió durante la intervención en México de 1862, pero al menos deben consignarse sus repetidas profesiones de catalanidad y su frecuente empleo del catalán en público, incluida su arenga a los voluntarios catalanes en Marruecos en 1859 y su discurso desde el Ayuntamiento de Barcelona en octubre de 1868. Tampoco sobra recordar a su enemigo de 1843, Narciso de Ametller, que llegaría a teniente general y a presidente del Ateneo de Madrid en 1865. No suele incluirse en esta lista a Pascual Madoz porque nació en Navarra, pero tomó parte muy directa en la revolución catalana de 1835-1837, sacó muchas veces acta de diputado por Lleida o por Tremp y ejerció como uno de los portavoces más reconocidos de la burguesía industrial barcelonesa.

Ya entre los republicanos, se podría mencionar aquí a los escritores

y periodistas Antonio Altadill o Robert Robert, que residieron en Madrid algunos años de la década de 1850, pero el más importante de todos fue sin duda Francisco Pi y Margall, cuyas ideas se esbozarán más adelante. Pi se trasladó a Madrid en 1847 para doctorarse y allí se quedaría, dedicado a la abogacía, la escritura y, desde 1854, a la política y a la prensa, su complemento inseparable en aquel tiempo.

Cuesta saber cuánto hubo de afán de mejora y cuánto de fuga de un ambiente hostil en esa decisión de marcharse. Muchos de los emigrantes sostenían ideas opuestas a las del moderantismo provincialista que dominaba en Cataluña, donde creaban opinión ultraconservadores como Rubió y Ors, cada vez más papista, o Juan Mañé y Flaquer, director del Brusi desde 1865. El ejemplo más claro de esta falta de encaje quizá sea Laureano Figuerola, con su tímido librecambismo y su fe en la competitividad y la meritocracia, que le costaron repetidas críticas de personajes tan influyentes como el indiano y después industrial Juan Güell y Ferrer.

Sin embargo, serían los Figuerola, Prim o Pi quienes, a partir de septiembre de 1868, realizarían la mayor aportación de catalanes a la vida pública española, antes o después. Para ser exactos, compensaron un poco el grave déficit en este sentido que había acumulado el Estado liberal español desde 1833: tan solo hubo 10 ministros catalanes sobre un total de 286 españoles desde entonces hasta 1868, y ninguno de ellos fue influyente ni duradero.

El programa de la Gloriosa revolución de 1868 que destronó a Isabel II e instauró el sufragio universal masculino no contenía puntos regionalistas ni contemplaba más autonomía local. Es más, la izquierda democrática y republicana se mostró especialmente firme en punto a uniformidad. La Junta Provisional Revolucionaria de Barcelona presidida por Tomàs Fàbregas y con el poeta Gaspar Núñez de Arce como secretario exigió la disolución el cuerpo de mossos d'esquadra, que mantenían diputaciones y ayuntamientos, y el Gobierno presidido por Serrano lo reemplazó por la Guardia Civil. Francisco Suñer y Capdevila, nuevo alcalde de Barcelona y republicano de primerísima hora, se negó a que el Ayuntamiento subvencionara los Juegos Florales de 1869, porque eran en catalán y, a su juicio, “el día que todo el mundo se sujete a la medida

común del mismo idioma, aquel día será el del triunfo definitivo de la libertad”.

No pensaba igual Víctor Balaguer, presidente de la Diputación de Barcelona a fines de 1868 y de nuevo gozne entre el regionalismo y el progresismo. Sus tareas de agente exterior en las conspiraciones de Prim a partir de 1865 le habían llevado a establecer contactos con Frédéric Mistral y otros felibres, a quienes invitó a los Juegos Florales barceloneses de mayo de 1868. Esa representación occitana, una castellana —con Núñez de Arce— y una valenciana oyeron cómo Balaguer sostenía en el discurso de inauguración que “España es una gran nación compuesta de varias nacionalidades”, “que la lengua castellana es solo la de nuestros labios, mientras que la catalana es la de nuestro corazón” y que su cultivo literario “es una obra regeneradora, y todo ha de ser para mayor esplendor y gloria de España, que así como es más rica una familia que tiene dos patrimonios, así ha de ser más rica una nación que tiene dos literaturas”. Balaguer defendería esas mismas ideas en Madrid, adonde fue como diputado por primera vez en 1869 y en donde gestionó la cesión a Barcelona de la Ciudadela y sus terrenos.

La coalición gubernamental progresista-unionista-demócrata a la que Balaguer pertenecía ganó holgadamente aquellas elecciones (236 escaños); los republicanos obtuvieron una representación considerable, aunque inferior a sus expectativas (5 escaños), y con los carlistas sucedió lo contrario (20 escaños). El triunfo parcial de los republicanos en Aragón y Cataluña y sus buenos resultados en Valencia les animaron a celebrar en Tortosa el mayo siguiente una Asamblea federal de provincias de la antigua Corona de Aragón. Se reunieron representantes de todas menos de Alicante y Girona bajo la presidencia del alcalde de la ciudad sede, Manuel Bes, y las vicepresidencias de Josep Anselm Clavé (Cataluña), José Franch (Valencia) y Mamés Benedicto (Aragón). Tras un preámbulo donde la inevitable retórica medievalista se mezclaba con los topoi democráticos (“nos unimos para resistir a la tiranía y a fuer de aragoneses, catalanes y valencianos, evocando en nuestro favor honrosos antecedentes históricos”), el primer artículo del Pacto Federal rezaba:

Los ciudadanos aquí reunidos convienen que las tres antiguas provincias de Aragón, Cataluña y Valencia, incluidas las Islas Baleares, estén unidas y aliadas para todo lo que se refiere a la conducta del partido republicano y a la causa de la Revolución, sin que de ninguna manera se deduzca de ello que pretenden separarse del resto de España.

Al Pacto de Tortosa le seguirían otros en Andalucía, las dos Castillas o Galicia-Asturias, hasta que la dirección del Partido Republicano Federal los contrarrestó con un Pacto Nacional en julio siguiente. Fue la primera de las muchas veces que Pi contrarió a Almirall, uno de los representantes por Barcelona en la asamblea tortosina y posterior editor de El Estado Catalán. Personaje contradictorio, dueño de una fortuna personal que blindaba su libertad de criterio, representaría en las dos décadas siguientes un papel de primer orden en la formación del catalanismo político.

También lo harían los socios de la primera y minúscula asociación patriótica catalanista, fundada en 1870: Àngel Guimerà, Pere Aldavert, Josep Roca i Roca, Josep Pella i Forgas, Lluís Domènech i Muntaner, Francesc Pelagi Briz o Antoni Aulèstia i Pijoan. Se llamó La Jove Catalunya, un nombre mazziniano para un círculo literario que en realidad postulaba principios opuestos a los del italiano. Su primer órgano de expresión fue el semanario La Gramalla, dirigido por Francesc Matheu, que en 1871 fue relevado por el quincenal La Renaixensa. Como le ocurriría a otras publicaciones catalanistas los años siguientes, esta comenzó su andadura proclamándose apolítica (Periódich de literatura, ciencias y arts, se subtituló), pero enseguida adoptó un nacionalismo tan próximo al separatismo que escandalizó allende el Ebro.

Llevaba meses en vigor la constitución monárquica y democrática de 1869 y se había elegido como nuevo rey a Amadeo de Saboya. Madoz y Balaguer formaron parte de la comisión parlamentaria que fue a buscarle, pero el primero murió en Italia a inicios de diciembre de 1870 y Prim, principal valedor del infeliz monarca, cayó asesinado en Madrid antes de que acabase el mes. Balaguer mantendría su escaño en las elecciones de marzo de 1871, donde los republicanos perdieron los 30 que los carlistas ganaron. Fiel a su

estilo conciliador, el vilanovense consiguió del rey unas cruces de la orden de Carlos III para los ganadores de los Juegos Florales de aquel año, pero el grupo de La Renaixensa abucheó en el acto cuando supo la noticia y los premiados (Briz, el entonces seminarista Jaume Collell y el mallorquín Tomàs Forteza) rechazaron las cruces.

En octubre de 1871, Balaguer recibió la cartera de ministro de Ultramar, poco estimable después de tres años de guerra contra los independentistas cubanos, y la cambió por la de Fomento en mayo de 1872, después de que los carlistas catalanes se hubiesen alzado en armas. Aunque la base del ideario de estos seguía siendo la defensa del catolicismo ultramontano, la nueva carlistada sí contuvo un ingrediente foral en Cataluña. Por primera vez, y en buena medida por contagio de otras opciones políticas y otras tierras, algunos dirigentes carlistas catalanes contemplaron la posibilidad de recuperar las instituciones previas a la guerra de Sucesión. Eso sí, no podían venir de la soberanía nacional, sino de la monárquica. Como dijo el pretendiente Carlos VII en su proclama de 16 de julio de 1872: “Hace siglo y medio que mi ilustre abuelo Felipe V creyó deber borrar vuestros fueros del libro de las franquicias de la patria. Lo que él os quitó como rey, yo como rey os lo devuelvo”. Por otra parte, esa restauración se pospuso sine día hasta un “os llamaré, y de común acuerdo podremos adaptarlos a las exigencias de los tiempos”. Si el momento había de ser el de la victoria, no llegaría. Entretanto, la Diputación a Guerra creada por decreto el 26 de julio de 1874 solo sirvió para auxiliar al comandante en jefe de las tropas carlistas en el Principado.

La crisis federal

Tras la abdicación de Amadeo I y la inhibición de los partidos monárquicos, llegó la República en febrero de 1873, y con ella una nueva afluencia de catalanes al poder. No podía ser de otro modo si Cataluña aportaba más diputados republicanos al Congreso que cualquier otro territorio, pero el periódico alfonsino *El Eco de España* lo convirtió en cargo contra el nuevo régimen:

El presidente del Poder Ejecutivo, catalán. El ministro de Gobernación, catalán. El ministro de Hacienda, catalán. De los cuarenta y nueve Gobiernos de provincia, treinta y dos están desempeñados por catalanes. Pues todavía no están contentos. Sería necesario darles un ministerio [por Gobierno] homogéneo, todo catalán, los diecisiete Gobiernos de provincia que les faltan, y que el resto de España les pague un crecido tributo para que nos dispensen el obsequio de no declararse independientes y piensen en mudar de nacionalidad.

Los primeros datos enseguida pecarían de cortos, porque en abril-junio llegaría a haber cuatro catalanes en el Ejecutivo: el presidente Estanislao Figueras; el ministro de Gobernación, Pi; el de Hacienda, Juan Tutau, y ahora el de Guerra, Ramon Nouvilas. De todos modos, ¿no se habían visto proporciones iguales o mayores de andaluces desde 1834? En cambio, la cifra de gobernadores civiles catalanes del Eco estaba hinchada: en 1873 solo ocuparían ese puesto Clavé, en Castellón, y después en Tarragona; Bes, en Lleida; Juan Matas, en Girona; Miguel Ferrer, en Barcelona; Ceferino Tresserra, en Soria y después en Salamanca; Juan Palau, en Castellón; Juan Martí, en Burgos, y Altadill, en Guadalajara y después en Murcia. En sentido contrario, el madrileño Luis María Lasala fue destinado a Tarragona.

Una vez más, la supuesta invasión de catalanes no buscaba privilegios o salvedades territoriales. El federalismo no pretende frenar ni potenciar los nacionalismos subestatales, sino ofrecer una forma alternativa de concebir el poder, que circula de abajo arriba. Así resulta lo opuesto al confederalismo, porque la federación aspira a unir cada vez más a sus partes mediante el pacto, mientras que la confederación se limita a regular una frágil coexistencia de Estados unitarios potenciales.

La proclamación del Estado catalán en la Federación española que realizaron los presidentes de las cuatro diputaciones catalanas el 5 y 7 de marzo de 1873 quiso presionar para que la República neonata —toda ella— fuese federal. El mismo alcalde de Barcelona que la apoyó, Miguel González Sugranyes, retiraría la subvención a los Juegos Florales. Al poco, y con la misma intención, aparecía en Madrid el primer número de la segunda epoca de *El Estado Catalán*, que Almirall editó en la capital hasta junio. La proclamación de autonomía quedó anulada ese mes, una vez que Figueras aceptó la disolución del Ejército regular en Cataluña; después dimitió y se fue a Francia.

El proyecto de Constitución de la República presentado por Castelar pocos días después la definió como federal, es decir, basada en el principio de subsidiariedad por el que “todo lo individual es de la pura competencia del individuo, todo lo municipal es del municipio y todo lo nacional es de la federación” (art. 40). Aunque como nuevo presidente Pi y Margall defendiera el texto, no se ajustaba del todo a su pensamiento sobre la organización territorial del Estado, que había apuntado en *La reacción y la revolución* (1855) y sobre el que había vuelto al traducir *El principio federativo* de Proudhon. De ahí sacó la idea de pacto entre pueblos, pero “llevado de la lógica, había yo siempre sostenido que no cabía federación, es decir, pacto, mientras no hubiese en España estados autónomos y, por tanto, que el movimiento federal debía empezar por la constitución de las antiguas provincias en Estados”.

La política no entra en las coordenadas cartesianas, y menos en un contexto tan difícil como el de 1873, así que los dos procesos consecutivos de desguace del Estado centralizado y construcción del federal enfrentaron a los federales entre sí y acabaron en desastre.

Para los más templados, se podía comenzar por la cesión de poderes del Estado central a los federados que la Constitución preveía (Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia y Regiones Vascongadas), pero los intransigentes propugnaban la vía insurreccional que habían transitado en 1869. Si había que comenzar por abajo, tan federables eran esas unidades como cualquier otra demarcación: en julio de 1873, estalló la revuelta cantonal en Cartagena, que se extendió por Levante y Andalucía las semanas siguientes.

Aunque Francisco Suñer y Capdevila, insurrecto crónico y ministro de Ultramar en el Gobierno de Pi, se identificase con el movimiento, este no prendió en Cataluña. Hasta los más radicales comprendieron lo que habría traído la fragmentación en plena guerra contra los carlistas. Todo lo más, a mediados de diciembre de 1873 se registró una intentona tardía y muy minoritaria en Barcelona. Unas semanas después, entraban en las Cortes los soldados del general Pavía y Rodríguez de Alburquerque, y la Primera República quedaba en suspenso.

Capítulo 4

Conservadurismo, caciquismo, regionalismo (1875-1895)

La Restauración en Cataluña

Los libros como este, que resiguen la evolución de un credo concreto, pueden inducir a error sobre sus dimensiones. Por la novedad y por contaminación del presente, se creería que no hubo más que catalanismo en el último cuarto del siglo XIX, cuando otras fuerzas dominaron el escenario político catalán y se dirimieron otras luchas, tan intensas como la planteada por una clase obrera numerosa y organizada. La cuestión nacional fue el asunto solo para una minoría, que en los años que abarca este capítulo distaba de ser hegemónica.

El catalanismo político tampoco apareció solo. Los nacionalismos subestatales florecieron en Europa en esas décadas, tanto en la Central y Oriental (los que constituirían Estados, como el serbio o el rumano, y los que aún no, como el checo, el polaco, el noruego o los bálticos) como, por primera vez, en la Occidental (por supuesto el irlandés, pero también el escocés, el galés, el flamenco, el bretón o el occitano). Por Barcelona pasaron regionalistas de todas partes de España: Sabino Arana y su hermano Luis estudiaron en la Ciudad Condal de 1883 a 1888; el gallego Alfredo Brañas publicó en ella *El regionalismo* (1889); el foralista navarro Arturo Campión fue invitado por la Lliga de Catalunya en 1891... Continuaron asimismo las relaciones entre la *Renaixença* y un occitanismo que se volvió cada vez más reaccionario y acabaría engullido por la extrema derecha de *Action française*.

Esto último no es de extrañar, porque los nacionalismos emergentes competían en el mismo espacio político con las versiones integrista o racista de ese conservadurismo, aunque también con su opuesto, el radicalismo. Todos se disputaban el favor de las capas medias, una nueva y nutrida clientela que había accedido al mercado electoral gracias a las ampliaciones del sufragio censitario o la instauración del universal masculino.

Borja de Riquer ha relacionado el surgimiento de los nacionalismos

catalán, gallego o vasco con una débil nacionalización, esto es, con una deficiente formación de conciencia nacional en los ciudadanos españoles, cuando menos de esos territorios. La hipótesis ha sido rebatida, entre otros, por Ferran Archilés y Manuel Martí, pero todos coinciden en que a estos efectos no debe tomarse como única vara de medir a Francia, donde esa nacionalización acelerada comenzaría con la ley escolar de Ferry de 1887 y no se consumaría hasta la Primera Guerra Mundial. Además —y como el Reino Unido, los Países Bajos, Portugal o Bélgica—, Francia disponía de un imperio colonial que incrementaba la adhesión a la Nación-Estado propiciando negocios, colocando personal y proyectando una imagen de poderío.

Pese a que el catalanismo abjuraría del sistema de la Restauración, de su corrupción congénita y de su ineficacia, no cabe duda de que la burguesía catalana recibió su llegada con alborozo. La pidió hasta Frederic Soler, que se había vuelto muy conservador a partir de finales de los sesenta. La elección de Barcelona como punto de entrada en España de Alfonso XII estuvo tan cargada de sentido como que un rey de España desfilase por primera vez vestido de militar en esa ciudad.

En los años siguientes, los partidos dinásticos conservador y liberal dominaron la política oficial catalana de forma aplastante. Como ha mostrado Gemma Rubí, consiguieron más del 90% de las actas de diputado en juego entre 1875 y 1886, y se quedaron en un muy respetable 75% entre 1891 y 1905. Aunque en este segundo periodo se abriese un resquicio para las opciones marginales de republicanos y carlistas, esos resultados sustentaron en Cataluña la misma alternancia perfecta entre los dos partidos del turno que en el resto de España, un prodigio donde, como se sabe, no intervino el azar. El fraude electoral orquestado mediante intervenciones gubernativas, censos erróneos, destitución de alcaldes contrarios, partidas de la porra y, al cabo, pucherazos (en catalán, tupinades) o relleno al gusto de actas en blanco, a veces con cifras millonarias, también reinó en los comicios catalanes. No solo pasó en las zonas rurales: al discutir en el Congreso de los Diputados un acta de Terrassa, se dijo de ella que más bien parecía “una clínica electoral, porque no hay enfermedad de la que no adolezca ni vicio de la que no se la pueda acusar”.

Nuestro conocido Víctor Balaguer destacó en estos manejos, como testimonia la ingente correspondencia que se conserva en la Casa-Museo de Vilanova i la Geltrú, su feudo electoral hasta 1886. Miembro de la Real Academia de la Historia desde 1875 y de la Real Academia Española desde 1883, alcanzaría la cima de su poder en 1887, cuando recibiera por segunda vez la cartera de Ultramar. El nombramiento cobra otro sentido cuando se conoce la creciente vinculación del gran capital catalán a las colonias. Entre 1876 y 1881, el santanderino afincado en Barcelona Antonio López y López había fundado la Compañía General de Tabacos de Filipinas y el Banco Hispano-Colonial, y había ampliado la Compañía Transatlántica, en cuyos barcos Jacinto Verdaguer escribió el poema épico *L'Atlàntida* (1877). Esos fueron también los años de la fiebre bursátil que retrataría Narcís Oller en *La febre d'or* (1890-1892).

Balaguer continuó la serie de diputados catalanes adalides del proteccionismo. En 1882 terminaron los cinco años de suspensión del ligero y progresivo desarme arancelario que había dictado Figuerola en 1869 y se firmó un tratado comercial con Francia, lo que desató la previsible campaña proteccionista en la prensa catalana y en las Cortes, con las consecuencias políticas que enseguida se verán. Al fin, el arancel antillano de 1892 eximiría de gravamen a los tejidos de algodón en las últimas colonias, lo que se tradujo en un aumento inaudito de ventas a un mercado hasta entonces secundario.

El proteccionismo férreo buscaba preservar el mercado interior para una industria textil catalana cada vez menos competitiva, por falta de renovación tecnológica y por resistencia a concentrarse en grandes unidades. En lugar de eso, se recurrió al traslado de factorías a los valles del Llobregat y del Ter para aprovechar la fuerza hidráulica y no consumir carbón, a los despidos, la bajada de salarios y el aumento de jornadas. Mientras no fueran violentas, las huelgas no le iban tan mal a una industria que no conseguía dar salida a su producción.

Los sindicatos que las convocarían tuvieron que pasar por los años de clandestinidad y represión que siguieron en toda Europa al fin de la Comuna de París, y en España al de la Primera República. El primero en recuperarse fue el sindicalismo apolítico de las Tres

Clases de Vapor, que reapareció en 1881 y llegaría a contar con 30.000 afiliados en 1886. Le quitó algunos efectivos el anarquismo encuadrado en la Federación de Trabajadores de la Región Española, 13.000 de cuyos 58.000 afiliados procedían de agrupaciones catalanas, pero el choque entre anarcosindicalistas —mayoritarios en Cataluña— y anarquistas —más fuertes en Andalucía— acabó por traer su disolución en 1888. Aunque la UGT y el PSOE se fundaron en el congreso obrero celebrado en 1888 en Barcelona y el sindicato socialista mantendría su Comité Nacional en la Ciudad Condal hasta 1899, el socialismo de inspiración marxista no acabó de cuajar en la Cataluña de finales del XIX: en 1890 no llegaba a reunir un par de miles de afiliados.

El campo sufriría a partir de 1880 las consecuencias aplazadas de la gran depresión de 1873 y habría de enfrentarse a la competencia con los nuevos productores de Ultramar. La plaga de la filoxera, que había matado las viñas francesas en la década de 1870 y había eliminado al mayor competidor de la viticultura catalana, entró en la península a partir de 1880 y también arrasó sus viñedos. La muerte de las cepas rescindió los establecimientos enfitéuticos de rabassa morta, así que los aparceros rabasaires quedaron a merced de los terratenientes.

Ascenso y fragmentación del primer catalanismo

Después de 700 páginas de afectuosa crónica del renacimiento cultural catalán, Francisco María Tubino constató con preocupación en 1880 la “mudanza radicalísima que se opera en la manera de ser del sentimiento provincialista. De continuar desenvolviéndose los sucesos según el giro que han tomado, la fase literarioartística quedará por completo supeditada al concepto político”. También vio que “mientras unos sueñan con la resurrección de aquel defectuoso organismo jurídico que una reina catalana presentaba como la más grande de las iniquidades, otros pretenden constituir a Cataluña cual si tuvieran delante un nuevo Estado de la Unión norteamericana”.

Si lo último iba por los federales, hay que decir que estos hicieron alguna autocritica tras el fracaso de la Primera República. En Las nacionalidades (1877), primera exposición sistemática de su pensamiento sobre el particular, Pi y Margall contempló ya diversas fórmulas para un Estado compuesto, republicanas y democráticas como las de Suiza y Estados Unidos, o monárquicas y autoritarias, como Alemania y Austria-Hungría. Trazó de nuevo los círculos concéntricos individuo-municipio-Estado federado y volvió a delimitar como competencias de las uniones las relaciones exteriores, el ejército, las reglas económicas y la resolución de conflictos entre Estados federados, pero, seguramente influido por el ejemplo de Estados Unidos tras su guerra civil, les añadió la salvaguardia de los derechos y libertades.

Ni todo era federable ni había por qué hacer tabla rasa. Pi admitía ya la existencia de nacionalidades previas, aunque negaba que hubiese un criterio válido para demarcarlas. Aplicar cualquiera de ellos a rajatabla no traería más que conflictos:

Yo estoy por que, en vez de agitar el mundo para reconstituir

naciones, fundándonos, ya en la identidad de raza, ya en la de lengua, ya en la de creencias, ya en las llamadas fronteras naturales, agitación que no puede menos de traer incesantemente perturbado el orbe, se trabaje en todas partes por que se restituya la autonomía a los grupos que antes la tuvieron, dejándolos unidos a los actuales centros solo para la defensa y el amparo de sus comunes intereses.

La solución estaba, claro, en una federación libremente consentida, donde las partes mantuviesen su especificidad y autonomía. De paso, el mantenimiento de los Estados-nación existentes enseñaría “a nuestros semejantes a vivir con hombres de otras razas y aún de otros colores, no solo en relaciones de comercio, sino también en comunidad de ideas y sentimientos”.

En cambio, el sector catalanista que había surgido en 1870 y se agrupaba en torno a La Renaixensa no sintió frustración alguna por el hundimiento de la República. Los Matheu, Guimerà o Aldavert no eran federales ni de izquierdas. La eclosión de libertades durante el sexenio democrático había permitido expresarse por primera vez a una corriente que, pasada la guerra civil de 1872-1876 y el estado de excepción general, iría ganando terreno.

Un paso importante en esta dirección lo dio Los Fueros de Cataluña, el voluminoso repaso historicista que Josep Coroleu y Josep Pella i Forgas publicaron en 1878, y al que quizá titularon así, impropriamente, en un guiño a los fueros vascos abolidos en 1876. Elogiada por Prat de la Riba décadas después, la obra es un interesante espécimen evolutivo, que se abre con una declaración de determinismo geográfico (“de esa espléndida variedad con que a la Providencia le plugo dotar a Cataluña ha brotado el genio característico de sus hijos”) y étnico (“el carácter catalán se caracteriza por su fiera libertad, su sentido práctico”). Los capítulos siguientes se organizan como en una Constitución, de acuerdo a esa manía española que tanto sorprendía a los viajeros extranjeros. No obstante, los artículos y las largas digresiones que les siguen sirven para un juego de equívocos entre la explicación del antiguo ordenamiento político de la Corona de Aragón y del Principado y el deseo evidente de que se restaure casi tal cual. El anacronismo asoma desde el primer artículo, que reza: “La nación [sic] catalana

es la reunión de los pueblos que hablan el idioma catalán. Su territorio comprende: Cataluña, con los condados de Rosellón y Cerdaña; el Reino de Valencia; el Reino de Mallorca”, más el reino de Aragón que se deja aparte por razones no explícitas. Tampoco suenan muy medievales los principios de que “la propiedad es inviolable” (art. 13) o que la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey, único que puede convocarlas (arts. 40 y 41).

Al igual que los textos que glosan, Coroleu y Pella conciben la sociedad catalana como una reunión de familias, porque con lo contrario “se ha venido a parar en política al individualismo o al socialismo”. En consecuencia, “solo tienen el derecho de nombrar y ser nombrados los ciudadanos cabezas de familia” (art. 51) para el brazo popular de unas Cortes definidas como la “reunión de los representantes de todas las clases sociales”, pero organizadas de forma estamental, con deliberación por separado y voto único. Los derechos se restringen a alguna seguridad jurídica, la inviolabilidad de la correspondencia y la libertad de publicación, salvo en temas religiosos: “Siendo la religión de los catalanes la católica, apostólica y romana [como venían estipulando las constituciones españolas desde 1812], no le es lícito a ningún laico discutir pública ni privadamente acerca de sus dogmas” (art. 39). Los artículos 8 y 30 sirven para reclamar que el servicio de armas se realice en Cataluña, en tanto que el 28 enuncia el que se convertiría en un punto irrenunciable del programa catalanista: “Solo los catalanes nacidos en el Principado y no los naturalizados por privilegio que se hallen en el pleno goce de la ciudadanía podrán obtener beneficios y oficios eclesiásticos en Cataluña y ejercer jurisdicción, oficio público, empleo o mando militar en Cataluña y reino de Mallorca”.

Cansados del trile entre pasado y presente, los autores acaban por descubrirse. Acusan de la abolición de las libertades catalanas no a Felipe V, sino a “los desatentados políticos del siglo XIX” y niegan la legitimidad de todos los procesos constituyentes desde Cádiz. Aunque admiten que entonces se sentaron unos representantes de Cataluña enviados por su Junta, después “su nombre son y han sido el de diputados de toda la nación española”. Presos de su discurso, Coroleu y Pella han de aceptar que en Cataluña haya un rey, pero España debe reparar “los derechos imprescriptibles de sus pueblos” oprimidos por “el despotismo de las dinastías extranjeras” y el

“jacobinismo de infames políticos”. Unas y otros han conformado “una sociedad ludibrio del mundo civilizado que ha visto sin compasión en los modernos tiempos sus tenaces y fieras guerras civiles como los colosales esfuerzos del dios [sic, por el titán Prometeo] encadenado y presa de los buitres en la cima del Cáucaso”.

El fin de la década de 1870 señala la irrupción de Almirall en el campo del catalanismo, que pronto se volvería palestra. Propietario, editor y redactor del *Diari Català*, el primero escrito íntegramente en esta lengua, convocó desde sus páginas un primer Congreso Catalanista para abrir cauce político al movimiento. La iniciativa recibió críticas variadas, desde la del ya canónigo Jaume Collell, que lo comparó con la filoxera en su semanario *La Veu del Montserrat*, hasta la del círculo del editor López, *La Esquella de la Torratxa* y *La Campana de Gracia*. A Tubino no se le pasó por alto que en el programa, no en vano publicado el 11 de septiembre de 1880, figurase el escudo de Cataluña atravesado por un puñal y “¿Sabe el lector qué símbolo ostenta el puño del arma homicida? Los blasones de Castilla y de León”. Mañé y Flaquer, ya respetado director del *Diario de Barcelona*, sentenciaría después del evento que “el espíritu catalanista es no solamente distinto, sino absolutamente contrario al espíritu catalán”.

El Congreso comenzó en octubre de 1880 con cerca de 1.300 participantes de distintas tendencias políticas y culturales. Contra lo que se supondría, la división no surgió entre las primeras, sino entre partidarios y detractores de la acción política. En la votación inicial para la mesa, aquellos optaron por la “candidatura no separatista del *Diari Català*” encabezada por Almirall, que resultó vencedora, mientras que los segundos apoyaron la “candidatura no política de *La Renaixensa*” de Albert de Quintana. Se habrá deducido que la mayor radicalidad se daba en medios literarios y artísticos, un rasgo de fácil explicación que ha acompañado al nacionalismo catalán hasta la actualidad. Este sector, con Guimerà al frente, acabaría por abandonar el Congreso, pero proseguiría el enfrentamiento con Almirall y los suyos en las páginas de *La Renaixensa*, de publicación diaria a partir de diciembre. A su vez, Almirall influiría sobre un nuevo enemigo de los catalanistas literarios: los modernistas que a partir de 1881 publicaron *L’Avenç*.

Ese mismo año Almirall rompió estrepitosamente con Pi y abjuró del pacto sinalagmático conmutativo que, según dijo, aquel había sacado de un panfletito de Proudhon al que nadie en Europa o América concedía valor. Hubo que esperar a junio de 1882 para que se formase el Centre Català, la plataforma política unitaria acordada por el Congreso y de la que Frederic Soler fue primer presidente y, Almirall, secretario. Convocó para junio de 1883 un II Congreso Catalanista, mucho más restringido que el anterior, en el que se decidió formar un partido político catalán desvinculado de los estatales.

Unas semanas antes, el Congreso Regional de los republicanos federalistas (los Francesc Suñer y Capdevila, Baldomer Lostau o Josep Maria Vallès i Ribot) había alumbrado un proyecto de Constitución del Estado de Cataluña dentro de la Federación de Estados Españoles o Ibéricos. Cortado por patrones clásicos, el texto comienza detallando las competencias que se delegarían a la federación: relaciones exteriores, ejército y presupuesto, comercio, propiedad intelectual, relaciones interestatales, orden público, derechos individuales e igualdad social, económica y cultural de todos los españoles “en qualsevol punt de la Federació”, que ha de ser defendida dentro y fuera de Cataluña. Por supuesto, se incluía una declaración de derechos tan garantista como en las constituciones de 1869 y 1873 y se consagraba el sufragio universal (art. 50). Por debajo de la Unión, solo se contemplaban los niveles del municipio —el básico, por eso dotado de máximas competencias— y el Estado regional. Entre ambos se mantendrían las antiguas [?] comarcas, si no chocaban contra los intereses municipales y como meros distritos electorales, con representación proporcional a sus habitantes. Se preveía un Ejecutivo de inspiración suiza, con un presidente elegido por las Cámaras de mandato bianual y renovable. Aunque estaba redactado en catalán, el proyecto no disponía nada en materia de idiomas.

Eran muy distintas las preocupaciones de la burguesía barcelonesa, alarmada de nuevo por un posible tratado comercial con Gran Bretaña y esta vez por el fin del derecho civil catalán. El jurista conservador Manuel Duran y Bas manifestó su desacuerdo con la comisión parlamentaria de codificación a la que pertenecía y unos 4.000 propietarios enviaron una exposición a las Cortes. Ya en

enero de 1885, se celebró una reunión en la Lonja de Barcelona con la plana mayor de la plutocracia y el catalanismo: la patronal Instituto del Fomento del Trabajo Nacional, el Centre Català, la Acadèmia de la Llengua Catalana, la Associació Excursionista de Catalunya y el consistorio de los Juegos Florales barceloneses. De ella salieron dos comisiones, una encargada de redactar un memorial al rey Alfonso XII y otra económica, que gestionaría los gastos de presentarlo en la Corte viaje.

A ambas reivindicaciones, proteccionismo y derecho catalán, se refería la Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña... que acabaría siendo conocida con el nombre más tradicional de Memorial de agravios. Aunque en teoría elaborada por una comisión de nueve personas, la primera parte corresponde sin duda a Almirall. Este aprovechó el Memorial... para exponer su idea, a la que volvería en escritos posteriores, de que la falta de entendimiento entre Cataluña y el Estado español nacía del conflicto entre el elemento étnico castellano, al que su herencia arábica aportaba “su afán de generalización, su apasionamiento por las ideas abstractas y su afición por la magnificencia de las formas”, y el “que con más o menos propiedad llamaremos catalán”, por el contrario “individualista y amigo de lo positivo”. Tras la reivindicación de una lengua que cuenta ya con “obras de empeño en casi todos los ramos”, se lamenta la decadencia desde los Reyes Católicos, acentuada por la “catástrofe del tiempo de D. Felipe V”, se omite la ruptura liberal y se acaba en la denuncia de un sistema político corrupto. Tras una tercera parte en que se defiende una vez más el proteccionismo y de una cuarta donde se reivindica el derecho catalán, el documento concluye:

¿Cómo salir de tal estado? Solo hay un camino justo y conveniente a un tiempo. El que se desprende de todas las páginas de esta Memoria: abandonar la vía de la absorción y entrar de lleno en la de la verdadera libertad. Dejar de aspirar a la uniformidad para procurar la armonía de la igualdad con la variedad, o sea la perfecta Unión entre las varias regiones españolas [...]

2.^a La unificación del derecho civil no es indispensable a los fines del Estado. Cuando existen en el país grupos ó razas de distinto carácter, cuya variedad casualmente se demuestra en la existencia de legislaciones distintas y aún diversas, la unificación, lejos de ser útil, es perjudicial a la misión civilizadora del Estado.

Después de que el texto se presentara en sociedad, con el previsible discurso de Rubió i Ors, se nombró para llevarlo a Madrid a una nutrida y pintoresca comisión que —siempre según Almirall— tuvo una fría acogida en medios políticos de la Villa y Corte. Cuando el rey la recibió el 10 de marzo, su portavoz, el exdiputado conservador Mariano Maspons, habló del “sistema ya seguido en España en los días de nuestra grandeza” e incidió en la relación especial con el rey fuera del marco constitucional. El modelo austrohúngaro y su retrógrado sufragio de curias tenían que disgustar a Almirall, que trabajaba por un partido bisagra como el Irish Party, pero no podía pretender que una movilización así solo obedeciera a sus criterios. Para colmo, el rey se murió al cabo de pocos meses y todo el despliegue acabó en nada.

El deceso de Alfonso XII dio la señal para el último pronunciamiento del siglo, la intentona republicana fallida del general Villacampa y de Ruiz Zorrilla en 1886. Ese fue también el *annus mirabilis* de Almirall en lo editorial, pues se publicaron su Estudio político comparativo de la Confederación suiza y la Unión Americana y su obra cumbre, *Lo catalanisme*, amén del polémico ensayo *Espagne telle qu'elle est*. Se trata de un alegato dirigido al público europeo contra la España de pandereta, de la que no obstante denuncia la inflación de generales, la deuda, la red ferroviaria, el parasitismo capitalino, la doblez de los políticos desde época del sexenio —Pi incluido—, el poder de los gobernadores civiles en provincias, el crimen organizado en las ciudades, el falseamiento electoral o las quintas. Cataluña forma parte de esa España por claras razones geográficas y porque los siglos de unión han creado lazos “*d'intérêt et d'affection réciproques*” imposibles de romper, entre ellos el de una industria con su mercado. No han producido una unión acabada por las diferencias entre las razas que pueblan el país, y que en esta obra

Almirall resume en “le groupe castillan ou central-méridional, et le groupe vasco-aragonais ou pyrénéen”, dotados de las características ya indicadas en el Memorial.... Los males patrios proceden de que el primero ha impuesto al conjunto su sistema político, autoritario, en detrimento del catalano-aragonés, liberal y confederalista por naturaleza, así que la solución consiste en poner en pie de igualdad a las dos etnias y que cada una adopte las normas que le son naturales.

Lo catalanisme se apoya de nuevo en esta definición científica de los caracteres nacionales que hoy nos parece deleznable, pero que gozaba de gran predicamento en la Europa de fines del XIX. Entre las distintas “rases o pobles” de la península, destaca la castellana, generalizadora e idealista como el Quijote y, a pesar de la belleza física y la generosidad de sus gentes, sumida en la decadencia y la degeneración por culpa de su oligarquía, que manda en todo el país. En cambio, la etnia catalana es tan analítica y positiva como petulante, por lo que en Cataluña hay riqueza, pero no vida intelectual ni una moral rectora. Desde que la balanza se inclinó a favor de la etnia castellana a fines del siglo XV, cuando el eje del mundo se desplazó del Mediterráneo al Atlántico, se ha ido imponiendo su sistema político centralizador, cuando la confederación resulta la forma lógica para el carácter catalán y su afán de libertad. Almirall recuerda bien que en el sexenio hubo oportunidades de restaurar esa unión federativa, pero los dirigentes políticos del momento no estuvieron a la altura y todo acabó en una pura revuelta.

Aunque se valga a menudo del ejemplo norteamericano, no predica una secesión que solo llevaría o a una independencia geopolíticamente inviable o a la absorción por una Francia aún más centralista. Su catalanismo regionalista se basa en el particularismo, un equivalente del self government británico que preserva las libertades individuales y colectivas porque, a diferencia del unitarismo francés y del federalismo pimargalliano, no persigue la uniformidad. Poco importa que venga de la mano de una monarquía como el Reino Unido (el autor tiene muy presente la British North America Act de 1867), Alemania, Austria-Hungría o Suecia-Noruega, o de una república federal como Suiza, Estados Unidos y otras americanas. A diferencia de los ultracatalanistas de La Renaixença, no pretende que vuelvan “las Corts de la edat mitjana ni las de la època en que las va enterrar en las runas de

Barcelona l'exèrcit del primer Borbón", sino que se instaure un régimen moderno, con una gran descentralización administrativa en comarcas y un poder ejecutivo como el de Suiza, débil y colegiado.

Gaspar Núñez de Arce, a la sazón presidente del Ateneo de Madrid, replicó airadamente a las propuestas almirallianas en un discurso que alcanzó gran difusión. Su alarde de orgullo español ofendido se hace difícil de entender viniendo de alguien que, como él, había sido gobernador civil de Barcelona y había escuchado en directo la alocución de apertura de los Juegos Florales de 1868 que pronunció Víctor Balaguer. Como este no dijo cosas muy distintas a las de Almirall, sobre todo respecto a la lengua, cabe concluir que el clima político había cambiado mucho. Quien fuera secretario de la Junta revolucionaria de Barcelona en 1868 agitaba ahora ante su auditorio madrileño el espantajo del "aniquilamiento de nuestra gloriosa España" y de la formación de "inverosímiles organismos soberanos [...] hasta con diferentes lenguas". Bien estaba el cultivo de las regionales, y nadie negaba el mérito de los literatos catalanes, pero estos debían usar "en sus relaciones con los demás pueblos otro idioma más generalizado que el suyo, muy digno, sin duda, de la curiosidad del filólogo y de la admiración del literato; pero que no tiene la fijeza indispensable, ni la extensión necesaria, ni la potencia bastante para pretender la universalidad de las lenguas dominadoras". Sin nombrarlo, Núñez lanzaba la mayoría de sus dardos contra el particularismo de Almirall, que "con la jactancia de ser un sistema lógico, racional y práctico, es el delirio más confuso de cuantos pueden salir de cerebro humano enfermo".

El vate vallisoletano recibiría contestaciones a su filípica. Almirall se reafirmó en su demanda de pleno uso de la lengua catalana, dijo escribir en la castellana "con repugnancia, por la razón de que nos es impuesta" y negó toda voluntad de separación de España, a la que no se tenía que identificar con Castilla. Mañé y Flaquer usó un tono más conciliador en diversos artículos del Brusi, donde pedía a su interlocutor que no prestara oídos a los intoxicadores de la Corte y le planteaba

la cuestión clara y sin ambages, dejando a un lado preocupaciones de escuela y de localidad: ¿nos consideran Vds. como hermanos?

Trátennos Vds. como hermanos, bajo pie de igualdad, y no pretendan imponernos su derecho y su idioma, ya que nosotros no pretendemos imponerles los nuestros. ¿Nos consideran Vds. como país conquistado y con derecho a imponernos por el número, que es la fuerza, su voluntad? En este caso no exijan de nosotros correspondencia fraternal.

La polémica estaba en su punto álgido en octubre de 1886, cuando se formó el Centre Escolar Catalanista, un grupo de universitarios entre los que figuraban futuros líderes como Narcís Verdaguer i Callís, Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch o Francesc Cambó. El CEC apoyó la salida del Centre Català del grupo de La Renaixença, que constituyó la Lliga de Catalunya, una federación de asociaciones que solo contaba con cinco de ellas en 1889. El autoritarismo de Almirall ayudó a una escisión anunciada. Su proyecto de un espacio político catalanista único que abarcase desde el carlismo hasta el republicanismo no era viable, y menos si había de someterse a sus designios. Descartado el particularismo almiralliano, el catalanismo iba a desplazarse hacia posiciones abiertamente reaccionarias.

De la Exposición Universal de 1888 a las Bases de Manresa

Almirall casi se quedó solo en su repulsa de la Exposición Universal que se celebró en Barcelona de abril a diciembre de 1888 y en su oposición a que la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena ostentase la presidencia de los Juegos Florales en mayo de aquel año. Como sucedería en 1929 y en 1992, el amplio apoyo que suscitó la Exposición de 1888 en los medios económicos y políticos del Principado propició alguna concordia. No obstante, y como también sucedería en los magnos eventos del siglo XX, el catalanismo se puso en guardia ante el cosmopolitismo que conllevaba ese escaparate mundial, sin desaprovechar por ello la oportunidad de propaganda que brindaba.

Mientras el consistorio de los Juegos Florales encargaba a Ménendez Pelayo que pronunciase ante la reina el discurso en catalán de apertura, el sector de La Renaixensa preparó un Missatge a la Reina Regent para que se comportara como “vostre magnífich parent Francisco Joseph I” de Austria. El documento, que según costumbre se cierra con una lista inacabable de firmas y localidades, comienza invocando a Dios, “que té en sas mans la sort dels homes, que es mestre y senyor de reys y de pobles” y enseguida pasa a reivindicar las instituciones previas a 1714, incluidas unas Cortes estamentales “que ab llur prudencia y sabiduría armonisavan los interessos de tots los catalans ab los interessos de la Corona”. La prosa va ganando en dramatismo mientras se desgranaban quejas dolientes por ir a mendigar de rodillas a Madrid “nosaltres, que som senyors de casa nostra, per voluntat de Deu, per voluntat dels nostres avis y per voluntat propia”. España ha roto Cataluña en cuatro provincias, en España se desnacionalizan los jóvenes catalanes —no los ricos, desde luego— que hacen el servicio militar y de España vienen jueces y maestros, que enseñan a los niños historias antipatrióticas. Frente a ese cúmulo de agresiones, los firmantes enarbolan la primera formulación del programa del catalanismo reaccionario:

Corts en las que's votin los pressupostos de Catalunya y la cantitat ab que te de contribuir nostre pais als gastos generals d'Espanya. Que sia Catalunya senyora del govern interior de sa casa, senyalant ella mateixa'l contingent del exércit pera'l Principat, no quintantse a sos fills ni fentse a Catalunya llevas forsosas, sino provehintse de soldats voluntaris y a sou, los que no degan sortir may en temps de pau de nostre territori. Que la llengua catalana sia la llengua oficial a Catalunya per a totas las manifestacions de la vida d'aquest poble. Que la ensenyansa a Catalunya sia donada en llengua catalana. Que sian catalans los Tribunals de Justicia y totas las causas y litigis se fallin definitivament dintre del Territori: Que'ls cárrechs de la nació catalana los nombrin los catalans mateixos, procurant que recaignin en catalans los cárrechs politichs, los judiciales, los administratius y los de ensenyansa. Que vinga lo Cap del Estat d'Espanya a jurar a Catalunya sas Constitucions fonamentals, com a condició indispensable d'antich establerta pera exercir á dretha lley la soberanía en lo Principat¹.

Se iba bastante más allá del modelo austrohúngaro evocado en la presentación del Memorial de Greuges y se demandaba una confederación sin más lazo con España que una corona a la que, además, se exigía acatamiento.

Al año siguiente se produciría la que se publicitó como primera victoria del catalanismo. La oposición de algunos diputados catalanes, la campaña de prensa orquestada por la Lliga de Catalunya y las manifestaciones en la calle consiguieron que el nuevo Código Civil, aprobado en las Cortes en 1889, mantuviera los derechos forales. Su artículo 13 lo consideraba supletorio respecto a ellos y el 14 establecía la sujeción a uno u otros por la vecindad civil.

Eso no apaciguó a la vanguardia catalanista que, como diría pocos años después Prat de la Riba, denunció que lo del amor a la nación por medio del amor a la provincia era una parodia del verdadero patriotismo, un sofisma vacío que solo servía para justificar contradicciones. El mismo 1889, Lluís Duran y Ventosa, hijo de

Manuel Duran y Bas, escribió sobre las diferencias entre las naciones que componían el Estado español, un término que haría fortuna. Sebastià Farnés se pronunciaría en el mismo sentido al año siguiente, al observar que “Espanya no és una nació en la verdadera accepció de la paraula, sinó un Estat format format per diferents nacions”. En su discurso como presidente de turno del Centre Escolar Catalanista, Prat de la Riba le dio la vuelta a la célebre sentencia de Metternich sobre Italia al considerar a España como una “indicació geogràfica”, mientras que Cataluña, la nación natural y real, se pondría al frente de los pueblos oprimidos como “el Mesías esperat de les nacions”. Del “España es la nación, Cataluña es la patria” se había pasado al “España es el Estado, Cataluña la nación”, y de paso se habían barrido bastantes oscuridades de lenguaje.

Los hechos estaban dando la razón a Núñez de Arce y quitándosela a Almirall, cada vez más marginado. En 1891 se formó una sedicente confederación de centros catalanistas, la Unió Catalanista, que celebró su segunda asamblea anual en Manresa, bajo la presidencia de Domènec i Muntaner y con Prat de la Riba como secretario. Una comisión presidida por el sacerdote Josep Torras i Bages redactó unas Bases per a la Constitució Regional Catalana que serían el referente del catalanismo político durante algo más de una década. La división de su articulado en una parte dedicada al Poder central (Base 1) y otra al Poder regional (Bases 2 a 17) harían pensar en el proyecto federalista de 1883, pero el contenido y el lenguaje no pueden estar más lejos. En un contexto internacional de expansión de la democracia y el socialismo, las Bases de Manresa abandonaron el posibilismo del Memorial de Greuges y pidieron el retorno al siglo XVII.

Tras haber reservado al poder central las competencias al uso de relaciones internacionales e interregionales, ejército y normas económicas —salvo la moneda—, se llega a dictar la organización de ese poder, a enumerar sus ministerios y hasta a imponerle tratos con el papado. La Base 2ª preserva la antigua legislación catalana sin especificar qué cambios merecería; la 3ª establece que “la llengua catalana serà l’única que, ab caràcter oficial, podrà usar-se a Catalunya i en les relacions d’aquesta regió ab lo Poder central”; la 4ª reserva todos los empleos públicos a catalanes de nacimiento o

naturalización, incluidos los “*governatius i administratius* que depenguin del Poder central; la 7^a estipula Cortes anuales elegidas por sufragio corporativo de todos los cabezas de familia “*agrupats en classes fundades en lo treball manual, en la capacitat o en les carreres professionals i en la propietat, indústria i comerç*”; la 9^a prevé un Gobierno muy débil nombrado por las Cortes y la 10^a establece el municipio y la comarca natural como unidades administrativas, contra la provincia y el ya insoslayable hecho metropolitano barcelonés. Además del consabido repudio a las quintas (base 12^a) y la recuperación del somatén (base 13^a), se propugna una educación primaria estrictamente laboral, que evite “*les ensenyances enciclopèdiques*” (base 15^a).

Con excepciones tan conspicuas como Eusebi Güell i Bacigalupi —hijo de Juan Güell y Ferrer— la burguesía industrial se mostraba aún reticente respecto a este catalanismo reaccionario. Solo el 10% de los delegados en la asamblea de la Unió Catalanista de 1892 se identificaron como fabricantes. En general, este primer nacionalismo reclutó sus efectivos entre propietarios, profesionales liberales —muchos de ellos médicos—, estudiantes y algún que otro empleado de comercio, lo que le distingue de los nacionalismos irlandés, polaco, húngaro o flamenco, con un ingrediente popular más significativo. Las Bases y otros documentos emparentados expresan más bien los temores y los anhelos de una mesocracia que, atrapada entre un obrerismo en auge y un capital en proceso de concentración, deposita sus esperanzas en un Estado modelado a su conveniencia, que le cueste poco dinero, pero que la proteja de las fuerzas sociales y económicas que la amenazan y proporcione a sus hijos el amparo de un empleo público.

La Iglesia también desembarcó en el catalanismo en esta época, justo cuando había dejado de usar el catalán en sus documentos internos y casi había abandonado la predicación y la enseñanza de la doctrina en esa lengua. El giro, semejante al que se verificó en otros países europeos los mismos años, se incluía en la contraofensiva general del catolicismo que había comenzado en la segunda parte del pontificado de Pío IX y continuó en el de León XIII, por lo que no se lo debe relacionar de forma mecánica con la evolución del carlismo hispano. A diferencia de lo ocurrido en el País Vasco, no existe una conexión clara entre catalanismo y

carlismo, que mantendrá arraigo en Cataluña como grupo político diferenciado.

Descontado Jacinto Verdaguer, que no representó un papel relevante en el catalanismo político pese a su parentesco con Narcís Verdaguer i Callís, los clérigos más significados en esta causa fueron el ya citado Collell y, sobre todo, Torras i Bages. También en 1892 salió de la imprenta su obra magna, *La tradició catalana*, cuya sustancia política reside sobre todo en el libro I, “Valor ètic del regionalisme català”. Aunque Torras despliega su argumentación al modo escolástico, la claridad de sus aseveraciones hace casi innecesaria la glosa. El futuro obispo de Vic ataca al “uniformisme nascut a França”; “a la superficial i insubstantial Enciclopèdia”; a la masonería, que busca la destrucción de la fe; a la revolución, que “no és ni tant [sic] sols humana”; al Estado liberal, hijo del “luxuriós concubinatge del principi revolucionari amb la desenfrenada ambició d’apoderar-se absolutament del govern del país”; al sistema parlamentario, “artificiós y de gran vanitat”, y a las elecciones, que se basan “en la materialitat del número de vots” y acaban dando origen a una oligarquía. El regionalismo es lo opuesto a ese liberalismo impío, y por eso la Iglesia católica está de su parte. La Iglesia, dice Torras, “és regionalista perquè és eterna”, lo mismo que “les antigues nacions, les unitats socials naturals” que la Providencia ha formado y aparecen cuando se rasca la frágil cubierta de los Estados.

La tradició catalana no contiene la célebre frase atribuida a su autor de “Catalunya serà cristiana o no serà”, pero sí se lee que tal vez no exista “altra nació tant [sic] entera i sòlidament cristiana com fou Catalunya” y que el “nostre esperit nacional és enterament cristià”. El catalanismo tiene que ser cristiano —se entiende que católico— porque, si Jesucristo fue “l’Orfeu de la nació catalana; doncs Ell mateix ha d’ésser el restaurador”. Por fin, el regionalismo favorece la moral y las buenas costumbres, ya que la vida regional es en sí virtuosa, mantiene el espíritu de familia, mientras que el unitarismo saca al ciudadano de su casa y lo lleva a las ciudades, donde se hallan “totes les concupiscències que despertem els apetits humans”.

Por supuesto, el espíritu regional-nacional también reside en la lengua, el vínculo social más fuerte después del religioso. Por eso la

Iglesia ha conservado todas las lenguas, incluso las muertas y las de los pueblos primitivos convertidos en misión. El catalán debe seguir usándose para predicar y para orar, pero sobre todo para la formación de los neófitos: “Ensenyar el coneixement de Déu, això és, el Catecisme, als infants en llengua castellana, és una costum detestable, perniciosíssima i destructiva de la fe”.

Notas

1. “Cortes en las que se voten los presupuestos de Cataluña y la cantidad con que tiene que contribuir nuestro país a los gastos generales de España. Que sea Cataluña señora del gobierno interior de su casa, señalando ella misma el contingente del ejército para el Principado, no quintándose a sus hijos ni haciéndose levass forzosas, sino proveyéndose de voluntarios y a sueldo, que no deben salir nunca en tiempo de paz de nuestro territorio. Que la lengua catalana sea la lengua oficial en Cataluña para todas las manifestaciones de la vida de este pueblo. Que la enseñanza en Cataluña se dé en lengua catalana. Que sean catalanes los Tribunales de Justicia y todas las causas y litigios se fallen definitivamente dentro del Territorio. Que los cargos de la nación catalana los nombren los catalanes mismos, procurando que recaigan en catalanes los cargos políticos, los judiciales, los administrativos y los de enseñanza. Que venga el Jefe del Estado de España a jurar en Cataluña sus Constituciones fundamentales, como condición indispensable establecida de antiguo para ejercer en buena ley la soberanía en el Principado.”

capítulo 5

La génesis del catalanismo político (1895-1913)

La invención de la tradición

Resulta muy significativo que la única traducción disponible en España de *The Invention of Tradition*, la obra clásica dirigida por Eric J. Hobsbawm y Terence Ranger en 1982, fuese durante muchos años la catalana de 1989, y que la versión castellana, asimismo publicada por una editorial barcelonesa, se hiciese esperar hasta 2002. Ese interés producía fuera de Cataluña el estudio crítico del nacionalismo. También es revelador que la versión catalana lleve como título *L'invent* (el invento) de la tradició, lo que altera por completo la intención de los compiladores. La palabra invención posee una doble acepción, la común de novedad, e incluso de engaño, y la etimológica de descubrimiento. Cuando Fernán Pérez de Oliva tituló su crónica *Historia de la invención de las Indias* no quiso decir que Colón se las hubiera sacado de la manga.

Como todos los nacionalismos, el catalán hizo su invención de la tradición, en ese doble sentido de búsqueda de una herencia cultural y de reajuste de su significado. En esto representó un papel de primer orden la mirada de asociaciones excursionistas, musicales, literarias o simplemente recreativas que se fundaron en la Cataluña de fines del XIX e inicios del XX, una galaxia de entidades que rebasó la pequeña masa activista de 2.500 o 3.000 personas que ha calculado Joan-Lluís Marfany.

Naturalmente, la historia fue el asunto esencial, con aportaciones como la *Historia de Catalunya de Aulèstia i Pijoan* (1887-1889), la primera escrita en catalán en época contemporánea. Los mitos altomedievalistas de la *Renaixença* se fueron relegando en favor de la expansión bajomedieval y de los episodios de lucha contra la monarquía hispánica, muy en especial la caída de Barcelona ante las tropas de Felipe V (IV de Aragón) el 11 de septiembre de 1714. Ese día se conmemoró por primera vez en 1895, pero *La Veu de Catalunya* lo puso en la agenda catalanista en 1898. La letra actual del himno *Els Segadors* procede de un concurso convocado por la

Unió Catalanista en 1899. El ritual de la ofrenda floral a la estatua de Rafael de Casanova —a la sazón dentro del Ayuntamiento— se inició en 1901, sin que desde entonces haya importado que el conseller en cap recibiese el perdón regio en 1719 y muriera tranquilamente en su casa de Sant Boi de Llobregat en 1743.

Desde inicios del siglo XX para acá, la efeméride del 11 de septiembre ha ido acumulando toda la carga simbólica del imaginario nacionalista, que tiende a presentarla como el fin de un Estado independiente, no de unas instituciones tuteladas por una monarquía común. Tal es su potencia que hoy dicta las agendas políticas catalana y española. Hay que advertir, además, que no lo hace solo desde 2012 y como mero efecto de una coyuntura económica desfavorable o del presunto desacuerdo —en este tema— entre los ejecutivos central y autonómico catalán: corría marzo de 2008, no se notaba la crisis financiera y el Partido Socialista gobernaba en Madrid y en Barcelona cuando Josep-Lluís Carod-Rovira, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya y vicepresidente de la Generalitat, anunció su proyecto Objectiu 2014, que fijaba ese año como el de la emancipación.

La insistencia en conmemorar una derrota militar pide alguna meditación. ¿Por qué no se prefiere una victoria como la de Trans en el 939 para los bretones? ¿Por qué no celebrar el día de San Jorge, patrón del país, como el día de Santiago en Galicia, el de San Andrés en Escocia, el de San Patricio en Irlanda o el de San David en Gales? ¿Por qué no se adopta una fecha católica aún más optimista, como el Domingo de Resurrección, el Aberri Eguna vasco? ¿Por qué no se elige un momento fundacional equivalente al 4 de julio norteamericano o el 14 de julio francés? ¿Por qué no valen las fechas de proclamación de los Estatutos de Cataluña, el 9 de septiembre de 1932, el 5 de junio de 1979 o el 18 de junio de 2006? Se diría que esa contumacia, incluso en periodos de autonomía que se supone repararon el daño, manifiesta la voluntad de mantener la herida abierta.

Conviene echar ahora un vistazo a lo que Michael Billig ha llamado nacionalismo banal, tanto o más importante que el oficial. Una vez más, en esto interactuaron el nacionalismo español y el catalán, que quiso contrarrestar con sus propias manifestaciones culturales y

artísticas las de la España cañí, codificadas en esta época y de enorme éxito en el Principado. Torras i Bages recomendaba “els castells de xiquets [restringidos entonces al campo de Tarragona], viril manifestació, símbol de la força i de l'aplom del nostre poble” contra las corridas de toros, “simbòlica expressió de l'atreviment i lleugeresa d'una noble raça, mes que és molt diversa de la nostra”. Contra el flamenco y la copla, las canciones de la tierra, que como todas las “diversions catalanes indígenes són senzilles, populars i hermoses”. Antes de Torras, Coroleu y Pella habían considerado ancestrales a las sardanas, una danza que nadie conocía fuera del Ampurdán, pero que con el ball de bastons y los castells demostraban “la enérgica vitalidad y el carácter profundamente original de la raza catalana”.

Catalogaciones como esa no resultaban de ningún modo exclusivas del catalanismo, antes bien el racismo era una de las modas intelectuales de la época. Siguiendo a Almirall, Pompeu Gener i Babot, Peius, caracterizó en sus Herejías a los catalanes como indoeuropeos y a los españoles del centro y del sur como semitas, más en concreto árabes, con la distinta valoración que eso implicaba. El doctor Bartomeu Robert, alcalde de Barcelona, pronunció en el Ateneo una conferencia sobre tipos craneales e índices cefálicos que hoy sonrojaría, pero que en 1899 se ajustaba a lo corriente en el mundo civilizado. El veterinario Pere Màrtir Rossell i Vilar acabaría asegurando que la raza catalana se diferenciaba de la española por las cejas. De estos años data también la adopción entusiástica de la costumbre castellana de llamarse con los dos apellidos unidos por un “i”, que ya no sirve para demostrar alcurnia, sino raíces.

A falta de señales físicas o vestimentarias, la lengua se fue convirtiendo, además de en una seña de identidad, en una marca de diferenciación. De la diglosia tradicional se pasó al bilingüismo cuando el número de funcionarios estatales y de inmigrantes procedentes de áreas castellanohablantes rebasó una cierta cota. Solo entonces el castellano, hasta entonces minoritario y reservado a determinadas funciones, comenzó a verse como una lengua intrusa. Mientras tanto, la cultura española había perdido universalidad y se identificaba al castellano, que tenía cada vez menos utilidad económica en el mundo, con un Estado fallido.

La genética no fue, pues, la base de la invención de la tradición catalanista, en la que más bien entró como consecuencia del miedo a la inmigración de fuera de Cataluña. Ambos se incrementarían durante las décadas posteriores. Contra lo que se cree, esa afluencia no comenzó en los años 1960 o 1920, puesto que ya, en 1900, 150.000 del medio millón de habitantes de Barcelona procedían de fuera del Principado. Entre 1877 y 1887, su ritmo de llegada fue de 1.300 personas al año, y después de la Exposición Universal de 1888 subió hasta las 4.300. Las obras hidroeléctricas de las décadas de 1910 y 1920 llevarían esa inmigración hasta los confines pirenaicos.

A la diferencia idiomática entre inmigrantes y nativos había que añadir una brecha cultural. Aquellos procedían de áreas donde la alfabetización había realizado muy pocos progresos desde la puesta en práctica de la Ley Moyano (en 1900, el índice general era del 25% en Jaén, del 26 en Granada y Almería, del 28 en Castellón y del 30 en Murcia), mientras que en Cataluña ya se rebasaba algo la media española (del 45%, mientras que la de Barcelona era del 56, la de Girona del 51, la de Lleida del 43 y la de Tarragona del 42). Aun así, la alfabetización general de los catalanes seguía bastantes puntos por debajo de la de los burgaleses (75%), los madrileños y santanderinos (76%) y los alaveses (86%).

La inmigración se concentró en la ciudad de Barcelona, que después de las agregaciones de municipios vecinos efectuadas en 1897 llegó a contar casi con los mismos habitantes que Madrid. Si se compara el cuadro siguiente con el que se ofreció en el capítulo 2, se verán la magnitud del cambio y la inversión de la anomalía. Por un lado, la población catalana era en 1900 de unos dos millones de habitantes sobre los 18 y medio de España (un 10,4%, 0,3 menos que en 1860).

Población de algunos Estados y ciudades del área liberal europea hacia 1900

ESTADO	CAPITAL	2ª CIUDAD	
Pob. (mill.)	Pob. (mill.)	Pob. (mill.)	Pob. (mill.) sobre estado

Reino Unido	Londres	6.586	15,9	Glasgow	776	11,8
Francia	París	2.714	7,0	Marsella	491	18,1
Bélgica	Bruselas	563	8,3	Amberes	273	48,5
ESPAÑA	Madrid	540	2,9	Barcelona	583	98,7
Italia	Roma	463	1,4	Nápoles	564	121,8
Alemania	Berlín	1.889	4,0	Hamburgo	796	37,4
Austria/Hungría	Viena	1.675	3,5	Budapest	382	43,7

No obstante, si se la compara con París, y sobre todo con Londres, Madrid sigue siendo demasiado pequeña, aunque en proporción no mucho más que Viena, la capital del Imperio plurinacional de los Habsburgo, o Berlín, la del nuevo Reich alemán. Roma está muy poco poblada, lo que en buena parte se explica por la poca antigüedad del Estado italiano, cuya capitalidad había pasado antes por Turín y Florencia. Nápoles es mayor, pero Milán, con 493 miles de habitantes, no le va muy a la zaga. Para Almirall, “situada en medio de las estepas de la España central y rodeada de provincias cuya densidad de población es a corta diferencia la general de Rusia [Madrid] no puede disfrutar de elementos propios de vida, y solo la circunstancia de ser corte, absorbente de todos los recursos nacionales, puede producir el fastuoso brillo que logra ostentar”.

Con una población similar, pero sin parangón en España (Valencia contaba entonces con 214.000 habitantes, Sevilla con 146.000 y Málaga con 113.000), Barcelona ya resultaba demasiado grande: albergaba más almas que Marsella o Amberes y era la única segunda ciudad —salvo las italianas antedichas— que reunía la misma proporción de habitantes del Estado que la capital. No se le escapó a Núñez de Arce, que la conocía bien: “Ciudad industrial, comercial, marítima y emprendedora [Barcelona] siéntese como humillada de que otra ciudad, cuyos elementos de vida juzga muy inferiores a los suyos, tenga sobre la nación una preponderancia, a su entender, no solamente inmerecida, sino usurpada”. Mientras Madrid fue el rompeolas de las Españas y Barcelona, su fábrica, no hubo problema, pero al acabar el siglo XIX las cosas habían cambiado.

Barcelona se erigía como el auténtico hecho urbano español no solo por dimensiones, sino también por la ambiciosa y eficaz estructura que le proporcionó el Ensanche de Cerdà y por una vida cultural de intensidad mucho mayor que la madrileña. La metrópolis mediterránea de una España bicéfala rivalizaba con un Madrid que se le antojaba inerte y funcionarial, castizo y anticuado, al tiempo que mantenía una relación de amor y odio con París.

Enric Ucelay-Da Cal ha avisado de la contradicción de que Barcelona ejerciese como capital económica de España, pero

dispusiera del mismo poder, y sobre todo de los mismos puestos funcionariales, que cualquier otra capital de provincia. También ha reparado en que el catalanismo, que tenía un origen urbano y reclutaba en Barcelona la inmensa mayoría de sus cuadros, abominase de la ciudad y cantara las alabanzas de una Arcadia rural inexistente. Todo nacionalismo rechaza por definición el cosmopolitismo que encarna la ciudad, donde se disuelven los lazos clientelares y de clan, mientras se abren paso la meritocracia y la movilidad social.

Para los más píos, esta enorme Barcelona era una Babilonia, con centro en el Paralelo. En 1901, La Pajarera Catalana se convirtió en el Petit Moulin Rouge y se levantó el Apolo; en 1902 abrió sus puertas el Bataclán, el Arnau y el Condal lo harían en 1903... Allí se cantaban cuplés, una variación de la tonadilla de influencia francesa, con exponentes tan populares como el picante La Puça (“La pulga”). Barcelona, por fin, era la morada de los obreros, nada menos que 156.000, incluidos mujeres y niños, en 1905.

El surgimiento del catalanismo parlamentario

La escalada verbal que había comenzado con el Missatge a la Reina Regent prosiguió con el Compendi de doctrina nacionalista que Prat de la Riba y Pere Munyanyola redactaron en 1894, del que se imprimieron más de 100.000 ejemplares. La tirada fue secuestrada por orden gubernativa y sus autores, procesados. Ya en 1895, Guimerà pronunció por primera vez en catalán el discurso de apertura del curso en el Ateneo Barcelonés, titulado justamente “La llengua catalana”. La novedad y la polémica estaban en la lengua de la intervención, no en un contenido que apenas pudo sorprender a quien hubiera seguido la trayectoria pública del dramaturgo. Este se congratuló por los avances realizados desde los tiempos de Lo Gayter del Llobregat, agrupó el catalán y el occitano en un pancatalanismo de límites imprecisos y trazó el recorrido de rigor desde las glorias medievales (los Muntaner, Llull y March, solo el primero catalán) al renacimiento. Con el falso apoliticismo del sector de La Renaixensa, aseguró que los catalanes eran congénitamente incapaces de escribir bien en castellano —lo decía un canario que no había empleado otra lengua hasta la juventud— y que por lo tanto el catalán debía emplearse en las universidades, en los juzgados y en las pastorales.

Mientras tanto, comenzaban a notarse los efectos de dos procesos simultáneos pero apenas relacionados: el terrorismo de signo anarquista, común a otros países europeos, y la segunda guerra de independencia de las colonias españolas. Respecto a lo primero, en 1893 el capitán general Martínez Campos fue objeto de un atentado y estalló la bomba en el Liceo, que mató a una veintena de personas. Fueron más del doble de las que morirían el día del Corpus de 1896 a raíz de la explosión de otra bomba en la calle de Cambios Nuevos. La represión subsiguiente, conocida como los procesos de Montjuïc por la fortaleza militar donde se torturó y ejecutó a los acusados, dio lugar a una reacción internacional de solidaridad y a nuevos atentados, como el que acabaría con la vida

de Cánovas del Castillo en 1897. Almirall nadó otra vez a contracorriente al denunciar los procesos en su discurso como presidente del Ateneo de 1896, que también realizó en catalán. Con eso tan solo se mantenía fiel a sus convicciones, en absoluto buscaba acercarse a un catalanismo en ascenso al que despreciaba por fanático.

En cuanto a la guerra en Cuba, Filipinas y Puerto Rico, la patronal Fomento del Trabajo Nacional y el Diario de Barcelona apoyaron sin reservas a los Gobiernos españoles en su lema de “hasta el último hombre y hasta la última peseta”. A lo sumo, Joan Maragall, que había sido secretario de Mañé en ese diario, abogó en sus páginas por un régimen de autonomía para Cuba. Décadas más tarde se descubriría entre sus papeles inéditos un ensayo sobre “La Independència de Catalunya” en el que condenaba la promiscuidad con los castellanos, pero es tan significativo que lo escribiera en 1897 como que no lo publicase. Por su parte, la Unió Catalanista miraba hacia el exterior y ese mismo año redactó un Missatge a S. M. Jordi I, l rei dels Hel·lens en que se congratulaba por la anexión de Creta, pero su entrega al cónsul se convirtió en un acto de exaltación catalanista con sanciones gubernamentales. Pocos meses después, se editó en Francia un manifiesto nacionalista anónimo —asimismo escrito por Prat de la Riba— y dirigido a la prensa europea: *La Question Catalane*.

España perdió en 1898 sus últimas colonias en América y Asia, y con ellas tanto ingresos como, sobre todo, prestigio. Más allá de que los fabricantes catalanes se quedaran sin unos mercados antillanos que habían cobrado gran importancia —el filipino se mantendría aún unos años—, el desastre asestó un golpe terrible a la reputación de España como Estado. Para Joan-Lluís Marfany, el 98 actuó como un catalizador, levantó las barreras psicológicas que habían impedido afirmar que Cataluña era la nación y España, solo eso, un Estado, pero se acaba de ver que las manifestaciones en este sentido se sucedían desde hacía unos años. En cambio, según Ferran Archilés y Manuel Martí, la derrota frente a Estados Unidos agravó el déficit de legitimidad que arrastraba la Restauración desde su origen e impulsó un nacionalismo español de nuevo estilo, nada amigo de particularismos. También se había gestado en los años previos al 98, gracias a las aportaciones de los institucionistas, de

los regeneracionistas y hasta del primer Unamuno. Una vez más, el nacionalismo español y el que ya se reconocía como nacionalismo catalán se retroalimentaban.

Con todo, el desastre no dio paso a una reacción catalanista inmediata. Resonaban aún los versos de la “Oda a Espanya” de Maragall cuando se produjo un efímero intento de apertura conservadora. En marzo de 1899 se formó el Gobierno de Francisco Silvela, en el que el general cristiano Camilo Polavieja, bien conectado con la oligarquía catalana, llevaba la cartera de Guerra y Manuel Duran y Bas, rector de la Universidad de Barcelona desde 1896, recibía la de Justicia. La operación, abiertamente apoyada por el Fomento y atacada por el sector intransigente de La Renaixensa, incluyó también el nombramiento de alcaldes (Bartomeu Robert para Barcelona, Pau Font de Rubinat para Reus, Josep Ixart para Tarragona) y más adelante hasta de obispos catalanistas (en octubre, Morgadas pasó a Barcelona y se elevó a Torras y Bages a la sede de Vic). Sin embargo, las vagas promesas de descentralización pronto se desvanecieron, así que Polavieja y después Duran abandonaron el gabinete. En vez de un concierto económico, el ministro de Hacienda Fernández Villaverde sacó adelante una reforma fiscal tan imprescindible como impopular, que llevó a una huelga de contribuyentes de Barcelona y alrededores (el tancament de caixes, cierre de cajas), a los que Robert alentó con su dimisión. Él y otros notables acababan de transformar en Unió Regionalista la antigua Junta Regional Organizadora de Adhesiones al programa de Polavieja.

Por su parte, la Unió Catalanista perseveró en su acción internacional con un mensaje de apoyo a los finlandeses contra la política de asimilación rusa y otro al presidente Kruger del Transvaal, en plena guerra anglo-boer. Eran maniobras de distracción frente a la división interna entre los fundamentalistas antipolíticos y los evolutivos de la Lliga de Catalunya partidarios de la acción política, un enfrentamiento que también tenía mucho de generacional. Los últimos habían sacado a la calle en 1899 el diario La Veu de Catalunya, que compitió con La Renaixensa con una factura mucho más moderna, y a fines de año constituyeron el Centre Nacional Català, presidido por Verdaguer i Callís, con Prat como secretario y Jaume Carner como vicepresidente.

Tras meses de negociaciones y con unos comicios generales en perspectiva, la Unió Regionalista y la Lliga de Catalunya se fusionaron en la Lliga Regionalista de Catalunya en abril de 1901. Los resultados demostrarían el acierto del paso: en su estreno electoral, la que en adelante se conocería como la Lliga, a secas, obtuvo seis de los 44 escaños de diputados en juego en Cataluña, por solo dos de los republicanos federales (uno de ellos Pi y Margall, por última vez). El catalanismo político se había vuelto también parlamentario.

Su orientación siguió siendo muy conservadora, más cuando se pasaron a él políticos hasta entonces de ese signo, como Frederic Rahola. En cuanto a programa, no exhibió otro que la conquista de la autonomía, para algunos tan “absoluta”, “integral” o “total” que no se la llamaba independencia para no ponerse fuera de la ley. Publicaciones como Cu-cut!, fundada en 1902 y vinculada a la Lliga, iban a emplear un lenguaje tan extremista como La Tralla (1903), más próxima a la ya residual Unió Catalanista. En cuanto los catalanes alcanzaran la plenitud nacional, todos sus problemas se arreglarían. Como todo nacionalismo, el catalán pretendía disolver la lucha de clases en la unidad nacional, tanto más cuanto que esta se realizaba contra otro, señalado como enemigo común. Como ha observado Enric Ucelay-Da Cal, la táctica lligaire consistió desde el principio en desviar la tensión hacia fuera, hacia el Estado, para evitar enfrentamientos internos. Duran i Ventosa llegaría a afirmar en 1905, no se sabe si en un alarde de autosatisfacción (cofoïsme, una palabra catalana difícil de traducir) o de cinismo, que Cataluña era un oasis político en Europa.

Pese a tales ostentaciones, estos burgueses ya maduros tenían plena consciencia de que se sentaban sobre un volcán social, y seguían necesitando a un Estado que se encargase de la represión. Se lo recordaron las dos huelgas de tranviarios en 1900, la agitación subsiguiente al indulto a los supervivientes de Montjuïc en 1901, otra huelga en mayo de ese año general de febrero de 1902, en la que pararon nada menos que 80.000 personas.

En este ambiente creció la que durante unos años ejercería de bestia negra del catalanismo. De los 36 diputados restantes en las elecciones de 1901, 35 quedaron para los partidos del turno y uno

para un republicano no federal que daría mucho que hablar. Alejandro Lerroux había llegado a Barcelona ese año precedido por una fama de hombre de acción y traído de la mano del director de l'Esquella de la Torratxa, Josep Roca y Roca. En poco tiempo, su estilo populista y el lenguaje incendiario de la prensa que le era adicta le abrió un espacio propio en la nueva política de masas. Lerroux se coaligó al antiguo presidente de la República Nicolás Salmerón en la Unión Republicana, que en las elecciones de 1903 empató en escaños en Cataluña (cinco) con la Lliga, si bien los republicanos federales obtuvieron siete, repartidos entre las cuatro provincias.

Lerroux consiguió nada menos que 35.000 votos en la ciudad de Barcelona, donde se presentaba. Tenía sus feudos en los distritos más populares y periféricos de la ciudad (el I, X, VII, V, IX) que, como ha documentado José Álvarez Junco, eran también los que presentaban las mayores tasas de mortalidad, natalidad y analfabetismo, y las menores de profesionales liberales. Como los votos catalanistas abundaban en las áreas opuestas, donde residían grandes contribuyentes y profesionales liberales y radicaban las actividades comerciales, se colige que el lerrouxismo presentó mayor afinidad con el obrerismo y la pobreza que con la inmigración, aunque ambas se solaparan en el espacio urbano barcelonés.

El catalanismo frente a la guerra de clases

Las elecciones generales de septiembre de 1905 trajeron una cierta recuperación de la Lliga, que pasó a siete escaños en el Congreso, y una disminución correlativa de los republicanos federales y unionistas. El avance fue mayor en las elecciones municipales de noviembre siguiente, en las que la Lliga consiguió en Barcelona más concejales que los republicanos, y ambos juntos más que los partidos dinásticos. El 18 de noviembre, los catalanistas celebraron un banquete que concluyó con cantos de Els Segadors y provocaciones a republicanos, quienes las respondieron a tiros y pedradas. El semanario Cu-cut! perseveró en la sátira antimilitarista que solía y el 23 de noviembre publicó una caricatura donde dos personajes, uno de ellos vestido de militar de opereta, se explicaban la gran afluencia al banquete de la victoria de los catalanistas porque “Ah, vaya, serán paisanos”. Aunque el número fue secuestrado, un grupo de oficiales de la guarnición de Barcelona causó destrozos en las redacciones del Cu-cut! y La Veu de Catalunya la noche del 25. Se declaró el estado de excepción en la ciudad.

En un artículo celeberrimo, “El alma en los labios”, aparecido en La Publicidad el 9 de diciembre, Lerroux se puso de parte de los asaltantes “que vengaron a la Patria” y aseguró que si hubiera sido militar y hubiese estado en Barcelona en ese momento “hubiera ido a quemar La Veu y El Cu-cut, la Lliga y el Palacio del Obispo, por lo menos”. Tras calificar, en su estilo, al catalanismo político de “hijo degenerado de un contubernio monstruoso entre una aspiración literaturesca, romántica, y un malestar social subido al periodo agudo con motivo de la catástrofe nacional”, y denunciar que “los castellanos, que forman la tercera parte de esta población, no se atrevían a hablar fuerte en las Ramblas”, declaró que se alegraba de lo ocurrido y “que antes que pactar con esa chusma envilecida por el amor al ochavo, que es la quintaesencia de su regionalismo separatista, estoy dispuesto a rebelarme contra todo el mundo,

acompañado o solo”.

Después de que el presidente del Consejo Montero Ríos tuviese que dimitir porque el rey se opuso a que se sancionara a los militares implicados, el nuevo Gobierno liberal de Moret llevó al Congreso un proyecto de Ley de Jurisdicciones que remitía a la justicia militar los delitos de ofensas al ejército o a la patria. El texto suscitó una reacción unitaria de los representantes catalanes de partidos no dinásticos que, a instancias del republicano Salmerón, organizaron la plataforma Solidaritat Catalana. Su manifiesto se presentó el 22 de marzo de 1906, el mismo día en que se aprobó la polémica ley. Cambó se había apresurado a sellar un acuerdo con el que la Lliga se sacudía el sambenito de partido provinciano y retrógrado, mientras que la negativa de Lerroux a entrar en el pacto le confinaba en el extremismo. Con el acercamiento a los otros republicanos, la Lliga se distanciaba del catalanismo romántico y del clericalismo, y de paso enterraba las Bases de Manresa. Sus dirigentes con olfato político y visión de Estado, Cambó el primero, habían comprendido que ese programa les impedía el crecimiento electoral y que hacía falta algo más que retórica frente a la doble presión del Estado centralizador y de la plebe turbulenta.

La evolución de Prat de la Riba, el ideólogo reconocido del catalanismo político, muestra que, aunque repentino, ese replanteamiento no obedeció a la simple coyuntura. En 1902, una comparación entre Cataluña y los Estados de los bóers le costó unos días de prisión, tras de los cuales pasó más de un año de enfermedad, convalecencia y, sin duda, reflexión. Su resultado quedó recogido en *La nacionalitat catalana*, que se publicó en mayo de 1906, un mes después de la formación de la Solidaritat.

La obra reduce mucho la ambigüedad habitual del lenguaje catalanista, aunque no la elimine del todo: Cataluña es la patria, la nacionalidad y la nación, que significan lo mismo. Prat rinde tributo al particularismo de Almirall, en el que no obstante ve el mismo fallo que en el federalismo: no establece “quines entitats han de formar Estats petits ni quines s’han de constituir en federació”. A esa indefinición opone las patrias inmanentes según el *Völksggeist* de Herder. No se trata, en suma, de encontrar un arreglo racional para algo emotivo, no es asunto de federación, de descentralización, ni

siquiera de respeto a la lengua o al derecho del país “és el sentiment de patria catalana. Ser nosaltres, aquesta era la qüestió. Ser catalans”. En consecuencia, resulta indiferente el sistema político que se instaure en una Cataluña libre, que “podría ser uniformista, centralizadora, democràtica, absolutista, catòlica, lliurepensadora, unitaria, federal, individualista, estatista, autonomista, imperialista, sense deixar de ser catalana”.

A cada nación le asiste el derecho a constituirse como Estado, pero Cataluña no debería hacerlo. Prat admite que romper “les grans unitats modernes és obra regressiva” y estima que una Cataluña independiente viviría rodeada por dos vecinos poderosos y carente de mercados. Una federación serviría como mal menor, pero lo ideal sería que Cataluña formase parte de un Estado-imperio como el que había pensado Balaguer, también con Portugal y Occitania, un imperio pan-ibérico “de Lisboa al Rhodan”, cuyo centro de gravedad, económico, político y cultural se situaría en Barcelona. Para Prat, el imperialismo es la fase superior y natural del nacionalismo, y puede ejercerse mediante la fuerza material “de les grans races fortes” que, si someten mediante la guerra a los pueblos bárbaros, realizan “una obra de pau y civilisació”. Con todo, la principal fuerza reside en la cultura en sentido amplio, y en ella los catalanes ya se están imponiendo:

L’art, la literatura, les concepcions jurídiques, l’ideal polítich y econòmic de Catalunya han iniciat la obra exterior, la penetració pacífica a Espanya, la transfusió a les demás nacionalitats espanyoles y al organisme del estat que les governa. El criteri econòmic dels catalans en les qüestions aranzelàries fa anys que ha triomfat¹.

Había que seguir esa vía mediante una labor tenaz de difusión y recluta. La Diputación de Barcelona serviría a ese propósito desde 1907, cuando Prat pasara a presidirla.

Por otro lado, la unanimidad tenía que desaparecer con la asunción de la política real y el abandono del testimonialismo. El sector

democrático y progresista, encabezado por Jaume Carner, que llevaba manifestando su disidencia desde la visita de Alfonso XIII en 1904, se escindió en 1907 de la Lliga, formó el Centre Nacionalista Republicà (CNR) y adoptó como órgano El Poble Català, ya convertido en diario.

El nuevo partido permaneció en la Solidaritat, junto con la Unió Republicana de Salmerón, la Lliga, la Unió Catalanista, los federales y los carlistas, es decir, las organizaciones no ligadas al Estado ni al movimiento obrero. Su diversidad ideológica redujo el programa común, llamado del Tívoli, a la exigencia de abrogación de la Ley de Jurisdicciones y una demanda genérica de descentralización. Los partidarios de Lerroux —fugado a la Argentina— apuntalaron sin quererlo esa unión tan inestable con un asalto al semanario La Tralla y un atentado fallido contra Cambó y Salmerón. Los partidos de Solidaritat arrasaron en las elecciones generales de abril de 1907, en las que obtuvieron el 67% del voto y 40 de los 44 escaños catalanes, pero Lerroux mantuvo el suyo, con lo que recobró la inmunidad parlamentaria y pudo regresar de su extrañamiento.

La armonía desapareció en cuanto se abrieron las Cortes. Como parte de su revolución desde arriba, el conservador Antonio Maura llevó a ellas un proyecto de Ley de Administración con voluntad descentralizadora, pero que también introducía el sufragio corporativo en lugar del universal, algo que los republicanos no podían aceptar. Al mismo tiempo, la prensa madrileña ultra atacaba la ley por lo que pudiera tener de concesión a los catalanes y los diputados del CNR presionaban para la inmediata derogación de la Ley de Jurisdicciones. Para colmo, los lerrouxistas, ya agrupados en el Partido Republicano Radical, avanzaron de nuevo en las elecciones parciales de 1908 en Barcelona, donde Solidaritat sacó un solo diputado.

Solidaritat Catalana no pudo resistir esas tensiones y se disolvió. Sus partidos ya se presentaron por separado en las elecciones provinciales de 1909. Aun así, el acuerdo había favorecido la modernización de la política catalana, ya configurada como un sistema de rasgos propios en el que los partidos estatales ocupaban un lugar subsidiario. Como Salmerón había previsto, la precaria concordia conjuró el peligro secesionista y desplazó a la Lliga hacia

el centro político.

En el verano de 1909, la explosiva situación económica y social, con quiebra de empresas textiles y de sociedades financieras y despidos masivos en la cuenca del Ter, se combinó con los primeros tropiezos de la empresa colonial de recambio a que se entregó la España de la Restauración en el norte de Marruecos, todo ello aderezado con la violencia verbal de la prensa lerrouxista y del republicanismo catalanista. El Gobierno llamó a filas a los reservistas para hacer frente a una sublevación en el Rif y no encontró mejor puerto para embarcarlos que Barcelona. Tras una semana de fletes, se desató en la ciudad la oleada de violencia de la Semana Trágica, que se cobró cerca de 80 vidas y quemó más de 100 edificios, la mayor parte religiosos. Alguno lo tomó por una repetición de 1835. O de 1837, porque el papel de Ramon Xaudaró lo representó Francisco Ferrer y Guardia, viejo amigo de un Lerroux de nuevo ausente de Barcelona en un momento comprometido. Amén de los dos centenares de penas de destierro o cárcel, las garantías constitucionales quedaron suspendidas en Barcelona y Girona durante varios meses.

La Semana Trágica cortó en seco la evolución hacia la política de masas mediante la negociación, el acuerdo y el uso de las instituciones que la Solidaritat había inaugurado. La Lliga mejoró sus registros en las elecciones de 1910, pero el voto republicano siguió dividido entre los radicales y el CNR, ya fusionado con otros grupos en la Unió Federal Nacionalista Republicana. El pacto de Sant Gervasi de 1913 les juntó momentáneamente para las elecciones generales de 1914, pero sus mediocres resultados no compensaron la escisión del sector más catalanista. Nacionalismo catalán y republicanismo democrático seguían alejados.

Notas

1. “El arte, la literatura, las concepciones jurídicas, el ideal político y económico de Cataluña han iniciado la obra exterior, la penetración pacífica en España, la transfusión a las otras nacionalidades españolas y el organismo del Estado que las

gobierna. El criterio económico de los catalanes en las cuestiones arancelarias ha triunfado hace años.”

Capítulo 6

De la Mancomunidad a la Dictadura de Primo de Rivera (1914-1931)

El historiador británico Norman Stone nos habla de los primeros años del siglo XX como los del agotamiento del sistema liberal. El miedo a la revolución provocará que la derecha bascule entre el clericalismo y el bonapartismo; mientras que la izquierda, fruto del progresismo económico, se debatirá entre el parlamentarismo y la revolución. Incapaz de superar la tensión de sus extremos, el liberalismo acabará colapsando y arrastrando a la mayoría de países europeos hacia la Primera Guerra Mundial. Como nos muestran los recientes trabajos de Max Hastings o Margaret MacMillan, insensatamente se ve la guerra como una forma de superar la división interna y cohesionar la nación.

Sin embargo, la crisis persistirá y en el imaginario colectivo aparecerá con fuerza la Revolución rusa de 1917. Para algunos, la personificación de todos sus temores; para otros, de sus esperanzas. Tras el conflicto, Europa vivirá un ciclo de intentos revolucionarios —desde los espartaquistas de Berlín a las huelgas y ocupaciones italianas— y movimientos autoritarios, desde el acceso al poder de Salazar, en Portugal, al fracasado *punch* de Múnich, protagonizado por Hitler en Alemania.

España no sería ajena a dicha crisis y el régimen de la Restauración intentaría superarla a través de sucesivos cambios de gobierno, manteniéndose al margen de la Gran Guerra. Desde Cataluña, donde las tensiones sociales alcanzarán su cenit, una mirada poco atenta podía soslayarlas, dada la hegemonía política que logrará durante estos años la Lliga Regionalista. Durante el decenio 1913-1923, el catalanismo conservador conseguirá sus mejores resultados electorales y su máxima cota de poder institucional en Cataluña y de influencia política en España. Poco le durará, pues atrapada entre su conservadurismo social y su catalanismo regeneracionista, la violencia de clase y la posterior dictadura del general Miguel Primo de Rivera acentuará sus contradicciones. En ese momento, se pondrán las bases para su futura sustitución por un catalanismo claramente republicano, interclasista y con un nuevo

compromiso con las izquierdas republicanas españolas.

Un primer autogobierno

En un decreto de diciembre de 1913, el Gobierno presidido por Eduardo Dato autorizaba la mancomunación de las provincias españolas. Aunque este podía tener aplicación en todo el Estado, el decreto tenía un claro origen y destinatario: Cataluña. Muy atenta a las reivindicaciones autonomistas irlandesas, desde 1911 la Lliga había dirigido sus esfuerzos a lograr el permiso para crear algún tipo de institución que aglutinase a las provincias catalanas, reconociendo su especificidad. Aunque el presidente español José Canalejas se había mostrado partidario de dichas reivindicaciones, la fuerte oposición del resto de grupos parlamentarios y, finalmente, su asesinato el 12 de noviembre de 1912 habían retrasado y finalmente frenado su tramitación.

La institución no asumía ninguna nueva atribución, sino que se limitaba a permitir la agrupación, completada hacia 1920, de las competencias de las diputaciones provinciales. Enric Prat de la Riba, presidente de la Diputación de Barcelona desde 1907 y líder de la Lliga, fue su primer máximo responsable, desplegando una actividad que superaba con creces el presupuesto y funciones reales del organismo. Su actividad, siempre en manos del catalanismo conservador, se centró principalmente en la promoción de la cultura catalana, siguiendo el programa noucentista, y en la modernización estructural del país (red de teléfonos, carreteras, bibliotecas, etc.).

A la importancia de la obra realizada —o en algunos casos solo proyectada—, se añadían otros dos elementos que ayudaban a entender su relevancia. Por un lado, se constituía como el ejemplo singular de los logros del catalanismo y la concreción de una alternativa propia ante la dejación y los deficientes servicios del Estado. Se trataba de un programa estatista que pretendía tanto la independencia cultural como la sincronización con la alta cultura europea. Para ello, no se dudó en incorporar a militantes de otras fuerzas políticas, pero de reconocida capacitación técnica,

consiguiendo una adhesión prácticamente unánime. Se unieron en el proyecto pratiano y en instituciones tan representativas como el Institut d'Estudis Catalans jóvenes intelectuales como Joan Estelrich o Lluís Nicolau d'Olwer, y figuras consolidadas como Pompeu Fabra o Eugeni d'Ors. Por el otro, destacaba su carácter simbólico al representar en una única institución a la totalidad de las provincias catalanas, la primera experiencia de autogobierno desde el Decreto de Nueva Planta, cuyo aniversario Prat de la Riba no olvidó mencionar en su discurso inaugural del 6 de abril de 1914. Se trataba de una baza política que la Lliga no dejaría escapar. El naciente e importante órgano administrativo ayudaría a desarrollar una conciencia catalanista y constituía una primera base con vistas a una futura autonomía de más largo abasto.

La Mancomunidad de Cataluña también evidenciaba el giro de la Lliga hacia un pragmático pactismo, ofreciendo apoyo parlamentario al Gobierno de turno a cambio de concesiones concretas, una estrategia del catalanismo conservador que reencontraremos nuevamente tras la Transición. Prat de la Riba permanecía en Barcelona transformado en hombre de gobierno, mientras Francesc Cambó se convertía en el líder parlamentario en Madrid. La Lliga se hallaba en su momento más dulce.

Paralelamente, el escenario internacional se hallaba monopolizado por la Primera Guerra Mundial. La neutralidad española se tradujo en un repentino cosmopolitismo en las capitales y puertos españoles —especialmente en Barcelona—, a raíz del intenso trapicheo de diplomáticos y espías. También se generaron grandes beneficios económicos, pues para todo había mercado al margen de su calidad, y polémicas encendidas en los medios intelectuales entre germanófilos y aliadófilos. Estas últimas tuvieron una concreción particular en el caso del catalanismo político. Aunque Prat de la Riba no ocultaba sus preferencias germanófilas, la opción mayoritaria fue la aliadófila, pues estos defendían el principio de las nacionalidades y planteaban redibujar el mapa europeo. Las reivindicaciones de las naciones sin Estado recibían así una importante legitimación, incrementada posteriormente por los famosos 14 puntos del presidente norteamericano Woodrow Wilson.

Los intentos por internacionalizar la situación catalana pretendían

tanto dirimir pugnas internas del catalanismo —demostrar la validez de la vía legalista y democrática frente a la insurreccional— como ganarse el favor de una Entente triunfal, supuestamente capaz de presionar al Gobierno español para conceder un mayor grado de autonomía a Cataluña. Aunque se logró cierta difusión internacional, ninguna de las potencias vencedoras estaba por la labor, a pesar de intentos quijotescos como el encabezado por Joan Solé i Pla desde la Unió Catalanista, estudiado por Joan Esculies. Este médico y político contribuyó a crear el mito de los 12.000 voluntarios catalanes alistados a la Legión extranjera francesa, cuya intención última debía ser servir como moneda de cambio para la inclusión de la cuestión catalana en la Conferencia de Versalles.

Esta apelación a referentes internacionales no era extraña al catalanismo y tenía sus precedentes —y tendrá su continuidad hasta hoy mismo—. Sin embargo, es ahora cuando se teoriza de forma más recurrente y constante, pues se suma el influjo de los modelos exitosos de los nacionalismos centroeuropeos tras la guerra, y la clara voluntad de aprovechar las oportunidades generadas por la política internacional para buscar aliados externos a la causa catalana. Todo ello con poco éxito, pues cualquier tentación extranjera procatalanista era desactivada rápidamente por una diplomacia española nada dispuesta a permitir la aplicación de los derechos de las minorías en España. Según Xosé Manoel Núñez Seixas: “El catalanismo no consiguió una mejora de la política de minorías ginebrina, sino más bien que España se convirtiera en un Estado ‘poco amigo’ de la causa de las nacionalidades y minorías en Ginebra”.

‘Per Catalunya i l’Espanya gran’

En el frente interno, la Lliga anunciaba su programa más ambicioso coincidiendo con las elecciones generales de abril de 1916 con su lema: “Per Catalunya i l’Espanya gran” (“Por Cataluña y la España grande”). El catalanismo conservador se presentaba como una fuerza regeneracionista decidida a implicarse en la gobernanza española y apostaba por el iberismo basado en la federación de los pueblos peninsulares. Según historiadores como Andreu Navarra, la apuesta liderada por Prat no era, por tanto, de segregación, sino de transformación de España, en la línea de una Corona dual y/o de una catalanización de esta.

Al mismo tiempo, mantenía su voluntad de identificación absoluta con Cataluña. De hecho, en el campo catalanista era así, pues sus rivales de la Unió Federal Nacionalista Republicana no podían competir ni electoral ni institucionalmente. Para constatarlo, el 21 de mayo de 1916, la Lliga organizaba una rimbombante Festa de la Unitat Catalana (“Fiesta de la Unidad Catalana”) que, en pocos meses, se rebelaría como el canto del cisne de su preeminencia política.

La unidad no era tal. Políticamente, se mantenía la pugna con los lerrouxistas que conservaban posiciones. La mayoría de circunscripciones se repartían entre ambos partidos, y todavía resistían algunos representantes republicanos y monárquicos. Estos últimos iniciaron un proceso de coalición con Alfonso Sala como referente, creando la Unión Monárquica Nacional (UMN) a finales de 1918. Esta coalición de liberales y conservadores reunió a miembros importantes de la alta sociedad catalana, con la intención específica de combatir a la Lliga a través de un programa que proponía monarquía, corporativismo y regionalismo. Además, a finales de 1918 también apareció en Barcelona la Liga Patriótica Española, un conglomerado de militares en activo y en la reserva, mauristas, antiguos lerrouxistas y algún jaimista. Esta representaba

el españolismo más populista y se especializó en confrontaciones violentas, ya fuera a bastonazos o simplemente a tiros, con los grupos catalanistas más radicales.

A nivel español, Cambó consolidó su prestigio encabezando y promoviendo la principal iniciativa renovadora de la política española: la Asamblea de Parlamentarios, celebrada en Barcelona durante el mes de julio. Esta proponía una reforma del sistema de la Restauración —elecciones constituyentes, reforma democrática del Ejército, separación de poderes y autonomía para municipios y regiones—, en horas bajas ante una creciente contestación social, militar y política. La asamblea representaba la reacción regeneracionista, desde dentro del sistema, ante la decisión de cerrar las Cortes por parte del presidente del Gobierno Eduardo Dato.

La Asamblea de Parlamentarios no se retomó hasta el mes de octubre en Madrid. En el intermedio, durante el verano, se ha vivido una huelga general revolucionaria convocada por UGT y la CNT, y el ambiente había cambiado. A finales de mes, Dato dimitía y el rey Alfonso XIII llamaba a un gobierno de unidad nacional bajo la presidencia de Manuel García Prieto y con dos ministros de la Lliga incluidos (Joan Ventosa, como ministro de Hacienda, y Felip Rodés, de Instrucción Pública). La integración de los hombres de Cambó —ya líder único, pues Prat de la Riba muere en agosto de 1917 y su sustituto al frente de la Mancomunidad, el arquitecto Josep Puig i Cadafalch, no contaba con el mismo peso político— salvaba momentáneamente la monarquía, pero hipotecaba el futuro del partido.

La implicación de la Lliga en la gobernanza española no sería puntual. Como ha estudiado Borja de Riquer, fruto de la compleja relación establecida entre el rey y Cambó, este último se implicará personalmente en los gobiernos de 1918 y 1921 como ministro de Fomento y Hacienda, respectivamente. El político catalán actuaba convencido de que, desde dentro del gabinete, podría vehicular la solución del pleito planteado por el catalanismo político. Esta convicción debía concretarse en un Estatuto de Autonomía —argumento con el que la Lliga consigue un gran resultado en las elecciones de febrero de 1918—, aprobado en enero de 1919 en

Cataluña, pero tumbado inmediatamente por el Gobierno de Madrid.

La Lliga había dirigido un gran ataque contra el viejo sistema político de la Restauración con unos resultados bien pobres. No únicamente había sido incapaz de organizar el recambio, sino que había acabado integrándose, ligando en parte su suerte a la de la monarquía. A la pérdida de su credibilidad regeneracionista —no se incorporó ninguna de las peticiones de la asamblea—, se sumaba la decepción entre buena parte del catalanismo político, que había confiado en la apuesta estatutaria. La incoherencia entre la campaña nacionalista a favor de un Estatuto y el apuntalamiento del régimen facilitó que una parte del catalanismo buscara nuevas plataformas al margen de la hasta entonces hegemónica Lliga.

Así, a su izquierda surge el Partit Republicà Català, que buscaba capitalizar al catalanismo decepcionado con el regionalismo y agrupaba a personalidades como Francesc Layret, Lluís Companys, Marcel·lí Domingo o Gabriel Alomar. Aunque su vida será breve, constituye un primer intento de articular en un mismo proyecto republicanismo de izquierdas, catalanismo y gentes procedentes del sindicalismo y de la abogacía laboralista. Además, la propia Lliga sufre una escisión de su ala más catalanista, descontenta con la alineación con la ley y el orden en detrimento de sus objetivos de modernización de España y Cataluña. Importantes sectores de las juventudes del partido, conjuntamente con profesionales e intelectuales catalanistas —Lluís Nicolau d'Olwer, Antoni Rovira i Virgili o Jaume Bofill i Mates, entre otros— creaban en junio de 1922 Acció Catalana.

La Lliga iniciaba su decadencia y sobre todo evidenciaba las limitaciones del proyecto noucentista de nacionalización y unidad. Por una parte, se había mostrado incapaz de integrar a la clase obrera en su propuesta de sociedad catalana y catalanista, quedando como un proyecto básicamente burgués. Por el otro, buena parte de las elites formadas durante los años de la Mancomunidad se habían sentido defraudadas por el giro conservador de la Lliga, y la hegemonía cultural, y en breve política, pasaba a nuevas manos.

El miedo de clase a una revolución obrera y su conservadurismo

social se había impuesto al proyecto político catalanista y regeneracionista de la Lliga. Buena parte de esa alarma tenía como origen la Revolución rusa de 1917. Para las clases dirigentes, representaba la evidencia de los peligros que supuestamente las amenazaban. Para los anarcosindicalistas, la revolución bolchevique mostraba un posible camino a seguir, a pesar de un cierto distanciamiento crítico por la persecución de anarquistas rusos, que llevó a la CNT a retirarse de la III Internacional.

El incremento de los beneficios a causa de la neutralidad española no diluyó las tensiones sociales, pues estos no se repartieron equitativamente y, además, el coste de la vida entre 1914 y 1917 se incrementó en un 78%. Tampoco se aprovechó la oportunidad para modernizar los bienes de equipo y, cuando la demanda cayó, la industria se hundió nuevamente. Los empresarios pretendieron compensar la caída de beneficios mediante la reducción de sueldos y plantilla, a lo que los sindicatos se negaron.

Tras la fracasada huelga general revolucionaria de 1917, los enfrentamientos continuaron con una dureza inusitada. Desde 1918, la CNT se había organizado en sindicatos de industria en lugar de sindicatos de oficio, una manera de demostrar su voluntad de recurrir a la huelga como táctica reivindicativa y a la huelga general como táctica política. Durante el llamado Trienio bolchevique (1917-1920) se vivieron episodios tan relevantes como la huelga obrera de la Barcelona Traction, conocida popularmente como la Canadiense, séptima empresa mundial en producción eléctrica y la primera de España, en febrero de 1919. Tras 44 días de huelga que derivó en general y paralizó el 70% de la industria catalana, se lograron mejoras salariales, la readmisión de los obreros despedidos, la liberación de los detenidos y la promulgación del decreto que fijaba una jornada laboral de ocho horas. La CNT demostraba su poder y alcanzaba la hegemonía sindical en Cataluña con 427.000 afiliados en 1919.

Sin embargo, no todo el mundo quedó satisfecho con el acuerdo. La Patronal y las autoridades militares se sintieron irritadas por un acuerdo que veían como un mal precedente y pedían al Gobierno una actitud más contundente. El gobernador militar de Barcelona — y futuro ministro de Gobernación durante la dictadura

primorrieverista—, Severiano Martínez Anido, personificó el hombre duro que esperaba la burguesía industrial catalana. Además, la crisis internacional —con derivadas autóctonas como el hundimiento del Banco de Barcelona en 1920 tras especular con marcos alemanes— evidenciaba que la recuperación no sería ni sencilla ni rápida.

La situación social fue enconándose ante la dureza gubernamental (aplicación de la Ley de fugas) y el cierre empresarial a finales de 1919 y principios de 1920 que afectó a más de 150.000 obreros. El pistolero surgió con fuerza en las calles de Barcelona, con enfrentamientos entre los pistoleros de la patronal y de los sindicatos amarillos contra los del sindicato anarquista. Se produjeron más de 800 atentados, con víctimas tan relevantes como Francesc Layret (1920) o Salvador Seguí (1923). Barcelona recibía merecidamente el sobrenombre de la Rosa de Foc (“Rosa de Fuego”).

Los acontecimientos españoles volvían a encajar en el relato europeo. Desbordado por sus extremos, tanto el sueño burgués liberal de construir una cultura cívica como la esperanza obrera de lograr la revolución se neutralizaban mutuamente. Desde la derecha, se planteaba una alternativa que giraba hacia el autoritarismo, mientras que la izquierda se radicalizaba a través de la lucha obrera. El ciclo revolucionario en Europa tenía como réplica una serie de movimientos contrarrevolucionarios.

La Dictadura de Primo de Rivera

El miedo a una catástrofe social explica, en parte, los buenos ojos con que la Lliga acogerá, en primera instancia, el pronunciamiento del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera. De hecho, el Ejército había ido incrementando su implicación en la represión social a cambio de la protección de sus privilegios y el no cuestionamiento de la aventura imperialista en Marruecos. Estas acciones solo consiguieron radicalizar el antimilitarismo popular y contribuyeron a reforzar la mentalidad militar conservadora. Además, tras la derrota militar de España en Marruecos en 1921, en el denominado Desastre de Annual, y la abolición de las Juntas en 1922, el Ejército adoptó una postura unificada frente a las tensiones sociales y al nacionalismo periférico, que acabó cristalizando en el golpe de Primo en septiembre de 1923.

Así, una de las primeras acciones de Primo de Rivera fue la prohibición de la CNT en 1924, seguida de la detención de sus principales dirigentes y de la supresión de sus publicaciones. La CNT se vio obligada a pasar a la clandestinidad, mientras los sectores más radicalmente anarquistas se organizaban, en 1927, alrededor de la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Tal y como se pedía desde la patronal, el problema social pasaba a ser “solucionado” por el Estado. A la respuesta represiva, el régimen sumó también la promoción de una serie de grandes obras públicas, algunas eran continuación de lo planificado por la Mancomunidad, que rebajaron las tensiones sociales, aunque incrementaron la deuda pública.

Sin embargo, el pronunciamiento no buscaba únicamente acabar con la cuestión social, sino también una renacionalización de España. En su manifiesto inicial, Primo mencionaba tanto la “desvergonzada propaganda separatista” como la “impunidad de la propaganda comunista” como factores desencadenantes del golpe de Estado. Seguramente, no es casual que este se concretase el 13

de septiembre de 1923, justo dos días después de la celebración de una Diada especialmente accidentada con una manifestación conjunta de nacionalistas catalanes, vascos y gallegos en Barcelona y enfrentamientos a palos que se saldaron con 30 heridos.

Como ha estudiado Alejandro Quiroga, el régimen de Primo de Rivera intentó poner en marcha un proyecto político nacionalista autoritario, con vistas a construir un Estado-nación moderno y corporativo que resultara atractivo para la mayoría de los españoles. Los regímenes autoritarios de entreguerras constituyen el ejemplo más extremo de estos intentos radicales de nacionalización de masas utilizando principios antidemocráticos.

Primo de Rivera consiguió contar en un primer momento, como ya se ha comentado, con el apoyo explícito de los dirigentes de la Lliga, en quien veían al salvador de España y Cataluña. Durante la mañana del mismo día del pronunciamiento había inaugurado una exposición del mueble en Montjuïc, considerada como una anticipación de la futura exposición internacional de 1929. Los rótulos, el discurso del alcalde y de las otras autoridades se pronunciaron todos en catalán. Al llegar su turno, Primo de Rivera se complació de ello, llegó a decir que él mismo se hallaba “catalanizado por el cariño que tengo y que he visto que me tiene Cataluña” y finalizó su discurso con un “viva a Cataluña”. Al día siguiente, a las ocho de la noche, salía en tren hacia Madrid desde la estación de Francia, acompañado hasta el andén por las autoridades militares, civiles y religiosas, y por una multitud que lo vitoreaba y aclamaba.

Gracias a su promesa de paz social en las calles y las fábricas y de una autonomía más o menos explícita, Primo de Rivera logró el apoyo de las principales entidades catalanas. Sin embargo, la luna de miel se rompió pronto. El 18 de septiembre firmaba el Real Decreto contra el separatismo, prohibiendo la bandera catalana y el uso del catalán como lengua oficial, y obligando a llevar las actas de las corporaciones y asociaciones en castellano.

Las quejas posteriores de los dirigentes de la Lliga de poco sirvieron. Sus dirigentes descubrían con estupefacción cómo sus aplausos iniciales al golpe y su cooperación con el Directorio no iban a incrementar la autonomía de Cataluña. Muy al contrario,

incluso la Mancomunidad, su logro emblemático, les fue arrebatada al ser nombrado presidente el ya citado Alfonso Sala, jefe de la UMN, desvirtuada a través de una política que buscaba “hispanizar la Mancomunidad”, y finalmente suprimida el 12 de marzo de 1925.

La Lliga era incapaz de aumentar la autonomía de Cataluña y, además, perdía la institución regional bajo su control desde su fundación en 1914. Esto trajo como consecuencia el distanciamiento de las facciones más catalanistas de la burguesía catalana de una dictadura a la cual habían apoyado inicialmente con entusiasmo. La nada hábil persecución desencadenada por esta misma dictadura hizo más por el catalanismo que cualquier otra política.

Según la visión primorrriverista, Cataluña estaba enferma de separatismo y sindicalismo, y como tal necesitaba ser curada. La represión fue extensiva, focalizándose especialmente contra el uso público de símbolos y de la lengua catalana, y afectó a todos los estamentos sociales, desde la Iglesia catalana a la escuela. Algunos miembros del clero llegaron a exiliarse, mientras que la nacionalización escolar se realizó a través de la renovación del sistema educativo, primero mediante la represión de los maestros e instituciones docentes bajo sospecha de diseminar doctrinas regionalistas o nacionalistas y, luego, mediante la promoción de escuelas, centros educativos, fiestas y conferencias, cultivadores de valores nacionalistas españoles en la población. El control dictatorial de la Universidad de Barcelona también se hizo evidente con rapidez. De hecho, la obsesión llegó a afectar al F. C. Barcelona, cuya actividad fue suspendida en junio de 1925 tras silbarse la Marcha Real por parte del público asistente que manifestaba así su disconformidad con la política anticatalanista del régimen, poniéndose las bases del histórico vínculo entre el Barça y el catalanismo.

La persecución de la cultura más institucional no impidió que, en buena medida, muchas de dichas actividades se mantuvieran, a menudo, gracias a mecenas privados. La fórmula de trabajar “Catalunya endins” (“Cataluña adentro”), enunciada por Joan Estelrich, dio continuidad a las publicaciones del Institut d’Estudis

Catalans, de los Estudis Universitaris Catalans, de la Fundació Bernat Metge o de la Fundació Patxot, entre muchas otras. La cultura catalana perdió algunas plataformas, pero supo buscar nuevos públicos y mercados, logrando un gran avance entre las clases más modestas. En 1925, Josep Pla publicaba su primer libro, *Coses vistes*, con unas ventas de 5.000 ejemplares; La Paraula Cristiana lanzaba su primer número como principal escaparate del pensamiento religioso catalán; y en 1929 nacía *Mirador*, una revista de alta cultura que persistía en la voluntad de sincronizarse con Europa. La persecución incluso provocó, en abril de 1924, una carta de apoyo a la lengua catalana por parte de intelectuales madrileños, y una posterior y publicitada visita en 1930.

Políticamente, el régimen primorriverista perdía apoyos en Cataluña. La represión indiscriminada condujo a la desafección del sector regionalista de la burguesía catalana y de los tradicionalistas. Los jóvenes que habían roto con la Lliga y el noucentisme se adhirieron tanto a la ola democratizadora europea, comprometida política y socialmente, como a las nuevas corrientes artísticas que estaban revolucionando la cultura del periodo. Las diversas facciones nacionalistas y regionalistas se unieron en su lucha contra la dictadura, mientras que las tendencias democráticas y republicanas catalanas iniciaron la conquista del apoyo de las masas. El acercamiento entre sectores anarquistas y abogados laboristas republicanos como Lluís Companys empezaba a concretarse, mientras que en julio de 1922 se fundaba la Unió de Rabassaires (UR), organización representativa de los campesinos arrendatarios, que creaba una importante base rural catalanista. También se producían contactos en el exilio, mientras la figura de Francesc Macià cobraba especial relevancia tras el fracasado intento insurreccional de Prats de Motlló en noviembre de 1926 y, sobre todo, a raíz del juicio posterior.

Como observara ya uno de los hombres fuertes del primorriverismo, José Calvo Sotelo, en 1924, la política de nacionalización del régimen no hizo más que empeorar las cosas y convertir a muchos sectores de la población, que hasta ese momento habían ignorado o incluso se habían opuesto a todo tipo de catalanismo, en simpatizantes de los catalanistas. De hecho, el partido único, creado el 4 de abril de 1925, solo logró atraer a un sector muy limitado de

la derecha catalana con la incorporación de algún carlista, entre estos Joaquim Bau i Nolla, alcalde de Tortosa, y personajes de los Sindicatos Libres.

Las finanzas tampoco funcionaban y el Gobierno no pudo mantener la cotización de la peseta mientras se incrementaba el déficit estatal. La Exposición Internacional de 1929 en Barcelona —una ciudad que en 1930 ya superaba el millón de habitantes— dio un breve respiro al régimen. Sin embargo, este ya se hallaba tocado de muerte y ni la renuncia del general Primo de Rivera podía salvarlo. Aunque Alfonso XIII intentó hasta el último momento una transición que devolviera las cosas a la situación anterior, el Pacto de San Sebastián de agosto de 1930 demostraba el compromiso de la oposición a favor de un régimen republicano y el reconocimiento de las especificidades regionales. El acuerdo vinculaba al republicanismo de izquierdas español con el catalanismo de izquierdas, y preparaba el cambio de hegemonía política en Cataluña y en España.

Capítulo 7

Segunda República y guerra civil (1931-1939)

La dictadura primorriverista había agotado la paciencia incluso de muchos sectores monárquicos, hasta el punto de que el segundo intento republicano en España apareció como la solución a los males del país. El nuevo régimen comportó la aparición en el escenario político y a los mandos gubernamentales de una nueva generación proveniente mayoritariamente de ateneos y universidades. A estos se sumaron algunas personalidades recicladas y, finalmente, gentes curtidas en la lucha social.

En Cataluña, el cambio de régimen consolidó a la recién nacida Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) como el partido referencia. Su éxito era inseparable tanto del desgaste de los viejos actores (Lliga, lerrouxistas...) como de la concienciación y difusión de los ideales catalanistas que, por reacción, jugó la represión de la catalanidad durante el régimen de Primo de Rivera. El catalanismo ganaba nuevas audiencias y se convertía en interclasista. Además, los estrechos vínculos establecidos en la oposición y la clandestinidad entre sectores obreros y el republicanismo de izquierdas se rebelarían decisivos para acercar a las urnas a gentes hasta entonces reacias a ellas.

El éxito electoral de ERC se traducirá en un modelo de sociedad que tomaba elementos culturales del noucentisme en clave populista, que compartía objetivos democráticos comunes a los republicanos españoles y demócratas europeos del periodo, y que incluía también una voluntad de federalismo que hoy calificaríamos de asimétrico. Con todo, a menudo sus líderes mostrarán sus limitaciones, su debilidad programática y su falta de una estrategia a largo plazo, características que según el historiador Joan B. Culla pueden reseguirse en buena parte de la trayectoria del republicanismo catalanista hasta nuestros días.

Durante la Segunda República, el catalanismo progresista mantendrá una fluida relación con sus homólogos a nivel español. La suerte de ambos quedará ligada y, de hecho, la autonomía catalana —el gran éxito del catalanismo democrático del periodo—

sufrirá directamente de los vaivenes políticos, electorales y, finalmente, militares de la República española. Con Cataluña convertida en retaguardia durante buena parte de la guerra civil, el catalanismo progresista se verá arrinconado por la dialéctica entre anarquistas y comunistas sobre si la preeminencia correspondía a la revolución o a la guerra; mientras que el catalanismo conservador, acosado por la violencia revolucionaria, priorizará en muchos casos su reflejo de clase y su propia supervivencia física.

Del Pacto de San Sebastián al Estatuto

La Segunda República española llegaba a un país donde prácticamente no existían republicanos, y lo hizo pacíficamente tras unas sencillas elecciones municipales —de connotaciones claramente plebiscitarias— que evidenciaron la podredumbre de la monarquía y desataron una euforia republicana. En palabras del socialista Julián Besteiro: “Algunos exploradores africanos cuentan haber visto, en las selvas, elefantes que permanecen en pie después de muertos, sostenidos por el enorme peso de su mole: la monarquía española es uno de esos elefantes”.

La participación del catalanismo de izquierdas en el Pacto de San Sebastián condujo a un estrecho vínculo entre republicanismo y reconocimiento político de Cataluña no exento de tensiones, pero básico para entender el periodo, pues resultaba imposible disociar ambos proyectos. De hecho, la ambición del catalanismo de izquierdas era similar a la de las izquierdas republicanas españolas: la conversión de España en una democracia de matriz liberal, más próxima al modelo francés o inglés. Su programa, en palabras de Jaume Vicens Vives, se centraba en los siguientes puntos: “Apertura del país al espíritu europeo y ruptura con el tradicionalismo y su ideología; liberalización de la enseñanza; reforma de la estructura social, dando entrada a las reivindicaciones obreras en las prioridades del gobierno; reconocimiento de las diversidades de mentalidad y de cultura entre las diferentes regiones españolas”.

En Cataluña, las elecciones del 14 de abril de 1931 consagraron a la recién creada ERC como partido hegemónico. La nueva fuerza había conseguido unir bajo un mismo paraguas a los obreros de la CNT y a la pequeña burguesía radicalizada, dos colectivos que, en aquel momento, tenían menos diferencias ideológicas de lo que podría parecer. Nacida un mes antes de los comicios, agrupaba a un batiburrillo de grupos, corrientes y grupúsculos, con una extensa implantación en el territorio y un liderazgo mítico que mantuvo

cohesionado l'avi Francesc Macià. Esta adaptabilidad y confluencia de diversos sectores era su gran fuerza, pero también su gran debilidad, pues demostraría una cierta falta de consistencia.

El triunfo de ERC, además, tenía lugar en detrimento de la hasta entonces predominante Lliga, lastrada por su implicación en los últimos gobiernos de la Restauración y descolocada ideológicamente. Nada resulta más ilustrativo del giro político catalán que los gritos espontáneos de aquella primera jornada republicana: “Visca Macià, mori en Cambó” (“¡Viva Macià, muera Cambó!”).

La consagración de ERC constriñó también el espacio para otras alternativas, a pesar de los intentos por simplificar el fragmentado mapa político catalán y crear plataformas atractivas. Por un lado, hallamos los más izquierdistas y marxistas organizados en el Bloc Obrer i Camperol (BOC), cuya repercusión no sería relevante hasta el inicio de la guerra, cuando agruparán a buena parte del marxismo no seguidista de Moscú.

Por el otro, el catalanismo republicano moderado, heredero de Acció Catalana, fundaba el Partit Catalanista Republicà, después rebautizado como Acció Catalana Republicana (ACR). Estos contarán con los mejores cuadros y una ascendencia intelectual innegable, pero una influencia política limitada. De hecho, su relevancia será deudora de la participación de algunos de sus miembros en el Gobierno español —como Lluís Nicolau d'Olwer— o de su colaboración en otras fuerzas.

Simplificando, el catalanismo político quedaba configurado en torno a dos grandes opciones políticas: la Lliga —que en 1933 pasará de Regionalista a Catalana— y ERC, con clara preeminencia de los segundos (3.219 regidores contra 1.014 de la Lliga y otras opciones, en abril de 1931). Al catalanismo conservador, descolocado ante el cambio de régimen, le costó asimilar la pérdida de preeminencia, el triunfo de sus rivales progresistas y el hecho de que incluso parte de su parroquia habitual buscase refugio en los partidos de derechas españoles. Sirva de ejemplo el retiro voluntario de Cambó, quien durante los primeros meses de República se instaló en el extranjero, aunque entre bambalinas continuaba controlando a sus hombres.

ERC se presentará como una izquierda populista, interclasista, que aceptaba la cultura burguesa, pero no la burguesía que se intuía poco catalana. Mantendrá, por tanto, una continuidad cultural reformulada que, en palabras de Enric Ucelay-Da Cal, podríamos llamar un noucentisme de masas. Ya no eran representantes de la alta burguesía o profesionales liberales quienes encabezaban el catalanismo, sino perfiles más próximos a la menestralía.

Tras los primeros resultados oficiales de las elecciones municipales, por toda la geografía española se desencadenaron proclamas republicanas que también hallaron su réplica en Cataluña. Desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona, Lluís Companys anuncia el advenimiento de la República española, y poco después, un Macià celoso de su protagonismo, proclama “la República Catalana, com a Estat integrant de la Federació Ibèrica” (“la República catalana, como Estado integrante de la Federación Ibérica”). El gesto de l’avi descoloca al Gobierno provisional de Madrid, que envía a tres ministros (los catalanes Nicolau d’Olwer y Domingo, y el socialista Fernando de los Ríos) a reconducir la situación. Finalmente, se optó por recuperar una antigua institución medieval, la Generalitat, convertida en Gobierno autónomo provisional a la espera de un Estatuto propio.

La redacción del Estatuto se convertirá en una campaña de agitación patriótica, con una participación generalizada y eufórica. La redacción de la propuesta catalana, conocida como el Estatuto de Núria —un santuario mariano en el Pirineo de Girona—, establecía la oficialidad del catalán y fijaba amplias competencias en materias de hacienda, educación, cultura y orden público. A pesar de su rápida redacción y del amplio apoyo recibido en Cataluña, el Estatuto tuvo que esperar turno mientras se redactaba la nueva Constitución española.

La composición de las Cortes constituyentes en junio de 1931 constataban el giro político español. Se imponía una mayoría de centroizquierda (con el PSOE y Acción Republicana como partidos más votados) dirigida por Manuel Azaña y, en principio, cómplice de la hegemónica ERC catalana. Sin embargo, la discusión parlamentaria sobre el Estatuto no fue sencilla ni estuvo exenta de polémica. Desde la derecha, y desde algunos diputados e

intelectuales de izquierda, se criticó con dureza el proyecto, mostrándose contrarios a una autonomía y catalanización que creían excesiva. Los debates fueron intensos —algunos muy parecidos a los vividos 70 años después—, y solo el firme compromiso del presidente Azaña, consciente de que la estabilidad de la República pasaba por satisfacer los anhelos catalanes, y el fracasado golpe de Estado monárquico del general José Sanjurjo, en agosto de 1932, aceleraron su aprobación.

Aunque el texto final ya no era el remitido —y ello provocó más de una abstención en las votaciones y más de una crítica en la prensa —, sus limitaciones —su presupuesto era de 143 millones de pesetas, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona disponía de 126— no deben ocultar una significación política innegable. El Estatuto iba más allá de la simple descentralización administrativa representada por la Mancomunidad, comportaba la desaparición de las diputaciones y los gobiernos civiles, y otorgaba a la Generalitat competencias de gran calado como las de orden público, además de reconocer la oficialidad del catalán.

Más allá del texto, lo relevante era el compromiso del Gobierno republicano. Gracias a este, por ejemplo, fue posible la concesión de la autonomía a una Universidad de Barcelona que asumiría el catalán y su cultura como algo propio. En el ámbito educativo, también destacó la creación por parte de la Generalitat de una red escolar propia, mientras el Estado mantenía la suya, pero dentro de un espíritu de colaboración. Ese margen de colaboración tenía un componente de discrecionalidad cuando no de arbitrariedad que, un futuro cambio de mayorías, demostró precario.

Mientras tanto, la convocatoria electoral catalana de noviembre de 1932 confirmó el triunfo de ERC, pues para la ciudadanía eran quienes habían hecho posible la autonomía y el Estatuto. Además, se vio muy beneficiada por una ley electoral que con el 47% de los votos le otorgaba el 75% de los diputados. Sin embargo, la situación no era tan idílica. Dentro de la propia ERC convivían dos facciones claramente diferenciadas. La lucha interna entre nacionalistas y republicanos se desataría a raíz de la súbita desaparición de Macià el día de Navidad de 1933. Su vacío político tuvo que suplirse con pactos y acuerdos, que llevaron finalmente a Lluís Companys —de

la ala más republicana— a la presidencia catalana, a expensas de otras figuras nacionalistas como Jaume Aiguader o Ventura Gassol. El nuevo presidente se había formado como abogado de sindicalistas anarquistas, su formación republicana derivaba del ejemplo de Pi i Margall y su nacionalismo catalán era puesto en cuestión por algunos sectores.

Entre el 6 de octubre y la guerra

El nuevo presidente Companys, a pesar de la mayoría parlamentaria, quiso consolidar su autoridad constituyendo un Gobierno en coalición con otros partidos y contrarrestar así el peso de los sectores más nacionalistas dentro de su propio grupo. Sin embargo, los intentos por aparentar una cierta normalidad institucional chocaban contra un creciente desasosiego social y político. Incluso la Lliga, todavía en busca de un discurso propio que la diferenciara de ERC y de la derecha española, amagó con retirarse del Parlamento, en desacuerdo con el recuento electoral y con las políticas impulsadas por los republicanos catalanes.

Las elecciones generales de noviembre de 1933 habían supuesto un cambio de mayorías importantes en las Cortes españolas. Los resultados continuistas de ERC en Cataluña no tuvieron su paralelo a nivel español, donde la desconfianza, la fragmentación y la desmovilización de las izquierdas republicanas permitieron un vuelco electoral a favor del republicanismo conservador representado por el Partido Radical de Alejandro Lerroux y la derecha accidentalista con guiños totalitarios encabezada por José María Gil Robles. La Generalitat quedaba así como el último gran reducto en manos del republicanismo de izquierdas, y el catalanismo perdía su gran aliado en la política española.

Además, se vivía una creciente tensión social, fruto de dinámicas externas como el crash de 1929, pero también de problemas internos. El primer bienio republicano era juzgado como demasiado moderado para buena parte de un mundo sindical y obrero con grandes esperanzas de cambio; y demasiado acelerado por unos poderes fácticos alérgicos a cualquier transformación. En el ámbito sindical esta decepción se tradujo en un cambio en la cúpula de la CNT. Así, muchos de sus dirigentes históricos, pactistas y con estrechas relaciones con ERC, fueron sustituidos por otros más vinculados a la radicalmente anarquista FAI. La creciente

insatisfacción ante la lentitud de las reformas republicanas fue aprovechada por estos últimos para promover actos de “gimnasia revolucionaria” como el levantamiento del Alto Llobregat en 1932.

Tampoco en el campo dominaba la paz social, pues los rabassaires (campesinos arrendatarios que aspiraban a convertirse en propietarios de las tierras que cultivaban) presionaban al Gobierno catalán, sensible a dichas peticiones por su proximidad ideológica y personal, para que legislase a su favor. Así se iniciaron los trámites de una Ley de Contratos de Cultivo que, a pesar de su moderación, se verá primero bloqueada por la patronal agrícola catalana y, posteriormente, por el cambio de mayorías en las Cortes españolas. Aunque la crisis pudo finalmente reconducirse y se halló una solución de compromiso, el proceso había dejado muy tocada la relación entre el Gobierno central y el autonómico, la credibilidad de las instituciones republicanas —a ojos de la derecha española la Generalitat no era de fiar, y lo mismo pensaban los republicanos catalanes sobre el Tribunal de Garantías—, e incluso las relaciones entre los diferentes sectores de la política catalana.

En estas circunstancias, la CEDA anunciaba su intención de integrarse en el Gobierno republicano y no limitarse a apoyarlo parlamentariamente. Para el republicanismo español, dicha presencia constituía una evidente amenaza para la supervivencia de la República. A la ambigüedad de Gil Robles —se definía como accidentalista institucionalmente—, se sumaban sus guiños hacia el autoritarismo y una situación internacional agitada por el reciente ascenso de Adolf Hitler a la cancillería alemana y el asesinato del conservador austríaco Engelbert Dollfus.

Cuando el 4 de octubre de 1934 el presidente del gobierno Lerroix anunció el nombramiento de cuatro ministros de la CEDA, las izquierdas españolas, cautivas de sus propias palabras, llamaron a la huelga general. La convocatoria fracasó estrepitosamente, y únicamente en Asturias —donde se produjo un auténtico levantamiento revolucionario coordinado de socialistas y comunistas que el Ejército tardó dos semanas en sofocar a sangre y fuego— y Cataluña tuvo consecuencias, pero no las deseadas por sus convocantes.

La huelga general en Cataluña se inició sin demasiado seguimiento

ante la no implicación de la CNT. Sin embargo, el 6 de octubre Companys decide mantener su compromiso con las izquierdas españolas y desde el balcón del Palau de la Generalitat se suma a la protesta contra la incorporación de la CEDA, rompe con el Gobierno de Lerroux y quiebra la legalidad republicana proclamando “l'Estat català de la República Federal espanyola” (“el Estado catalán de la República Federal española”). Cuando el anuncio tiene lugar, la plaza está repleta; horas más tarde, ya no queda nadie. Un contraste significativo con lo sucedido a raíz de la proclamación de la República, cuando la sucesión fue justo la contraria.

A pesar de algunos incidentes, gracias al sentido común del jefe del Ejército en Cataluña, el general Domènec Batet, la revuelta era abortada con rapidez y los dirigentes republicanos catalanes detenidos. Para muchos de los testigos de la época, la decisión de Companys fue un error mayúsculo y un regalo para los contrarios a la autonomía catalana. Personajes tan relevantes como Agustí Calvet, más conocido como Gaziell, director de La Vanguardia y referente de la opinión pública catalana, o el político y abogado Amadeu Hurtado acusarán directamente al presidente catalán de falta de preparación y de haber marginado el interés general para ganarse un pedigrí catalanista que sus enemigos internos le negaban. Sin restar validez a dichos argumentos y como ha recogido recientemente Manel Llopes, tampoco debe minusvalorarse el peso que en la decisión jugaron la consolidada alianza con las izquierdas españolas —Companys y la Generalitat constituían el último bastión— y el miedo a un próximo golpe de Estado de orientación fascista ante algunas declaraciones de dirigentes de la CEDA y el contexto internacional.

“Els fets del 6 d'octubre” (“Los hechos del 6 de octubre”) concluyeron con unos 70 muertos, algún impacto de obús contra el Palau de la Generalitat, 3.500 detenidos, escenas esperpénticas —como la huida por las alcantarillas del consejero de Gobernación Josep Dencàs—, el encarcelamiento de la mayor parte de la clase política republicana catalana y la suspensión de la autonomía. La Generalitat había errado completamente sus previsiones. Ni encabezó un movimiento masivo, ni consiguió la solidaridad del resto de fuerzas ni contaba con las condiciones para ganar un pleito que la superaba.

Cataluña vivió los siguientes meses bajo un clima de ocupación, con el Parlamento reconvertido en caserna, la presidencia de la Generalitat ejercida por un gobernador general nombrado desde Madrid y con la suspensión de ayuntamientos, entidades, periódicos e incluso la Universidad de Barcelona, autónoma desde 1932. El Gobierno republicano conservador aprovechaba el fracaso del levantamiento para restringir al máximo el autogobierno catalán, limitar las libertades democráticas y perseguir a las izquierdas y al catalanismo.

La derecha española —aunque también la Lliga, que acabó colaborando al lado de radicales y cedistas— no supo actuar con generosidad y la contundencia de la represión ayudó a rehabilitar de sus propios errores a los republicanos de izquierda. El régimen de excepción en Cataluña, que se prolongó hasta septiembre de 1935, la suspensión de la Ley de Contratos de Cultivo, que provocó miles de desahucios, las cárceles españolas, que acogían a más de 30.000 presos políticos, la crisis económica que arreciaba, entre otras muchas evidencias, fueron creando un clima favorable a las desacreditadas izquierdas republicanas. En Cataluña, ningún cartel propagandístico resultó más persuasivo que el del presidente Companys encarcelado.

La convocatoria electoral de febrero de 1936 se anunciaba reñida. El centro político quedaba prácticamente huérfano y las diferentes fuerzas políticas se organizaban en dos polos. En Cataluña nació el Front d'Esquerres de Catalunya (la versión catalana del Frente Popular), encabezado por ERC, y el Front Català d'Ordre (sin un paralelo exacto en España) con la Lliga como líder. Con una participación del 72% (un punto más alta que en el resto de España), el Front d'Esquerres sacó el 59% de los votos que, gracias al sistema mayoritario, le supuso 41 de los 54 diputados en juego, mientras que el Front d'Ordre sumaba 13 diputados. Los resultados a nivel de toda España arrojaban una mayoría de 278 escaños para el Frente Popular, 131 para las derechas, 10 para el PNB y 10 más para candidaturas centristas.

La victoria de las izquierdas republicanas significó su retorno a las instituciones. Companys volvía al poder sin autocritica, pero también sin ánimos de venganza: “Tornarem a lluitar, tornarem a

sofrir, tornarem a vèncer” (“Volveremos a luchar, volveremos a sufrir, volveremos a vencer”). Seguramente esta falta de revanchismo explique la menor conflictividad en las calles catalanas durante los siguientes meses, así como una cierta estabilidad institucional. La propia ERC se deshacía de Dencàs y de buena parte de sus juventudes —reagrupados entorno de Estat Català— y reincorporaba el sector más moderado de L’Opinió. Incluso la Lliga parecía olvidar sus veleidades próximas a la CEDA para girar nuevamente hacia el centro, votando a favor de Azaña como presidente de la República y entablando negociaciones con ERC para un futuro gobierno de coalición a partir de septiembre de 1936.

Nacía entonces la famosa metáfora del “oasis catalán”, en comparación con la violencia física y política en el resto de España. Una tranquilidad sobre todo política, pues socialmente la crisis no arreciaba y solo durante el mes de abril se convocaron en Cataluña 55 huelgas.

Peligro en la retaguardia

El pronunciamiento militar en Marruecos el 17 de julio de 1936 no fue una auténtica sorpresa. El ruido de sables se filtraba desde hacía tiempo, y las tramas civiles y militares se multiplicaban. En Cataluña, los conspiradores no hallaron excesivas complicidades y cuando pidieron colaboración económica a industriales y comerciantes catalanes, estos la denegaron. Incluso la Lliga se negó a entregar los 40 millones que le fueron solicitados. La voluntad unitarista y antiautonómica resultaba difícil de tolerar para un catalanismo conservador escaldado tras la experiencia primorriverista. Así, la trama civil inicial se redujo a los carlistas y a los escasos miembros en Cataluña de Falange, Renovación Española y Acción Popular Catalana.

La insurrección de las tropas de Cataluña no cogió totalmente desprevenida a la Generalitat. Cuando los soldados salieron de sus casernas para tomar Barcelona, se toparon con la oposición de la Guardia de Asalto republicana, los mossos d'esquadra y los militantes de sindicatos y partidos republicanos. Aunque su papel no sea menospreciable —fuese como francotiradores o dinamiteros, organizando barricadas o llamando a la huelga—, quien acabó decidiendo el enfrentamiento fue la Guardia Civil, que permaneció al lado de las autoridades autonómicas. Detenido el general Manuel Goded, llegado desde Mallorca para encabezar el levantamiento, los golpistas se hallaron sin dirección y bloqueados en diferentes edificios, sin haber logrado sus objetivos. En la madrugada del día 20, toda resistencia había claudicado. El golpe había fracasado en Barcelona y, por extensión, en toda Cataluña.

Lo que se produce a continuación es el hundimiento de la legalidad republicana, sustituida por la fuerza de las armas en manos de militantes de izquierdas, sobre todo anarquistas. La decisión de licenciar a las unidades militares llegadas desde Madrid, más la toma de las armas de las guarniciones abandonadas por parte de

civiles, la confraternización posterior a la victoria, la propia debilidad institucional y la apertura de las cárceles desbordó completamente a la Generalitat, incapaz de asegurar o restablecer el orden público. La revolución había tomado las calles y el catalanismo —tanto en su expresión más menestral como burguesa— se retraía del espacio público. Las corbatas y trajes daban paso a los monos y las gorras obreras.

Companys —con la imprescindible colaboración de Josep Tarradellas y Jaume Miravittles, Met, ambos expertos en nadar y guardar la ropa— trampearía la situación durante los primeros meses de guerra mediante la creación de un Comité Central de Milicias Antifascistas, donde tenían representación todos los partidos y sindicatos opuestos a la asonada. El nuevo organismo reconocía de facto el poder ganado en las calles y reivindicado con las armas, pero, al mismo tiempo, lograba ganar tiempo evitando que la Generalitat fuese arrinconada totalmente, mientras se daba cuerda para que la CNT-FAI se quemara sola.

Mientras tanto, ERC se dejaba jirones de credibilidad por el camino, pues había quien imputaba a Companys parte de culpa de los excesos revolucionarios por su abierta simpatía hacia los sectores libertarios. En la ebullición de aquellas primeras semanas, el catalanismo republicano demostraba sus limitaciones ante el impulso revolucionario, mientras que el conservador se centraba en salvar la piel. En medio de este desconcierto, el 23 de julio se constituía un partido comunista estrictamente catalán, independiente del Partido Comunista de España (PCE), y fruto de la convergencia de diversos sectores marxistas e incluso exmiembros de ERC: el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC).

Aquellos primeros meses en la retaguardia fueron dramáticos para miles de personas y terribles para la propia credibilidad republicana. La euforia tras la derrota del levantamiento armado se transformó en una orgía de destrucción y muerte. Con la excusa de la revolución, grupos formados por militantes, principalmente de la CNT y la FAI, junto con algunos delincuentes comunes, se lanzaron a quemar iglesias, matar, robar y extorsionar. De acuerdo con los trabajos de Josep Maria Solé i Sabaté y Joan Villarroya, en la retaguardia catalana serían asesinadas a lo largo de la guerra más

de 8.000 personas —entre ellos tres obispos, 1.541 sacerdotes y 896 miembros de órdenes religiosas—, la mayoría durante aquellas primeras semanas. El terror rojo a manos de grupos de incontrolados —aunque a menudo, como han estudiado José Luis Ledesma o Toni Orensanz, mucho menos descontrolados que los posteriores relatos exculpatorios nos quieren hacer creer— se cebó especialmente en los católicos y los conservadores, aunque nadie estuvo a salvo.

A diferencia de lo sucedido en el bando franquista, diversas voces denunciaron dichos excesos, como el dirigente obrero Joan Peiró, y la propia Generalitat se esforzó para avisar a las posibles víctimas, cuando no directamente les expidió pasaportes, las protegió y ayudó a salir del país. Dichas acciones no pasaron desapercibidas y los consejeros Josep Maria Espanya y Ventura Gassol tuvieron que exiliarse amenazados por la FAI. Gracias a dichos desvelos, miles de personas salvaron sus vidas (desde el cardenal Vidal i Barraquer a escritores como Josep Maria de Sagarra o periodistas como Carles Sentís). Treinta mil personas se cree que abandonaron Cataluña durante aquel verano. Similares esfuerzos se realizaron para preservar el patrimonio catalán, especialmente el religioso, que padeció las quemaduras casi rituales durante las primeras semanas del conflicto.

Respecto del esfuerzo bélico, las primeras acciones estuvieron más inspiradas por el voluntarismo que no por la estrategia militar. Diferentes columnas de voluntarios, agrupadas según criterios ideológicos, se dirigieron hacia Zaragoza, donde el golpe sí había triunfado. Con ellos también partieron los primeros voluntarios internacionales, la mayoría participantes de la Olimpiada Popular que debía celebrarse en Barcelona en protesta contra la prevista en Berlín, y algunos antifascistas movilizados —entre ellos el escritor George Orwell, por ejemplo—. Sin embargo, las milicias quedaron rápidamente frenadas en el llamado frente de Aragón, descubriendo así que la guerra no era un juego. Más desastrosa fue todavía la expedición para liberar Mallorca, que no contó con la ayuda del Gobierno republicano y que generó una fuerte represión en la isla tras su precipitada retirada. Aunque desde el catalanismo se intentó imputar toda la culpa a Estat Català, la aventura sembró la semilla de la desconfianza entre los republicanos españoles.

Finalmente, el tactismo tan criticado de Companys durante sus primeros meses de presidencia se acabó revelando como un valor fundamental para conseguir, a finales de septiembre, recuperar el control perdido y retornar el poder a un gobierno de unidad, pero un gobierno al fin. El 26 de septiembre se constituye un Ejecutivo formado por la mayoría de partidos y sindicatos: ERC, ACR, UR, CNT, FAI, PSUC, la UGT y el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM, sucesor del antiguo BOC, de ideología marxista pero antiestalinista). Solo quedaban fuera los nacionalistas radicales de Estat Català, el antiguo partido de Macià. Este Gobierno pretendió regularizar los avances conseguidos en el terreno económico, político y social, y quiso tomar las riendas de una situación que en algunos momentos se les había ido de las manos a causa de la dualidad de poderes existente hasta entonces.

Recuperada una cierta normalidad gubernamental y estabilizados los frentes militares más próximos a Cataluña, la Generalitat intentó ordenar la economía catalana y el esfuerzo bélico. Así, en agosto de 1936, se aprobaba la creación de la Comisión de Industrias de Guerras; en septiembre, el Decreto de colectivizaciones y control obrero de industrias y comercios, y en enero de 1937, los llamados Decretos de S'Agaró. Gracias a este cañamazo jurídico-administrativo y al apoyo de un importante y eficiente equipo de técnicos, el conseller en cap (jefe de Gobierno) Josep Tarradellas pasaba a controlar la economía catalana en nombre de la Generalitat. La medida se demostró eficaz, multiplicó la eficiencia, preservó el tejido industrial catalán e, incluso, en algunos casos implementó mejoras. Con todo, no faltaron incidentes, sobre todo cuando se intentó imponer la colectivización forzosa de las tierras de cultivo, llegando a producirse enfrentamientos armados como los de la Fatarella en enero de 1937.

La progresiva recuperación del poder por parte de la Generalitat concluyó en marzo de 1937, cuando finalmente se decretó la disolución de las patrullas de control y las milicias locales, y la unificación del orden público. Esta progresiva afirmación no se hacía sin tensiones, pues desde la CNT y el POUM se veía cómo la revolución se aplazaba hasta después de la guerra y cómo el PSUC ganaba ascendencia en el Gobierno y la sociedad catalanas —hastiados ambos por las interferencias y los excesos— gracias al

apoyo ruso a la República y a su apuesta por el orden y la priorización de la guerra por encima de la revolución. Tampoco el Gobierno republicano veía con buenos ojos el creciente poder autonómico y, como en el caso del presidente Azaña, se les acusaba amargamente de no ayudar suficientemente al esfuerzo de guerra, cuando no de buscar soluciones por separado.

Esta tensión se liberaría en los llamados fets de maig (“hechos de mayo”), cuando entre el 3 y el 7 de mayo se vivió una guerra civil dentro de otra en la ciudad de Barcelona y en algunas otras localidades como Reus. Del enfrentamiento surgió un PSUC convertido en hegemónico a nivel social —y en parte político— frente a una CNT-FAI a la baja, un POUM perseguido y culpabilizado —Andreu Nin, uno de sus líderes, fue incluso asesinado por agentes soviéticos— y una Generalitat subordinada al Gobierno de la República. Este aprovechó los incidentes para restablecer el orden público con miles de Guardias de Asalto y apoderarse de la mayoría de las competencias autonómicas, así como para trasladar a Barcelona la capital republicana a finales de año. El catalanismo de izquierdas representado por ERC perdía así su último ascendente sobre una sociedad catalana trastornada por una guerra cada vez más próxima, los bombardeos (más de 600, que provocaron unos 5.500 muertos), los miles de refugiados (800.000 en 1938), las penalidades de la retaguardia (15.000 víctimas del hambre y de las enfermedades) y unas ideologías que se debatían entre el todo o nada.

Para muchos, la victoria ya no era posible y, por lo tanto, solo quedaba prolongar suficientemente la guerra para beneficiarse de un posible vuelco a nivel internacional. Las futuras consecuencias de una derrota eran evidentes para el catalanismo político. Si existía alguna duda, el general Franco se había encargado de disiparla con su actuación. En marzo de 1938 las tropas sublevadas pisaban por primera vez tierras catalanas al penetrar en la provincia de Lleida; poco después, el 5 de abril, se hacía público el decreto de derogación del Estatuto, “en mala hora concedido por la República” a unas provincias catalanas que pasarían a partir de aquel momento a disfrutar del “honor de ser gobernadas en pie de igualdad con sus hermanas del resto de España”. Los lemas pintados en las paredes de los pueblos —“Si eres español, habla español”— o el

fusilamiento del líder de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) Manuel Carrasco i Formiguera por “separatista” evidenciaban la alergia a la diferencia y a cualquier nacionalismo que no fuera el propio por parte de los sublevados.

Sin embargo, la derrota de las instituciones y del catalanismo político estaba lejos de poder ser considerada la de todos los catalanes. En las filas franquistas o emboscados en la retaguardia republicana, miles de catalanes trabajaban por la victoria de los sublevados. A estos militantes proactivos se sumaban muchos otros deseosos de que el conflicto terminase o, simplemente, asqueados por la deriva bélica, como muestra Joan Sales en la que quizás sea la mejor novela catalana sobre la guerra: *Incerta glòria*.

El último esfuerzo bélico de la Cataluña republicana tendría lugar entre julio y agosto de 1938 cuando, tras haber quedado segregada del resto del territorio al conquistar las tropas franquistas el puerto de Vinaròs, se lanzó la ofensiva conocida como la batalla del Ebro. Se sacrificaban así las últimas reservas —incluidas las llamadas quintas del biberón, formadas por jóvenes de 17 a 19 años— en un movimiento que contó en un principio con el factor sorpresa, pero que no podía tener continuidad en el tiempo por falta de reservas.

Perdida aquella última batalla, las tropas republicanas iniciaron una precipitada retirada con los franquistas pisándoles los talones. El 23 de diciembre de 1938 rompían el frente del Segre, el 15 de enero caía Tarragona, el 26, Barcelona... Miles de civiles, con sus pertenencias a cuestas, colapsaban las rutas hacia Francia, donde se mezclaban con soldados, funcionarios y políticos. En total, 470.000 personas cruzaron la frontera. Gaziol, tan crítico con los políticos republicanos catalanes, exiliado primero y reintegrado después en un autoexilio madrileño, escribía desolado sobre las consecuencias: “Res no ha quedat en peu del que era nostre: ni el govern, ni les institucions, ni la cultura, ni la llengua, ni tan sols la senyera. Només ens resta, com un bocí trossejat i sense ànima, la nostra vençuda terra catalana”¹.

1. “Nada queda en pie de lo que fue nuestro: ni el gobierno, ni las instituciones, ni la cultura, ni la lengua ni tan siquiera la señera. Tan solo nos queda, como un trocito troceado y sin alma, nuestra vencida tierra catalana.”

Capítulo 8

‘La negra nit’ (1939-1945)

Ralf Dahrendorf advertía, en un libro aparecido póstumamente en nuestro país, sobre la dificultad de juzgar las decisiones tomadas por terceros desde el confort de nuestros sofás. Para este sociólogo y politólogo alemán, nacionalizado británico, debíamos luchar contra la tentación de ser excesivamente duros a la hora de valorar los comportamientos personales, especialmente de los intelectuales, ante situaciones extremadamente complejas. Sin tener presente dicha premisa, difícilmente puede encararse una aproximación a los protagonistas que, durante los primeros años del franquismo, tuvieron que optar entre exiliarse, permanecer manteniendo un grado mayor o menor de compromiso con sus antiguos ideales, o bien colaborar o integrarse en el nuevo régimen.

La derrota republicana significó el final de las instituciones democráticas que, en el caso de Cataluña y el País Vasco, se sumó a la supresión de la autonomía y la persecución y prohibición de cualquier expresión no castellana. Como señala Alejandro Quiroga, el intento de nacionalización fue mucho más brutal que el de Primo de Rivera. En primer lugar, aunque al igual que en 1923 el golpe militar de 1936 contó con el beneplácito de la mayoría de grupos conservadores, esta vez los grandes sectores de la derecha se habían vuelto mucho más extremistas en su determinación de detener el cambio social y la reforma política, debido principalmente al miedo que había sembrado en ellos la experiencia democrática de comienzos de los años treinta. Todo esto ocurrió dentro del contexto de una “guerra civil europea” en la que la lucha entre la derecha y la izquierda se había exacerbado tremendamente durante los años treinta a causa de la Gran Depresión y del avance del fascismo. En segundo lugar, el franquismo surgió de la guerra civil, a diferencia del golpe incruento que llevó a Primo al poder. La negativa de Franco a reconocer ningún tipo de derechos a los vencidos tras la guerra y su determinación por establecer un reino del terror con ejecuciones a gran escala y encarcelamientos masivos hizo que las condiciones políticas de los años cuarenta fueran muy diferentes a las de la era primorriverista.

El exilio significó, en primera instancia, la salvación respecto de una represión segura. Sin embargo, quien pensó que cruzar la frontera permitía dejar atrás la guerra, se equivocó. Esta acompañó a los refugiados en forma de internamiento, humillación, divisiones y más guerra. Tampoco las esperanzas puestas en el final de la Segunda Guerra Mundial se cumplieron, y el exilio momentáneo se transformó en algo de duración incierta. Peor era la situación en la España de postguerra, donde la implacable represión pretendía perpetuar la división entre vencedores y vencidos.

Respecto del catalanismo, este desapareció como fuerza política o, cuando menos, quedó aletargado. Sus fuerzas se hallaban divididas por el exilio, diezmadas por la persecución, centradas en la pura supervivencia o, en el caso de los sectores más conservadores, adaptadas o reconvertidas en adhesiones al nuevo régimen. La máxima aspiración durante la negra nit (“la negra noche”) de buena parte del catalanismo se reducía a poder salvar la lengua y la cultura catalanas. Un propósito en que, tras la guerra, empezarían a coincidir con sectores católicos e inicialmente falangistas que se rebelarían menos intransigentes de lo esperado. Mientras tanto, la resistencia efectiva al franquismo quedaba principalmente en manos de los militantes anarquistas y comunistas.

En Cataluña, las continuidades históricas entre el mundo previo a 1939 y el posterior serían, digamos, parciales y delicadas. La muerte de Pompeu Fabra en 1948 en el exilio representaba el final de una época.

El exilio

Con el final de la guerra, casi medio millón de personas cruzó la frontera francesa en unas condiciones climatológicas rigurosas y, en su mayoría, en precarias condiciones de transporte y de supervivencia. Su situación se vio empeorada tanto por los ataques contra las columnas de refugiados por parte de las tropas franquistas como por la acogida recibida. Aunque se preveía dicho alud, según Bartolomé Bennassar las autoridades francesas no habían acondicionado suficientes espacios ni personal, en parte por imprevisión, en parte por las presiones políticas internas contrarias a los refugiados.

Mientras la mayoría de mujeres, niños y gente mayor era repartida por centros de acogida de toda Francia, los hombres en edad militar —más algunas mujeres y niños— sufrían internamiento en campos improvisados en el sur de Francia. Los dos mayores, Saint-Cyprien y Argèlers-sur-Mer, alojaron a 180.000 personas en playas sin ningún tipo de protección, limitadas con alambradas y vigiladas por ametralladoras. Entre 15.000 y 50.000 personas murieron de frío, hambre y enfermedades en aquellas primeras semanas. Ante estas condiciones y las inciertas promesas franquistas, no es extraño que 200.000 personas retornaran a territorio español.

Sin embargo, muchos otros miles prefirieron quedarse en Francia o emigrar a terceros países. Entre estos se hallaban unos 60.000 catalanes. Si su número ya era importante, más relevante aún era su significancia: entre los exiliados se hallaba buena parte de la elite política y cultural catalana. En otras palabras, Cataluña se quedaba casi sin cuadros dirigentes y algunos ámbitos de las artes y el conocimiento quedaban desiertos. Personalidades como el poeta Carles Riba, el médico Josep Trueta, el músico Pau Casals, la novelista Mercè Rodoreda o el arqueólogo y rector de la Universidad de Barcelona Pere Bosch Gimpera desaparecían del horizonte cotidiano catalán. Todos sabían qué hubiera significado

quedarse en España, en palabras de Bosch Gimpera: “Si la sublevación hubiese triunfado en Barcelona, yo habría sido uno de los ‘liquidados’”.

Si el exilio ya acostumbra a no ser sencillo, peor aún era iniciarlo de forma involuntaria y tras una derrota. De hecho, perdida la guerra se inició una etapa de reproches entre los diferentes sectores del bando republicano, con acusaciones cruzadas y amargas disputas por los escasos recursos disponibles. La posterior ocupación nazi no hizo sino empeorar la situación y acabó de convencer a muchos exiliados de alejarse de la frontera y de Europa para emprender una nueva vida en América Latina, especialmente en México.

La propia Generalitat en el exilio se vio superada por las peticiones de ayuda, y los rumores sobre favoritismos, en uno u otro sentido, agriaban las relaciones personales y políticas. Para evitar una mayor fractura, Companys creó un Consell Nacional de Catalunya, que sustituía al disuelto Gobierno, formado por personalidades elegidas por su relevancia pública y no por su representatividad política (Pompeu Fabra, Santiago Pi i Sunyer, Josep Pous i Pagès, Antoni Rovira i Virgili y Jaume Serra i Húnter). Durante los primeros meses, y gracias a conexiones personales previas en territorio francés, buena parte de la clase política e intelectual catalanista pudo trampear la situación mientras otro grupo relevante se instalaba en Inglaterra.

Este último colectivo sería quien tomaría el relevo del Consell a partir de 1940 coincidiendo con la caída de Francia, la dispersión de los exiliados en aquel país y la detención y posterior ejecución del presidente Companys. Ante el vacío institucional y desde posiciones claramente pro aliados, esta institución —bajo la presidencia del político y escritor Carles Pi i Sunyer, junto con personalidades como el médico Josep Trueta o el historiador Josep Maria Batista i Roca— acabó operando como plataforma unitaria del catalanismo progresista, con una delegación entre la creciente colonia catalana en México y contactos en el interior a través del Front Nacional de Catalunya (FNC).

La derrota de las potencias del Eje abrió muchas expectativas y planes para el retorno. La aletargada Generalitat volvió a la vida con el nombramiento como nuevo presidente del hasta entonces

presidente del Parlamento, Josep Irla. Este incluso nombró un Gobierno en el exilio, de amplia representación política y con figuras prestigiosas como el lingüista Pompeu Fabra o el poeta Josep Carner. Ello supuso la disolución, no sin polémica, del Consell, con la intención de trasladar una imagen de unidad y de recordar a las potencias victoriosas que el retorno de la democracia a España debía ir acompañado de la restauración de la autonomía catalana.

La ONU llegó a condenar al régimen franquista en 1946 y, sin embargo, el siguiente paso nunca se produjo. Las esperanzas cultivadas durante toda la Segunda Guerra Mundial se habían demostrado ilusorias. El mazazo fue terrible. Para muchos exiliados, el retorno se alejaba casi irremediabilmente y las urgencias cotidianas se imponían. En 1948 Irla disolvía el Gobierno en el exilio y pedía ser sustituido. Al catalanismo exiliado le costaría recuperarse de aquella decepción: retornaba a las viejas querellas, las segundas generaciones se integraban en los países de acogida... La distancia tendía a idealizar aquella Cataluña perdida, y los esfuerzos pasaron a centrarse en la propia supervivencia y en la conservación de la cultura y la lengua.

No menos decepcionante fue la inhibición aliada respecto de la España franquista para los militantes comunistas y anarcosindicalistas que habían permanecido cerca de la frontera a la espera de que los acontecimientos internacionales revirtiesen la situación española y que, mayoritariamente, se habían integrado en la resistencia anti-nazi. Concentrados alrededor de Toulouse, su participación en la Segunda Guerra Mundial les otorgó un cierto reconocimiento por parte de la sociedad francesa, pero nada más. Así, la invasión del Valle de Arán en octubre de 1944 por parte de veteranos comunistas acabó en fracaso, pues no provocó levantamientos solidarios en el resto de España y, en cambio, hizo que el general Charles de Gaulle desarmara a los resistentes y reconociera al Gobierno de Franco. La resistencia armada siguió en forma de guerrilla, pero en declive. Así, a partir de 1948, quedó reducida a su mínima expresión, viviendo a caballo de la frontera y limitada a grupos singulares como los de los anarquistas Josep Lluís Faceries, Quicó Sabaté o Ramon Vila, Caracremada, abatidos en 1957, 1960 y 1963 respectivamente.

Vivir es sobrevivir

La particular significación de Cataluña para los insurgentes se rebelaba en multitud de detalles, desde el especial celo en la represión de cualquier expresión de catalanidad, incluso cuando provenía de sectores afines, hasta en la toma de medidas particulares que, paradójicamente, evidenciaban el reconocimiento de la existencia de un hecho diferencial. Así, por ejemplo, tras la ocupación de Barcelona se estableció un régimen especial de ocupación militar durante seis meses, ya que debía erradicarse la semilla del catalanismo, el republicanismo y el anarquismo.

Para el nuevo régimen, Cataluña representaba la síntesis de todos los peligros, pues a la cuestión social se sumaba la nacional. En la vertiente social, el sindicato mayoritario había sido históricamente la CNT, con una larga tradición organizativa y una amplia red de centros. En la nacional, el catalanismo de los años treinta ya no era el claramente burgués de la Lliga, sino que la hegemonía se había trasladado al nacionalismo interclasista y populista de ERC. Además, la sociedad catalana representaba la parte más urbana e industrial de la española, con presencia de elementos liberales, laicos y europeístas.

Conscientes de esta rica diferencia y realidad, la represión franquista se cebó especialmente en ambas tradiciones. Como destaca Andrew Dowling, la contundencia fue tal que, prácticamente, ni el anarquismo ni el republicanismo de izquierdas —el noucentisme de masas— sobrevivirán al franquismo. Entre 1938 y 1953, cerca de 4.000 personas fueron fusiladas como consecuencia de consejos de guerra. Huidos y exiliados los principales dirigentes políticos y sindicales, la represión golpeará con especial crudeza a cuadros medios, a menudo víctimas de delaciones e intereses privados, especialmente en zonas rurales.

Además, el castigo contenía una clara voluntad ejemplificadora. Se buscaba eliminar hasta el mismo recuerdo. Ningún hecho ilustra

mejor esta obsesión que el fusilamiento del presidente Companys en Barcelona el 15 de octubre de 1940. Detenido por la Gestapo en la Francia ocupada a petición del régimen franquista, fue trasladado a Madrid, donde fue interrogado y torturado antes de ser encarcelado en el castillo de Montjuïc para su ejecución. La bárbara venganza hacía surgir el mito del presidente mártir, cuyo proceso y condena intentan inútilmente anular desde 2006 sus sucesores al frente de ERC.

Sin embargo, la mayoría de hombres y mujeres eliminados al ser considerados enemigos políticamente peligrosos eran simples afiliados a ERC, a la CNT y a otras fuerzas de izquierdas. La contundencia de la represión buscaba difundir el terror y el miedo entre la población, incluso entre aquella que permanecía indiferente políticamente. A las penas capitales debían sumarse las depuraciones profesionales, los encarcelamientos, las palizas, los desterramientos, las multas, los campos de trabajo, las confiscaciones, las miles de humillaciones y la incertidumbre ante una justicia caprichosa y capciosa.

La represión pseudojudicial se vio completada por un fuerte control social teñido de nacional-catolicismo y la relegación de la lengua catalana al ámbito doméstico. De hecho, la cultura y lengua catalanas tomaron una evidente connotación política y separatista para el franquismo de estos primeros años. Ello conllevó la supresión de decenas de instituciones educativas y culturales, así como la persecución de toda manifestación de catalanidad. Algunos autores como Josep Benet han llegado a calificar la actuación de estos años como de “genocidio cultural”.

A pesar de los peligros, desde 1939 tuvieron lugar diferentes intentos de reconstrucción de las redes de resistencia, a cargo principalmente de la CNT y del PSUC. Las caídas de las sucesivas cúpulas no impidieron la continuidad de acciones que iban desde el puro testimonialismo propagandístico al sabotaje o a la colaboración con el maquis.

Con todo, la principal preocupación de la población era sobrevivir a una dura postguerra que se alargará hasta bien entrada la década de los cincuenta (alimentos y tabaco estuvieron racionados hasta 1952). Las precarias condiciones de vida se vieron agravadas por la

pervivencia de la división social entre vencedores y vencidos. La misma represión, más allá de la voluntad de castigar a los enemigos y someter a los indecisos, buscaba premiar a los vencedores implicándolos en las sanciones y vinculando sus intereses particulares, beneficiados por los cargos y prebendas que quedaban “libres”, con los generales del régimen. De esta forma, el franquismo se consolidaba.

Católicos y falangistas, pero menos

Lo cierto es que el franquismo se aplicó a la tarea de erradicar las instituciones, los partidos y las ideologías de izquierdas, republicanas y catalanistas —entendidas como separatistas— de la nueva Cataluña. Su lugar debía ser ocupado por los representantes de la nueva España. El problema era la escasez de efectivos locales. Los falangistas “camisas viejas” resultaban insuficientes y los carlistas, mucho más numerosos —durante la guerra contaron incluso con un cuerpo militar propio: el Tercio de Nuestra Señora de Montserrat—, nunca consiguieron el mismo grado de influencia. Como ha documentado Martí Marín, la supuesta preeminencia falangista quedaba en realidad a merced del gobernador civil de turno, auténtica y única fuente de poder político en cada provincia, siempre que estuviese en sintonía con la autoridad militar representada por el capitán general.

Sin embargo, más allá del partido único existían diversos grupos sociales, principalmente miembros de la burguesía y profesionales liberales que, de forma más o menos entusiasta, podían prestarse a colaborar con el franquismo. Entre los más significados, se encontraban los llamados catalans de Burgos, integrados por diferentes grupos que, durante la guerra, se habían refugiado en la España franquista. Algunos de ellos ya eran viejos conocidos por su conservadurismo y su colaboración con el régimen primorriverista, como el primer presidente de la Diputación de Barcelona franquista, Josep Maria Milà Camps, conde del Montseny, o el corporativista Eduardo Aunós, embajador y posteriormente ministro de Justicia e impulsor de la Causa General.

Pero, sin duda, los dos colectivos más relevantes procedían de la Lliga y del entorno católico, cuando no compartían orígenes. Los primeros, nuevamente atrapados entre el conservadurismo y el catalanismo, apostaron por el primero, alarmados ante la violencia en la retaguardia republicana y convencidos de estar lidiando con

una ola de españolismo unitarista de corta duración, similar a la ya vivida con Primo de Rivera. La realidad fue muy diferente y a pesar de la relevante colaboración lligaire —financiera, propagandística, logística y de espionaje—, el catalanismo y sus instituciones quedaron invalidados, independientemente del sector social que los hubiera sostenido, fuese este más o menos conservador o progresista.

Ante este panorama, Cambó dio libertad a sus seguidores y permaneció en el exilio, muriendo en Buenos Aires en 1947. Entre estos, hubo quien se retiró de la vida pública para centrarse en los negocios y quien aceptó cargos menores en la administración franquista. También se dieron casos de implicaciones relevantes como la de Joan Ventosa i Calvell, procurador en las primeras Cortes franquistas. Estas colaboraciones implicaban, a menudo, públicos descargos de conciencia por parte de quienes aspiraban a sumarse al nuevo régimen. Las adhesiones debían ser “inquebrantables”, “espontáneas” y cuanto más “entusiastas” mejor.

Así, en los primeros meses de la Cataluña franquista, llamará la atención la nueva y significativa adjetivación de La Vanguardia española, o artículos aparecidos en sus páginas como los firmados por Carles Sentís, “Finis Cataloniae?”, donde se calificaba al catalanismo como “una película de ‘gánsters’”, o por Ferran Valls Taberner, “La falsa ruta”, en que se asumía este como un error que había conducido al desastre. Ambos venían a coincidir en la descripción del catalanismo como una ideología fallida, cuyo proyecto se hallaba alejado de la realidad. Por lo tanto, se debía deshacer lo andado para centrarse en la Cataluña real que ellos identificaban como una Cataluña española.

Respecto de los católicos, estos habían constituido la principal fuente de legitimación personal y doctrina desde el 18 de julio de 1936. Ahora, tras la derrota de nazis alemanes y fascistas italianos, aparecían como la mejor opción para romper el aislamiento internacional y maquillar el régimen franquista. Dentro de este paraguas prácticamente semiautónomo, se inició una lenta recuperación de elementos culturales autóctonos catalanes, siempre entendidos como manifestaciones subsidiarias y regionales de la única cultura completa y real: la española. Por tanto, las tímidas

manifestaciones de catalanidad debían interpretarse como acciones propagandísticas y folklorizantes, y en ningún caso como una corrección de la condena al catalanismo o un retorno a la cultura catalana previa a 1936.

Así, a partir de 1945 se autorizaron las primeras publicaciones en catalán, siempre y cuando se centrasen en temática religiosa y se realizaran en la arcaizante ortografía prefabriana. En otras palabras, se permitían los goigs o cualquier otro uso con olor a pasado, mientras el resto de manifestaciones culturales quedaban restringidas al castellano. También se autorizaba la sardana, aunque algunas piezas seguirán prohibidas por su significancia, las actuaciones del Orfeó Català o la representación de ciertas piezas de teatro catalán. El franquismo abría lo mínimo la puerta de la cultura catalana y lo hacía de forma sesgada y en beneficio propio. Sin embargo, incluso l'escletxa (“la grieta”) sería aprovechada con el tiempo.

Paralelamente, también a nivel privado tenían lugar algunos movimientos por parte de antiguos catalanistas que habían permanecido en el país, habían superado condenas menores o se habían aventurado a retornar desde el exilio. Se creaba así una red cultural clandestina, con organismos como los Estudios Universitarios Catalanes, las ediciones clandestinas o los grupos de lectura. En 1942, el Institut d'Estudis Catalans retomó sus sesiones en la clandestinidad de casas particulares. Eran hechos menores, que afectaban a pocas decenas de personas, mayoritariamente procedentes de extractos determinados de la sociedad —no hallamos aquí a obreros— y que se realizaban en la clandestinidad, pero todo ello evidenciaba que la cultura catalana no había muerto. Las actuaciones más públicas, como Primera història d'Esther, de Salvador Espriu, o el grupo Dau al Set (Joan Brossa, Antoni Tàpies, Modest Cuixart...), ambos surgidos en 1948, debían presentarse de forma codificada o misteriosa para evitar problemas.

La primera coincidencia importante entre los diferentes sectores que trabajaban por resucitar la cultura catalana se producirá en abril de 1947, con motivo de la entronización de la virgen de Montserrat, patrona de Cataluña. Aunque inicialmente se trataba de un acto menor, visto por el franquismo como una manifestación del vigor de la

Cataluña cristiana —en su momento, los monjes habían acogido la llegada de las tropas franquistas con entusiasmo—, para sus participantes tomó otro claro sentido, pues en el comité organizador coincidieron personas provenientes de ambos bandos, e incluso se había previsto el retorno de Cambó, pero su muerte lo impidió.

La Comisión Abad Oliva, responsable de la celebración, acabó acogiendo a personalidades relevantes de la resistencia cultural como Fèlix Millet i Maristany o Maurici Serrahima Bofill, al lado de jóvenes valores como el futuro líder socialista Joan Reventós o el demócratacristiano Antón Cañellas, bajo la presidencia de una persona tan afín al régimen como Fèlix Escalas y con el abogado y activista Josep Benet como principal impulsor. Además, al hecho conciliador de compartir un mismo proyecto de catalanidad confesional desde bandos opuestos durante la guerra se sumó la testimonial exhibición de una gran bandera catalana durante la ceremonia.

Este naciente compromiso por parte de sectores de la Iglesia catalana con una cierta recuperación de la catalanidad derivaría con el tiempo hacia el catalanismo e incluso el compromiso sindical. Sin embargo, ello era compatible con una jerarquía que mantenía su identificación con el régimen franquista. La demostración de este compromiso se evidenció pocos años después, en 1952, cuando Barcelona acogió el XXXV Congreso Eucarístico Internacional. Dicha plataforma fue aprovechada por el franquismo para presentarse como un Estado católico, arrinconando la antigua retórica falangista. La puesta en escena y la participación fueron impresionantes, dando lugar al sobrenombre de “la olimpiada de la hostia”.

Además de en ciertos círculos católicos, también entre algunos falangistas se produjeron evoluciones que acabarían siendo relevantes, sobre todo a nivel cultural. La propia revista Destino, decana del falangismo catalán pues inició su publicación en el Burgos de 1937, había virado de la mano de Josep Vergés, Ignasi Agustí y Juan Ramón Masoliver hacia posiciones cada vez menos “azules”. Sin perder un tono e imagen de alta cultura y con gran predicamento entre la burguesía catalana, supo ir incorporando a sus páginas a importantes escritores e intelectuales catalanes como

Josep Pla o Jaume Vicens Vives. Ya durante la Segunda Guerra Mundial se situó en posiciones claramente aliadófilas y, de forma creciente, se convirtió en un referente liberal y catalanista.

Capítulo 9

Resistencialismo y normalización (1945-1975)

En su libro sobre historia de Cataluña, Andrew Dowling recurre al ya mencionado esquema diseñado por el historiador checo Miroslav Hroch para estudiar los movimientos nacionales en el Este de Europa. Según dicha propuesta, todo movimiento nacional podía presentar tres fases, aunque no necesariamente de forma lineal ni siempre completas: la primera corresponde al descubrimiento de la cultura nacional a través de las letras, el segundo momento coincide con un periodo de agitación patriótica o de nacionalismo político, y finalmente tiene lugar la emergencia de un movimiento de masas.

Para Dowling, este modelo no solamente encaja para Cataluña, con algunas adaptaciones, sino que lo hace doblemente. Así, el triple proceso habría ocurrido en primer lugar entre finales del XIX y los años treinta del siglo XX, concretándose en la *Renaixença*, el *Noucentisme* —el retroceso primorriverista— y el periodo republicano. Tras la guerra civil, el catalanismo habría retornado a la casilla de inicio y repetía nuevamente el ciclo.

De esta manera, 1939 se convertiría en el año cero del esquema de Hroch y la larga postguerra, en el tiempo de redescubrimiento o salvación de la cultura y la lengua nacionales. Asegurada la supervivencia de estas, ahora se abriría lentamente la segunda fase de agitación patriótica a partir de la cultura. De la cultura de resistencia se pasaría lentamente a un primer antifranquismo político, en cuyo seno coincidirán desde nuevos movimientos a herederos del pasado republicano y sectores evolucionados del catolicismo y el falangismo. Ahí se forjará un proyecto político unitario, identificado mayoritariamente con un catalanismo que entendía democracia y autonomía como sinónimos.

Además, el catalanismo mantuvo en estos años su compromiso con España. El independentismo seguía siendo residual y, en cambio, se manifestaba una voluntad de participación en la reforma y la regeneración de España, mediante el reconocimiento de la pluralidad de pueblos que la componían. Como señala Agustí Pons, esta lectura era difundida, sobre todo, por el historiador Jaume

Vicens Vives en su Notícia de Catalunya (1954, ampliada en 1960) y el poeta Salvador Espriu en La pell de brau (1960). En ambos casos y no por casualidad, los dos habían sido discípulos de Pere Bosch Gimpera quien, a partir de su propia teoría arqueológica sobre la confluencia de diferentes pueblos en el pasado peninsular, defendía la diversidad como la auténtica base de una futura España.

La cultura de la resistencia

En la década de los cincuenta, el franquismo se consolidó internacionalmente. En 1953 se firmaba el concordato con el Vaticano y el acuerdo bilateral con Estados Unidos, y en 1955 se admitía a España en la ONU. La sensación de fracaso se extendió entre el exilio y, especialmente, entre los refugiados de mayor edad. Ante esta situación, las posturas iban desde quienes renuncian a toda esperanza, quienes apostaban por mantener algún tipo de acción testimonial y quienes optaban por un incierto retorno.

En este clima tenía lugar en 1954 la elección de Josep Tarradellas como presidente de la Generalitat por parte de un grupo de diputados en la embajada republicana en México, en sustitución del agotado Irla. El nuevo presidente mantendría un perfil institucional bajo, sin nombrar ningún Ejecutivo, y obsesionado con preservar el apartidismo de la Generalitat. Desde el exilio, únicamente comunistas y anarquistas mantenían una cierta propaganda interna y externa. Ni el clima de guerra fría internacional ni la consolidación de la dictadura en España resultaban propicios.

El desánimo ante dicha consolidación y la dureza de la represión diezmaban progresivamente a las organizaciones opositoras clandestinas en el interior. De ahí que, singularmente, la protesta más relevante en Barcelona durante estos primeros años careciera de una dirección política y estuviera motivada por la precariedad de las condiciones de vida, en concreto por una alza abusiva del coste del transporte público que desembocó en una masiva huelga de tranvías en 1951 —se repetiría en 1957, pero sin el mismo éxito ni espontaneidad—. Miles de usuarios se negaron a hacer uso de ellos, en protesta por el encarecimiento de un servicio básico y por el agravio comparativo respecto del de Madrid. El carácter espontáneo y masivo de la protesta pilló con el pie cambiado al régimen, pues no se podía reprimir a nadie y, finalmente, optó por retirar el incremento.

Poco después, la economía española iniciaba una evidente mejora tras el sinsentido de la autarquía: se había tardado 20 años en recuperar los indicadores de producción industrial y renta por habitante previos a la guerra. La reorientación fijada en el Plan de Estabilización de 1959 —con Joan Sardà Dexeus, antiguo colaborador de Tarradellas durante la guerra, entre sus responsables— tuvo que vencer las resistencias del general Franco, pero el giro acabó cayendo por su propio peso.

En Cataluña, los efectos de la apertura económica fueron, si cabe, mucho más profundos que en cualquier otro territorio. La tradicional industria textil dio paso a otra mucho más diversificada, abriéndose a las inversiones extranjeras, con la instalación de la Seat en Barcelona en 1954 como máximo ejemplo; la construcción se disparó para, entre otras razones, acoger a los miles de emigrantes provenientes del resto de España; y el sector servicios vivió también un gran desarrollo, impulsado por el turismo. La transformación cambió el mismo paisaje físico, social, cultural y humano de Cataluña. Surgía una nueva clase media, se incrementaba la diversidad obrera y nacían nuevos sectores contestatarios al régimen.

La inmigración no era un fenómeno nuevo en Cataluña, pero entre 1960 y 1975 llegaba en una proporción nunca vista —casi un millón de personas para una población total de cinco millones que ya contaba con un fuerte componente emigrante— y de todos los puntos de España. Esta masiva oleada se instaló sobre todo en el cinturón industrial de Barcelona —y en menor medida en el de Tarragona, impulsado por la petroquímica—, a menudo sin las condiciones mínimas de vivienda, transporte o servicios básicos. A esta precariedad se sumaba el hecho de descubrir la existencia de una cultura y una lengua propias, hasta entonces desconocidas.

Para el catalanismo esto representaba un profundo desafío de integración. Una primera respuesta se articuló en 1964 a través del libro de Paco Candel —él mismo inmigrante, aunque llegado en los años veinte desde un pueblo castellanoparlante de Valencia— *Els altres catalans*. Allí se defendía la integración a partir de la voluntad de ser catalán y reconocer la cultura de acogida, y no de exigencias raciales o étnicas. Con el tiempo, esta visión cultural del

ser catalán se demostraría sumamente efectiva.

La integración también se beneficiaría de la percepción de compartir enemigo por parte del sindicalismo clandestino y el catalanismo menos radical. La persecución de la cultura catalana acabó dotándola de un aura antifranquista que le daba prestigio a ojos de dicha inmigración. Como puede leerse en los informes del Consejo Nacional del Movimiento, rescatados por el historiador Carles Santacana, esta falta de conflictividad por temas lingüísticos y culturales no dejaba de resultar sorprendente para sus miembros.

Por otro lado, 20 años después de acabada la guerra, algunas adhesiones aparecían menos inquebrantables de lo que el régimen quería aparentar. Incluso en el diario más representativo de la burguesía catalana, *La Vanguardia española*, el Consejo de Ministros se veía obligado a sustituir como director a un quemado Luis Martínez de Galinsoga por Manuel Aznar en febrero de 1960. Meses antes, el director saliente había gritado en público que “todos los catalanes son una mierda” tras salir indignado de una misa en catalán. El boicot posterior al diario —con Jordi Pujol y, nuevamente, Josep Benet en la sala de máquinas— acabó obligando a la familia Godó, propietaria de la cabecera, a solicitar el cambio de dirección.

Ante esta situación, el franquismo opta por abrirse a un “sano regionalismo”, tentado abiertamente a personalidades provenientes de la antigua Lliga o miembros de la burguesía catalana. Así cabe interpretar la incorporación como ministro sin cartera de Pere Gual Villalbí, secretario de la patronal catalana, al gobierno de 1957, o el nombramiento como alcalde de Barcelona, el mismo año, del ex-lligaire José Maria de Porcioles. Sin embargo, estos movimientos eran puramente estéticos y sin profundidad política. Incluso cuando en 1960 las Cortes aprueban la compilación del derecho civil catalán, se actúa dentro de unas coordenadas de folklorización y propaganda. Lo cierto es que la sociedad catalana se alejaba del régimen y, salvo excepciones, las implicaciones concretas buscaban beneficios directos, como las recalificaciones y especulaciones que caracterizaron el largo mandato de Porcioles al frente del consistorio barcelonés.

Esa progresiva politización del activismo cultural se acentuaba por

la persistencia de la represión franquista. La propia intransigencia del régimen acababa dotando de connotación política cualquier manifestación de catalanidad, ayudando a consolidar involuntariamente mitos y dirigentes. Así sucedió en los llamados hechos del Palau de la Música el 19 de mayo de 1960, cuando un grupo de jóvenes quiso aprovechar la conmemoración del centenario del nacimiento del poeta Joan Maragall para entonar el prohibido Cant de la senyera y lanzar octavillas de denuncia. La posterior represión, con torturas y consejo de guerra, convirtió al encarcelado Jordi Pujol en una figura reconocida de la oposición democrática catalanista.

Para el activismo cultural catalán, la lengua y la cultura catalanas se habían salvado, habían sobrevivido a la dura represión de los primeros años de postguerra. Ahora, en la década de los sesenta, se trataba de darle prestigio y difundirla más allá de los círculos más concienciados, combatiendo así los intentos folklorizantes del régimen. Este paso necesitaba de un despliegue de plataformas adecuadas, objetivo en que, como ha destacado el historiador de la cultura Jordi Amat, coincidían tanto históricos activistas como Josep Benet como la burguesía más concienciada —en algunos casos tras una etapa franquista y, sobre todo, enriquecida por el régimen— agrupada en torno a Òmnium Cultural, fundado en 1961. Sin embargo, el factor decisivo sería la convergencia hacia dicho objetivo por parte de sectores católicos y comunistas, pues estos aportarían tanto los intelectuales como las masas.

En estos años surgen iniciativas tan relevantes como la editorial Edicions 62, cuyo claro objetivo era sumar a la ya existente oferta en narrativa —Editorial Selecta, Aymà, Club Editor...— colecciones de ensayo y no ficción como paso imprescindible para conectar la cultura catalana con las grandes corrientes europeas. En su creación hallamos a Max Cahner y Josep Maria Castellet como ejemplos de intelectuales comprometidos con el catalanismo y la cultura catalana desde ámbitos ideológicos distintos, y presentes en casi todas las iniciativas del periodo. Posteriormente, el propio Cahner, junto con Ernest Lluch, Jordi Carbonell y Ramon Folch, pondrían en marcha el proyecto de la Gran Enciclopèdia Catalana. Aunque con algunos problemas económicos —nace en Edicions 62 y finalmente se independiza con la ayuda de la Banca Catalana de Jordi Pujol—,

en 1969 se publica el primer volumen de una obra que pretendía ser de referencia, para realzar tanto el conocimiento como la realidad de las tierras de habla catalana.

Como plataforma unitaria de expresión de la intelectualidad catalanista, se consolidará en estos años la revista *Serra d'Or*. Nacida al amparo de la Abadía de Montserrat en 1959, derivó de la temática religiosa hacia la cultural. Sus páginas fueron punto de encuentro para toda manifestación artística o de cultura catalana, se convirtió en un ejemplo de resistencia cultural y estuvo por encima de las divisiones ideológicas y generacionales, convirtiéndose en un nuevo ejemplo de la fuerza de la unidad. También de origen montserratino, cabe destacar la revista *Cavall Fort* que en 1961 retomaba la publicación de una revista en catalán dirigida al público infantil e introducía las novedades del cómic internacional en Cataluña.

Mayor seguimiento tuvieron otras iniciativas como la *Nova Cançó* (“la Nueva Canción”), convertida en un auténtico fenómeno de masas. Los pioneros —con una fuerte influencia de la chanson francesa— se agruparon en el colectivo *Els Setze Jutges* (“Los dieciséis jueces”, en referencia a un conocido trabalenguas catalán) con el objetivo inicial de modernizar la expresión cultural catalana y utilizarla para referirse a las cuestiones actuales. Sobre todo los miembros más jóvenes —Joan Manuel Serrat, Lluís Llach y Maria del Mar Bonet— y, especialmente, el valenciano Raimon, ajeno al movimiento inicial, lograron una gran influencia social y musical, trascendiendo incluso el ámbito catalán y siendo víctimas frecuentes de sanciones y censura. Los impedimentos gubernamentales a estas expresiones culturales evidenciaban los límites de la tolerancia oficial y constataban el simbolismo político que ambas partes les otorgaban.

De hecho, la afirmación de la cultura propia facilitó la concreción de iniciativas unitarias que, a su vez, constituían afirmaciones del carácter nacional. El catalanismo tenía así buena parte de la expresión cultural del momento. En este sentido, el encierro en Montserrat de 250 intelectuales catalanes —Joan Miró, Antoni Tàpies, Alexandre Cirici, Montserrat Roig o Terenci Moix, entre otros— como protesta por el proceso militar y posterior condena a

muerte de diversos militantes de ETA en Burgos a finales de 1970 representó una nueva muestra de unidad antifranquista desde diferentes sensibilidades. La protesta, además, tuvo bastante repercusión internacional y llevó a la creación de la Assemblée Permanent d'Intel·lectuals Catalans, máxima expresión del compromiso cultural y político de profesionales, artistas y escritores.

Un primer antifranquismo

El primer precedente importante debe situarse en 1958 cuando, en torno a Claudi Ametlla, veterano militante de ACR y patriarca del catalanismo clandestino tras retornar del exilio 10 años antes, se constituía el Consell de Forces Democràtiques de Catalunya —más conocido como Comitè Ametlla—. En él figuraban los herederos del naufragio republicano (UDC, Moviment Socialista de Catalunya (MSC), FNC, ERC y otros grupos menores). Se trataba del eslabón imprescindible entre el viejo y el nuevo antifranquismo, un espacio de aprendizaje y conocimiento mutuo. Era el primer paso antes de superar la fractura con otras fuerzas clandestinas como los comunistas, o de extender la mano a los sectores disidentes dentro del propio régimen.

La distancia entre la sociedad catalana y el régimen franquista incluso afectaba a núcleos originalmente falangistas. Así, los jóvenes fundadores de la revista Laye habían evolucionado desde su fundación en 1950 hacia posiciones cada vez más molestas para el franquismo, logrando ser clausurados cuatro años más tarde. De aquí surgirían futuros dirigentes de la izquierda catalana, tanto socialistas como comunistas. También de expresión castellana, pero con una orientación y temática religiosas, nació en 1951 la cabecera El Ciervo. En este caso, su relevancia se iniciaría a partir de 1958, cuando giró hacia posiciones alejadas del nacional-catolicismo y anunciadoras de los nuevos aires que traería el Concilio Vaticano II (1962-1965), cercanos a un catolicismo popular y progresista, inmune a nacionalismos, de intencionalidad democratizante, ecuménico y con distintas modulaciones izquierdistas.

En ambos casos, se trataba de una modificación sustancial del funcionamiento de la moderna cultura catalana, pues las dos compartían el uso del castellano. Dicho uso era en parte obligado —no se permitía el uso del catalán en revistas de este estilo— y en parte lógico, pues era la lengua de cultura habitual para toda una

generación y, además, sus redactores se sentían integrados y vinculados al resto de equipos culturales de España. Como señalan Jordi Amat y Joan Fuster Sobrepere, para el resistencialismo cultural, comprometido con el restablecimiento de un sistema cultural catalán autónomo, la cultura catalana de expresión castellana se sentía como ajena. Para quienes la protagonizaban, dicho conflicto no existía ni se sentían partícipes de ningún proceso de desnacionalización o de españolización, sino inmersos en una convivencia e interdependencia cultural ya iniciada siglos antes. En esta dinámica debe situarse la decisión del poeta Carles Riba de participar a partir de 1952 en un diálogo franco con figuras de prestigio del sistema literario español.

Los nuevos aires dentro del catolicismo antes mencionados incluían un llamamiento para acercar la Iglesia al pueblo y especialmente a los pobres. Esta doctrina se oponía completamente al nacional-catolicismo y provocará que activistas e intelectuales católicos cuestionen a su propia jerarquía y al mismo régimen franquista. Estos últimos, en connivencia con especuladores y empresarios, se aprovechaban de la inmigración proveniente del resto de España, construyendo una nueva periferia urbana donde abundaban las desigualdades y las injusticias. Miembros de la Hermandad Obrera de Acción Social, de la Juventud Obrera Católica o simples párrocos se implicarán en la lucha contra esa precariedad, en un camino que les llevará hacia la politización del movimiento y su acercamiento a la izquierda marxista.

En estos territorios de confluencia, también hallamos el Front Obrer de Catalunya formado por jóvenes estudiantes de formación marxista y núcleos católicos, o el FNC, y su posterior escisión en 1968 de la que nace el Partit Socialista d'Alliberament dels Països Catalans (PSAN), donde se vinculan marxismo y nacionalismo. Sin embargo, su relevancia vendrá dada principalmente por ser vehículos de formación de futuros dirigentes, y no tanto por su influencia real.

También el resurgir del catalanismo conservador estará estrechamente vinculado a la Iglesia catalana. Pequeños grupos de jóvenes de extracción burguesa y clase media, como el Grup Torras i Bages, empiezan a organizar encuentros con el escritor y resistente

cultural Raimon Galí, como inspirador, y la Abadía de Montserrat como protección. Los primeros debates sobre cuestiones sociales y catalanismo evolucionan hasta que en 1954 nace el grupo CC (Crist Catalunya o Cristians Catalans), desde donde se articulará un catalanismo católico del que surgirán figuras como Jordi Pujol.

La evidencia del distanciamiento entre sectores eclesiásticos catalanes y el franquismo llegó en septiembre de 1963 a raíz de unas declaraciones del abad de Montserrat, Aureli Maria Escarré, al diario *Le Monde*. Su crítica directa al régimen, las referencias a la represión y la defensa de la cultura catalana rápidamente se difundieron pues era la primera vez que un dirigente católico criticaba abiertamente a la dictadura. Sus palabras le costaron el exilio, pero ya no había vuelta atrás. En 1966 se producían dos hechos insólitos. Por un lado, una manifestación de jóvenes curas por las calles de Barcelona en protesta por las torturas sufridas por un estudiante a manos de la policía y, por el otro, el inicio de un campaña que bajo el lema “Volem bisbes catalans” (“Queremos obispos catalanes”) exigía autoridades eclesiásticas en sintonía con sus creyentes.

A estos sectores evolucionados dentro del franquismo o supervivientes a la guerra, se sumó la renovada fuerza del PSUC, cuyo prestigio en la lucha antifranquista le había generado una notable inyección de nuevos militantes del interior. Su capacidad de organización, su apuesta por una política unitaria de oposición — que también buscaba romper prejuicios en su contra— y su estrategia de reconciliación nacional, le otorgaron una gran ascendencia entre obreros, estudiantes e intelectuales. Al ser percibido como el más eficaz en la lucha clandestina, incluso sectores no comunistas acabaron colaborando, especialmente cuando empezó a distanciarse de la estricta obediencia soviética a raíz de la invasión de Praga en 1968.

La actitud hacia el comunismo era precisamente el mayor obstáculo para la unificación socialista catalana, sumadas a las clásicas diferencias entre dirigentes en el exilio y en el interior. Así, mientras Joan Reventós personificaba la línea más marxista y menos reacia a la colaboración con el PSUC y se convirtió en el máximo impulsor del socialismo en Cataluña, Josep Pallach, que no

retornó del exilio hasta 1969, mantenía las prevenciones propias de un antiguo militante del POUM.

Sin embargo, los dos colectivos principales por capacidad de movilización que protagonizaron las protestas contra el régimen, sobre todo a partir de la década de los sesenta, fueron el estudiantil y el obrero, con una complicidad evidente de sectores católicos que les facilitaban cobertura y medios. Los primeros representaban una nueva generación, crecida al margen de los referentes previos a la guerra y atraída por el discurso y la mítica marxista. En 1957, el Paraninfo de la Universidad de Barcelona acogía una primera Asamblea Libre que presagiaba futuros problemas para el régimen.

En la década de los sesenta, el Sindicato Español Universitario (SEU) aceleró su degradación, acosado por las plataformas democráticas impulsadas por los propios estudiantes —con una clara influencia izquierdista, primero del PSUC y posteriormente de grupúsculos a su izquierda, y un catalanismo variable—. De hecho, el SEU fue la única organización disuelta en vida del general Franco, en 1965. Aquel mismo año, se convocaron elecciones para elegir representantes a las recién creadas Asociaciones Profesionales de Estudiantes —el organismo que debía sustituir al difunto sindicato franquista—, pero sus urnas fueron boicoteadas masivamente, siguiendo consignas de la asamblea de distrito y de la junta de delegados opositora.

Este éxito lleva a la constitución del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona el 9 de marzo de 1966 en el convento de los capuchinos de Sarriá, en la ciudad de Barcelona. La policía descubre el encuentro y organizará un asedio —no podía entrar en un recinto religioso— que se prolongará durante tres días, con los 500 delegados estudiantiles, diversos profesores y 33 destacadas personalidades culturales —Salvador Espriu, Antoni Tàpies o Maria Aurèlia Capmany— en su interior. La universidad catalana ya no volvería a ser controlada por el franquismo.

La Caputxinada provocará una serie de actos solidarios con diversas huelgas e incidentes. Además, este encuentro marcará el camino de la unidad opositora y la aceptación de la integración —y en parte de su hegemonía en la lucha antifranquista— del PSUC por parte del resto de

fuerzas políticas, convirtiéndose en un antecedente de la futura Assemblée de Catalunya.

Respecto del movimiento obrero, este también sufrirá un profundo cambio durante la década de los sesenta. La expansión intensa y repentina de la economía comportó un crecimiento importante de trabajadores industriales y de servicios. Esta demanda se cubrió con la mano de obra procedente de la inmigración y de las nuevas generaciones, forjándose una conciencia obrera nueva que aprendió a sacar partido de los resquicios de la legislación franquista. A partir de 1963, las elecciones sindicales —de la oficial Organización Sindical Española— fueron aprovechadas por núcleos obreros alternativos para penetrar el sistema, representar de forma efectiva a sus compañeros y participar de las negociaciones colectivas entre obreros y empresarios que permitía la Ley de 1958. Este “entrismo” primero estuvo poco organizado, pero lentamente derivó en una plataforma unitaria que acabaría tomando el nombre de Comisiones Obreras a partir de 1964, cuando 300 trabajadores se reunieron en la parroquia barcelonesa de Sant Medir.

La influencia de Comisiones Obreras se acentuó coincidiendo con sus primeros logros y por la coincidencia en su seno tanto de sectores provenientes del catolicismo sensible a las cuestiones sociales como de otros más próximos a las ideologías de izquierdas, con un papel destacado del PSUC. En las elecciones de 1966 sus candidaturas lograron la mitad de los votos de los ramos del metal, la construcción y el textil. Su actuación evidenciaba las contradicciones del régimen y, a pesar de los intentos de represión —en marzo de 1967 son ilegalizadas y pasan a la clandestinidad—, su peso era cada vez mayor. Acostumbrado a reprimir a la CNT y la UGT, el franquismo no sabía cómo actuar ante un nuevo desafío donde se mezclaban católicos, socialistas y comunistas.

Las reivindicaciones iniciales estaban claramente vinculadas a cuestiones laborales (un sueldo mínimo digno, mejoras salariales, libertad sindical, derecho de huelga, semana laboral de 40 horas, seguridad, etc.), pero lentamente se fueron tiñendo políticamente, al confluir con otros sectores en la demanda de libertades. La propia represión y falta de respuestas adecuadas por parte del régimen acabaron generando una conciencia política antifranquista a

obreros inicialmente poco implicados. Además, Comisiones Obreras jugó un importante papel, por el carácter heterogéneo de sus miembros, en la integración en la cultura catalana de ese mismo mundo obrero.

La Asamblea de Catalunya como paradigma

Mucho antes que en el resto de España, la clandestina oposición democrática catalana logró una poderosa imagen de unidad. En 1969 se daba a conocer públicamente la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques, en cuyo seno hallábamos a los ya clásicos habituales (ERC, UDC, FNC y MSC) más el PSUC. Lo más relevante de la nueva plataforma era la integración de este último, rompiéndose así el cordón sanitario impuesto por las rencillas del pasado y la guerra fría del presente. A nadie se le ocultaba que constituían la principal fuerza en la calle. Mucho más cercano al eurocomunismo italiano y francés que sus colegas españoles del PCE, el PSUC había realizado un gran esfuerzo de sutura de la sociedad, asumiendo la cultura catalana como factor de integración. Su influencia se extendía desde los sectores obreros, especialmente a través de las Comisiones Obreras que habían penetrado la estructura sindical del franquismo, a amplios sectores intelectuales y universitarios. Las prevenciones anticomunistas habían sido vencidas ante su compromiso antifranquista y catalanista, hasta devenir un movimiento sobre todo populista y no de militancia estricta. Así, aunque sus dirigentes y activistas todavía debían ocultarse y eran encarcelados regularmente, su peso era innegable.

De dicho impulso unitarista —y de otros ejemplos en el ámbito cultural— surgía, tres años y medio más tarde, la Asamblea de Catalunya, fundada el 7 de noviembre de 1971 en un acto clandestino en la parroquia de Sant Agustí de Barcelona. Se trataba de un movimiento unitario con participación de sindicatos, partidos estrictamente catalanes y delegaciones de otros de ámbito español, entidades ciudadanas y personalidades independientes.

De esta manera, se fraguaba una alianza entre un grupo de líderes intelectuales y obreros —miembros de una cierta aristocracia obrera—, básicamente vinculados al PSUC, y representantes de la burguesía catalanista, principalmente profesionales liberales, que

constituirían la clase dirigente catalana durante la Transición sobre una base común que vinculaba democracia y autonomía y buscaba preservar la unidad a partir de un catalanismo y un antifranquismo compartidos. Este programa base cristalizaba en septiembre de 1973 cuando en una reunión celebrada en la parroquia de Santa Maria Mitjancera se aprobaba un programa político con cuatro puntos: amnistía general, libertades democráticas fundamentales, restablecimiento del Estatuto de 1932 y coordinación con el resto de pueblos peninsulares.

El éxito fue inmediato y los tres primeros puntos se convirtieron en el grito recurrente en las manifestaciones de la oposición: “Llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia”. El carácter unitario y su amplia representación facilitaron el reconocimiento de la autoridad de la Asamblea por parte de toda la oposición. Sus planteamientos y su extensa red —con Comisiones Obreras y el PSUC mediando— permitieron la integración de colectivos hasta entonces distanciados del catalanismo, como los movimientos vecinales y obreros o la inmigración. A estas características de origen se añadió una cierta mitología, cuando esta última reunión fue interrumpida por la policía y 113 de sus asistentes fueron detenidos.

La unidad del catalanismo político no significaba inmovilismo. En los setenta, Barcelona se convertía en un lugar de intercambio artístico e ideológico, no exento de polémicas. A pesar de la dictadura, se multiplicaban las iniciativas culturales que convertirían a la capital catalana en la principal sede de la edición en español (Lumen, Anagrama, Tusquets, Ariel Quincenal...), renovadora de la literatura española (Juan Goytisolo, Juan Marsé, Pere Giménez, Terenci Moix...), y de buena parte de la vanguardia y la contracultura, con planteamientos voluntariamente apátridas y cosmopolitas. Dichas líneas chocaban con los sectores más esencialistas como Òmnium Cultural, cuyo Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, instituido en 1969, reconocerá exclusivamente a personalidades comprometidas con el proyecto de independencia cultural catalana y de compromiso antifranquista como Jordi Rubió, marginando a nombres como Josep Pla.

Esta experimentación también afectaba la política, surgiendo grupos a la izquierda del PSUC —sobre todo vinculados a universitarios

como Bandera Roja, maoístas, entre otros—, y críticas al carácter burgués del nacionalismo catalán como las de Jordi Solé Tura a *Catalanisme i revolució burgesa*. Simplificando, podríamos decir que mientras la política se expresaba mayoritariamente en catalán y con referentes catalanes, la cultura —especialmente en Barcelona— tendía al bilingüismo fuera de los sectores más militantes y se convertía en un faro de modernidad y referencia tanto cultural como política.

La preeminencia de la Asamblea se prolongó hasta 1975, cuando la muerte del general ya se divisaba en un horizonte próximo. Entre abril y junio de aquel año, el gobernador civil Rodolfo Martín autorizaba un ciclo de conferencias titulado “Les terceres vies a Europa” (“Las terceras vías en Europa”), bajo el paraguas del Instituto Católico de Estudios Sociales de Barcelona. El ciclo suponía la presentación oficiosa de los principales líderes opositores catalanes y de sus programas, pues el título genérico era una simple excusa. En las diferentes sesiones intervinieron Antón Cañellas por UDC, Josep Solé Barberà por el PSUC —su líder Gregorio López Raimundo aún permanecía en la clandestinidad—, Josep Pallach por Reagrupament Socialista, Joan Reventós por Convergència Socialista, Ramon Trias Fargas por Esquerra Democràtica de Catalunya (EDC) y Jordi Pujol por la recién creada Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Su autorización cabe situarla entre los tanteos que los sectores más aperturistas del régimen intentaban con la oposición. Y, al mismo tiempo, constituían los primeros movimientos de los clandestinos partidos políticos catalanes para retomar el protagonismo frente a la Asamblea y posicionarse de cara a una futura negociación postdictadura.

Sin embargo, mientras la “solución biológica” no llegaba, la situación social, y de rebote la política, se deterioraban. Los efectos de la crisis del petróleo en 1973 se dejaban sentir con fuerza, con una conflictividad laboral que superará ampliamente la de la década anterior. Las huelgas afectaban tanto a las grandes industrias metalúrgicas o químicas como a sectores hasta entonces al margen, como los servicios, la enseñanza o la sanidad. En la comarca del Baix Llobregat, por ejemplo, se convocaron dos huelgas generales en 1974. Comisiones Obreras alcanzaba su máxima influencia.

La sensación de conflicto permanente también se instaló en la universidad, donde las posturas estudiantiles se radicalizan, la policía intervenía de forma frecuente y los profesores no numerarios se incorporaron a las protestas. La masificación de las aulas, con un incremento exponencial de alumnado y profesorado provisional, agravaría los problemas del franquismo en los campus universitarios.

Esta dinámica de protestas y creciente politización se extendió también a los barrios, donde las asociaciones vecinales vehiculaban las reivindicaciones de mejoras urbanísticas y de servicios. Tras un crecimiento repentino y sin planificación para acoger a los miles de inmigrantes de las décadas anteriores, se articulaban demandas contra las autoridades locales y denuncias hacia los promotores inmobiliarios. Como sucedía con el resto de conflictos abiertos, la falta de respuesta o la respuesta únicamente represiva desencadenaba una dinámica social nueva y, ambas partes, acababan dotando de una connotación antifrquista cualquier protesta.

La degradación del dictador y su régimen ya no se ocultaba a nadie —incluso en julio de 1974 el príncipe Juan Carlos I asumió temporalmente los poderes por enfermedad del dictador—, pero ello no significó que la represión cesara. Al contrario, el 2 de marzo se ejecutaba al joven anarquista Salvador Puig i Antich y al polaco Heinz Chez, en Barcelona y Tarragona, respectivamente, con garrote vil; y el 7 de septiembre se fusilaba en Cerdanyola a tres militantes del FRAP y dos de ETA.

Esta contundencia represiva no era compartida de forma unánime dentro del propio franquismo y junto a los intransigentes —el denominado “búnker”— aparecían sectores que empezaban a posicionarse de cara al postfranquismo. Esto acentuaba la arbitrariedad de las autoridades respecto a ciertas manifestaciones de catalanidad que tanto podían autorizarse como prohibirse sin demasiadas explicaciones.

Algunas autoridades locales protagonizaban incluso evidentes movimientos para congraciarse con sus conciudadanos. Así, Juan Antonio Samaranch, presidente de la Diputación de Barcelona y figura destacada del franquismo catalán, restablecía el busto de su

predecesor Enric Prat de la Riba y, en la puerta principal, el histórico nombre de Palau de la Generalitat. Quienes no demostraban suficiente cintura se arriesgaban al escarnio público, evidencia de cómo estaban cambiando las cosas. Esto le sucedió al ayuntamiento barcelonés cuando en marzo de 1975 se negó a destinar una partida presupuestaria a subvencionar las clases voluntarias de catalán en las escuelas municipales y se desató una campaña en su contra.

Todos tomaban posiciones y todos esperaban el día después de la muerte del dictador.

Capítulo 10

La Transición (1975-1980)

En pocos años, las dictaduras todavía vigentes en el sur de Europa desaparecieron (Grecia y Portugal, en 1974 y España, en 1975). Todos los países implicados iniciaban procesos democratizadores que tenían como horizonte la integración en la Comunidad Económica Europea y la OTAN, en un contexto aún de guerra fría. En el caso español, la transformación tenía lugar con los herederos del franquismo partidarios de una reforma al frente del poder y la oposición clandestina más favorable a la ruptura, pero sin mecanismos de influencia más allá de una cierta legitimidad histórico-popular.

En el caso de Cataluña, a las evidentes diferencias socio-económicas y culturales, se añadían las políticas. Así, la oposición se declaraba casi unánimemente catalanista, mantenía posiciones unitarias, vinculaba democratización con autonomía, contaba con un importante apoyo social —obrero, estudiantil, vecinal e intelectual— y se situaba mayoritariamente a la izquierda del espectro político. Conscientes de la importancia del “problema catalán”, por la relevancia estricta del territorio y por su carácter simbólico a la hora de hacer creíble la Transición, los dos primeros gobiernos de la monarquía (primero con Carlos Arias Navarro y, posteriormente, con Adolfo Suárez) diseñaron hasta tres estrategias para controlar el proceso, sustrayéndolo de las manos de la oposición, conjurar el peligro de una Cataluña “roja” y satisfacer en parte las demandas de autonomía sin soliviantar a los vigilantes de las esencias franquistas.

En los tres casos, las estrategias buscaban legitimarse a través de referencias históricas. Primero, en abril de 1976, se quiso establecer un régimen especial para las cuatro provincias catalanas, a través de una comisión presidida por Federico Mayor Zaragoza y formada por diferentes prohombres más o menos vinculados al franquismo, pero no cuajó. El segundo intento fallido fue la apuesta, en junio de 1977, por un triunfo electoral del nacionalismo conservador representado por Jordi Pujol, a quien avalaba una trayectoria antifranquista previa, pero no obtuvo el apoyo de las urnas. Y, finalmente, durante el verano-otoño siguiente se concretó la última,

y finalmente exitosa, estrategia: el retorno del presidente exiliado Josep Tarradellas y el restablecimiento de la republicana Generalitat de Catalunya.

Recuperada la autonomía, el catalanismo olvidó la unidad antifranquista e inició la competencia por ganarse el favor electoral. Esta lucha tenía lugar mientras se consolidaban las instituciones democráticas y autonómicas y se redactaban la Constitución y el nuevo Estatuto. En este marco, tendrán lugar las primeras elecciones democráticas de la recuperada autonomía en 1980.

Cuando ser opositor era ser de izquierdas y catalanista

El segundo mandato de Carlos Arias Navarro, el primer gobierno de la monarquía, no comportó demasiadas novedades. A pesar del cambio en la jefatura del Estado, de la incorporación al Gobierno de diversos hombres del franquismo más reformista —Manuel Fraga, José María de Areilza, Antonio Garrigues o Alfonso Osorio— o del indulto general otorgado a raíz de la coronación, pero que casi no afectó a los presos políticos, muchas cosas permanecían inalterables. Como ejemplo paradigmático, el retrato del general Franco seguía presidiendo el despacho oficial del jefe del gobierno y en la calle se mantenían las protestas.

Las manifestaciones laborales en Cataluña —donde se concentraba una cuarta parte de los obreros españoles— se multiplicaban y derivaban en políticas, bajo el triple lema de la Asamblea. Así sucedía con las huelgas de los funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona o la de la siderúrgica Laforsa de Cornellà, cuyo conflicto acabó prolongándose en el tiempo y extendiéndose en forma de huelga general en enero de 1976, hasta afectar a 60.000 trabajadores del Baix Llobregat y 150.000 en toda Cataluña. Entre las protestas también sobresalía la protagonizada por el cura Lluís Maria Xirinacs, cuya protesta pacífica ante la cárcel Modelo de Barcelona estuvo salpicada de frecuentes detenciones e intimidaciones, pero también un creciente apoyo popular.

Conscientes de la necesidad de realizar algún gesto hacia Cataluña, los reyes eligieron dicho territorio como destino para su primera visita oficial. En el transcurso de la visita, los monarcas pronunciaron algunas palabras en catalán para congraciarse con la audiencia y anunciaron una comisión para estudiar la creación de un régimen especial para Cataluña. A pesar de la pompa y de los gestos, la oposición recibió con escepticismo las propuestas y las calles, con manifestaciones. Estas últimas se recrudecieron, pues, ante la mayor asistencia, las cargas de una policía sobrepasada

fueron de una violencia extrema y las imágenes traspasaron fronteras, dejando tocada la credibilidad reformista del Gobierno Arias Navarro.

Mientras la comisión oficial para la creación de un régimen especial languidecía ante la indiferencia general, la oposición clandestina ganaba presencia y ascendencia públicas. Organizada en el Consell de Forces Polítiques de Catalunya, presentado ya ante los periodistas el 23 de diciembre de 1975 en un restaurante de Pedralbes, agrupaba hasta 11 partidos, todavía ilegales, que iban desde el centroderecha hasta la extrema izquierda. Diez de ellos ya pertenecían a la Assemblée (Partit Carlí de Catalunya, UDC, CDC, FNC, Reagrupament, ERC, Partit Popular de Catalunya, Convergència, PSUC i PSAN) mientras que el onceavo correspondía a la recién creada EDC del liberal Ramon Trias Fargas y cuya corta vida recuerda a la ACR de los años treinta, pues la calidad de sus cuadros no mereció el favor del electorado.

Aunque la Assemblée mantendrá una cierta ascendencia, sobre todo como convocante de protestas y representación de la unidad del catalanismo, los distintos partidos catalanes mostraban un creciente activismo como aspirantes a portavoces de Cataluña en unas futuras negociaciones con el Gobierno central. Su programa unitario recogía siete puntos principales: Gobierno autónomo provisional basado en las instituciones y Estatuto de 1932, amnistía general, libertades democráticas, libertades sindicales, medidas urgentes de carácter social, apoyo a las peticiones del resto de pueblos de España y Gobierno provisional español para convocar elecciones constituyentes.

Paradójicamente, el Consell verá cómo entre los que cuestionaban su legitimidad y representatividad se situaba el histórico presidente en el exilio. Tarradellas, tras unos años de presencia más bien testimonial en la política catalana, reivindicaba ser reconocido como la primera autoridad catalana, el detentador de la legitimidad histórica y el líder de cualquier negociación. De hecho, a lo largo de sus años en el exilio, el presidente se había enemistado con buena parte de los grupos opositores del interior, a los que acusaba de ir contra sus criterios. Finalmente, en abril de 1976 ambos interlocutores parecían llegar a un acuerdo y pactaban una cierta

coordinación.

Sin embargo, las relaciones nunca dejaron de estar exentas de tensión. Tarradellas quería ser quien encabezase las negociaciones, con el apoyo explícito de los partidos, y con su retorno y el restablecimiento de la Generalitat como premisa innegociable. Este planteamiento primaba el acuerdo directo entre instituciones (Gobierno y Corona con la Generalitat), y exigía una actuación catalana separada respecto de la española. De ahí, el fuerte choque entre el viejo presidente y Pujol, cuando este último participe como representante del Consell en la Plataforma de Organismos Democráticos constituida por toda la oposición española el 23 de octubre.

Mientras tanto, en Cataluña, las autoridades postfranquistas seguían manteniendo actitudes contradictorias. Así, algunos ayuntamientos empezaban a renombrar calles y las Cortes franquistas iniciaban el reconocimiento de algunas libertades (reunión, manifestación...). Incluso parecían tolerarse los diversos actos del Congr s de Cultura Catalana —iniciado a principios de 1975 se alargará hasta 1977— que buscaban difundir, prestigiar y extender la cultura y la lengua catalanas. Sin embargo, esta transigencia convivía con la prohibición de la “Marxa de la Llibertat” (“Marcha de la Libertad”) organizada por Pax Christi. La arbitrariedad llevaba a permitir actos socialistas y comunistas y, en cambio, prohibir la celebración del congreso de ERC.

La situación dio un giro inesperado con el nombramiento de Adolfo Suárez como jefe del Gobierno en julio de 1976. Las cosas se aceleraron y el nuevo líder de la Transición ansiaba marcar perfil rápidamente. Así, el 30 de julio promulgaba una amplia amnistía, aunque excluía los delitos de sangre. Respecto de la gestión de la cuestión catalana, recibía a Pujol, Pallach y Reventós, reconociéndoles de esta manera su representatividad.

Además, el Gobierno civil accedía a la petición de la Asamblea para conmemorar la Diada, pero únicamente si se celebraba en la población de Sant Boi de Llobregat, a pocos kilómetros de la capital y lugar donde murió y está enterrado Rafael de Casanova, conseller en cap de Barcelona durante el asedio borbónico de 1714. La convocatoria fue un éxito de asistencia —se habló de 100.000

asistentes— y de organización. Los tres oradores (Miquel Roca en nombre del Consell, Octavi Saltor por los no adscritos y Jordi Carbonell por la Assemblée) explicitaron la unidad del catalanismo político y de sus reivindicaciones, y se incluyó un mensaje del presidente Tarradellas en el exilio. La figura del viejo dirigente empezaba a trascender más allá de los sectores muy politizados.

El 15 de diciembre de 1976 tuvo lugar el referéndum sobre la Ley de Reforma Política. Aunque la oposición defendía la abstención, lo hacía con la boca pequeña, y el resultado favorable fue claramente mayoritario —94,2 % de votos afirmativos—. En Cataluña, la abstención se situó en el 26% —cuatro puntos más alta que en el resto de España, pero muy lejos del 55 de Guipúzcoa o el 48 de Vizcaya—. La reforma se había impuesto a la ruptura y los cambios proseguían.

La rapidez del cambio político se concretaba en el peor clima social posible. El 24 de enero de 1977 tenía lugar el asesinato de cinco abogados laboristas a manos de la ultraderecha, el GRAPO realizaba diversos atentados y secuestraba al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol Urquijo, y al del Consejo Supremo de Justicia Militar, el general Antonio Villares, y la tensión en las calles crecía. También en el interior del Gobierno y del Ejército, con la legalización del PCE durante la Semana Santa de 1977 y pocos días después del PSUC.

En Cataluña, la situación parecía algo más tranquila. El recién nombrado alcalde de Barcelona, Josep Maria Socias Humbert, hombre de confianza del ministro Rodolfo Martín Villa, acentuaba los guiños al catalanismo con decisiones como la restitución del nombre de Pau Casals a la calle que desde 1939 llevaba el nombre del general Goded. El acto fue multitudinario, las banderas catalanas lucían de forma mayoritaria y se interpretó tanto el Cant dels Ocells como Els Segadors. En este ambiente, Suárez recibía las conclusiones de la comisión que debía estudiar un posible régimen particular para Cataluña, pero el proyecto ya se sabía amortizado ante la campaña lanzada por la Assemblée con el lema “Volem l'Estatut!” (“¡Queremos el Estatuto!”). Ahora, todo ya se focalizaba en las lecciones constituyentes convocadas para el 15 de junio.

La percepción generalizada situaba a Cataluña más a la izquierda

que el resto de España, con un peso de los comunistas mucho más decisivo que no el de los socialistas, divididos y sin un ascendente social claro. Ante un posible éxito electoral de las izquierdas catalanas, la apuesta gubernamental pasaba esta vez por confiar en una victoria o al menos en un resultado suficiente por parte del catalanismo conservador representado por Jordi Pujol —el tiempo del viejo catalanismo de la Lliga había pasado, a pesar de algún intento vano por resucitarlo— y el recién creado partido gubernamental de centro-derecha Unión de Centro Democrático (UCD), liderado en Cataluña por el periodista Carles Sentís. Mientras el primero contaba con una trayectoria antifranquista bien conocida y un activismo evidente en el campo político, cultural y social, los segundos disponían de todo el apoyo de las estructuras del Estado, medios de comunicación incluidos.

Ante el reto electoral, la oposición tendía a simplificarse. Los demócrata-cristianos se reunían en torno a Anton Cañellas; Reventós conseguía una primera unión del socialismo catalán y español; el PSUC podía presentarse por primera vez con su líder histórico Gregorio López Raimundo; ERC no lograba hacerlo con sus siglas y encabezaba una pequeña alianza bajo el nombre Esquerra de Catalunya (EC), y Pujol acababa liderando una coalición con Pallach —que moría súbitamente en enero de 1977— y Trias Fargas. El resto se distribuían entre estas candidaturas o bien optaban por no presentarse. Todos ellos coincidían en la vinculación entre democracia y autonomía, aunque su compromiso con el retorno de Tarradellas variaba según la formación. Fuera del catalanismo y el antifranquismo solo quedaban la citada gubernamental UCD y la más derechista Alianza Popular (AP).

Cuando se cerraron las urnas, las previsiones gubernamentales se demostraron erróneas. Mientras en España se evidenciaba un claro bipartidismo entre UCD y PSOE, con el PCE y AP en un segundo término, en Cataluña se imponía el rojo. Los socialistas de Reventós obtuvieron casi el 29% de los votos y 15 diputados, y el PSUC un poco más del 18% con 8 diputados. Más atrás quedó la UCD con casi el 17% y únicamente 9 diputados por sus malos resultados en la provincia de Barcelona, y a pocas décimas se situaba Pujol, aunque con mayor número de diputados, 11. En ambos casos, muy lejos de lo esperado. Por su parte, Cañellas debía conformarse con

dos diputados y ERC y AP con uno cada una.

En el Senado, la coalición Entesa dels Catalans, que agrupaba a PSUC, a los socialistas encabezados por Reventós y EC, conseguía 14 de los puestos disponibles, en el caso de Barcelona superando el millón de votos. Solo dos senadores no pertenecían a la exitosa coalición: el independiente y destacado activista Lluís Maria Xirinacs, por Barcelona, y el oficialista Emilio Casals de UCD por Tarragona. A estos debían sumarse los 41 senadores designados directamente por el rey, de los cuales cinco fueron catalanes, aunque poco representativos del sentir del electorado: el alcalde de Barcelona Josep Maria Socias Humbert, el escritor demócrata-cristiano Maurici Serrahima, el catedrático conservador Martí de Riquer, el empresario Andreu Ribera y el futuro ministro de UCD Landelino Lavilla.

La operación Tarradellas

El segundo intento del Gobierno español para solucionar la cuestión catalana sin ceder ante la oposición de izquierdas había fracasado. Reventós se convertía en el interlocutor elegido por las urnas y exigía abrir negociaciones sobre el restablecimiento de la autonomía y el retorno de Tarradellas. Su petición ante Suárez recibía el apoyo casi unánime —únicamente el diputado de AP, el exministro franquista Laureano López Rodó, vota en contra— de la asamblea de parlamentarios catalanes electos que se celebró en el antiguo Parlamento catalán.

Ante esta situación, Suárez decidió retomar la iniciativa con la operación Tarradellas. En noviembre de 1976, ya se había producido un sondeo gubernamental a cargo del teniente coronel Andrés Casinello —el primero tuvo lugar en abril por parte de Manuel Milián Mestre por encargo de Arias Navarro—, que había visitado en su exilio al histórico presidente. Sin embargo, todo se había aparcado ante la dificultad de reconocer una institución republicana por parte de una monarquía heredera del franquismo, y en la confianza de que alguna de las otras soluciones planteadas fructificase. Ahora, en cambio, todo se aceleraba, pero será un caso excepcional, pues nada similar ocurrirá ni con el Gobierno republicano ni con el vasco, ambos también en el exilio.

El 27 de junio, inesperadamente, Tarradellas aterrizaba en Madrid; solo habían transcurrido 13 días desde la victoria electoral socialista-comunista en Cataluña. La operación era organizada por el financiero catalán Manuel Ortínez y sería capitalizada por Carles Sentís, el hombre de UCD en Cataluña. La visita se alargó durante ocho días y el presidente se reunió con Suárez (por dos veces), el rey y la oposición catalana. Aunque los encuentros no estuvieron exentos de tensión, se llegó a un acuerdo de reconocimiento mutuo, con una futura negociación directa entre ambas partes, publicitado el 2 de julio. De esta manera, la iniciativa pasaba a manos de

Suárez y del propio Tarradellas, marginando la Asamblea de Parlamentarios elegidos democráticamente.

Superado el estupor inicial, los parlamentarios —con Reventós al frente, aunque era quien objetivamente tenía más a perder— decidieron apoyar al presidente. El 7 de julio de 1977 se reunían, y a finales de mes acordaban crear una comisión formada por seis parlamentarios (Josep Benet, Antoni Gutiérrez Díaz, Jordi Pujol, Joan Reventós, Carles Sentís y Josep Maria Triginer) propuestos por la asamblea y nombrados por Tarradellas, pero que dejaban la dirección de las negociaciones al viejo líder republicano. Durante el mes de agosto él —con la ayuda de hombres de su confianza como el catedrático Josep Lluís Sureda— y el enviado español, Salvador Sánchez Terán, negociarán en París la concreción de los acuerdos. Para los negociadores españoles, se abría una solución para evitar un gobierno de izquierdas en Cataluña mediante una figura legitimada históricamente y con pocas simpatías comunistas y, además, se pensaba que las ganas de retornar a su tierra acelerarían el acuerdo. Para Tarradellas, lo fundamental era tanto el reconocimiento de su legitimidad histórica como que el pacto estuviera por encima de los partidos políticos —fuera institucional— y previo a la Constitución.

Mientras la negociación se prolongaba, surgieron tensiones dentro de la propia oposición. Se llegó incluso al enfrentamiento personal entre Tarradellas y Josep Benet —histórico agitador cultural durante el franquismo, futuro candidato a la Presidencia de la Generalitat por el PSUC y senador electo más votado de España—. Las críticas de este último no fueron bien acogidas por el primero, quien decidió cesarlo fulminantemente de la comisión negociadora desde donde los partidos catalanes asesoraban al presidente. La imagen de unidad pareció retornar con motivo de la Diada, autorizada por primera vez en la ciudad de Barcelona, y que reunió a un mítico —la fascinación numérica se impone a la realidad física— millón de personas que reforzó la posición negociadora catalana.

Finalmente, se logró un acuerdo para el restablecimiento de la Generalitat y de su histórico presidente. Para que el cargo no se hallara vacío de poder, se sumó el nombramiento de Tarradellas como presidente de la Diputación de Barcelona. Su retorno —previo

paso por Madrid para agradecer las gestiones de Suárez y el rey— tuvo lugar el 23 de octubre de 1977. Una multitud le acompañó en el recorrido entre el aeropuerto y el Palau de la Generalitat, donde desde el balcón pronunció su famoso “Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí” (“Ciudadanos de Cataluña, ya estoy aquí”). Contra todo pronóstico, 23 años después de su nombramiento en México, volvía a Cataluña. Al día siguiente, tenía lugar la ceremonia de toma de posesión con la participación del propio Suárez.

Poco después, empezaban los problemas para negociar un Ejecutivo con los partidos políticos. Finalmente, se acordó nombrar cinco consellers sin cartera en representación de los partidos (Josep Maria Triginer por el PSOE, Joan Reventós por el PSC, Antoni Gutiérrez Díaz por el PSUC, Jordi Pujol por CDC y Carles Sentís por UCD) y siete consellers más técnicos, con cartera, pero también vinculados a alguna de las opciones políticas con representación parlamentaria (Frederic Rahola en Gobernación como hombre de confianza de Tarradellas, Narcís Serra en Política Territorial por el PSC, Josep Roig en Agricultura por ERC, Ramon Espasa en Sanidad por el PSUC, Josep Pi-Sunyer en Cultura por CDC, Joan J. Folchi en Economía por UCD y Joan Codina en Trabajo por el PSC).

Sin un marco legal estable —no había ni Estatuto ni Constitución—, no existía un mecanismo claro de negociación con el Estado para obtener competencias y recursos. En diciembre se puso en marcha una Comisión Mixta de Transferencias de las Diputaciones a la Generalitat y en enero una de similar del Estado al Gobierno autonómico. El ritmo de concreción era muy lento —hasta finales de año no se concretarán los primeros traspasos—, pues debían superarse las prevenciones de un funcionariado escéptico hacia la Generalitat. Ante el vacío competencial, se optó por un trabajo de diseño y planificación de la futura Administración pública, oficialización del catalán en la enseñanza obligatoria a través del decreto de bilingüismo y desarrollo de los mapas relativos a sanidad y política territorial. Esta tarea más conceptual se combinó con un esfuerzo de presencia en el territorio, aprovechando la fuerza simbólica y el prestigio inicial de la Generalitat.

La Generalitat provisional nacía con un fuerte carácter presidencialista que generó constantes tensiones, incluso entre su

propio círculo, pues el fiel Rahola sería sustituido primero por Manuel Ortínez y posteriormente por Josep Maria Bricall. A pesar del apoyo constante por parte de los socialistas, la presidencia de Tarradellas se vio limitada por las escasas competencias y recursos —su presupuesto era 50 veces inferior al de la Diputación de Barcelona— y por la decisión mayoritaria de los partidos políticos catalanes de redactar el nuevo Estatuto al margen de esta y, por tanto, poniéndole fecha de caducidad.

Hacia un nuevo Estatuto

El avance en la consolidación institucional no significó que el clima de conflictividad social se rebajase. Se sucedían las manifestaciones y, en menor medida, su represión. Las huelgas afectaban a sectores de toda la economía, e incluso una parte de la patronal amenazaba con un cierre. A su vez, la actividad terrorista de extrema izquierda, de ultraderecha y de ETA se recrudecía. Incluso ciertas libertades que se creían consolidadas todavía padecían ataques por parte de algunas estructuras del Estado. Así, a finales de 1977, el grupo teatral Els Joglars y su director Albert Boadella debían afrontar un proceso por injurias a las Fuerzas Armadas, a raíz de la obra *La torna*, sobre la ejecución de Salvador Puig Antich.

Este contexto favorecía una cierta dinámica política de consenso, que tuvo su máxima expresión en los llamados Pactos de la Moncloa, en octubre de 1977, donde se fijaron una serie de acuerdos políticos y económicos. La crisis se superaría, pero cargando los costes sociales sobre los trabajadores. Políticamente, Suárez parecía alejarse de Tarradellas —que aspiraba a conservar una relación directa y especial con la cúpula española— y acercarse nuevamente a Pujol, con cuyos votos alcanzaba la mayoría absoluta en el Congreso. Este apoyo político sería a cambio de concesiones, naciendo así el famoso “peix al cove” (“pájaro en mano”) pujolista.

La práctica hegemonía política del catalanismo no tenía una translación directa en el campo sindical, pues los partidos catalanes no habían consolidado sindicatos hermanos al estilo del socialismo español o el vasquismo. Indirectamente, sí que durante la Segunda República, ERC había mantenido vínculos más o menos explícitos con la todopoderosa CNT, pero la larga tradición anarquista no había sobrevivido a la represión y la dictadura franquistas. Incluso los intentos de revitalizar al histórico sindicato no cuajaron, naufragando por las divisiones internas, por su rechazo a la elección de delegados y por extrañas tramas violentas como el caso Scala. Su

lugar había sido ocupado en Cataluña por las Comisiones Obreras que mantenían una estrecha relación con el PSUC, pero no una dependencia orgánica, aunque sí habían jugado un papel activo en la sutura social y habían asumido la reivindicación tanto de la cultura catalana como del autogobierno. En las primeras elecciones sindicales libres, en 1978, lograron el 42% de los delegados sindicales, muy por delante de la recién reconstruida UGT —en estos años aún el brazo sindical socialista— que se quedó en el 17%. Finalmente, en el sector agrario la Unió de Pagesos fundada en 1974 consiguió ser la referencia sindical, retomando en parte el papel de la histórica UR.

Los primeros pasos de la Generalitat y su lenta asunción de competencias coincidieron con la elaboración de la Constitución española en las Cortes, en cuya ponencia dos de sus siete miembros eran catalanes: Miquel Roca en nombre de CDC y Jordi Solé Tura por el PCE-PSUC. Una de las grandes discusiones se centró en el título VIII, donde se establecía la organización territorial del Estado. Los equilibrios exigidos por el consenso obligaban a garantizar la unidad española y, al mismo tiempo, a reconocer su diversidad. De hecho, debía encajarse la ya existente Generalitat, satisfacer las demandas de las comunidades históricas y permitir una futura extensión del modelo al resto del Estado. La solución final pasó por la creación de un híbrido, una diferenciación teórica entre nacionalidades y regiones —exigida por los ponentes catalanes—, la prohibición expresa de la federación entre comunidades —punto pensado para evitar posibles acuerdos pancatalanes o panvascos— y el reconocimiento de los derechos históricos del País Vasco y Navarra. El catalanismo lograba un cierto reconocimiento de la autonomía en el texto constitucional, pero a cambio de diluir la singularidad obtenida con la Generalitat provisional.

El referéndum de la Constitución, el 6 de diciembre de 1978, obtuvo en Cataluña una mayor participación que en el resto de España, casi el 68% y el segundo porcentaje de votos negativos más bajo, un poco más del 4,5%. Ratificada por la mayoría de españoles, se convocaban elecciones generales para el 3 de marzo de 1979.

Pero el ciclo electoral justo se había iniciado, pues las primeras elecciones municipales democráticas se habían convocado un mes

más tarde. A su relevancia estricta —era la Administración más cercana a la ciudadanía— se añadía la simbólica, pues nadie olvidaba que la Segunda República llegó tras una convocatoria municipal. Tanto para el Gobierno Suárez como para la oposición se trataba de algo más que una simple llamada a las urnas.

En Cataluña, la convocatoria llegó cuando el mapa político catalán había sufrido una nueva simplificación. Finalmente, en julio de 1978 había concluido el proceso de convergencia socialista con el nacimiento del PSC-PSOE, que reforzaba su posicionamiento como los máximos candidatos para sustituir a Tarradellas cuando se convocasen elecciones autonómicas. También Pujol había agrupado al nacionalismo conservador y buena parte de los demócrata-cristianos en la coalición *Convergència i Unió* (CiU), mientras que los republicanos recuperaban sus siglas históricas de ERC, y en el centro-derecha se consolidaban UCD y AP. Por su parte, el PSUC renovaba su cúpula, con Antoni Gutiérrez Díaz al frente, y confiaba en rentabilizar su reconocido papel en el antifranquismo.

Las elecciones en Cataluña volvieron a arrojar un mapa dominado por las izquierdas, pues la mayoría de grandes ciudades y áreas metropolitanas caían de su lado. De las 39 localidades de más de 20.000 habitantes, 21 tendrían alcaldes socialistas —entre ellas las 4 capitales provinciales, con Narcís Serra al frente de Barcelona—, 14 comunistas, 4 de CiU y solo una de ERC. Más repartidas se hallaban las poblaciones medias, con una relevante presencia de CiU, que se transformaba en casi hegemonía en los municipios pequeños.

Durante la fase constituyente municipalista, los cuatro grandes partidos surgidos de la oposición (PSC, PSUC, CiU y ERC) se comprometieron a apoyar la lista más votada, en el llamado “pacte de progrés” (“pacto de progreso”). Estos nuevos consistorios suponían una ruptura real con el personal político municipal del franquismo, cuya presencia solo se mantuvo en algún pequeño municipio, aunque no con el funcionariado, pues en las últimas décadas este se había despolitizado y profesionalizado con cierta eficacia. Serán estos cuadros los que permitirán encarar las grandes reformas pendientes en el ámbito local.

Los nuevos ayuntamientos democráticos debían dar respuesta a

cuestiones que, a menudo, sobrepasaban su ámbito de actuación y competencia. En buena medida, ello se hacía mediante el trasvase de dirigentes de movimientos sociales a los consistorios, pero esto repercutió negativamente en la propia riqueza de la sociedad civil, con un descenso de las actividades y reconocimiento de las asociaciones vecinales. También tuvo lugar una diversificación de las reivindicaciones, ya no limitadas a cuestiones políticas, económicas o sociales. Si hasta entonces se trataba de movimientos incipientes, ahora se consolidan grupos feministas, pacifistas y ecologistas, entre muchos otros, cuyas peticiones irán penetrando en el sistema de partidos.

Además de los consistorios, las elecciones municipales condicionaban la gobernanza de las diputaciones provinciales, entes que habían perdido competencias a favor de la Generalitat, pero que contaban con importantes presupuestos. De hecho, durante años y hasta el Gobierno autonómico encabezado por Pasqual Maragall en 2003, la Diputación de Barcelona sería la principal institución gobernada por los socialistas en Cataluña.

El nuevo marco constitucional obligaba a redactar un nuevo Estatuto adaptado a él, pues el anterior de 1932 quedaba desfasado. Además, se veía como la oportunidad para dotar a la Generalitat de poder real y, por otra parte, de sustraerse al control de Tarradellas, pues no se le permitió su participación y se limitó a los cargos electos el 15 de junio anterior. Se constituyó la llamada Comissió dels Vint (“Comisión de los Veinte”), con representación de todos los partidos (cuatro de la Entesa dels Catalans, tres del PSUC, CDC y UCD, y uno de UDC, ERC y AP), que reunida en el parador de Sau se encargó de la redacción del llamado Estatuto de Sau.

Con la Constitución ya aprobada, la comisión aceleró sus trabajos y el día 20 de diciembre de 1978 entregaba el texto a Tarradellas, nueve días más tarde lo aprobaba la Asamblea de Parlamentarios y ese mismo día se depositaba en las Cortes. Sin embargo, su tramitación se alargará, aunque finalmente, y a pesar de los temores catalanes, el texto se aprobará en el Congreso de los Diputados sin demasiados cambios. El 25 de octubre de 1979 la ciudadanía catalana ratificaba un nuevo Estatuto que definía a Cataluña como una nacionalidad y el catalán como lengua propia cooficial con el

castellano, y distinguía entre competencias exclusivas (cultura, patrimonio, turismo...), plenas (educación...) y susceptibles de traspaso (Seguridad Social...) o susceptibles de cesión (policía autonómica, medios de comunicación...). Respecto de la financiación, se preveía una participación en los impuestos estatales.

Aprobado el nuevo Estatuto, Tarradellas convocaba elecciones autonómicas para el 20 de marzo de 1980. La mayoría, tras los triunfos electorales en las generales y municipales, daban por descontada la victoria de las izquierdas y, especialmente, de los socialistas. Sin embargo, pocas semanas antes de los comicios, coincidían en la mesa presidencial de una boda el viejo presidente y el escritor Josep Pla. La conversación derivó rápidamente hacia la actualidad electoral y —quizás apócrifamente, pero suficientemente creíble, aunque con múltiples versiones— Tarradellas le comentó: “La nit de les eleccions hi haurà dos homes que no aclucaran ull: Pujol per por a perdre i Reventós per por a guanyar”¹.

Notas

1. “La noche de las elecciones habrá dos hombres que no pegarán ojo: Pujol por miedo a perder y Reventós por miedo a ganar.”

Capítulo 11

La Cataluña democrática (1980-2014)

En los últimos 34 años, Cataluña ha vivido el periodo más largo de autonomía y democracia de su historia. El catalanismo político ha sido —todavía lo es— hegemónico y ha protagonizado un despliegue institucional con un nivel competencial sin pocos equivalentes en su entorno más próximo. A pesar de algunas sombras, la transformación del país es innegable.

Con un reparto de papeles que dejaba la Generalitat en manos de CiU y los principales ayuntamientos y diputaciones —especialmente los de Barcelona— en manos del PSC, se articuló durante estos años un funcionamiento entre dual, complementario y opuesto, pero estable, con hitos como las Olimpiadas de 1992. Ambos catalanismos, tanto el conservador de los convergentes como el progresista de los socialistas, fueron fieles a sus esencias y, sin dejar de aspirar a la hegemonía en Cataluña, mantuvieron una actitud intervencionista en la política española desde el Congreso o a través de su implicación directa en los gobiernos, respectivamente.

Sin embargo, la política catalana y el propio catalanismo han dependido en exceso de la discrecionalidad y de las interdependencias políticas entre Barcelona y Madrid. Superada la etapa de consenso de la Transición, la fructífera ambigüedad constitucional se ha transformado ahora en fragilidad, coincidiendo con un resurgimiento de tendencias centralistas y homogeneizadoras en el Estado y con un cambio profundo en el mapa político catalán que ha debilitado a las dos principales fuerzas tradicionales y ha ampliado todavía más la característica diversidad parlamentaria catalana.

Como si no hubiera pasado el tiempo, retornan cíclicamente a la actualidad problemáticas concretas como la lengua o los límites competenciales con otras más sistémicas como el cierre del modelo autonómico o su conversión en un auténtico sistema federal —simétrico o asimétrico—. Para algunos autores, el error original cabe situarlo en la generalización de las autonomías y la disolución de los hechos diferenciales; para otros, en el carácter insaciable de

todo nacionalismo; y, para unos terceros, en la irresolubilidad de la cuestión, pues la situación presente supera el máximo soportable para unos y no llega al mínimo admisible para otros.

Más allá de las culpas, seguramente repartidas aunque no equitativamente, el desgaste de los puentes de diálogo —en parte por la mala calidad de nuestra democracia y en parte por el tactismo que prima en nuestra clase política—, ha llevado a una polarización de los posicionamientos políticos, acelerada por los efectos de la crisis económica iniciada en 2007. Frente a un españolismo desacomplejado y centralista, se ha situado un catalanismo que, por primera vez, apoya de forma relevante —aunque no cuantificada— la opción independentista. Se mantiene la incógnita sobre hasta qué punto el poco ruido de las terceras vías corresponde a un colectivo en retroceso o a una mayoría a la expectativa.

Veintitrés años de pujolismo

Los resultados electorales del 20 de marzo de 1980 trastocaron el mapa político catalán. Al frente de CiU, Jordi Pujol obtenía una victoria contra todo pronóstico, con una ventaja reducida, pero clara (casi el 28% de los votos y 43 escaños), fruto de una campaña propia de gran intensidad y de otra externa, vinculada a la patronal, que lo favorecía como freno ante un hipotético gobierno marxista.

En un sorprendente segundo lugar quedaba el gran favorito: Joan Reventós al frente del PSC (22,5% y 33 diputados). Su candidatura se había visto perjudicada por la resistencia de Tarradellas a reconocerlo como líder in pectore, pero también por un exceso de confianza ante una victoria considerada como segura que no había tensado suficientemente a un electorado tentado por el abstencionismo y por un testimonial Partido Socialista de Andalucía (PSA), que lograba dos escaños (casi el 2,7% de los votos). Este último, además, cuestionaba la publicitada exitosa integración de la inmigración al proyecto catalanista, y ponía sobre aviso al catalanismo político ante un resurgir lerrouxista.

Por su parte, el PSUC obtenía 25 diputados con casi el 19% de los votos. En su apuesta por mantener la unidad política de acción, los comunistas catalanes habían escogido para encabezar sus listas al independiente y veterano activista Josep Benet. Sin embargo, los resultados obtenidos restaban peso a una propuesta que el resto de partidos ya consideraba una fase superada.

Cerraban el Parlamento por sus extremos UCD, con Anton Cañellas al frente (10,6% de los votos y 18 escaños), y ERC, con Heribert Barrera como líder (8,9% de los votos y 14 diputados). Ante la autoexclusión del PSC de posibles pactos postelectorales —por la propia fragilidad interna tras una unificación relativamente reciente—, estos dos partidos acabaron siendo decisivos, facilitando con sus votos el nombramiento de Pujol como presidente. Así, los republicanos se aseguraban la presidencia del Parlamento, una

promesa de revisión del Estatuto —que nunca se concretaría— y la exclusión de los comunistas, mientras que el pacto con UCD incluía el apoyo parlamentario de CiU al Gobierno Suárez en el Congreso.

El primer Gobierno Pujol (1980-1984) sería, por tanto, monocolor. Su actuación se centró en el despliegue del recién aprobado Estatuto, en la consolidación institucional del autogobierno y en la negociación con el Estado del traspaso efectivo de competencias y recursos. CiU optó por un modelo de administración que se alejaba del defendido por Tarradellas —poco numerosa, pero altamente cualificada— para asemejarse al español. No debe olvidarse el importante papel que las nuevas administraciones autonómicas jugaron en la consolidación de intereses locales, como ha señalado Santos Juliá. Dicho crecimiento se aceleró con dos traspasos de gran trascendencia social: la sanidad y la educación, pues implicaban grandes volúmenes de funcionarios y recursos. En el despliegue de ambos sectores, el nuevo Gobierno se benefició de la tarea realizada durante la Generalitat provisional, así como de la colaboración de los partidos de la oposición.

Esta colaboración y consenso se extendió a la primera Ley de Normalización Lingüística aprobada en 1983, con la única oposición del PSA. Esta normativa ocupaba un espacio central dentro del proyecto de catalanización de la sociedad defendido desde buena parte del catalanismo político. Se trataba de promocionar socialmente la lengua y la cultura catalanas facilitando su aprendizaje y su difusión. Con ambos objetivos, se constituía también la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, de donde surgirían Televisió de Catalunya (TV3) y Catalunya Ràdio. Esta última iniciaba sus emisiones en 1983, sumándose a las emisoras que ya emitían en catalán como la estatal Ràdio 4 u otras de ámbito municipal. Más difícil fue la puesta en marcha de TV3, pues venía a romper el monopolio de TVE (no el lingüístico, pues desde 1964 se emitía excepcionalmente el programa Teatre català; a partir de 1974 se amplió la oferta y en 1977 nacía el Circuit Català) y tuvo que superar interferencias graves del Gobierno central que quería una televisión catalana localista y antropológica.

La llamada normalización buscaba recuperar para la cultura y la lengua catalanas el estatus previo a la dictadura franquista. No se

trataba inicialmente de una política oficial ni anticastellana ni explícitamente impositiva. Sin embargo, y como ha estudiado Josep-Anton Fernàndez, la puesta en marcha de un proyecto de nacionalización de masas aspiraba a hacer realidad el proyecto de independencia cultural imaginado un siglo antes. Se trataba, en definitiva, de catalanizar la vida pública, desconectándola de la diseñada desde el Estado.

Respecto del consenso político antes mencionado, este no sobrevivirá a la primera legislatura pujolista. Lenta, pero inexorablemente, la fractura política —especialmente entre socialistas y convergentes— se ampliará, mientras CiU transformará la Generalitat en una institución a su imagen y semejanza hasta conseguir una identificación total, ratificada por tres mayorías absolutas y cinco mandatos consecutivos, hasta la retirada de Pujol en 2003.

La primera grieta se abrió tras el fracasado intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981, entre cuyas motivaciones se hallaba el malestar ante un diseño autonómico que, desde sectores conservadores y jacobinos, se consideraba demasiado abierto y generoso. Tras la intentona, se produce un acercamiento entre UCD y PSOE —sin ya contar con los nacionalistas vascos y, por primera vez, catalanes— para realizar una lectura más restrictiva del título VIII. Del pacto nace la Ley de Ordenación y Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), que tendía a reducir el techo competencial autonómico, imponía la supremacía de la normativa estatal, limitaba las competencias exclusivas e incluso intervenía en cuestiones como la enseñanza del castellano, el uso de las banderas o la utilización de los términos nación y nacional. La nueva ley reinterpretaba el texto constitucional y replanteaba el estado de las autonomías desde una visión mucho más centralista de la hasta entonces vigente.

La LOAPA fue percibida como un ataque frontal por parte de los partidos nacionalistas vascos, gallegos y andaluces y el PCE. En Cataluña, se posicionaron en contra CiU, PSUC y ERC, mientras que el PSC optó —no sin fuertes tensiones internas, como cuando el portavoz socialista catalán, Ernest Lluch, decidió no presentar las enmiendas aprobadas por su partido para no romper la unidad

socialista— por seguir la línea política marcada por el PSOE. Se rompía así la cohesión del catalanismo político, agriándose las relaciones entre el PSC y el resto de partidos con acusaciones cruzadas sobre su (falta de) catalanidad.

La oposición a la LOAPA se concretó en un recurso de anticonstitucionalidad —que en 1983 acabaría llevando a la derogación por parte del Tribunal Constitucional de 14 de sus 38 artículos— y en una importante movilización a cargo de sectores culturales, asociativos y políticos, reunidos en torno de la recién creada Crida a la Solidaritat. Esta plataforma agrupaba a múltiples sectores sociales, galvanizó las reivindicaciones del catalanismo social durante los ochenta modernizando las formas heredadas del antifranquismo y se centró en la defensa de la lengua, la cultura y la nación catalanas. Su creación en marzo de 1981 respondía tanto a la LOAPA como al Manifiesto de los 2.300 que aquel mismo mes habían firmado un pequeño grupo de intelectuales españoles contra la política lingüística de promoción del catalán. Aunque en líneas generales el catalanismo logró salvar la situación, se habían evidenciado los puntos de tensión entre el nacionalismo catalán y español, cuya aparición será recurrente a lo largo de todo el periodo democrático.

La segunda fractura se originó tras la victoria electoral del PSOE en las elecciones del 28 de octubre de 1982. Por un lado, la mayoría absoluta de Felipe González hacía innecesario el apoyo parlamentario de CiU y, por tanto, recortaba su influencia. Por el otro, en ese momento estalla el caso Banca Catalana, cuando la Fiscalía General del Estado presenta una querrela contra Jordi Pujol y 24 exdirectivos más de Banca Catalana por diversos delitos. Desde el nacionalismo conservador se acusará a los socialistas de juego sucio, convirtiéndolo en un ataque a Cataluña y sus instituciones. La maniobra conseguía sus objetivos, pues la querrela acabó sobreesida y Pujol lograba su primera mayoría absoluta el 29 de abril de 1984. Por el camino había quedado rota definitivamente la unidad del catalanismo.

Sin embargo, se constataba la existencia en Cataluña de un sistema de voto dual, pues una franja moderada del electorado variaba su voto según los comicios, aunque también había sectores que se

inhibían en algunas convocatorias por sentir las ajenas. A pesar de simplificarse, el sistema de partidos catalán mantenía una mayor pluralidad con un doble eje nacional y social que lo articulaba, y con dos grandes partidos que se repartían el apoyo mayoritario: el PSC en las generales y CiU en las autonómicas. Los primeros se veían beneficiados por la crisis del PSUC —cuyos enfrentamientos internos acabarán con la escisión del Partit dels Comunistes de Catalunya y una lenta debacle electoral—, atrayendo tanto a votantes como a cuadros dirigentes. Los segundos pescarán buena parte del electorado huérfano tras la desaparición de la UCD.

CiU se concentró en la Generalitat y en los municipios medianos y pequeños, mientras el PSC lo hacía en las grandes ciudades y poblaciones medias y, sobre todo, en el Gobierno central ahora en manos socialistas. Narcís Serra y Ernest Lluch formarán parte del primer Ejecutivo presidido por Felipe González, aunque la integración definitiva del grupo socialista catalán en el de su homólogo español le restará visibilidad. Este contexto es aprovechado por el pujolismo para acentuar la identificación entre partido, Generalitat y país. Como destaca Paola Lo Cascio, CiU pasaba de ser un partido nacionalista a ser el partido nacional, sobresaliendo su capacidad para aglutinar votos de procedencia ideológica diversa gracias a una cierta indefinición y a la proyección de su líder.

Durante el resto de la década se fueron turnando las victorias electorales de CiU en las autonómicas y del PSC —federado al PSOE— en las generales y los grandes municipios —especialmente Barcelona y su área metropolitana—. Este reparto de poder acabó creando un país dual con instituciones a menudo duplicadas y un cierto autismo entre ambas fuerzas, cuando no abierta oposición, especialmente entre la Generalitat y el Ayuntamiento y Diputación de Barcelona. Culturalmente, además, mientras desde el Gobierno autonómico se mantuvo la apuesta por un proyecto de independencia cultural respecto del resto de España, desde el socialismo catalán se buscaron fórmulas para mantener dicho contacto e influencia. Estas dinámicas diferenciadas llegaban a la caricaturización de unos y otros, con una Generalitat “de la ceba” (mirándose únicamente su ombligo) y un Ayuntamiento secuestrado por un cosmopolitismo papanatas.

Lo cierto es que a ambos lados de la Plaça Sant Jaume —donde se sitúan las sedes oficiales de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona— no parecían demasiado interesados en la administración vecina y sus intentos de hegemonía carecían de convicción. Los socialistas catalanes parecían descartar gobernar la autonomía, mientras que los convergentes solo cosechaban fracasos cuando intentaban conquistar municipios importantes o cuando lanzaban operaciones para ampliar su influencia en España como la fracasada operación reformista. El Partido Reformista Democrático —con claros ecos cambonianos— estaba llamado a ocupar el centro político a partir de la agrupación de diversas formaciones regionales y de algunas personalidades, con Miquel Roca como candidato a la presidencia. Sin embargo, en las elecciones generales del 22 de junio de 1986 no obtuvo ningún escaño (en Cataluña su lugar lo ocupaba CiU, que obtuvo un gran resultado) y vio cómo el PSOE renovaba su mayoría absoluta.

Respecto del resto de partidos, ERC se convertía en la práctica en una segunda marca de CiU, terminando dos de sus secretarios generales en la filas convergentes; AP se transformaba en 1989 como en el resto de España en el Partido Popular (PP), sumando a sus fuerzas originarias náufragos diversos del centro-derecha, pero con una influencia residual en la política catalana; y, finalmente, el PSUC se reconvertía en Iniciativa per Catalunya en 1987 y en Iniciativa per Catalunya Verds en 1995 (ICV), agrupando a colectivos ecologistas, feministas y pacifistas tras una etapa de fragmentación a causa de la crisis del bloque comunista.

Las legislaturas se sucedían con grandes hitos como la admisión en la Comunidad Económica Europea en 1986 o los grandes fastos de 1992 con las Olimpiadas de Barcelona como máximo ejemplo. Sin embargo, políticamente la continuidad era el hecho más destacable. El desafío planteado por los criterios de convergencia fijados en el Tratado de Maastricht para acceder a la eurozona facilitó un cierto acercamiento entre PSOE y CiU a nivel español. Si en 1989 los socialistas se quedaron a un solo escaño de la mayoría absoluta, en 1993 la distancia fue mayor y los convergentes se convirtieron en el socio parlamentario necesario y estable, en un contexto de escándalos de corrupción. Se recuperaba así la táctica del “peix al cove”, duramente criticada por el PP y su entorno mediático, que

veía en ella una impúdica compra-venta.

La situación se invirtió con las elecciones del 3 de marzo de 1996, cuando fue el PP, con una mayoría insuficiente, quien necesitó los votos de CiU. En ambos casos, Pujol se negó a entrar en el Ejecutivo y prefirió el apoyo externo. Esta táctica generó un fuerte resentimiento y unas primeras campañas anticatalanas en España, pues se destacaban más los réditos obtenidos para la Generalitat (participación en el reparto del IRPF, cesión de las competencias de tráfico a los mossos d'esquadra...), casi entendidos como robo, que no las medidas más generalistas que también se aprobaban. A ello contribuyó también la propia actitud de CiU, que alentaba la confusión entre Gobierno, partido y Cataluña. En este periodo, Pujol aparecía como el gran hacedor de la política española, capaz de apoyar a uno u otro partido en el Gobierno central en función de sus propios intereses. Además, ello incidía en la política catalana, pues la oposición, primero socialistas y después populares, quedaba maniatada en el Parlamento catalán por la dependencia de sus colegas españoles del apoyo de CiU.

Esta concentración de poder en manos de CiU no estaba exenta de desgaste. En las elecciones de 1995, Pujol quedó dos escaños por debajo de la mayoría absoluta, pero la influencia en la política española y la diversidad propia del Parlamento catalán le permitieron salvar la situación. No es casual que la nueva Ley de Política Lingüística se apruebe en 1998, sin el consenso de la de 1983, y con una mayor beligerancia que pretendía acelerar la extensión del uso social del catalán y, al mismo tiempo, cubrir el flanco nacionalista incómodo con el pacto con los populares. Esta incomodidad se incrementará a partir de 1999, cuando CiU obtenga solo 56 diputados (a 12 de la mayoría absoluta), quede en segundo lugar en porcentaje de votos y dependa de los populares.

Por primera vez el PSC, con el exalcalde de Barcelona Pasqual Maragall como candidato, conseguía arrebatar el primer puesto a CiU con el 37,85% de los votos frente al 37,70, y solo la prima territorial situaba a Pujol por delante en escaños. Maragall llevaba consigo el prestigio de la Barcelona olímpica, un pedigrí catalanista innegable (nieto del poeta Joan Maragall e hijo del filósofo Jordi Maragall), una influencia que traspasaba los límites estrictos de su

partido (aunque ello también le provocaba conflictos con este) y una propuesta regeneradora del catalanismo político que apostaba por el federalismo asimétrico para encajar Cataluña y reformar España. Pero, sobre todo, representaba la contrafigura de un Pujol cuyo proyecto político parecía en decadencia, pero que aspiraba a dictar su propio legado y sucesión.

Sin embargo, por poco a ambos les fallaron las fuerzas. Maragall no tenía suficiente con la victoria en sufragios ni Pujol con la de escaños. Descartada una gran coalición y sin posibilidad de sumar por parte de las izquierdas, la única alternativa era un pacto entre CiU y PP, similar al ya existente en el Congreso español. De hecho, el resto de fuerzas le eran contrarias a los convergentes, pues en ERC una nueva generación encabezada por Josep Lluís Carod-Rovira priorizaba la alternancia y el pacto de izquierdas por encima del nacionalismo —a pesar de su desacomplejado independentismo— e ICV defendía un proyecto social contrario. Se trataba, por tanto y en principio, de apoyarse mutuamente en el Congreso y en el Parlamento autonómico, aunque ello acentuaba la tendencia conservadora de CiU y la alejaba de su electorado más nacionalista, y en cambio centraba la imagen del PP.

La mutua y equilibrada dependencia se trastocó el 12 de marzo de 2000, cuando el PP conseguía la mayoría absoluta en las Cortes españolas. A partir de ese momento, será CiU quien necesite de los populares para gobernar en Cataluña, pero no a la inversa. La segunda legislatura de José María Aznar descubría a unos populares mucho más contundentes en sus ofensivas de respañolización y derechización de la sociedad española, arrastrando con ellos a un Pujol que dependía de sus votos y permitiendo a la oposición en Cataluña poner de manifiesto la laminación de la autonomía y los beneficios sociales.

Con este panorama, el presidente catalán anunciaba su retirada y el país entraba claramente en una segunda Transición. Las páginas que siguen intentan una crónica más periodística que histórica por falta de suficiente perspectiva, pero señalando los principales hechos de una época sumamente compleja, y esbozando unas primeras —sin intención de aparecer como definitivas— reflexiones que puedan ayudar a situarse.

Nueve años de ‘Dragon Khan’

Las elecciones del 16 de noviembre de 2003 eran las primeras tras 23 años de pujolismo. Sin el peso político de su histórico líder y con un novato jefe de filas —elegido tras una dura tensión en el seno de CiU por convertirse en l’hereu (“el heredero”)—, el conseller en cap Artur Mas, se preveía un fuerte descalabro electoral. En cambio, la apuesta segura a la presidencia correspondía a un Pasqual Maragall que cuatro años antes se había quedado a las puertas, que ya no tenía a Pujol como oponente y que contaba con el apoyo implícito de ERC e ICV para un futuro gobierno.

Contra pronóstico, CiU bajó, pero conservó la primera posición como grupo parlamentario con 46 escaños, 10 menos que la anterior legislatura. El PSC volvía a ganar en porcentaje (31,16% frente al 30,94), pero también perdía 10 diputados y se quedaba en 42. Eran los otros tres partidos quienes se aprovechaban del desgaste de los dos grandes. Así, ERC se beneficiaba del choque de nacionalismos provocado por la agresividad del presidente Aznar y conseguía 23 escaños (11 más que en la legislatura anterior); ICV hacía lo propio con su defensa de la agenda social, logrando nueve diputados (seis más); y el propio PP, gracias al efecto multiplicador de gobernar en Madrid, se situaba en cuarto lugar con 15 escaños (tres más).

Los resultados evidenciaban que el mapa político catalán se estaba transformando. Mantenía su pluralidad —de hecho, la incrementaría en las tres siguientes legislaturas—, pero los dos grandes partidos hegemónicos sufrían un lento e inexorable desgaste que los alejaba de las mayorías absolutas. Al mismo tiempo, los hasta entonces tres partidos menores recortaban las distancias, apropiándose de la llave de la gobernabilidad. Por último, se desvanecía la falsa sensación de independencia del sistema político catalán respecto del español y, a partir de este momento, las interdependencias e interferencias serán explícitas.

Los acuerdos postelectorales pondrían fin al dominio convergente de la Generalitat, concretándose la alternancia con un Gobierno a tres entre PSC, ERC e ICV, con Pasqual Maragall como presidente. Sin embargo, este nacía con una serie de debilidades congénitas. La victoria no era completa, pues CiU conservaba el primer lugar en el Parlamento, el PSC también había perdido apoyos, dependía en exceso de sus socios y llegaba a la Generalitat con la sensación de hacerlo una legislatura tarde, y los miembros del nuevo Ejecutivo, lejos de constituir un Gobierno unido y unitario, proyectaban una imagen de agregación circunstancial.

Ese llegar con las fuerzas justas fue rápidamente subrayado por los medios de comunicación contrarios a la alternancia y repetido incluso por los más cercanos ante las primeras evidencias de descoordinación. El nuevo Gobierno no consiguió ni imponer su propia nomenclatura y triunfó la despectiva denominación del “Tripartit”. La legislatura no tuvo ni un momento de tranquilidad, agitada interna y externamente.

Así, tras firmarse el Pacte del Tinell el 14 de diciembre de 2003 — donde se concretaba el acuerdo entre los tres partidos, se establecía una clara beligerancia con el Gobierno del PP en Madrid y se reconocía el carácter decisivo de ERC—, seis días más tarde asumía la presidencia Pasqual Maragall y, al cabo de un mes, ya debía dimitir su conseller en cap y líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, al filtrarse su reunión con la cúpula de ETA en Perpiñán. A esta crisis de gobierno se sumarían otras como la denuncia realizada por el presidente, en sede parlamentaria y después retirada, de que CiU había cobrado el 3% de comisiones en obra pública; el hundimiento de un túnel de metro en el barrio barcelonés del Carmel; la fotografía con una corona de espinas en Jerusalén, entre otras.

Pero sin duda, la cuestión que más trastornó al Gobierno Maragall fue la gestación del nuevo Estatuto. Este surgió como promesa electoral para evidenciar la parálisis de los últimos años de gobierno de CiU, buscar el cuerpo a cuerpo con un PP desacomplejadamente españolista y reforzar el propio perfil catalanista. La sorpresa surgió cuando a la victoria del Tripartit se sumó el inesperado triunfo del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero como candidato el 14 de marzo de 2004. De repente, el

nuevo texto estatutario ya no era una simple estrategia electoral y de confrontación, sino que tenía visos de realidad, sobre todo tras el compromiso del líder socialista español el noviembre anterior, aún candidato, de “apoyaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Catalunya”.

La redacción del nuevo Estatuto se convirtió en un espectáculo continuo, donde los diferentes partidos competían por los titulares diarios tras cada reunión de la comisión encargada de su redacción. Cada partido miraba de incluir guiños a su propio electorado y de aparecer como el máximo defensor del autogobierno catalán, en una auténtica campaña de despropósitos. Así, CiU desde la oposición trabajaba por acentuar las contradicciones dentro del Tripartit sumándose entusiásticamente a la ponencia estatutaria, con la inconsciente colaboración de una ERC que se sentía víctima de supuestos complots —con este discurso obtendría un gran resultado electoral en las generales de 2004, con Carod-Rovira como jefe de filas— e intentaba arrastrar al PSC hacia el soberanismo.

La redacción final se cerraba el 30 de septiembre de 2005 con los votos favorables de CiU y el Tripartit, y la única oposición del PP. A pesar del amplio apoyo político por parte del catalanismo, el texto topó con una fuerte resistencia en el Congreso español por parte del PSOE y del PP. Especialmente contundente fue la oposición popular, pues a las críticas parlamentarias sumó un recurso de anticonstitucionalidad y una campaña pública de recogida de firmas que incitaba claramente al anticatalanismo.

A las críticas formales, derivadas de una redacción por agregación y con una extensión sumamente prolija, se sumaban las ideológicas y de contenido. Para los grandes partidos españoles, el catalanismo intentaba blindar y ampliar su autonomía a través de una reforma indirecta y/o interpretación interesada de la Constitución y de una apropiación de competencias estatales. Curiosamente, poco después se desataba una ola de revisiones de otros estatutos, mimética de la catalana, pues se llegaron a copiar artículos concretos, pero sin que estos casos levantaran suspicacias en el Congreso.

Finalmente y tras una severa revisión —se modificó en diferentes grados la mitad del articulado—, las Cortes españolas aprobaban el

Estatuto, tras un acuerdo directo entre Artur Mas y Rodríguez Zapatero, que suponía un desaire para el Tripartit y un reconocimiento al líder de la oposición. Retornado el texto a Cataluña, se convocaba un referéndum para su aprobación el 18 de junio de 2006, con una participación del 49% y un 74% de votos favorables. Previamente, el anuncio de ERC de abogar por el voto en contra provocó su expulsión del Gobierno por parte del presidente Maragall y, por tanto, prácticamente se daba la legislatura por acabada. Además, cuestionado abiertamente desde su propio partido, anunciaba su intención de no repetir candidatura a las elecciones anticipadas convocadas para el 1 de noviembre de 2006.

Maragall únicamente había presidido la Generalitat durante casi tres años. Sin embargo, la ajetreada legislatura había merecido el sobrenombre de Dragon Khan, en referencia a la montaña rusa de Port-Aventura. Las crisis, los escándalos, las diferencias internas y, finalmente, la complicada gestación del Estatuto habían dejado un mal sabor de boca a la primera experiencia de gobierno autonómico de izquierdas tras 23 años de pujolismo. El Tripartit había sido incapaz de superar el sambenito inicial e incluso de vender una obra de gobierno real. El Dragon Khan había ocultado completamente unas realizaciones relevantes, donde destacaban las importantes inversiones en infraestructuras y políticas sociales, el Plan de Barrios o los intentos por despolitizar la gestión cultural y los medios de comunicación públicos.

Los resultados electorales de 2006 constataron la resiliencia de CiU; tras casi tres años alejada del poder, habían conseguido mantener el partido cohesionado y parte de su electorado movilizado. Artur Mas incluso mejoró resultados y obtuvo 48 escaños (dos más), pero aún lejos de una mayoría suficiente. De hecho y aunque a la baja, los miembros del Tripartit sumaban suficientes diputados para volver a gobernar: PSC obtenía 37 (cinco menos), ERC 21 (dos menos) e ICV 12 (tres más).

Así, el nuevo líder electoral socialista, exalcalde de Cornellà y exministro de Industria, José Montilla se convirtió en el nuevo presidente de la Generalitat. Su nombramiento tenía un gran simbolismo. Por un lado, él había participado tanto en la gestación

del primer Tripartit como en la operación para apartar a Maragall. Por el otro, era el primer presidente autonómico de la democracia nacido fuera de Cataluña y a ello sumaba su control sobre un PSC que parecía haber superado la supuesta división entre dos almas o tendencias: una más catalanista y otra más izquierdista.

A pesar de la tendencia inexorable a la baja, nunca los socialistas catalanes habían concentrado tanto poder: participaban del Gobierno central, de la Generalitat y de buena parte del poder local. Se trataba de un espejismo momentáneo que, visto en perspectiva, bien podría considerarse como su canto del cisne. La reconfiguración del mapa electoral intuita en la anterior legislatura seguía avanzando. Por un lado, CiU se mantenía como primera fuerza, pero lejos ya de las mayorías de antaño, mientras se acortaban las distancias entre PSC, ERC, PP (lograba 14 escaños, uno menos que la anterior legislatura) e ICV. Por el otro, el Parlamento catalán conservaba su gran diversidad y, de hecho, la incrementaba con la aparición de Ciutadans.

El nuevo partido, encabezado por Albert Rivera y apadrinado por diversos intelectuales críticos hacia el catalanismo, conseguía tres diputados —gracias al trasvase de votos tanto del PP como del PSC— y manifestaba su directa oposición a la inmersión lingüística. Aunque la realidad catalana mostraba una conflictividad lingüística anecdótica y unos resultados educativos comparables a los del resto de España, la ley de 1998 había revitalizado a una serie de grupos opuestos a la normalización. Además, ahora contaban con la simpatía política y el apoyo mediático de los sectores partidarios de una reespañolización dirigida hacia todas las autonomías con lengua y cultura propias.

El nuevo Tripartit —que intentaría en vano ser conocido como Govern d'Entesa— se suponía que había aprendido la lección. Así, integró en el Ejecutivo a los hombres fuertes de todas las fuerzas que lo componían e hizo bandera de la firmeza presidencial y de la prudencia gubernamental. Sin embargo y a pesar de éxitos concretos como la consensuada Ley de Educación, tres problemas combinados fueron insuperables.

En primer lugar y aunque en un grado menor, siguieron produciéndose tensiones internas en el Gobierno, pues los consellers

respondían más ante sus propios partidos que ante el presidente. El segundo problema fue la crisis económica que a partir de 2007 se dejó sentir con fuerza, empezó a afectar las finanzas autonómicas y obligó a los primeros recortes de gasto. Y, en tercer y último lugar, durante toda la legislatura planeó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP. Este creaba una tensión creciente entre PSC y PSOE, a pesar de la importancia del socialismo catalán en la victoria de Rodríguez Zapatero en las generales de 2008. La sentencia del Tribunal Constitucional no se produjo hasta el 28 de junio de 2010, declarando inconstitucionales 14 artículos, reinterpretando 27 más y considerando el término nación incluido en el preámbulo sin eficacia jurídica.

La sentencia y su posterior gestión superó al propio Gobierno. El 10 de julio se convocaba una multitudinaria manifestación bajo el lema “Som una nació. Nosaltres decidim” (“Somos una nación. Nosotros decidimos”). Aunque el Gobierno acabó adhiriéndose y asistieron unidos los diferentes presidentes de la Generalitat y del Parlamento catalán de la democracia, la iniciativa ya no les correspondía. De repente, surgían diferentes iniciativas que apostaban claramente por el independentismo, mientras que las vías más clásicas del catalanismo como la pactista y la federal perdían presencia pública, cuando no apoyos.

La apuesta por la reforma estatutaria había buscado una solución diferenciada y propia para Cataluña, recuperando la excepcionalidad de la Generalitat provisional de Tarradellas con una relación de carácter bilateral entre gobiernos y blindando cuestiones polémicas y sensibles como la lengua, el techo competencial y la financiación. Además, el nuevo texto había de permitir encarar nuevos derechos y realidades no presentes en 1979: desde la revolución digital hasta la integración de la nueva ola de inmigración, procedente ya de todo el mundo, que había elevado la población catalana hasta los 7,5 millones de personas.

Sin embargo, el proceso había tensionado en exceso la relación con las izquierdas españolas hasta casi la ruptura, había convencido a la derecha española de las ventajas electorales del anticatalanismo, había agotado a muchos de los federalistas y pactistas dentro del catalanismo... Más allá de la concreción textual, la operación del

nuevo Estatuto se había revelado como una derrota para el catalanismo clásico y una victoria para los esencialismos de ambos lados. Ante esta situación, el presidente Montilla convocaba elecciones para el 28 de noviembre de 2010.

La implosión del oasis

Para el catalanismo conservador, el nuevo Parlamento en 2010 devolvía las cosas a su cauce natural: CiU recuperaba la Generalitat tras siete años en la oposición. Artur Mas mejoraba sus dos anteriores resultados y obtenía una clara mayoría (62 diputados), aunque insuficiente. Sin embargo, los malos datos de los integrantes del Tripartit hacían imposible que esta vez se le escapase la presidencia. Así, el PSC se quedaba en 28 escaños (9 menos) y ERC e ICV en 10 cada uno (11 y 2 menos, respectivamente). Por su parte, el PP mejoraba levemente sus datos, al lograr 18 diputados (4 más). Pero la gran sorpresa la daban Solidaritat Catalana per la Independència (SI), encabezada por el expresidente del F. C. Barcelona, Joan Laporta, con 4 escaños, y el mantenimiento de Ciutadans, que repetía sus 3 diputados y evidenciaba su consolidación en el mapa político catalán.

El nuevo Gobierno integró a algunos independientes como el ex-conseller socialista Ferran Mascarell y trató de capitalizar y dirigir el creciente movimiento soberanista. Sin embargo, su objetivo inicial de pacto fiscal —similar al vasco y navarro— fue desestimado tanto por el Gobierno saliente de Rodríguez Zapatero como por el entrante de Mariano Rajoy, que en noviembre de 2011 obtenía la mayoría absoluta. La estrategia de Mas solo era viable en caso de contar con la llave de la gobernabilidad en Madrid y, sin ella, parecía no haber plan alternativo.

De hecho, buena parte de los sectores nacionalistas ya habían derivado, de la mano de la recién creada Asamblea Nacional Catalana (ANC), hacia el independentismo, rebautizado como soberanismo (esta tendencia a renombrar conceptos clásicos también ha convertido el derecho de autodeterminación en un aséptico derecho a decidir). Este movimiento se vio alimentado tanto por la sensación de fracaso tras el Estatuto de 2006 como por la posterior crisis económica, por determinadas políticas del PP

desde el Gobierno central percibidas como agresiones al autogobierno —desde leyes concretas como la Lomce del ministro José Ignacio Wert a decisiones políticas respecto a infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias— y por simplificaciones con gran poder de convocatoria como “el expolio fiscal” de Cataluña a manos del resto del Estado.

Las dificultades para el Gobierno Mas no se limitaban al frente nacionalista, sino que se extendían al social. Lejos de superarse la crisis económica, esta obligó a nuevos recortes que afectaron sobre todo a las prestaciones sociales, las inversiones y el funcionariado, sin impedir que la Generalitat llegase al borde del colapso financiero. El creciente malestar social se concretó en multitud de protestas y plataformas reivindicativas, sin ser capitalizado por una oposición que todavía se estaba recuperando de la anterior experiencia de gobierno. De hecho, el legado del Tripartit y los malos resultados electorales acabaron provocando crisis profundas tanto en el PSC como en ERC.

En el caso de los socialistas, la retirada de José Montilla y su sustitución por el exalcalde de Terrasa, Pere Navarro, no calmó el creciente malestar interno fruto de la progresiva pérdida de poder institucional. Así, el 1 de julio de 2011, el PSC era descabalgado del Ayuntamiento de Barcelona y consecuentemente de la Diputación provincial. Por primera vez la capital catalana se hallaba en manos de CiU, con el triunfo de Xavier Trias. Aunque mantendría algunas poblaciones importantes como Lleida y recuperaría otras como Tarragona, el PSC sufría un retroceso generalizado, quedando fuera de todas las diputaciones provinciales. La puntilla serían las ya citadas elecciones generales de noviembre de 2011, cuando el PP obtiene la mayoría absoluta, haciendo inútil la victoria socialista en la provincia de Barcelona (Sevilla sería la otra única provincia donde el PSOE conservaría la primera posición).

Reducidas sus bases institucionales, el PSC se veía sacudido por el creciente debate soberanista. Simplificando, la actual dirección priorizaba el mantenimiento de la relación con el PSOE como vía para reeditar, cuando fuera posible, la antigua apuesta por una solución federal, aunque ello significase una contracción de su electorado a corto plazo; y, por otro lado, se situaban diversos

dirigentes que, con diferentes grados de intensidad, defendían la implicación del socialismo catalán en el proceso soberanista para incidir sobre él, dando en algunos casos la actual relación con el socialismo español como amortizada.

Respecto de ERC, su carácter asambleario jugó nuevamente un papel decisivo, provocando la salida de toda su anterior cúpula dirigente —en 2009 ya se había producido una escisión, Reagrupament, independentista y próxima al neoliberalismo—. Llegaba así a la cúpula del partido el hasta poco antes independiente Oriol Junqueras, previamente eurodiputado por ERC. Se aparcaba la apuesta por una mayoría de izquierdas y el partido volvía a focalizarse en la independencia, acercándose por tanto nuevamente a CiU.

De hecho, esta implosión del sistema de partidos y de las apuestas clásicas del catalanismo político coinciden con un recambio de la clase política catalana. Así, las generaciones formadas bajo el antifranquismo, de extracción mayoritariamente burguesa, profesionales liberales y sindicalistas, dan paso a unos dirigentes de procedencia más diversa y políticamente profesionalizados.

De la mano de esta nueva generación, la cuestión nacional pasó a centrar la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas el 25 de noviembre de 2012. Tras la multitudinaria manifestación de la Diada convocada por la ANC, Artur Mas pedía al electorado una mayoría clara que le permitiera encabezar el proceso soberanista —olvidado ya el pacto fiscal— y soslayar el desgaste por los recortes sociales y económicos. Sin embargo, el recuerdo de la tradicional ambigüedad de CiU respecto de la cuestión nacional hacía poco creíbles para determinados sectores su conversión soberanista, percibida como interesada y reactiva. A ello cabría sumar el castigo por la gestión de la crisis y el efecto negativo de los casos de corrupción (caso Palau de la Música o Félix Millet, caso Pretoria, caso de las ITV, etc.). Ello se tradujo en un descenso de 12 escaños, quedándose en 50.

Este descalabro era aprovechado por ERC, que, con su nuevo líder, lograba 21 diputados (11 más) y se convertía en el jefe de la oposición y, al mismo tiempo, principal apoyo parlamentario del Gobierno. Este doble juego beneficiaba claramente a los

republicanos, mientras desgastaba tanto al gobierno, que era quien asumía los recortes, como a la oposición, a quien robaba el protagonismo.

Parlamentariamente, se producía un casi empate a cuatro, consolidándose la tendencia anunciada en las últimas elecciones. Justo tras ERC, el PSC seguía con su caída libre y bajaba hasta los 20 escaños (8 menos), el PP sumaba uno y se quedaba con 19 diputados e ICV llegaba a los 13 (3 más). Además, Ciutadans incrementaba sustancialmente su representación al conseguir 9 diputados (6 más) y, por tanto, grupo parlamentario propio. A su tradicional denuncia lingüística sumaba una contundente crítica a la corrupción, en un momento especialmente sensible a consecuencia de la crisis económica y de la acumulación de supuestas corruptelas. Por su parte, las Candidatures d'Unitat Popular (CUP) ocupaban el lugar del SI —víctima del choque de egos de sus dirigentes— en la anterior legislatura y confirmaban el peso del catalanismo radical de izquierdas alternativo.

Con todo, esta mayor frecuencia de convocatorias electorales y mayor diversidad parlamentaria estaba lejos de representar un avance significativo hacia algún lugar. Al contrario, se extendía la sensación de parálisis ante una situación económica que condicionaba cualquier gasto, inversión o política. Resistir y esperar que el temporal amainase parecía ser la única consigna, mientras desde el Estado —condicionado en parte por Europa y en parte por sus propios intereses— no se facilitaban precisamente las cosas.

Sin respuestas a la crisis y obturadas las tradicionales propuestas de encaje de Cataluña en España, la solución soberanista ganaba adeptos o, cuando menos, presencia pública. El histórico independentismo —hasta entonces poco significativo y limitado a ERC, CUP y otras fuerzas extraparlamentarias— veía incrementadas sus filas gracias en parte a la sensación de agotamiento de las vías tradicionales, en parte por reacción ante ciertas actuaciones desde la Administración central, y en parte por la influencia de unos medios de comunicación catalanes —públicos principalmente, pero también privados— y de un importante grupo de intelectuales comprometidos —algunos convertidos— con el llamado proceso. Así, la Diada de 2013, convocada nuevamente por la ANC, repetía su

éxito de convocatoria, con una cadena humana –inspirada en la cadena báltica de 1989– de 400 kilómetros que recorría de punta a punta el territorio catalán.

El 13 de diciembre de 2013 y casi contra todo pronóstico, los partidos comprometidos con la celebración de una consulta sobre la independencia —CiU, ERC, ICV y CUP, pues el PSC finalmente quedaba fuera— fijaban fecha para la votación, el 9 de noviembre de 2014, y una doble pregunta: “‘Vol que Catalunya esdevingui un Estat?’ i, si és que sí, ‘Vol que aquest estat sigui independent?’” (“¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado?’ y, en caso afirmativo, ‘¿Quiere que dicho Estado sea independiente?’”). Desde el Gobierno español, Mariano Rajoy se reafirmaba en su negativa a negociar o simplemente hablar sin previa retirada de la consulta. Ante este diálogo de sordos, donde tampoco parecen hallar eco los partidarios de terceras vías, el debate ha pasado a ser indirecto. Así, la disputa se ha trasladado a los territorios (por las balanzas fiscales), a los tribunales (por la lengua y las competencias), a los medios de comunicación (por el control del relato político) e, incluso, a la esfera internacional (en busca de apoyos de terceros).

A partir de aquí, lo que deparará el futuro ya no corresponde al trabajo del historiador.

Bibliografía

Albertí, Santiago (1972): El republicanisme català i la restauració monàrquica (1875-1923), Barcelona, Albertí Editor.

Almirall, Valentí (1886a): L'Espagne telle qu'elle est, Montpellier, Imprimerie Centrale du Midi.

— (1886b): Lo catalanisme. Motius que'l llegendan, fonaments científics y solucions pràcticas, Barcelona, Llibrería de Verdaguer/Llibrería de López.

— (1891): Contestación al discurso leído por D. Gaspar Núñez de Arce en el Ateneo de Madrid con motivo de la apertura de sus cátedras en el año corriente, Madrid/Barcelona, Librería de Antonio Sanmartín/Librería de Inocente López.

Altadill, Antonio (1869): La monarquía sin monarca: grandezas y miserias de la Revolución de Setiembre; Barcelona, Eduardo González, editor.

Álvarez Junco, José (1990): El emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista, Madrid, Alianza editorial, pp. 353-354.

— (2010): “España, el debate sobre la nación”, en Nigel Townson (dir.), ¿Es España diferente?, Madrid, Taurus.

Amat, Jordi (2008): Els laberints de la llibertat, Barcelona, La Magrana.

— (ed.) (2010): Els “Coloquios Catalunya-Castilla” (1964-1971). Barcelona: PAM.

Amat, Jordi y Fuster Sobrepere, Jordi (inédito): “Història de la cultura catalana contemporània”.

Anderson, Benedict (1983): *Imagined communities. Reflections on the origin and the spread of nationalism*, Londres, Verso.

Anguera, Pere (1989): “La Restauració a la Catalunya urbana (1875-1900)”, en *Actituds polítiques i control social a la Catalunya de la Restauració (1875-1923)*, Lleida, Virgili & Pagès.

— (1999): *El carlisme a Catalunya, 1827-1936*, Barcelona, Empúries.

— (1999): *Literatura, pàtria i societat. Els intel·lectuals i la nació*, Vic, Eumo.

— (2000): *Els precedents del catalanisme. Catalanitat i anticentralisme: 1808-1868*, Barcelona, Empúries.

— (2000): “Carlisme i reivindicació catalana a la tercera guerra”, en *Millars. Espai i Història*, XXIII.

— (2002): “Per què no podien ser foralistes els primers carlins catalans?”, en *Carlisme, foralisme i qüestió nacional. La premsa carlina*, Solsona, Fundació Pública Comarcal Francesc Ribalta.

Antón, Javier (2003): “Antoni de Capmany (1742-1813): análisis del pasado catalán para un proyecto español”, *Obradoiro de Historia Moderna*, 12, p. 23.

Aracil, Rafael y Segura, Antoni (dirs.) (2008): *Memòria de la transició a Espanya i a Catalunya*, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona.

Araque Ontangas, Natividad (2008): *Las elecciones en el reinado de Isabel II: la Cámara Baja*, Madrid, Congreso de los Diputados, pp. 327-460.

Archilés, Ferran y Martí, Manuel (2005): “Una nació fracassada? La construcció de la identitat nacional espanyola al llarg del segle XIX”, en *Recerques*, núm. 51.

Arnabat Mata, Ramon (2001): *La revolució de 1820 i el Trienni liberal a Catalunya*, Vic, Eumo.

Azaña, Manuel (2000): Diarios completos, Barcelona, Crítica.

Bada, Joan (1987): Guerra civil i Església catalana, Barcelona, PAM.

Badia, F. (2001): Els camps de treball a Catalunya durant la guerra civil, 1936-1939, Barcelona, PAM.

Balaguer, Víctor (1895): Los Juegos Florales en España. Memorias y discursos, Barcelona, Tip. De Luis tasso, pp. 33-34.

Balcells, Albert (1992): Història del nacionalisme català. Dels orígens als nostres temps, Barcelona, Generalitat de Catalunya.

— (2009): El pistolisme: Barcelona (1917-1923), Barcelona, Pòrtic.

Balcells, Albert; Culla, Joan B. y Sabater, Jordi (1996): La Mancomunitat de Catalunya i l'autonomia, Barcelona, Proa.

Balfour, Sebastián (1994): La dictadura, los trabajadores y la ciudad, Valencia, Alfons el Magnànim.

Ballot, Joseph Pau (1814): Gramática y apología de la lengua catalana, Barcelona, Estampa de Juan Francisco Piferrer, pp. 267-268.

Barbagallo, Francesco y otros (1990): Franquisme. Barcelona, Crítica.

Batista, Antoni (1991): La gran conspiració, Barcelona, Empúries.

— (1995): La Brigada social, Barcelona, Empúries.

Beevor, Anthony (2005): La guerra civil española. Barcelona, Crítica.

Belchem, John (1995): "Nationalism, Republicanism and Exile: Irish Emigrants and the Revolutions of 1848", en Past and Present, núm. 146, febrero.

Benet, Josep (1995): L'intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya, Barcelona, PAM.

Bengoechea, Soledad (1994): Organització patronal i conflictivitat social a Catalunya, Barcelona, PAM.

— (1998): El Locaut de Barcelona, Barcelona, Curial.

— (2005): Reacció en temps de canvis, Barcelona, Societat Catalana d'Estudis Històrics.

Bennassar, Bartolomé (2005): El infierno fuimos nosotros, Madrid, Taurus.

Billig, Michael (1995): Banal Nationalism, Londres/Thousand Oaks/Nueva Delhi, Sage.

Bonamusa, Ferran (1997): Andreu Nin y el movimiento comunista en España, 1930-1937, Barcelona, Anagrama.

— (2006-2009): Generalitat de Catalunya: obra de govern. Barcelona, Generalitat de Catalunya.

Bosch Gimpera, Pere (1996): El problema de las Españas, Madrid, Alianza Editorial.

Bricall, Josep Maria (2003): Memòria d'un silenci. Barcelona, Rosa dels Vents.

Burgueño, Jesús (1995): De la vegueria a la província. La formació de la divisió territorial contemporània als Països Catalans (1790-1850), Barcelona, Rafael Dalmau editor.

Caballer, Gemma (2006): Campanyes populars i reivindicacions nacionals a la Barcelona de la transició, Barcelona, Ajuntament de Barcelona.

Cabana, Francesc (2000): 37 anys de franquisme a Catalunya, Barcelona, Pòrtic.

Cacho Viu, Vicente (1998): El nacionalismo catalán como factor de modernización, Barcelona, Quaderns Crema/ Publicaciones de la Residencia de Estudiantes.

Calvet 'Gazel', Agustí (2010): Meditacions en el desert

(1946-1953), Barcelona, La Magrana.

— (2013): Tot s'ha perdut, Barcelona, RBA.

Caminal, Miquel (1998): Nacionalisme i partits nacionals a Catalunya, Barcelona, Empúries.

Camps i Giró, Joan (1978): La Guerra dels Matiners i el catalanisme polític (1846-1849), Barcelona, Curial.

Capmany, Antonio de (1808): Centinela contra franceses, Madrid, Gómez Fuentenebro y Cía, pp. 17-18.

— (1813): Exposición que en favor de los Ayuntamientos leyó el Señor Diputado en la sesión pública de las Cortes el día 13 de junio de 1813, Cádiz, Vicente Lema, p. 6.

Canals, Enric (2013): Pujol Catalunya, Barcelona, Pòrtic.

Candel, Francesc (2008): Els altres catalans, Barcelona, Edicions 62.

Cañellas, Anton y otros (1976): Les terceres vies a Europa, Barcelona, Nova Terra.

Casals, Xavier (2010): El oasis catalán, Barcelona, Edhasa.

Casanova, Julián (1997): De la calle al frente, Barcelona, Crítica.

Casassas, Jordi (1990): Entre Escil·la i Caribdis. El catalanisme i la Catalunya conservadora de la segona meitat del segle XIX, Barcelona, Edicions de la Magrana.

— (coord.) (1999): Els intel·lectuals i el poder a Catalunya (1808-1975), Barcelona, Pòrtic.

Casassas, Jordi y Santacana, Carles (2003): Josep Tarradellas o la reivindicació de la memoria (1899-1988), Lleida, Pagès Editors.

Castells, V. (2002): Nacionalisme català i guerra civil a Catalunya, 1936-1939, Barcelona, Rafael Dalmau.

Cebrián, Carme (1997): Estimat PSUC, Barcelona, Empúries.

CEFID (2006): Catalunya durant el franquisme, Vic, Eumo.

Colomé, Gabriel (1989): El Partit dels Socialistes de Catalunya, Barcelona, Edicions 62.

Colomer, Josep Maria (1978a): Els estudiants de Barcelona sota el franquisme, Barcelona, Curial.

— (1978b): Espanyolisme i catalanisme, Barcelona, Curial.

— (1986): La ideologia de l'antifranquisme, Barcelona, Edicions 62.

Colomines, Agustí (1984): El catalanisme i l'Estat, Barcelona, L'Avenç.

Coll i Amargós, Joaquim (1998): Narcís Verdaguer i Callís (1862-1918) i el catalanisme possibilista, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Congost, Rosa (1990): Els propietaris i els altres. La regió de Girona 1768-1862, Vic, Eumo.

— (1991): “Enfiteusis y pequeña explotación campesina en cataluña, siglos XVIII-XIX”, en Pegerto Saavedra y Ramón Villares (eds.), Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XIX (2 vols.), Barcelona, Crítica.

Constitución política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812 (2012): Ed. facsímil de Cádiz, Quórum editores, p. 19.

Coroleu, Josep y Pella i Forgas, Josep (1878): Los fueros de Cataluña, Barcelona, Imp de Luis Tasso.

Crexell, Joan (1982): Els Fets del Palau i el consell de guerra a Jordi Pujol, Barcelona, La Magrana.

Cucurull, Fèlix (1975): Panoràmica del nacionalisme català, París, Edicions catalanes de París.

— (1984): Catalunya republicana i autònoma, Barcelona, La Magrana.

Culla, Joan B. (1986): El republicanisme lerrouxista a Catalunya, 1901-1923, Barcelona, Curial.

— (dir.) (1999): Autogovern i reptes de la fi de segle, 1980-1997, Barcelona, Enciclopèdia Catalana.

— (2001): El pal de palla. Convergència Democràtica de Catalunya, 1974-2001. Barcelona, Pòrtic.

— (2009): La dreta espanyola a Catalunya, 1975-2008, Barcelona, La Campana.

— (2013): Esquerra Republicana de Catalunya, 1931-2012, Barcelona, La Campana.

Dahrendorf, Ralf (2009): La libertad a prueba, Madrid, Trotta.

Díaz Esculies, Daniel (1991): El catalanisme polític a l'exili, Barcelona, La Magrana.

— (1993): Entre filferrades, Barcelona, La Magrana.

— (1996): L'oposició catalanista al franquisme, Barcelona, PAM.

Dowling, Andrew (2013): La reconstrucció nacional, Barcelona, Pasado y presente.

Esculies, Joan (2011): Joan Solé Pla, Barcelona, Edicions de 1984.

— (2012): Josep Tarradellas: dels orígens a la República, 1899-1936, Barcelona, DAU.

Esculies, Joan y Martínez Fiol, David (2014): 12.000! Els catalans a la Primera Guerra Mundial, Barcelona, Ara Llibres.

Espriu, Salvador (2013): La pell de brau, Barcelona, Labutxaca.

Ferré, Carme (2000): Serra d'Or, 1959-1977, Cabrera de Mar, Galerada.

Fernàndez, Josep-Anton (2008): El malestar en la cultura catalana, Barcelona, Empuréis.

Figueres, Josep M. (1990): Valentí Almirall, forjador del catalanisme polític, Barcelona, Generalitat de Catalunya.

Fradera, Josep Maria (1992): Cultura nacional en una societat dividida. Patriotisme i cultura a Catalunya: 1838-1868, Barcelona, Curial.

— (1996): Jaume Balmes. Els fonaments racionals d'una política catòlica, Vic, Eumo.

— (2000): “La política liberal y el descubrimiento de una identidad distintiva en Cataluña (1835-1865)”, Hispania, vol. 60, núm. 205.

— (2009): La patria dels catalans, Barcelona, La Magrana.

Fraser, Ronald (2007): Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, Barcelona, Crítica.

Fuster, Jaume (1978): El Congrés de Cultura Catalana, Barcelona, Laia.

Gabancho, Patrícia (2005): La postguerra cultural a Barcelona, Barcelona, Meteora.

Gabriel, Pere y otros (1989): Comissions Obreres de Catalunya, 1964-1989, Barcelona, Empúries.

Galí, Alexandre (1978-1986): Història de les institucions i del moviment cultural de Catalunya, 1900-1936, Barcelona, Fundació Alexandre Galí.

García Balañà, Albert (2002): “Patria, plebe y política en la España isabelina: la guerra de África en Cataluña (1859-1860)”, en Eloy Martín Corrales (ed.), Marruecos y el colonialismo español (1859-1912). De la guerra de África a la ‘penetración pacífica’, Barcelona, Edicions Bellaterra.

García Jordán, P. (1986): Els catòlics catalans i la Segona República, Barcelona, PAM.

Gellner, Ernest (1987): Culture, identity and politics, Cambridge, Cambridge University Press.

Ghanime, Albert (1995): Joan Cortada: Catalunya i els catalans al segle XIX, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Ginebra, Jordi (1997): "El mite de la llengua de les muntanyes: algunes referències sobre la descola i pervivència d'una constant romàntica", en El segle romàntic. Actes del col.loqui sobre el romanticisme. Vilanova i la Geltrú, 2, 3 y 4 de febrero de 1995, Vilanova i la Geltrú, Biblioteca Museu Víctor Balaguer.

González Casanova, José Antonio (1974): Federalisme i autonomia a Catalunya (1868-1938), Barcelona, Curial.

González Vilalta, Arnau (2006): La nació imaginada, Catarroja, Afers.

— (2009): Els diputats catalans a les Corts republicanes, Barcelona, PAM.

— (2009): Lluís Companys: un home de govern, Barcelona, Base.

Grau, Ramon (2011): "Un patriota d'altres temps: Antoni de Capmany i la historiografia racionalista", Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, vol. XXII.

Guillamet, Jaume (1996): Premsa, franquisme i autonomia, Barcelona, Flor del Vent.

— (2014): El desafiament català, Barcelona, L'Avenç.

Guimerà, Àngel (1896): La llengua catalana. Discurs presidencial llegit en la sessió pública celebrada en l'Ateneu Barcelonés lo 30 de novembre de 1895, Barcelona, Tip. L'Avenç.

Hastings, Max (2013): 1914. El año de la catástrofe, Barcelona, Crítica.

Hobsbawm, Eric. J. (1991): Naciones y nacionalismo desde 1780, Barcelona, Crítica.

Hroch, Miroslav (2001): La naturalesa de la nació, Valencia, Universitat de València-Editorial Afers.

Huertas Clavería, Josep Maria y Andreu, Marc (1996): Barcelona en lluita, Barcelona, Federació d'Associacions de Veïns.

Hurtado, Amadeu (2008): Abans del sis d'octubre, Barcelona, Quaderns Crema.

— (2011): Quaranta anys d'advocat, Barcelona, Edicions 62.

Iglésies Fort, Josep (1961): El movimiento demográfico en Catalunya durante los últimos cien años, Barcelona, Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.

— (1969): Síntesi de la Junta de Comerç de Barcelona, Barcelona, Rafael Dalmau editor.

Izard, Miguel ([1970], 1973): Industrialización y obrerismo. Las tres clases de vapor. 1869- 1913, Barcelona, Ariel.

Janué i Miret, Marició (2002): Els polítics en temps de revolució. La vida política a barcelona durant el Sexenni revolucionari, Vic, Eumo.

Juliá, Santos (coord.) (1999): Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de Hoy.

— (2010): Hoy no esa ayer, Barcelona, RBA.

La Revista Militar (1848): Periódico de arte, ciencia y literatura militar, Madrid, Est. Tip. Militar.

Ledesma, José Luis (coord.) (2005): Culturas y políticas de la violencia. España en el siglo XX, Madrid, Siete Mares.

— (2006): Los días de llamas de la revolución, Zaragoza, Institución Fernando el Católico.

Llobera, Josep (2003): De Catalunya a Europa, Barcelona, Empúries.

Llorens i Vila, Jordi (1991): Obrerisme i catalanisme: 1875-1931, Barcelona, Barcanova.

- Lluch, Ernest (1996): La Catalunya vençuda del segle XVIII. Foscors i clarors de la Il·lustració, Barcelona, Edicions 62.
- Lo Cascio, Paola (2008): Nacionalisme i autogovern, Catarroja, Afers.
- López, Manel (2013): Els fets del 6 d'octubre de 1934, Barcelona, Editorial Base.
- Lorés, Jaume (1985): La transició a Catalunya, Barcelona, Empúries.
- MacDonogh, Gary Wray (1989): Las buenas familias de Barcelona. Historia social del poder en la era industrial, Barcelona, Omega.
- MacMillan, Margaret (2013): 1914. De la paz a la guerra, Madrid, Turner.
- Maluquer, Jordi (2000): Història econòmica de Catalunya. Segles XIX i XX, Barcelona, Enciclopèdia Catalana.
- Mañé y Flaquer, Juan ([1886-1887], 1900): El regionalismo, Barcelona, Imp. Barcelonesa.
- Maragall, Pasqual (2008): Oda inacabada, Barcelona, RBA.
- Marcet, Joan (1984): Convergència Democràtica de Catalunya, Barcelona, Edicions 62.
- Marfany, Joan Lluís (1995): La cultura del catalanisme. El nacionalisme català en els seus inicis, Barcelona, Empúries.
- (2001): La llengua maltractada. El castellà i el català a Catalunya del segle XVI al segle XIX, Barcelona, Empúries.
- Marín, Martí (2000): Els ajuntaments franquistes a Catalunya, Lleida, Pagès Editors.
- (2005): Porcioles, Barcelona, Base.
- (2006): Història del franquisme a Catalunya, Lleida, Pagès Editors.

Martín Ramos, José Luis (2002): *Rojos contra Franco*, Barcelona, Edhasa.

Massot, Josep (1975): *L'Església catalana al segle XX*, Barcelona, Curial.

— (1987): *La persecució religiosa del 1936 a Catalunya*, Barcelona, PAM.

Mayayo, Andreu (2002): *La ruptura catalana*, Catarroja, Afers.

— (2007): *La veu del PSUC*. Barcelona, L'Avenç.

Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña, presentada directamente a S. M el Rey en virtud del acuerdo tomado en la reunión celebrada en la Lonja el día 11 de enero de 1885. (1885): Barcelona, Imp. Barcelonesa.

Mercader i Riba, Joan (1978): *Catalunya i l'Imperi napoleònic*, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Mir, Conxita (1989): *Actituds polítiques i control social a la Catalunya de la Restauració, 1875-1923*, Lleida, Pagès.

— (2000): *Vivir es sobrevivir*. Lleida, Milenio.

Miralles, Enrique (1997): “Víctor Balaguer: una biografia”, en *El segle romàntic. Actes del col·loqui sobre el romanticisme*. Vilanova i la Geltrú, 2, 3 i 4 de febrer de 1995, Vilanova i la Geltrú, Biblioteca Museu Víctor Balaguer.

Molas, Isidre (1972): *Lliga Catalana*, Barcelona, Edicions 62.

Molinero, Carme e Ysàs, Pere (1985): *Patria, Justicia y Pan*, Barcelona, La Magrana.

— (1991): *Els industrials catalans durant el franquisme*, Vic, Eumo.

— (1994): *El règim franquista*, Vic, Eumo.

— (1999): *Catalunya durant el franquisme*, Barcelona, Empúries.

— (2010): Els anys del PSUC, Barcelona, L'Avenç.

Morales, Mercè (2008): La Generalitat de Josep Irla i l'exili polític català, Barcelona, Base.

Nadal Oller, Jordi (dir.) (1998): Història econòmica de la Catalunya contemporània, Barcelona, Enciclopèdia Catalana.

— (dir.) (2003): Atlas de la industrialización de España, 1750-2000, Barcelona, Crítica.

Nash, Mary (1999): Rojas, Madrid, Taurus.

Navarra, Andreu (2013): La región sospechosa, Barcelona, UAB.

Noguera Canal, Josep (2003): Caciquisme i sistema liberal. Berga, 1881, Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials.

Nous Horitzons (1986): Las nostra utopia. PSUC, Barcelona, Planeta.

Núñez, Clara Eugenia (1992): La Fuente de la riqueza: educación y desarrollo económico en la España contemporánea, Madrid, Alianza editorial.

Núñez de Arce, Gaspar (1886): Discurso leído por D. __ en el Ateneo de Madrid con motivo de la apertura de sus cátedras en el año corriente, Madrid, Est. Tip. Sucesores de Rivadeneyra.

Núñez Seixas, Xosé Manoel (2010): Internacionalitzant el nacionalisme, Catarroja, Afers.

Orellana, Francisco J. (1860): Reseña completa, descriptiva y crítica de la exposición industrial y artística de productos del Principado de Cataluña, improvisada en Barcelona para obsequiar a S. M. la reina Doña Isabel II y a su Real Familia con motivo de su venida a esta ciudad, Barceloan, Est. Tip. de Jaime Jepús.

Orensanz, Toni (2008): L'òmnibus de la mort. Parada Falset, Barcelona, Àmsterdam.

Orwell, George (2010): Homenatge a Catalunya, Barcelona,

Labutxaca.

Pagès, Pelai (1997): La guerra civil espanyola a Catalunya, Barcelona, Els llibres de la frontera.

— (dir.) (2004): Franquisme i repressió, Valencia, Universitat de València.

— (ed.) (2005): La transició democràtica als Països Catalans, Valencia, Universitat de València.

— (dir.) (2007): La guerra civil als Països Catalans, Valencia, Universitat de València.

Pasamar, Gonzalo y Peiró, Ignacio (dirs.) (2002): Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos (1840-1980), Madrid, Akal.

Peiró, Joan (2007): Perill a la reraguarda, Barcelona, Editorial Altafulla.

Peix, A. (1999): 25 anys de la Unió de Pagesos, Lleida, Pagès Editors.

Pi y Margall, Francisco (1882): Las nacionalidades, 3ª edición, Madrid, Imp. de Enrique Rubiños.

Pons, Agustí (2013): Espriu transparent, Barcelona, Proa.

Prat de la Riba, Enric (1906.): La nacionalitat catalana, Barcelona, Tip. Anuari de l'Exposició, p. 14.

Puigsech, J. (2001): Nosaltres, els comunistes catalans, Vic, Eumo.

Pujol, Jordi (1980): Construir Catalunya, Barcelona, Pòrtic.

— (coord.) (2003): L'exili català del 1936-1939, Girona, Cercle d'Estudis Històrics i Socials.

— (2009): Memòries. Temps de construir, Barcelona, Proa.

— (2012): Memòries. De la bonança a un repte nou, Barcelona,

Proa.

Prat de la Riba, Enric (1906): La nacionalitat catalana, Barcelona, Tip. Anuari de l'Exposició.

Quiroga Fernández de soto, Alejandro (2008): Haciendo españoles, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Raguer, Hilari (1976): Unió Democràtica de Catalunya i els seus temps, Barcelona, PAM.

— (2001): La pólvora y el incienso, Barcelona, Península.

— (2002): Carrasco i Formiguera, Madrid, PPC.

Richards, Michael (1999): Un tiempo de silencio, Barcelona, Crítica.

Ridao, Joan (2005): Les contradiccions del catalanisme, Barcelona, L'esfera dels llibres.

Riera, Ignasi (1988): Els catalans de Franco, Barcelona, Plaza & Janés.

Riquer i Permanyer, Borja de (1977): Lliga Regionalista: la burgesia catalana i el nacionalisme, 1898-1904, Barcelona, Edicions 62.

— (1994): “La débil nacionalización española del siglo XIX”, Historia Social, núm. 20, otoño.

— (1996): L'últim Cambó, Vic, Eumo.

— (2010): “La Dictadura de Franco”, en Josep Fontana y Ramon Villares, Historia de España, Barcelona/Madrid, Crítica/Marcial Pons.

— (2013): Alfonso XIII y Cambó, Barcelona, RBA.

Riquer, Borja de y Culla, J. B. (2004): “El franquisme i la transició democràtica, 1939-1988”, en Pierre Vilar (dir.), Història de Catalunya (vol. VII), Barcelona, Edicions 62.

Risques, Manel (dir.) (1999): Història de la Catalunya

contemporània, Barcelona, Pòrtic.

— (coord.) (2007): *Visca la República!*, Barcelona, Proa.

Roca i Vernet, Jordi (2013): “Las Cortes de Cádiz: génesis del liberalismo romántico catalán”, *Trienio. Ilustración y liberalismo*, núm. 61.

Roig Rosich, Josep Maria (1992): *La dictadura de Primo de Rivera a Catalunya*, Barcelona, PAM.

Romero Maura, Joaquín (1989): *La rosa de fuego*, Madrid, Alianza.

Roura, Lluís (1990): “El contacte del Principat de Catalunya amb la França de la revolució”, *Manuscripts*, núm. 8.

Rubí, Gemma (2007): “Esaños, votos e irregularidades. Los caprichos de la política en la Cataluña de la Restauración (1875-1923)”, *Hispania Nova*, núm. 7.

Rubió i Ors, Joaquim (1858): *Lo Gayter del Llobregat, Poesias*, segunda edición, Barcelona, Llibreria de Joseph Rubió.

Rubiol, Gemma (1995): *Josep Pallach i el Reagrupament*, Barcelona, PAM.

Rubiralta, Fermí (2004): *Una història de l'independentisme català*, Lleida, Pagès Editors.

Sales, Joan (2012): *Incerta glòria*, Barcelona, Club Editor.

Sallés, Anna (1986): *Quan Catalunya era d'Esquerra*, Barcelona, Edicions 62.

Sánchez-Terán, Salvador (1988): *De Franco a la Generalitat*, Barcelona, Planeta.

Santacana, Carles (2000): *El franquisme i els catalans*, Catarroja, Afers.

— (2005): *El Barça i el franquisme*, Barcelona, Mina.

Sayró, Esteban (1842): *Industria algodонера de Cataluña*, Madrid, Imp. Nacional.

Seguran, Antoni (2013): *Crònica del catalanisme*, Barcelona, Angle.

Serrallonga, Joan (2004): *Refugiats i desplaçats dins la Catalunya en guerra*, Barcelona, Base.

Sobrequés, Jaume (1988): *El restabliment de la Generalitat i el retorn del president Tarradellas*, Barcelona, Barcanova.

Sobrequés, Jaume y Rierar, Sebastià (1984): *L'Estatut d'autonomia de Catalunya*, Barcelona, Edicions 62.

Solà, Àngels (1986): "Mentalitat i negocis de l'èlite barcelonina de mitjan segle XIX", *Orígens del món català contemporani*, Barcelona, Fundació Caixa de Pensions.

Solà, Pere (1978): *Els ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya*, Barcelona, La Magrana.

Solé, Queralt (2008): *Els morts clandestins*, Catarroja, Afers.

Solé i Sabaté, Josep Maria y Villarroya, Joan (1985): *La repressió franquista a Catalunya*, Barcelona, Edicions 62.

— (1986): *Catalunya sota les bombes*, Barcelona, PAM.

— (1989): *La repressió a la rera guarda de Catalunya*, Barcelona, Península.

— (dirs.) (2005-2006): *El franquisme a Catalunya*, Barcelona, Edicions 62.

Solé Tura, Jordi (1967): *Catalanisme i revolució burgesa*, Barcelona, Edicions 62.

Stone, Norman (1985): *La Europa transformada, 1878-1919*, Madrid, Siglo XXI de España.

Termes, Josep (1984): *La immigració a Catalunya i altres estudis d'història del nacionalisme català*, Barcelona, Empúries.

— (1989): “De la revolució de Setembre a la fi de la Guerra Civil”, en Pierre Vilar (dir.), *Història de Catalunya* (vol. VI), Barcelona, Edicions 62.

— (2001): *Història del catalanisme*, Barcelona, Pòrtic.

— (2005): *Misèria contra pobresa. Els fets de la Fatarella del gener de 1937*, Catarroja, Afers.

Thomàs, Joan Maria (1992): *Falange, guerra civil i franquisme*, Barcelona, PAM.

Toledano, Lluís Ferran (2011): “El projecte català per a Espanya. La classe dirigent catalana i el procés constitucional de Cadis (1804-1840)”, Afers. Fulls de recerca i pensament, núm. 26.

Torradabellà, Bartolomé (1843): *Noticia de la última guerra civil de Cataluña y defensa de la junta gubernativa y de los gefes del Real Ejército del mismo Principado; con un apéndice de documentos en su justificación que el amigo de la verdad dedica a todos los hombres imparciales y justos*, Montpellier, Imp. de Isidro Tournel mayor.

Torras i Bages, Josep ([1892], 1913): *La tradició catalana. Estudi del valor ètic i racional del regionalisme català*, Barcelona, Ed. Ibèrica.

Tubino, Francisco María (1880): *Historia del renacimiento literario contemporáneo en Cataluña, Baleares y Valencia*, Madrid, Imp. y Fundición de M. Tello.

Ucelay-Da Cal, Enric (1982): *La Catalunya populista*, Barcelona, La Magrana.

— (2003): *El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de España*, Barcelona, Edhasa.

Ullman, Joan Connely (1972): *La Semana Trágica. Estudio sobre las causas sociológicas del anticlericalismo en España*, Barcelona, Ariel.

Vega, E. *Entre revolució i reforma* (2000): Lleida, Pagès Editors.

Vicens Vives, Jaume (2013): Notícia de Catalunya, Barcelona, RBA.

Vicens Vives, Jaume y Llorens, Montserrat ([1958], 1980):
Industrials i polítics (segle XIX), Barcelona, Vicens-Vives.

Vilaclara, Maria Josepa (1983): “Renaixença i particularisme català
durant el sexenni 1868-1873”, Recerques, núm. 13.

Villarroya, Joan (2002): Desterrats. Barcelona, Base.

Ysàs, Pere (ed.) (1997): La Transició a Catalunya i Espanya.
Barcelona, L'Avenç.

Zapata, Ricard (2008): La inmigración en naciones minoritarias.
Barcelona, Icaria.

